

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE ECONOMÍA

**Disertación previa a la obtención del título de
Economista**

***Implicaciones para el caso ecuatoriano derivadas de los casos de
minería responsable a nivel internacional***

Ivette Alexandra Torres Castro
ale_torres8@hotmail.com

Director: Eco. Lenin Parreño
leninparreno@hotmail.com

Quito, mayo de 2014

Resumen

La minería es una actividad económica representativa para algunos países. Los minerales son recursos naturales no renovables, cuyos ingresos generados por la industria minera simulan la contribución al desarrollo de las economías, generando efectos positivos y negativos en la economía, la sociedad y el medio ambiente. No obstante, la intervención de gobiernos y empresas orientan el manejo de los minerales y los efectos que genera. La conciencia social y ambiental presiona cada vez más la participación responsable de las empresas mineras y gobiernos, para mitigar los daños que generan y maximizar los beneficios que proporciona la minería. La participación responsable involucra aspectos que no deben pasar desapercibidos por las empresas y los estados, para lograr un desarrollo sustentable en los países y el aprovechamiento eficiente de los minerales, de manera que no comprometan el bienestar de futuras generaciones. La presente investigación analiza los aspectos que determinan la actuación responsable de empresas mineras y gobiernos, con el objetivo de estudiar y analizar las implicaciones de algunos casos a nivel internacional de minería responsable para comparar las implicaciones con el caso ecuatoriano, y así identificar prácticas responsables, previo al desarrollo de la minería a gran escala en Ecuador.

Palabras clave: Minería, recursos naturales, externalidades, economía social, desarrollo sustentable.

Contenido

<i>Introducción</i>	6
<i>Metodología del trabajo</i>	10
<i>Capítulo I</i>	14
<i>Fundamentación teórica</i>	14
Desarrollo económico	14
1. Desarrollo sustentable	15
2. Recursos naturales y efectos en el desarrollo.....	17
3. Desarrollo sustentable y panorama actual	18
Recursos naturales y costos de transacción.....	19
1. Recursos naturales no renovables	19
2. Externalidades	20
3. Ley de Hotelling.....	21
4. Derechos de propiedad y manejo de externalidades	21
Intervención del estado y políticas ambientales.....	22
1. Políticas Ambientales	23
2. Leyes de responsabilidad civil	25
3. Instituciones e información.....	26
4. Información	27
5. Información y dilema del polizón	28
6. Instituciones, información y desarrollo sustentable	28
Empresas y gobernabilidad	29
1. Responsabilidad Social Empresarial RSE	30
2. Problema de incentivos	30
3. Contratos	31
4. Reputación	32
5. Elección de la calidad	33
6. Problema del principal y el agente	34
7. Presión social y conflicto de intereses	34
Evaluación del marco teórico	35
<i>Capítulo 2</i>	37
<i>Minería responsable desde el enfoque de desarrollo sustentable</i>	37
1. Descripción del sector minero según el desarrollo sustentable	37
2. Beneficios y costos de la actividad minera.....	38

3. Prácticas emergentes y características de la actividad minera.....	40
4. Actores de la minería y el desarrollo sustentable	41
5. Minería responsable.....	41
6. Gestión empresarial y minería responsable.....	42
7. Determinaciones de la responsabilidad social empresarial.....	44
Principios de la responsabilidad social	45
Materias fundamentales de responsabilidad social.....	49
<i>Capítulo 3</i>	<i>69</i>
<i>Grado de minería responsable</i>	<i>69</i>
1. Metodología	69
2. Composición de los resultados.....	71
2.1 Grado de minería responsable de la empresa	71
Principios de la Responsabilidad Social.....	71
Materias Fundamentales de la RS.....	78
2.2 Grado de minería responsable de los gobiernos y legislaciones.....	86
Principios de la responsabilidad social	86
Materias fundamentales de la responsabilidad social	93
3. Análisis de Resultados	101
<i>Capítulo 4</i>	<i>108</i>
<i>Grado de minería responsable en Ecuador</i>	<i>108</i>
1. Grado de minería responsable de la empresa	108
2. Grado de minería responsable del gobierno y la legislación	119
3. Análisis de resultados.....	128
4. Inversión china vs. inversión canadiense en América Latina	130
5. Innovación en la industria minera ecuatoriana.....	132
<i>Capítulo 5</i>	<i>133</i>
<i>Implicaciones de la minería responsable para el caso ecuatoriano</i>	<i>133</i>
1. Principios de la responsabilidad social	133
a. Rendición de cuentas	133
b. Transparencia	134
c. Comportamiento ético	135
d. Respeto a los intereses de las partes interesadas.....	136
e. Respeto al principio de legalidad	136
f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento	137

g. Respeto a los derechos humanos.....	137
2. Materias fundamentales de la responsabilidad social	138
a. Gobernabilidad de la empresa	138
b. Derechos humanos.....	139
c. Prácticas laborales.....	140
d. Medio ambiente	140
e. Prácticas justas de operación	141
f. Consumidores.....	142
g. Participación activa y desarrollo de la comunidad.....	142
<i>Conclusiones</i>	144
<i>Recomendaciones</i>	146
<i>Referencias bibliográficas</i>	147
<i>Anexos</i>	161
Anexo a. Cuestionario	161
Anexo b. Tabla de Resultados	169
Anexo c. Fichas de resumen Australia.....	170
Anexo d. Fichas de resumen Brasil.....	172
Anexo e. Fichas de resumen Canadá.....	175
Anexo f. Fichas de resumen Chile.....	177
Anexo h. Fichas de resumen Perú	180
Anexo i. Fichas de resumen Sudáfrica.....	183

Contenido de Ilustraciones

Gráfico 1: Marco teórico	14
Gráfico 2: Principios y materias fundamentales de la responsabilidad social empresarial	44
Gráfico 3: Composición del cuestionario	70
Gráfico 4: Principios de responsabilidad de la empresa	71
Gráfico 5: Materias fundamentales de responsabilidad social de la empresa	78
Gráfico 6: Principios de responsabilidad social del gobierno.....	87
Gráfico 7: Materias fundamentales de responsabilidad social del gobierno.....	94
Gráfico 8: Resultados del grado de responsabilidad de los países	101
Gráfico 9: Principios de la responsabilidad social, Ecuador	128
Gráfico 10: Materias fundamentales de responsabilidad social, Ecuador	129

Contenido de Tablas

Tabla 1: Resultados de los principios de responsabilidad.....	71
Tabla 2: Resultados de las materias fundamentales de la responsabilidad social de la empresa	78
Tabla 3: Resultados de los principios de responsabilidad social del gobierno	86
Tabla 4: Resultados de materias fundamentales del gobierno.....	93
Tabla 5: Principios de responsabilidad social, Canadá	101
Tabla 6: Materias fundamentales de responsabilidad social, Canadá	102
Tabla 7: Principios de responsabilidad social, Chile	102
Tabla 8: Materias fundamentales de responsabilidad social, Chile	103
Tabla 9: Principios de responsabilidad social Australia, Australia	103
Tabla 10: Materias fundamentales de responsabilidad social, Australia.....	104
Tabla 11: Principios de responsabilidad social, Brasil	104
Tabla 12: Materias fundamentales de responsabilidad social, Brasil	105
Tabla 13: Principios de responsabilidad social, Sudáfrica	105
Tabla 14: Materias fundamentales de responsabilidad social, Sudáfrica	106
Tabla 15: Principios de responsabilidad social, Perú.....	106
Tabla 16: Materias fundamentales de responsabilidad social, Perú.....	106
Tabla 17: Principios de responsabilidad social de la empresa, Ecuador	108
Tabla 18: Materias fundamentales de la responsabilidad social de la empresa, Ecuador	112
Tabla 19: Principios de responsabilidad social del gobierno, Ecuador	119
Tabla 20: Materias fundamentales de la responsabilidad social del gobierno, Ecuador.....	122

Introducción

La presente investigación se fundamentó en el potencial minero que posee Ecuador y en la revisión y estudio de casos de minería responsable enfocados en las dimensiones del desarrollo sustentable, para proponer prácticas responsables al desarrollo de la minería a gran escala. El interés de desarrollar el sector minero es que este sector aporte al crecimiento económico y social de la nación, sin crear problemas intergeneracionales. No obstante, la minería presenta limitaciones por sus características, puesto que compromete al medio ambiente y a la sociedad.

La minería es una actividad económica que comprende el inicio de la cadena de producción de varios productos y la fuente de ingresos de algunos países (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012). Sin embargo, la actividad causa estragos en las comunidades y ecosistemas de donde se obtiene los minerales (Goodland, 2012).

El incremento que ha tenido la producción minera ha sido considerable puesto que, en el año 2010 el valor nominal de la producción minera se multiplicó por cuatro a la producción del año 2002. Este incremento se produjo debido al crecimiento de China, India, entre otros países emergentes, el cual se reflejó en los precios de los commodities (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012), mientras que en la década precedente, no se registró mayor incremento del valor nominal de la producción minera.

Al satisfacer las necesidades, los procesos sociales anteriores no consideraban su integridad, dejando de lado las externalidades negativas y los costos sociales. Con el transcurso del tiempo, la perspectiva ha dado un giro hacia una visión integral del patrimonio natural que incluye el manejo eficaz de las externalidades negativas y ha revelado estados superiores de la humanidad (Sánchez, 2004).

La empresa es un actor imprescindible en el desarrollo económico de un país pero a la vez, es el actor principal de la contribución al deterioro del medioambiente y a la contaminación. Consecuentemente, las empresas han empezado a integrar variables ambientales en su gestión y planificación; mientras que, la concientización por la protección ambiental se ha incrementado en la sociedad y en las autoridades gubernamentales (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

A partir de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano en 1972, se refleja la importancia del riesgo de agotamiento de ciertos recursos naturales y el riesgo a la calidad de vida, lo que ha llevado a un cambio de objetivos, orientados a alcanzar un crecimiento económico que no comprometa el bienestar de presentes y futuras generaciones (Labandeira, León, & Vázquez, 2007). El mercado de minerales sufre de varios fallos de mercado; es decir, de ineficiencias que alteran la competencia perfecta, provocando que el mercado deje de asegurar el máximo bienestar para la sociedad (Marshall, 1920).

Las conferencias de las Naciones Unidas sobre desarrollo sustentable muestran que la estrategia de crecimiento debe considerar tres pilares fundamentales: económico, social y ambiental. En efecto, el crecimiento económico debe crecer en función al stock de recursos naturales y no intensificar el deterioro ambiental.

Las variables ambientales han alcanzado la importancia necesaria, hasta que actualmente la empresa (especialmente las de recursos naturales) integra dichas variables a mediano y largo plazo. De manera que, el medioambiente se ha convertido en un factor de competitividad y diferenciación de productos y empresas. (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

El medio ambiente y la sociedad se han convertido en elementos fundamentales para la toma de decisiones y el desarrollo de las operaciones de la industria minera. Los impactos registrados por la actividad minera son: ambientales, como por ejemplo en los recursos hídricos, la calidad del aire y la vida silvestre; e impactos sociales como en el desplazamiento humano, el acceso a medios de subsistencia, la salud pública y los recursos culturales, por lo que pone en alerta a la sociedad y al mundo entero (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, 2010).

Las empresas pueden verse amenazadas por conflictos por el lado de la presión de la sociedad y de organismos defensores de los derechos humanos y ambientales, en caso de que las empresas evidencien un comportamiento en contra de los derechos de los trabajadores, comunidades y el medio ambiente, comprometiendo su imagen. De manera que se requiere una sociedad informada, con capacidad de crear argumentos propios, con acceso a canales de información que le permita conocer el desempeño responsable de la empresa y del Estado en el sector minero y crear conciencia.

Los países mineros por tradición, han desarrollado una minería que aporta al crecimiento del país, por lo que de acuerdo a los aspectos y aplicaciones que se toman en cuenta en este estudio, se conocerá la gestión de Australia y Chile conforme a los aspectos de “Minería Responsable” considerados en el estudio, con la finalidad de comparar a través de los resultados y aportar con esta información al caso del sector minero ecuatoriano.

La Responsabilidad Social Corporativa se ha convertido en una alternativa de prácticas que conducen hacia la obtención del desarrollo sustentable, por lo que las organizaciones lo han incorporado en su desarrollo organizacional y así, responder a los requerimiento de la sociedad (Global Reporting Initiative, 2011).

Existen entidades y organizaciones que plantean principios básicos y prácticas para que la actividad extractiva se convierta en un sector industrializado responsable. La investigación analizó estos criterios de acuerdo a los aspectos propuestos por el desarrollo sustentable, para crear un entendimiento inicial sobre la minería responsable aplicable a la minería ecuatoriana y así contribuir a su desarrollo.

A nivel global, varias empresas han mejorado las prácticas mineras para aprovechar los recursos eficientemente, con un menor impacto social y con estándares orientados a preservar la calidad ambiental. Estas prácticas responsables han sido validados por organismos y acuerdos internacionales como el Pacto Global de Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, Las Comisiones Europeas, el Consejo Internacional de Minas y Metales (ICMM) (Mining Facts Organization, 2012)¹. Se

¹ MININGFACT, organización para la información de la minería canadiense

ha recopilado criterios para formular una práctica extractiva responsable, comprometida con el desarrollo, la sociedad y el ambiente.

La economía ecuatoriana ha tenido una dependencia directa del petróleo a partir del boom petrolero y sus ingresos han sido fundamentales en el presupuesto del Estado (Acosta, 2009)² para proporcionar las garantías de Derecho Constitucional. No obstante, se requiere nuevas fuentes de ingresos para un periodo post petrolero, pues el agotamiento de los yacimientos en el territorio ecuatoriano está próximo.

A partir del año 2007, Ecuador ha iniciado la construcción de caminos para el desarrollo del sector minero extractivo, con la finalidad de utilizar sus rentas para conceder los servicios públicos a la sociedad ecuatoriana. Se ha realizado reformas a la Constitución, se ha formulado un Plan Nacional de Desarrollo que considera al sector minero como un eje para la transición económica y se están negociando contratos de minería a gran escala.

Asimismo, en el año 2009 se desarrolló el Registro Oficial de la Ley de Minería. Esta, además de delegar la administración del sector minero al Estado ecuatoriano, faculta las funciones a las instituciones concernientes con el sector. La actual ley minera promueve la participación de las empresas mineras, entidades gubernamentales y de la sociedad, exigiendo información y altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). Sin embargo, poner la Minería en operación aún no ha sido posible, lo cual representa un reto para la economía del país, debido a la informalidad y vulnerabilidad existente en el sector.

El potencial minero de Ecuador está valorado en USD 151.287 millones (Cámara de Minería del Ecuador, 2011). Los principales proyectos que aportan a dicho monto se localizan en las provincias de Azuay, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. No obstante, hasta la fecha se ha firmado únicamente el contrato de inversión del proyecto Mirador, liderado por la empresa china Ecuacorriente S.A.

En el caso de Ecuador, no se ha sistematizado y se requiere información actualizada en cuanto a la gestión de desarrollo de la minería, mediante controles y procesos estandarizados para fomentar el desarrollo de la minería consciente en el país. Hasta donde se conoce, se ha investigado poco sobre el tema en el país y es necesario que la sociedad dialogue de manera informada para evaluar las propuestas de desarrollo de la minería.

Las personas vinculadas con la minería en Ecuador, pueden aprender de los casos de minería desarrollada y crear procesos para implementarlos en Ecuador. Las prácticas responsables certificadas permitirían inculcar organización e innovaciones que impulsen la minería responsable y vinculen empresas internacionales a capacitar e incluir a mineros artesanales, empresas mineras locales, autoridades gubernamentales, organismos de control, comunidades, entre otras.

² ACOSTA, economista y político ecuatoriano

Finalmente, para que la minería pueda desarrollarse se requiere de fundamentos que establezcan criterios para tomar decisiones acertadas, comunicar a la sociedad y corregir los vacíos de sostenibilidad evidenciados en la minería ilegal y artesanal (ARCOM, 2012).

Por todo lo anterior, la investigación analizó los casos de minería responsable en países como Australia, Brasil, Canadá, Chile, Perú y Sudáfrica, donde se han desarrollado criterios de minería responsable a fin de contar con algunas implicaciones para el caso de Ecuador. Se identificaron aspectos que se deberían aplicar en la minería ecuatoriana para alcanzar el desarrollo consciente del sector y de todos quienes están involucrados en la actividad extractiva.

En el primer capítulo de la investigación se rescataron los aspectos característicos del desarrollo sustentable y los aspectos de la teoría económica relacionados al tema de investigación, para establecer el sustento teórico requerido.

El capítulo 2 evoca los principios y materias fundamentales de la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social que concuerdan con los aspectos del desarrollo sustentable; de manera que, sirvieron como componentes para identificar la minería responsable y las prácticas aplicadas, expuestas en el capítulo 3.

El capítulo 4 pone en evidencia el estado actual de la minería ecuatoriana, en relación a la aplicación de la “Minería Responsable” y al primer contrato de minería a gran escala, llevado a cabo por la empresa Ecuacorriente.

Por último, el capítulo quinto revela las implicaciones de la minería responsable identificadas en la minería de los países en estudio, para que de acuerdo al estado actual de la minería ecuatoriana, se tome en cuenta los aspectos que se debe considerar previo a su desarrollo, con el propósito de alcanzar un desarrollo sustentable, que no comprometa la economía, ni la sociedad ni el medio ambiente.

Metodología del trabajo

Planteamiento del problema

Definición del problema

La minería ecuatoriana tiene gran potencial, razón por la cual se ha declarado al sector minero como un sector estratégico para el cambio de matriz productiva del Plan Nacional de Desarrollo. Hasta la fecha, el sector minero no se ha desarrollado y es un sector vulnerable por la informalidad que lo caracteriza, principalmente por el deterioro del medio ambiente.

Para reducir la vulnerabilidad y la amenaza de agotamiento de los minerales, de acuerdo al Desarrollo Sustentable, la extracción de recursos naturales debe ser sustentable, es decir, que su extracción para satisfacer las necesidades del presente, no comprometa la capacidad de satisfacción de futuras generaciones.

Existen países destacados en la gestión de recursos naturales, específicamente en el sector minero a gran escala, por el aporte que ha generado la minería a su crecimiento económico y social. Australia, Brasil, Canadá, Chile, Perú y Sudáfrica han combinado la interacción del gobierno y las empresas para que el sector minero aporte al desarrollo sustentable, beneficiando la economía, la sociedad y sin dejar huellas ecológicas considerables.

Conforme a la estrategia de desarrollo de la minería ecuatoriana, se planteó rescatar las mejores prácticas para crear conciencia en los actores concernientes y la sociedad en general; de modo que su desarrollo sea bajo el concepto sustentable y que su aporte fomente verdaderamente al crecimiento de la economía del país.

Delimitación

Delimitación temporal: Se consideró el estado actual de la minería de los países en estudio, específicamente la minería a gran escala.

Delimitación espacial: Se trabajó el sector minero, específicamente a empresas mineras productoras a gran escala de Australia Occidental, Brasil, Canadá (British Columbia), Chile, Perú, Sudáfrica y Ecuador.

Preguntas de la investigación

Pregunta General

¿Cuáles son las implicaciones para el caso ecuatoriano derivadas del análisis de los casos de minería responsable a nivel internacional?

Preguntas específicas

- a) Cómo se define y se desarrolla la “Minería Responsable”, enfocada desde una expectativa económica?
- b) Cómo se ha aplicado en países mineros, la “Minería Responsable” desde las dimensiones del desarrollo sustentable?
- c)Cuál es el estado del sector minero en la economía de Ecuador, específicamente en la aplicación de minería responsable, desde las dimensiones del desarrollo sustentable?
- d) Cuáles son las implicaciones de los casos de minería responsables de acuerdo a las dimensiones de desarrollo sustentable para Ecuador?

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Comparar y rescatar implicaciones de minería responsable, de Australia, Brasil, Canadá, Chile, Perú y Sudáfrica, con el fin de conocer la interacción del desarrollo sustentable, mediante la responsabilidad social empresarial y el institucionalismo en el sector minero. En efecto, plantear propuestas de implicaciones mineras responsables, para que Ecuador las tome en cuenta previo al desarrollo minero.

Objetivos específicos

- a) Investigar el concepto y características de “Minería Responsable”, desde un enfoque de desarrollo sustentable.
- b) Analizar la aplicación de la “Minería Responsable” en países mineros.
- c) Conocer el estado del sector minero en la economía de Ecuador específicamente en la aplicación de minería responsable, desde un enfoque de desarrollo sustentable.
- d) Especificar las implicaciones de los casos de minería responsable para Ecuador.

Tipo de Investigación

Investigación exploratoria: La información sobre el tema de la investigación, no ha sido desarrollada anteriormente, por lo que el estudio fue exploratorio debido a la falta de información concerniente. Se realizaron investigaciones de posibles casos en base a los datos recopilados.

Investigación descriptiva: Mediante la indagación de “Las implicaciones para el caso ecuatoriano derivadas de la minería responsable a nivel internacional” se realizó un estudio descriptivo-comparativo de los resultados obtenidos del análisis de casos de minería responsable, en varios países y rescató las implicaciones para el caso ecuatoriano. Además, se identificaron los fundamentos para que estos casos sean considerados como minería responsable.

Métodos de investigación

La investigación partió del desarrollo sustentable, puesto que comparte las dimensiones planteadas por la Responsabilidad Social y otros argumentos claves. De manera que se utilizó a la responsabilidad social empresarial, como una herramienta para alcanzar los resultados establecidos por el Desarrollo Sustentable. Se enfocó en el análisis de la Responsabilidad Social en la Minería, por lo que se tomó en cuenta el contenido de la legislación y disposiciones vigentes. Se recurrió como fuente de derecho a la Constitución, Códigos de Minería y Acuerdos Ministeriales. Además, se consideró la información de carácter oficial difundida en la web de las empresas mineras y por agencias gubernamentales de los países en estudio.

A continuación se analizó el caso de cada país para compararlos y determinar las mejores prácticas en el sector minero. Seguidamente, se analizó el estado de la minería responsable en Ecuador y el panorama actual, para rescatar las implicaciones derivadas de los casos internacionales que se deberían tomar en consideración, previo al desarrollo de la minería a gran escala en el país. Por último, se plantearon conclusiones y recomendaciones que respondan a las preguntas específicas de la investigación.

Procedimiento metodológico

La investigación partió del enfoque de desarrollo sustentable. De este modo, en el primer capítulo se rescataron los aspectos característicos del desarrollo sustentable y los recursos naturales; así también los aspectos de la teoría económica relacionados con los temas de investigación.

Los principios y materias fundamentales de la norma ISO 26000 de Responsabilidad Social que concuerdan con los aspectos del desarrollo sustentable, sirven como componentes para identificar la minería responsable y las prácticas aplicadas, en base a un cuestionario que sirvió como lista de verificación sobre los requerimientos socialmente responsables; de manera que se midió de acuerdo a la disponibilidad y accesibilidad de la información. En efecto, el concepto de “Minería Responsable” fue formulado por medio de los aportes teóricos del capítulo 1.

El desarrollo de la “Minería Responsable” de acuerdo a las dimensiones del desarrollo sustentable y bajo las responsabilidades otorgadas a través de los derechos de propiedad, permitieron identificar los aspectos que deben ser considerados para obtener una minería responsable.

Una vez identificados los aspectos de minería responsable a través del cuestionario, se conoció la gestión y aplicación de los aspectos considerados, en los países tradicionalmente mineros: Australia (Occidental), Brasil, Canadá (British Columbia), Chile, Perú y Sudáfrica. De manera que, para obtener la información, se recurrió a las legislaciones, códigos mineros, acuerdos ministeriales, contratos,

códigos de conducta, reportes anuales, de cada país y empresa. En efecto, el tercer capítulo analiza la incorporación de la minería responsable en la gestión de la empresa y del gobierno, de los países en estudio.

Las empresas mineras seleccionadas para cada país fueron: en el caso de Australia, la empresa Newcrest. En Brasil, la empresa Vale; en Canadá, la Teck Resources, por Chile a la empresa CODELCO; en Perú a la empresa Buenaventura y por Sudáfrica a Harmony gold mining.

Debido a que la investigación está relacionada a la información, se consideró la accesibilidad directa a fuentes legales de información concerniente a la minería responsable. Se tomó en cuenta documentos e información que se obtuvo por medio de fuentes legales como: sitios web de instituciones públicas, documentos legales, sitios web de las empresas mineras, ONGs, derechos humanos, declaraciones de las Naciones Unidas, constituciones nacionales, organismos mineros internacionales y códigos mineros.

Capítulo I

Fundamentación teórica

La “Minería Responsable” no tiene una definición ni un marco teórico específico, puesto que está compuesto por varios fragmentos. De modo que, el esquema que sigue la investigación incluye los tres niveles que comprende el desarrollo sustentable. En efecto, se tomará la teoría propuesta por el desarrollo sustentable, los recursos naturales no renovables y la empresa (gráfico 1). En efecto, la investigación se centrará en las dimensiones del desarrollo sustentable, desde la Responsabilidad Social Corporativa, con el fin de conocer los requerimientos para que una minería sea responsable.

Gráfico 1
Categorización del marco teórico



Fuente: The ISO and Corporate Social Responsibility
Elaboración: Alexandra Torres

La Responsabilidad Social Empresarial RSE se considera un enfoque equilibrado para que las empresas integren en su gestión, aspectos económicos, sociales y ambientales, de manera que alcancen el beneficio social (The ISO and Corporate Social Responsibility, 2004). La Responsabilidad Social aparece como una respuesta al incremento de la producción, de la explotación desmedida de materias primas y del deterioro del medio ambiente. Por esta razón, la RSE se ha considerado como una herramienta para alcanzar el desarrollo sustentable.

Desarrollo económico

La teoría del desarrollo definida por las escuelas económicas, proponen alternativas para alcanzar el desarrollo económico. Estas escuelas han propuesto herramientas como el ahorro-inversión, como la herramienta planteada por la escuela de la modernización (Mandelbaum, 1945). Por otra parte, la escuela estructuralista propone la industrialización planificada por el Estado y la generación del

conocimiento (Ferrer, 2010). Mientras que para la escuela neoclásica, el desarrollo se alcanza a través de políticas liberales, reduciendo la intervención del Estado. Contrariamente, la escuela neoinstitucionalista propone una reforma institucional para que el mercado alcance resultados eficientes y aumente el bienestar colectivo (Veblen, 1899).

A partir de los años setenta, los aportes económicos de la Organización de la Naciones Unidas y la fundación Dag Hammarskjöld³ impulsan la escuela alternativa; esta apunta hacia el aumento de las capacidades de los individuos, con la finalidad de satisfacer de forma efectiva sus necesidades básicas. En efecto, a diferencia de las escuelas económicas mencionadas anteriormente, el propósito de la escuela alternativa es plantear un desarrollo que no se base en el incremento de la riqueza, sino en la reducción de la pobreza y el deterioro ambiental (Dag Hammarskjöld, 1975).

1. Desarrollo sustentable

Conforme a la propuesta del desarrollo sustentable de la escuela alternativa planteada por la Organización de las Naciones Unidas, se establece que los resultados eficientes se adquieren satisfaciendo las necesidades con los límites ecológicos del planeta en el presente, sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las futuras generaciones (Naciones Unidas, 2010). De la misma manera, el informe “Nuestro futuro común” desarrollado por Gro Harlem Brundtland⁴ resalta el contenido de este concepto (Brundtland, 1987). Sin embargo, hasta el momento sigue vigente un sistema de explotación que beneficia a una estructura de poder, y que satisface la necesidad de una minoría (Dag Hammarskjöld, 1975).

El informe Dag Hammarskjöld manifiesta el requerimiento de un desarrollo que satisfaga las necesidades de la mayoría y que asegure la humanización, favoreciendo las necesidades de expresión, creación, convivencia y decisión de su propio destino (Dag Hammarskjöld, 1975).

Asimismo, el informe Dag Hammarskjöld sostiene que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones para el desarrollo autodependiente de cada sociedad. De esta forma plantea un nuevo orden internacional, en el que se disponen de la experiencia de los otros y la ayuda a los miembros que tengan necesidad (Dag Hammarskjöld, 1975).

Desde el enfoque del desarrollo sustentable se determina que la eliminación de la pobreza se obtiene mediante la justicia social, el desarrollo económico y la protección del medio ambiente (Naciones Unidas, 2010). En efecto, el desarrollo sustentable busca cumplir objetivos comunes de acuerdo a las expectativas de la sociedad (Von Wieser, 1927), que deben ser tomadas en cuenta por las empresas que buscan comportarse responsablemente (Ministerio de Recursos, Energía y Turismo, 2006).

De acuerdo a la Conferencia de Estocolmo⁵, no existe compatibilidad entre desarrollo y medio ambiente pero revelan la existencia de límites ecológicos a la acción de los hombres. Estos límites

³ Dag Hammarskjöld Foundation, impulsa nuevos conceptos, medidas políticas, planes y estrategias hacia la obtención de soluciones concernientes al desarrollo, seguridad y democracia.

⁴ Gro Harlem Brundtland, política noruega.

⁵ Conferencia de Estocolmo, conferencia convocada por la ONU en 1972. Inicio del diálogo de cuestiones internacionales.

dependen de la manera en que el hombre forma sus bases materiales para su existencia, de las tecnologías empleadas y de la relación entre los sistemas sociales y naturales, de la forma en que se organizan las sociedades humanas y los valores que se adoptan. La declaración determina que los verdaderos límites de la humanidad son sociales y políticos (Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente Humano, 1972).

El informe Dag Hammarskjöld manifiesta que la presión de ciudadanos mejor informados y más exigentes, o animados por un liderazgo positivo, es posible mejorar la calidad de vida, mediante la remodelación de estilos culturales e igualando las relaciones entre los ciudadanos y entre otros países.

Von Wieser en su artículo Economía Social, sostiene que la elección para satisfacer las necesidades, se guía por reglas morales en las que el consumo se convierte en un acto económico cuando está acompañado y controlado por la consideración de los medios disponibles, dejando de lado al egoísmo, concepto fundamental de la teoría económica. Asimismo, Von Wieser defiende la economía social por la interdependencia de la producción con otras producciones (Von Wieser, 1927).

El “Otro Desarrollo” planteado por la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, plantea medidas que deben tomarse en cuenta ahora para no traspasar los “límites exteriores” y lograr la satisfacción de las necesidades de una población que tiende a aumentar (Dag Hammarskjöld, 1975).

En sí, el “Otro Desarrollo” comparte la idea de la escuela estructuralista, puesto que la transición planteada requiere de transformaciones de estructura, contemplando el estado actual del mundo (Dag Hammarskjöld, 1975). El desarrollo es social, de modo que las necesidades elementales de los hombres se definen como necesidades sociales, determinadas bajo el contexto social (Von Wieser, 1927). Estas necesidades llevan al hombre a la adquisición de derechos tanto como a la salud, a la alimentación, a la expresión, a la información, a la socialización, etc.

De acuerdo a las medidas que considera el “Otro Desarrollo” cabe recalcar aquellas que están vinculadas a la investigación. Las necesidades son el punto central del “Otro desarrollo” por lo que se requiere modificar la tendencia de las necesidades en el futuro inmediato, conjuntamente con una redistribución de los recursos a nivel nacional e internacional. Para ello, se debe establecer programas que permitan satisfacer las necesidades básicas, mediante el planteamiento de objetivos con grupos sociales específicos (Dag Hammarskjöld, 1975).

Los modelos alternativos de desarrollo y búsqueda de nuevos estilos de vida permiten mejorar la calidad de vida, y reducir los despilfarros. Las metas y estilos de desarrollo deben incluir relaciones sociales y relaciones con el medio ambiente (Dag Hammarskjöld, 1975).

Por otro lado, se requiere reforzar la capacidad de los países subdesarrollados hacia un desarrollo autodependiente. Para ello se debe ejercer el derecho de soberanía económica nacional sobre los recursos y la producción. Además, mejorar las condiciones de comercio mediante el mayor poder colectivo de negociación, apoyadas por las instituciones. También, el “Otro Desarrollo” incluye la

transformación de estructuras socioeconómicas y políticas según se defina la manera de formar sus instituciones y emprender acciones necesarias (Dag Hammarskjöld, 1975).

2. Recursos naturales y efectos en el desarrollo

Uno de los problemas que involucra el desarrollo en base a los recursos naturales no renovables, es la enfermedad Holandesa que se considera en esta investigación para conocer los efectos en la economía y las medidas para combatirla. El fenómeno ocurre cuando un país sufre un cambio en su riqueza debido al desplazamiento en el valor de los recursos naturales que son propiedad de los residentes de un país (Larraín & Sachs, 2002). Los autores Larraín⁶ y Sachs⁷ determinan que los grandes cambios se deben a descubrimientos de recursos o al cambio de precios de los recursos.

Los efectos del fenómeno amenazan la estabilidad económica de un país y también perjudican la industria doméstica. De hecho, las consecuencias de un incremento de extracción de minerales, incrementa las exportaciones y también provoca la atracción de capitales al sector de recursos naturales no renovables, creando una apreciación de la moneda local y afectando la competitividad de los otros sectores económicos; también atrae mayor fuerza laboral hacia el sector de recursos naturales, debilitando al sector manufacturero (Corden & Neary, 1982).

Los programas de ajuste estructural se refieren a políticas que apoyan el desplazamiento de recursos al sector de productos transables y reducen las inflexibilidades económicas que pueden obstaculizar el ajuste. Entre las medidas de ajuste incluyen: el mejoramiento de la eficiencia del uso de recursos por el sector público, mejoramiento de la estructura de incentivos económicos y reformas del sistema de precios y medidas de fortalecimiento de las instituciones económicas como la administración de impuestos (Larraín & Sachs, 2002).

Por otra parte, la teoría de la abundancia de los recursos naturales de Jeffrey Sachs y Andrew Warner⁸ (1995)⁹, explica que los países con abundantes recursos naturales tienden a crecer lentamente, puesto que las economías con abundantes recursos incrementan su riqueza y su poder de compra. Además, estos países también evidencian mayor búsqueda de rentas, es decir, los individuos y empresas que buscan rentas y otros favores del estado. De modo que el estado distorsiona sus políticas, fomentando la inequidad y favoreciendo a los grupos de poder (Sachs & Warner, 1995).

La esterilización y los fondos de estabilización son herramientas que gestionan los ingresos de los recursos naturales con la finalidad de mitigar el impacto en la economía del país y así, evitar el desequilibrio. En efecto, el propósito de las herramientas es el ahorro de recursos para asegurar mayor sustentabilidad a las futuras generaciones (Pereira, Ulloa, O’Ryan, & De Miguel, 2009).

⁶ Felipe Larraín, economista, investigador, profesor y consultor chileno.

⁷ Jeffrey Sachs, economista estadounidense.

⁸ Andrew Warner, economista estadounidense.

⁹ Economistas estadounidenses.

3. Desarrollo sustentable y panorama actual

La investigación se orienta bajo los aspectos del modelo “World 3” planteado por Donella Meadows¹⁰, Jorgen Randers¹¹ y Dennis Meadows¹². Este modelo da a conocer 10 escenarios y parámetros sustentables del desarrollo mundial. De manera que se utilizan elementos del escenario que se aproxima a las condiciones actuales y las posibles situaciones futuras, para conocer los puntos que se debe considerar en el desarrollo sustentable.

El modelo “World 3” es un modelo computarizado, basado en sistemas dinámicos que muestran cómo cambian los sistemas en el tiempo. El conjunto de variables tomado para este modelo son: la población, el capital industrial, la contaminación, los recursos naturales y la tierra de cultivo. En efecto, los estados de estas variables cambian y su combinación plantea los escenarios (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

Además, el modelo considera que los circuitos de retroalimentación positiva y negativa pueden afectar los resultados de los escenarios. El modelo también comprende dos contaminantes globales, omite las causas y consecuencias evidentes y no considera el capital militar ni la corrupción.

World 3 permite entender el alcance del futuro y los posibles parámetros de comportamiento a través de la economía humana. Además, responde a la pregunta de cómo puede interactuar la expansión de la población mundial y la economía, en una adaptación a los límites de carga de la tierra en la próxima década. El modelo no da predicciones pero si es una herramienta para entender las tendencias del comportamiento del sistema y encajar los resultados a los aspectos de esta investigación (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

De acuerdo al modelo, los exponentes del crecimiento son la población y la economía. Los límites incluyen los recursos y la energía, ambos se extraen de la tierra, y la capacidad de la tierra para absorber contaminantes. Existen tasas de producción de recursos y energía que no perjudican a las personas, la economía y el proceso de regeneración y regulación de la tierra. Asimismo, la obtención de recursos y alimentos se limita a la extensión de la tierra y agua. Los residuos más intratables y más difíciles de regular políticamente son: los desechos nucleares, los residuos químicos peligrosos y gases invernaderos.

Según los escenarios planteados por el modelo, la investigación tomará aspectos de los modelos que se relacionan a los objetivos. Los escenarios plantean que la sociedad responde de tres maneras a las señales que da el uso de los recursos y emisiones de contaminación que han sobrepasado los límites. La primera opción es disfrazando, negando o distorsionando las señales, desplazando los costos a otro tiempo. Otra opción es reparar las señales aliviando las presiones sobre los límites, mediante arreglos técnicos y económicos. Finalmente, reconociendo los excesos y cambiar la estructura del sistema.

¹⁰ Donella Meadows, científica ambiental, profesora y escritora estadounidense.

¹¹ Jorgen Randers, profesor de estrategia climática noruego.

¹² Dennid Meadows, científico y profesor estadounidense.

En efecto, la investigación tomará los resultados obtenidos en el escenario 9; el cual consiste en que al reducir las presiones sobre los límites, y considerar la realidad del estado actual, se crea conciencia social. El escenario se desarrolla en una sociedad que busca la estabilidad poblacional y producto industrial por persona, y adiciona las tecnologías de contaminación.

En este escenario, la población y el producto industrial son limitados y se integran tecnologías que combatan la contaminación, conserven los recursos, incrementen el rendimiento de la tierra y proteja la agricultura. El resultado es una sociedad sustentable, que se aproxima a los 8 mil millones de habitantes, quienes poseen un alto bienestar humano y una reducida huella ecológica. Además, la población se limita a formar familias con máximo dos hijos y fija límites moderados de producción de recursos (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

El modelo se desarrolla a partir del 2002, se invierte y se emplea tecnologías que incrementan la eficiencia del uso de los recursos, decrecen las emisiones de contaminación por unidad del producto industrial, controla la erosión e incrementa el rendimiento de la tierra hasta que el alimento per cápita alcance su nivel deseado. Al 2020, la sociedad empieza a reducir la sobrecarga del ambiente. El sistema pasa a estar bajo los límites, evitando el colapso descontrolado, manteniendo los estándares de vida y manteniéndose cerca al equilibrio (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

El escenario seleccionado pone en evidencia que una transición global hacia una sociedad sustentable es posible, sin reducir la población o la producción industrial, considerando los límites y el estado actual, al crear conciencia social. Asimismo, se requiere una decisión activa para reducir la huella ecológica. Cuanto más se prolongue la reducción de la huella ecológica hacia la sustentabilidad, más bajo será el soporte de la población y de los estándares de recursos; mientras que, cuanto más altos sean los objetivos para la sociedad y los estándares de recursos, mayores serán los riesgos de exceder los límites.

Recursos naturales y costos de transacción

Los recursos naturales no renovables conllevan características y dificultades en su mercado descritos por la teoría económica; de manera que se justifica la intervención del Estado y la aplicación de una gestión que ajuste el funcionamiento de este mercado (Marshall, 1920). El rol del estado es primordial, por ser el representante directo del patrimonio nacional en las decisiones y producción de los minerales; y por los derechos que le confiere la ley respecto al control y regulación sobre los derechos de propiedad y responsabilidades que concede a las empresas mineras, para asegurar un desarrollo sostenible (Stiglitz, 1993).

1. Recursos naturales no renovables

Los recursos naturales son parte del patrimonio natural de un espacio geográfico determinado, que comprende elementos y leyes de configuración y funcionamiento, para definir los sistemas naturales. El patrimonio natural permite satisfacer las necesidades fundamentales de la sociedad, mediante los alimentos, minerales, energía, la agricultura, materiales de construcción, etc. (Sánchez, 2004).

Por una parte, la escuela neoclásica sostiene que la tierra engloba los materiales que al ser trabajados por el hombre, crea utilidad. Marshall¹³ sostiene que la tierra es una cantidad fija dada por la naturaleza y los precios de los recursos naturales que posee, guían su uso. En efecto, los precios miden la escasez y transmiten la información a los consumidores y productores, alcanzando la eficiencia del mercado (Marshall, 1920).

Con el transcurso del tiempo, el discurso sobre la tierra y sus materiales ha dado un giro en torno a su disponibilidad, despertando en autores como Hotelling¹⁴, el interés del agotamiento de ciertos recursos naturales en el análisis económico. En efecto, los estudios económicos sobre los recursos naturales resaltan la explotación de recursos naturales a tasas demasiadas rápidas, por causa de la subvaloración, discrepando de resultados económicos eficientes (Hotelling, 1931).

Friedrich Von Wieser¹⁵ manifiesta que la naturaleza humana percibe que las necesidades futuras son apreciadas en valores menores a las presentes. Por ende, cuando los bienes son limitados, y la satisfacción se define de su uso, el individuo recurre a la previsión; es decir, a la restricción de placeres presentes mediante el almacenamiento y la protección, con el propósito de maximizar la utilidad bajo las limitaciones dadas. En consecuencia, se requiere administración económica, con el propósito de maximizar la utilidad, bajo las limitaciones dadas. El productor debe elegir económicamente y protegerse de la pérdida y del deterioro (Von Wieser, 1927).

2. Externalidades

De acuerdo a la teoría económica, un comprador o una empresa que compra un bien piensa en los beneficios que le reportará, y no en lo que les reportará a los otros. De manera que, el comprador elige con el fin de obtener el beneficio máximo al menor costo posible (Stiglitz, 1993). En efecto, los costes adicionales de una transacción no se reflejan totalmente en el precio del mercado, creando una oferta excesiva y obteniendo resultados económicos deficientes (Von Wieser, 1927).

Conforme a Stiglitz¹⁶, la diferencia de costes que genera una externalidad es principalmente la diferencia entre el coste social marginal y el coste privado marginal. El coste social marginal que soporta el conjunto de individuos es mayor al coste marginal del productor; es decir, los costes pagados por la empresa. Si los productores no son obligados a cancelar los costos adicionales como la contaminación que genera, la producción es superior (Stiglitz, 1993).

Por este motivo, Pigou¹⁷ reconoce la diferencia entre los costes sociales y los costes privados en su análisis. En efecto, el autor sostiene la posibilidad de maximizar la utilidad total o valor social del recurso, mediante el control del estado al productor que causa externalidades. Medidas como impuestos, subsidios o regulación, generan una distribución eficiente de recursos y la producción alcanza el nivel óptimo social (Pigou, 1952).

¹³ Alfred Marshall, economista británico.

¹⁴ Harold Hotelling, economista estadounidense.

¹⁵ Friedrich Von Wieser, economista y sociólogo austriaco.

¹⁶ Joseph Stiglitz, economista y profesor estadounidense.

¹⁷ Arthur Pigou, economista inglés.

3. Ley de Hotelling

La teoría económica revela que un mercado bajo competencia perfecta no distingue el estudio de la satisfacción entre necesidades presentes y futuras (Von Wieser, 1927). Por otro lado, Hotelling desarrolló un marco para predecir los precios y las trayectorias de extracción de recursos en base a las compensaciones intertemporales. De manera que el autor fija precios relativos en diferentes períodos de tiempo, determinando de este modo el período final de agotamiento. Cuando la cantidad disponible tiende a cero, el precio tiende a aumentar, refiriéndose al precio más alto que se pagará (Hotelling, 1931).

Por esta razón, Hotelling manifiesta que al elegir políticas públicas relacionadas a recursos agotables, se debe usar la tasa de interés del mercado y los cambios de la tasa deben ser anticipados. Conforme al aporte teórico la ley de Hotelling, el nivel social óptimo se alcanza cuando el precio del recurso aumente a una tasa igual al tipo de interés, lo que también determina el nivel eficiente de extracción del recurso natural (Hotelling, 1931).

4. Derechos de propiedad y manejo de externalidades

Según el análisis de Marshall, la propiedad de la tierra se otorga por acuerdos reducidos a términos expresados en lenguaje de negocios (Marshall, 1920). El gobierno es el ente encargado de otorgar los derechos de propiedad y los términos incluyen que la propiedad de la tierra está en manos de grupos o miembros y sus socios. A través de los derechos de propiedad, el gobierno confiere a las empresas, el derecho al trabajo sobre una parte limitada de la tierra o subsuelo (Marshall, 1920).

Quien adquiere los derechos de propiedad, lo hace por medio de pagos controlados por la ley o la costumbre. Sin embargo, Stiglitz resalta que la ley o la costumbre no miden con precisión las cuentas transmitidas con los derechos. En efecto, la ley o acuerdos contienen un grado de incertidumbre (Stiglitz, 1993).

Según Coase¹⁸, la principal dificultad que poseen las externalidades es la determinación de los pagos de compensación por las partes beneficiadas, a las partes perjudicadas. Pigou manifiesta que las externalidades no son internalizadas, sino son controladas por el estado y esta intervención representa costos (Pigou, 1952). La crítica de Coase permite el análisis de los costos de transacción. Cuando los costos de transacción son incluidos en el análisis económico, los costos para llegar a un acuerdo son mayores (Coase, 1988).

La escuela neoclásica sostiene que para efectuar una transacción, el valor está determinado por el costo marginal (Marshall, 1920); sin embargo, Coase en su aporte económico, *La empresa, el mercado y la ley* (1988), introduce el concepto de costes de transacción como los costos en que incurren los agentes al realizar una transacción. Para el autor, los costos de transacción compensan las ganancias de una transacción. En efecto, los actores económicos acuerdan un aporte de parte y parte para llegar a un objetivo en común, en que la producción de la actividad económica de uno, no

¹⁸ Ronald Coase, economista y profesor británico.

afecte al otro. Para ello se establece un acuerdo en el que un actor se compromete a reducir sus efectos sobre los otros actores (Coase, 1988).

Para Coase, la reasignación de los derechos de propiedad lleva al mercado a hacerse cargo de las externalidades (Coase, 1988). Adicionalmente, Dahlman¹⁹ plantea que los mercados por sí solos no eliminan las externalidades y requieren de la participación del estado (Dahlman, 1979). Para ello, Stiglitz afirma que la participación se enfoca en los precios y la normativa (Stiglitz, 1993).

Adicionalmente, Coase sostiene que los derechos de propiedad transmiten responsabilidad, que de hecho, limita el abuso del permiso concedido. No obstante, aunque un derecho esté bien definido, la producción de una externalidad puede impedir el mejoramiento de los resultados de mercado. En este caso, el autor indica que la intervención del Estado permite determinar un costo que compense (Coase, 1988).

Coase plantea tres soluciones para las externalidades negativas. La primera es que la empresa adquiera los servicios de otra empresa para que administre las externalidades, lo que genera costos para la empresa. La segunda solución es la intervención del estado, que también genera costos y además, los políticos son sensibles a las presiones políticas, por lo que la regulación puede ser aplicada incorrectamente. Finalmente, dejar pasar por alto la externalidad, puesto que las ganancias de la regulación del gobierno pueden ser menores al costo generado por la externalidad (Coase, 1988).

Pigou señala que los impactos ambientales no pasan por el mercado y no se observa su precio, por lo que hay la motivación para abusar de los recursos naturales. En efecto, se habla de una externalidad negativa o coste externo (Pigou, 1952). La minería genera residuos contaminantes y el deterioro del medio ambiente y medios vitales para las comunidades y la vida silvestre (Stiglitz, 1993).

Intervención del estado y políticas ambientales

Anteriormente se mencionó que los recursos naturales poseen dos características que requieren la intervención del estado: las externalidades negativas que provocan las actividades relacionadas con los recursos naturales y además, la condición de ser recursos no renovables que amenaza el bienestar de presentes y futuras generaciones.

En efecto, de acuerdo a las medidas sugeridas por el informe de la ONU y por los resultados del modelo World 3, la intervención del estado requiere una modificación estructural, enfocada a la preservación de la capacidad de satisfacer las necesidades de presentes y futuras generaciones, reconociendo el estado actual, los límites de la capacidad de carga de la tierra y la disponibilidad de los recursos. Sin embargo, las medidas que el estado implemente están condicionadas por los costos que generan (Stiglitz, 1993).

¹⁹ Carl J. Dahlman, economista estadounidense.

Buchanan²⁰ sostiene que la finalidad de la política es facilitar el intercambio complejo entre los individuos, asegurando colectivamente sus objetivos para alcanzar resultados eficientes, que no se puedan asegurar mediante un intercambio sencillo (Buchanan & Tollison, 2009). Sin embargo, el individualismo limita los acuerdos; de manera que, Von Wieser alude que el vínculo entre procesos dirigidos por el estado y las economías privadas es el contrato (Von Wieser, 1927).

Von Wieser distingue el contrato social, el contrato de intercambio y el contrato de seguro. El contrato social involucra personas que se comprometen a unir valores, bienes o servicios con un propósito determinado. Por otra parte, el contrato de intercambio incluye únicamente dos partes, por medio de entregas de bienes, servicios o dinero que concilian. Finalmente, el contrato de seguros busca contribuir los efectos de pérdidas de economías privadas. Asimismo, el autor resalta la existencia de contratos no compensados, lo que lleva a la construcción de un cuerpo económico social originado por las instituciones (Von Wieser, 1927).

El contrato social es activo, donde el sentimiento de compañerismo facilita la presentación de las masas al poder o a la dominación de una clase de líderes (Von Wieser, 1927). Según Von Wieser, una clase de sirvientes contentos surge con el espíritu de clase que se refiere a la sumisión como cuestión de honor y crea buena voluntad; mientras que si no están contentos, aumenta el espíritu de clase-conflicto con sentimientos de solidaridad porque soporta por sus semejantes, sacrificando el bienestar individual por el de la clase (Von Wieser, 1927).

Adicionalmente, Buchanan en su teoría de la elección pública identificó reglas de juego y la manera de jugar el juego bajo esas reglas, a través de la elección de una constitución. La constitucionalidad incluye familias, empresas, instituciones públicas y el estado. Las normativas económicas constitucionales buscan legitimar el estado y sus acciones para maximizar la eficiencia. Por tanto, se establecen reglas de juego a través de temas económicos constitucionales (Buchanan & Tollison, 2009).

Por otra parte, a diferencia de la teoría neoclásica y la idealización de análisis económico, la economía social manifiesta que cuando el individuo es educado socialmente, su ego se aparta y el egoísmo se convierte en egoísmo social (Von Wieser, 1927). En efecto, el hombre acepta el código social de una industria o grupo social al que pertenece, para encaja en un orden social. De manera que, la constitución es la herramienta que equilibra los intereses del estado y la sociedad, frente a los intereses de los individuos privados y sus derechos constitucionales (Buchanan & Tollison, 2009).

1. Políticas Ambientales

Según Marshall, el estado interviene por medio de la legislación y los instrumentos de política económica (Marshall, 1920). Del mismo modo Buchanan sostiene que a través de la constitución, se modifica el comportamiento y la toma de decisiones de los agentes, con el fin de alcanzar resultados eficientes (Buchanan & Tollison, 2009).

²⁰ James Buchanan, economista estadounidense, representante de la elección pública.

Barry Field²¹ y Martha Field²² definen tres tipos de política ambiental: políticas descentralizadas, de mandato y control y políticas de incentivos. Por una parte, las políticas descentralizadas contienen leyes de responsabilidad civil, cambios de derecho y acción voluntaria. Las políticas de mandato y control se refieren a normas. Las políticas de incentivos involucran impuestos, subvenciones y permisos negociables (Field & Field, 2003).

Asimismo, Xavier Labandeira²³, Carmelo León²⁴ y Xosé Vázquez²⁵ distinguen dos tipos convencionales de intervención del estado, mediante controles directos o controles de mercado (Labandeira, León, & Vázquez, 2007). No obstante, los autores resaltan el surgimiento de una nueva ola de políticas ambientales que muestran la responsabilidad de los contaminadores, bajo la actuación voluntaria. La investigación se referirá exclusivamente a este tipo de instrumentos.

Las políticas descentralizadas o de responsabilidad llevan a los implicados en un problema de contaminación ambiental, a solucionar parte de estos problemas por sí mismos (Field & Field, 2003). Las políticas descentralizadas incluyen leyes de responsabilidad civil, instrumentos voluntarios y la negociación bilateral (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

De acuerdo a los autores Field, ser responsable de un comportamiento es tener que rendir cuentas de todo perjuicio que resulte de él, y compensar los daños, indemnizando a los damnificados con una cantidad que equivalga a la magnitud del mismo (Field & Field, 2003).

La legislación sobre responsabilidad civil se refiere a la respuesta de los contaminadores, por los daños que ocasionen. La finalidad de esta política es que los responsables de daños tengan incentivos que eviten los daños. El costo de estas medidas puede reducir su efectividad (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

La ejecución de las leyes requiere asignar energía y recursos que se podrían destinar a otros usos (North, 1990). Además, siempre existirán intereses que presionen a los agentes contaminadores a incumplir la normativa como se muestra con el Dilema del Polizón²⁶ (Stiglitz, 1993). Esto puede ser controlado bajo una modalidad que consiste en solicitar a las empresas datos sobre sus propias emisiones, sometiéndolas luego a auditorías periódicas con la finalidad de obtener información fiable sobre fiscalización y el cumplimiento de las responsabilidades otorgadas (Stiglitz, 1993).

Por otro lado, los instrumentos voluntarios se refieren a medidas de auto-regulación, mediante procesos cooperativos y menos costosos para la sociedad, y son promovidos por el sector público o por los agentes privados, responsables de la contaminación o el deterioro ambiental. Estos instrumentos pueden tomar forma de programas de actuación ambiental por parte del sector público, a los que se pueden sumar voluntariamente los agentes privados, a cambio del reconocimiento del sector público, ya sea por subvenciones o asistencia técnica. La negociación

²¹ Barry Field, economista.

²² Martha Field, economista.

²³ Xavier Labandeira, profesor español.

²⁴ Carmelo León, profesor español.

²⁵ Xosé Vázquez, profesor español.

²⁶ Dilema del polizón, persona que se beneficia de los recursos, bienes o servicios sin tener que pagar por el costo de la prestación

bilateral se da entre el sector público y el agente privado causante del daño ambiental, mediante la cooperación para alcanzar los objetivos de política, bajo las limitaciones determinadas por el acuerdo (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

Las estrategias voluntarias de carácter unilateral por parte del agente privado causante del daño ambiental, buscan el desarrollo y mejoramiento de sistemas de gestión ambiental, el uso de códigos y prácticas de conductas elaborados por organizaciones y la aplicación de programas ambientales fijados por organismos reconocidos que otorguen certificación de calidad (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

Finalmente, el instrumento de información incluye procesos de creación y suministro de la misma, por parte del sector público, sobre los impactos ambientales generados por los agentes privados. Este instrumento abarca iniciativas bilaterales, unilaterales y la vinculación de los agentes privados en programas públicos de mejora; caso contrario, la reputación, el prestigio, el valor de sus activos pueden verse afectados (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

Field argumentan que existen dos tipos de motivaciones para cumplir voluntariamente estas acciones: la persuasión moral y la presión social. La persuasión social hace que las personas se comporten bajo sus convicciones morales y su sentido del deber cívico. Mientras que, la presión social se refiere a la presión que perciben los contaminadores por parte de la sociedad (Field & Field, 2003). Harrington en su estudio revela que el incumplimiento de políticas ambientales está condicionado a aspectos de reputación y sanciones, o al temor a formar parte de listas negras de infractores (Harrington & Morgestern, 2004).

2. Leyes de responsabilidad civil

Field señala que ser responsable de un comportamiento es tener que rendir cuentas de todo perjuicio que resulte de él. En efecto, una posible solución a los daños es la legislación sobre responsabilidad civil, declarando a los contaminadores responsables de los daños que ocasionen (Field & Field, 2003).

La responsabilidad civil se refiere a situaciones en las que dos individuos están implicados en un accidente, donde el perjudicado intenta recuperar los daños originados por el causante; mientras que, tanto el causante, como los afectados deben cumplir con la legislación. Las decisiones que toman están relacionadas con la cantidad de cuidado que tienen (Varian, 1999).

De acuerdo al aporte de Varian²⁷, la cantidad x de prudencia que elige la empresa tiene un costo, que cuanto mayor precaución se tome, resulta más costosa; mientras que la pérdida de la víctima es menor. En efecto, el autor remarca que el costo marginal que tiene para el causante el aumento del nivel de precaución debe ser igual al beneficio marginal que tiene para la víctima la conducta más prudente. De manera que el nivel socialmente óptimo de precaución es el que minimiza los costes totales del accidente (Varian, 1999).

²⁷ Hal Ronald Varian es un economista estadounidense especializado en microeconomía.

Algunas normas regulan la responsabilidad civil imponiendo costes al causante del accidente y la forma en que se los imponga influye en el nivel de cuidado que éste tiene. La conducta del causante según las normas reguladoras de la responsabilidad civil, determina que ante una ausencia de responsabilidad civil, el causante quiere minimizar sus costes, sin considerar el daño que causa a la víctima; de manera que elegirá menor precaución (Varian, 1999).

Por otro lado, el autor sostiene que la responsabilidad civil estricta exige pagar al causante todos los accidentes que cause; es decir, asume el nivel de precauciones socialmente óptimo. Por último, el autor manifiesta que la norma de la negligencia asigna la responsabilidad al causante de únicamente las pérdidas del accidente si tomó menos precauciones de lo determinado por la legislación; en caso de que el causante haya tomado las debidas precauciones, no será declarado responsable de los costes del accidente (Varian, 1999).

El objetivo real de este tipo de políticas no es garantizar que los afectados sean indemnizados una vez ocurrido el daño, sino lograr que los posibles contaminadores sean más cuidadosos y reduzcan los impactos que causan sus actividades económicas. La rendición de cuentas de los daños ambientales que causen, hace que los contaminadores internalicen los efectos externos (Stiglitz, 1993).

La comparación de coste-beneficio permite a los agentes privados tomar una decisión sobre cumplir o incumplir la ley; el incentivo de no cumplir con la ley son costos menores. Sin embargo, el incumplimiento también puede generar costos por las sanciones impuestas por el regulador. Asimismo, el poder público determina la política ambiental en base al análisis costo-beneficio. De acuerdo al estudio desarrollado por Harrington, los instrumentos de incentivos generan ahorro, fomentan la innovación y cumplen objetivos en menor tiempo (Harrington & Morgestern, 2004).

3. Instituciones e información

De acuerdo al aporte del economista Douglass North²⁸, en su obra *Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico (1990)*, las instituciones representan un conjunto de normas y valores que facilitan la confianza entre los actores y reduce la incertidumbre. Como se mencionó anteriormente, las reglas son aplicadas a una sociedad para definir la interacción humana, que al ser inevitablemente incompleta, genera incertidumbre (Buchanan & Tollison, 2009).

La organización se conforma por cuerpos políticos, económicos, sociales y de educación. Estos grupos están vinculados por alcanzar un objetivo en común (North, 1990); en el caso de la investigación, el objetivo es alcanzar una minería responsable desde un enfoque del desarrollo sustentable. En efecto, las instituciones son los actores que dirigen el cambio estructural mediante reglas y estrategias que deben cumplir los agentes privados (Buchanan & Tollison, 2009). En el caso de cambios estructurales en materia ambiental, la regulación está aplicada por las administraciones públicas competentes (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

²⁸ Douglass North, economista e historiador estadounidense.

North señala que las instituciones modifican el desempeño económico por los costos de intercambio y producción; mientras que el cambio de instituciones dependen del bloqueo de la relación entre instituciones y cuerpos económicos que ha convertido la estructura de una industria y también, por los procesos de retroalimentación que reciben los seres humanos, creando reacción al conjunto de oportunidades. Los cambios progresivos en una estructura están dados por parte de los emprendedores de cuerpos económicas y políticas, conforme a la información que reciben y la manera en la que procesan (North, 1990).

4. Información

Según la teoría neoclásica, el supuesto que determina la perfecta información de los individuos sobre la calidad de los bienes que se venden en el mercado, se verifica por la calidad del producto (Varian, 1999). Sin embargo, obtener información de la calidad es costoso; de manera que, el supuesto de los compradores y los vendedores poseen la misma información sobre los bienes que intercambian, deja de ser razonable (Stiglitz, 1993).

Stiglitz afirma que la información posee un precio y además, la información involucra credibilidad. De manera que las señales que se pueden transmitir y reflejar en el mercado, brindan garantía y calidad, y reducen el riesgo de gastar en información que no sirva. Los proveedores de la información ganan reconocimiento al brindar garantías. En efecto, la información que proveen puede distorsionar las decisiones que se toman bajo información perfecta (Stiglitz, 1993).

Por otra parte, Kenneth J. Arrow²⁹ considera el conocimiento o información como un bien económico, un factor de producción y pertenece a un mercado que aún no está desarrollado. El conocimiento representa una señal de la naturaleza, la distribución de probabilidades de estados de la naturaleza depende de estas señales, y se altera con cada cambio de nuestro conocimiento (Arrow, 1921).

El postulado de la racionalidad planteado por North, permite el análisis de mercados incompletos e imperfectos, evidenciando lo que hace al mercado imperfecto, específicamente por los costos de transacción de información. Los costos de transacción aumentan porque la información que poseen las partes es costosa y asimétrica, y por la manera en que los actores desarrollan sus instituciones para estructurar resultados de la interacción humana, en un grado de imperfección de los mercados. De manera que, las instituciones procuran estructurar la interacción humana para reducir los costos de transacción (North, 1990).

La información se refiere a las oportunidades de todo lo que pueden disponer los agentes económicos. El precio indica la escasez del recurso y el esfuerzo que debe hacer para conservarlo; en efecto, los problemas de información impiden el perfecto funcionamiento del mercado (Stiglitz, 1993).

El proceso de información de los actores destaca la formación de instituciones. Douglass North vuelve a mencionar la dificultad de análisis que provoca la racionalidad y las características de

²⁹ Kenneth J. Arrow, economista estadounidense, representante de la escuela neoclásica.

transacción, puesto que impiden que los actores alcancen la maximización conjunta del modelo de costos de transacción cero (North, 1990).

Los emprendedores al ser eficientes, es decir, su costo de transacción cero, la elección será eficiente. Sin embargo, cuando los modelos no garantizan la eficiencia del intercambio, la información los corrige (North, 1990). Generalmente, la información es incompleta, y los agentes económicos reaccionan conforme a la manera de procesar la información. El alcance de la información es la cooperación de los individuos cuando interactúan constantemente (North, 1990).

5. Información y dilema del polizón

A pesar de los avances que puede generar la información, según la teoría analizada por Mancur Olson³⁰ (Olson, 1985), señala la existencia de una estrategia dominante que lleva a la obtención de resultados no eficientes, respecto al bienestar social. La ineficiencia del resultado se debe al costo de transacción que los actores no lo quieren asumir (Cornes & Sandler, 1986). La cooperación entre los agentes maximiza el bienestar social y la cooperación se da en la provisión de información. Sin embargo, los agentes tienen incentivos para no revelar la información, por la evasión de los costos de transacción. No revelar la información se convierte en una estrategia dominante que impedirá la obtención de resultados beneficiosos socialmente (Stiglitz, 1993).

Un resultado eficiente requiere de instituciones e información (North, 1990). El alto coste de la información es la clave del costo de transacción, esta mide los atributos valiosos de lo que se ha intercambiado y el costo de protección de los derechos y políticas que mejoran los acuerdos. La investigación considerará la información de los atributos valiosos del sector minero y la gestión de las empresas bajo el enfoque del desarrollo sustentable y las políticas ambientales de responsabilidad.

6. Instituciones, información y desarrollo sustentable

De acuerdo al escenario tomado como referencia para esta investigación, el Estado apoya al desarrollo sustentable mediante retroalimentación comprensible sobre lo que pasa y pasará, creando una reacción de concientización y aplicación de las políticas públicas (Meadows, Randers, & Meadows, 2004). Las empresas deben acoplarse a las leyes de todos los niveles de gobierno, nacional, estatal o local.

En cuanto a las leyes concernientes para esta investigación, el gobierno utiliza leyes que exigen el control del desempeño de la empresa, a través de informes y revelación de información ambiental (Riera, García, Kristrom, & Brannlund, 2005). Adicionalmente, la cultura provee un marco conceptual basado en el lenguaje para codificar e interpretar la información. Las restricciones formales complementan la efectividad de las restricciones de información en intercambios complejos (North, 1990).

³⁰ Mancur Olson, economista y sociólogo estadounidense.

Empresas y gobernabilidad

De acuerdo a la teoría económica, la empresa es una organización que transforma los insumos en productos (Coase, 1988). Según la teoría neoclásica, los productores toman decisiones en función de sus costos y beneficios (Fischer & Dornbusch, 1985). Sin embargo, el análisis económico de Coase manifiesta que el reconocimiento de costos de transacción modifica la toma de decisiones (Coase, 1988).

En efecto, los productores deben tomar en cuenta el tipo de contrato, el tipo de producto o servicio. La decisión de aceptar un acuerdo que implique costos, lleva a la empresa a organizar las operaciones de mercado, cada vez que sus costos sean menores o iguales a los costos de llevar el producto al mercado (Coase, 1988). De acuerdo a la teoría del contrato desarrollada por Buchanan, se refiere a que contractualmente el ordenamiento público se enfoca en la legislación (Williamson, 2002).

Los costos de negociación y de concluir un contrato por cada transacción que se realiza, deben ser tomados en cuenta. Existen técnicas de intercambio que reducen estos costos, aunque no pueden ser eliminados. La intervención de un empresario que dirige los recursos permite reducir ciertos costos (Coase, 1988).

Como menciona Williamson³¹, además de las reglas de juego, también importa el objetivo del contrato, lo que se convierte en el ordenamiento privado. El ordenamiento privado se refiere a los esfuerzos de las partes inmediatas a una transacción hacia la alineación de los incentivos y pueden idear las estructuras de gobierno que van acorde a sus necesidades de cambio (Williamson, 2002). El objetivo de esta auto-ayuda es alcanzar la mutualidad de las ventajas del intercambio voluntario, lo que se conoce como el entendimiento fundamental en economía (Buchanan & Tollison, 2009).

El ordenamiento privado mencionado por Williamson, reconoce la alineación de incentivos y la gobernabilidad como tipos de relaciones contractuales. De acuerdo a Herbert A. Simon³², el análisis del contrato reemplaza la maximización por el satisfacer y además, el análisis considera la inevitabilidad de los contratos incompletos, por lo que las partes deben adaptarse a perturbaciones inadvertidas.

Los actores humanos se enfrentan a costos contractuales por la adaptación y el comportamiento estratégico. Simon resalta al ordenamiento privado como el diseño de estructuras de gobierno de apoyo para mitigar futuros impases y rupturas contractuales. Asimismo, el autor recalca que los controles sobre los trabajadores generan consecuencias intencionadas y no intencionadas, pues los contratos con trabajadores no son pacíficos.

Según Simon, la gobernabilidad está definida por atributos que describen estructuras y alinean diferentes transacciones de manera económica. De acuerdo a Commons³³, la unidad de análisis de la gobernabilidad es una transacción, pues cumple con los principios de conflicto, mutualidad y orden.

³¹ Oliver Williamson, economista estadounidense.

³² Herbert A. Simon, economista, politólogo y teórico de las ciencias sociales estadounidense.

³³ John R. Commons, economista e historiador estadounidense.

En efecto, cabe recalcar que las transacciones tienen tres dimensiones: especificidad de los activos (físicos, humanos, lugar, especialización y marca), perturbaciones a las que se sujetan las transacciones y la frecuencia con que se repite la transacción.

1. Responsabilidad Social Empresarial RSE

La interrelación de la empresa y sus stakeholders da lugar al concepto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Los autores definen a la RSE como la decisión voluntaria de contribuir al alcance de una sociedad mejor y un medio ambiente más conservado, a través de sus operaciones comerciales y las relaciones con las demás partes. Hoy en día se considera a la RSE como el compromiso de las empresas a la contribución del desarrollo económico sustentable (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

De acuerdo a la Comisión Europea, la RSE es un concepto a través del cual se integra aspectos sociales y ambientales en sus operaciones de negocios y su interacción con sus stakeholders de manera voluntaria. Asimismo, la comisión define la RSE como las acciones que están fuera y dentro de las obligaciones de la empresa, con la sociedad y el medio ambiente. También recalca la creación de medidas regulatorias que conducen a la empresa a encontrar voluntariamente su responsabilidad social (European Commission, 2011).

Según los autores Labandeira, León y Vázquez, la empresa tiene como objetivo el mantenimiento de su rentabilidad a largo plazo y para lograrlo, requiere de la integración de la dimensión económica, social y ambiental en las decisiones de gestión empresarial (Labandeira, León, & Vázquez, 2007). Adicionalmente, la empresa aprovecha el valor agregado que genera la publicación de información sobre riesgos y oportunidades de su estrategia de sustentabilidad para incorporar nuevos inversionistas.

El enfoque estratégico de la RSE es incrementar la competitividad de la empresa a través de beneficios en términos de gestión de riesgos, reducción de costos, acceso a capitales, relaciones comerciales, gestión de recursos humanos, y capacidad de innovación. La dirección de la RSE construye empleos de largo plazo, la confianza de los ciudadanos y de los consumidores como la base de modelos de negocios sustentables. La confianza genera un ambiente en el que las empresas pueden innovar y crecer (European Commission, 2011).

2. Problema de incentivos

Stiglitz manifiesta que la empresa tiene incentivos para alterar su comportamiento con el propósito de ahorrar costes que involucren el cumplimiento de las responsabilidades otorgadas, pero poniéndose en riesgo de ser descubierto por las instituciones o por la sociedad y tener que pagar las consecuencias. Si el valor a pagar por incumplir la ley es menor al coste de descontaminación o prevención, la empresa tiene mayor incentivo de incumplir la ley. Por otro lado, para que la empresa produzca bienes de calidad requiere incentivos, proporcionados por medio del cliente o del estado. Los consumidores reciben información sobre la calidad del producto que adquirirá, mientras que el estado reconoce el cumplimiento y aporte de la empresa (Stiglitz, 1993).

Actualmente, las empresas tienen el incentivo de integrar variables ambientales en su gestión, a medio y largo plazo, debido a la demanda social de protección ambiental y a la presión legislativa. Por este motivo, el medio ambiente ha llegado a convertirse en un factor de competitividad y diferenciador de productos y empresas. La finalidad es obtener los mismos o más productos con menos recursos y residuos, que hasta puede subir el valor del producto final (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

La incorporación de variables ambientales en los procesos productivos ha llevado a la empresa a involucrarse con el entorno, la sociedad o a las expectativas de los interesados. De manera que el éxito económico se alcanza gracias a la aceptación social. Así, las empresas incorporan el desarrollo sostenible como un objetivo. Quienes forman parte del cambio empresarial hacia una estrategia ambiental incluye a los grupos de intereses o stakeholders, tanto internos (accionistas, empleados), como externos (reguladores, clientes, proveedores, comunidad, entidad financiera, ONG) (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

De acuerdo a los autores Labandeira, León y Vázquez, los factores que inciden en el comportamiento ambiental de la empresa son los costes y beneficios de incorporar el medio ambiente en la gestión. Los costes están relacionados con las inversiones o gastos para el cumplimiento de la legislación y la implementación de estrategias de gestión. Por otro lado, los beneficios están asociados a la mejora de la competitividad y ampliación de negocios ambientales, la eficiencia productiva, la mejora de su imagen, reputación y relaciones externas, y el ahorro de sanciones por el incumplimiento de la ley.

3. Contratos

El enfoque económico de la elección estudia el comportamiento humano con la relación entre fines, escasez y las alternativas de uso (Williamson, 2002). James Buchanan define la política como una estructura del intercambio complejo entre los individuos, para asegurar colectivamente sus propios objetivos, que no puedan asegurar mediante un intercambio sencillo. Por lo tanto, se establecen reglas de juego a través de temas económicos constitucionales (Buchanan & Tollison, 2009).

El objetivo de un contrato es influir en el desarrollo del juego; de hecho, implica esfuerzos de las partes de la transacción y alinea incentivos para elaborar estructuras de gobierno que se adapten a las necesidades del cambio (Williamson, 2002). El contrato contiene cláusulas de eventualidades, las cuales condicionan el pago a las circunstancias y a la manera que se dé el servicio (Stiglitz, 1993). Además, se especifica las funciones y compromisos de cada parte, ante cada situación y los procedimientos para resolver los posibles conflictos.

Asimismo, el contrato busca la reciprocidad de las ventajas del intercambio voluntario y a la vez, reducir los riesgos contractuales. Williamson divide la ciencia del contrato en ordenamiento privado y público. El ordenamiento privado incluye el alineamiento de incentivos y la gobernabilidad (Williamson, 2002).

La organización económica se utilizará desde el enfoque macroeconómico sobre un sistema racional y bajo la meta de contrato. La organización económica deja lecciones que deben ser tomadas en cuenta para la investigación. En efecto, los términos deben ser más realistas para el estudio del

comportamiento humano. Asimismo, se debe estar alerta a las regularidades significantes del comportamiento para calcular el diseño organizacional.

Además, el autor subraya que los contratos son inevitablemente incompletos. De modo que las partes de un contrato se enfrentan a disturbios inesperados que incrementan brechas, errores u omisiones. La aportación teórica de Williamson recalca que los actores humanos se enfrentan a necesidades de adaptación a los imprevistos y también se enfrentan al comportamiento estratégico; por lo que se plantea costosas fallas contractuales. Consecuentemente, los esfuerzos de ordenamiento privado crean estructuras de apoyo de gobierno para mitigar impases y futuros averíos contractuales.

Los esfuerzos privados serían innecesarios si se asume el conocimiento común de los pagos de la negociación sin costo. El problema de la no verificabilidad conlleva a costosos y poco fiables conflictos en tribunales, debido a la unión de la racionalidad limitada, el oportunismo y el conocimiento idiosincrásico. (Williamson, 2002).

Además, Williamson sostiene que los modos alternativos de gobernabilidad difieren de acuerdo a la conciencia interna de los atributos. El reto es exponer atributos que describan las estructuras de gobernabilidad y alinear con las transacciones. Las transacciones tienen tres principios: conflicto, mutualidad y orden. Los disturbios de transacciones y la frecuencia con que ocurren las transacciones son activos específicos que influyen en la gobernabilidad. Las transacciones difieren en sus atributos y sus estructuras de gobernabilidad difieren en sus costos y competencias.

Para Simon, la incertidumbre no juega un rol central en la teoría clásica, lo que conlleva a comprender el comportamiento económico como estable y próximo al equilibrio competitivo. Al reemplazar la teoría clásica por el modelo de la racionalidad limitada, desarrolla una toma de decisiones contractuales, bajo la incertidumbre y competencia imperfecta (Herbert, 1978).

4. Reputación

Según Stiglitz, la empresa o individuo actúa bajo condiciones que preserven su imagen. De modo que la reputación representa una garantía porque si no se responde adecuadamente, se disminuye la reputación de la persona o la empresa. En efecto, la reputación incentiva a las empresas a producir bienes de calidad y a actuar responsablemente. Si no cuidan su reputación, las empresas podrían perder beneficios derivados de su reputación como mayores precios por la calidad de su gestión y su producto (Stiglitz, 1993).

Los elementos de la reputación corporativa son analizados bajo el buen funcionamiento ético y técnico de cada área del cuerpo económico. Los aspectos que son analizados incluyen políticas de medio ambiente, de ascenso, retributivas, de despido, calidad del producto, política de precios, campañas publicitarias, campañas de comunicación institucional, y políticas de selección, formación e integración del personal (Alcalá, 2012).

La reputación es independiente del mercado; de hecho, viene dada por la percepción que tienen los clientes externos y clientes del mismo cuerpo económico. Cada decisión tomada por el cuerpo

económico, influye sobre otros; de manera que se requiere el buen comportamiento de los individuos (Alcalá, 2012).

A pesar de las leyes y reglamentaciones, el contrato lleva términos de sanciones. Los costos y la característica incompleta de los contratos, da un papel protagónico a las restricciones informales, es decir, la cultura, códigos de conducta, etc. En efecto, las instituciones garantizan la credibilidad si elevan la conducta moral de los individuos mediante adecuada información (North, 1990).

5. Elección de la calidad

Varian señala que cuando los productores pueden elegir la calidad, se supone que los consumidores juzgan la calidad en función de la calidad media vendida. Si en el caso de la extracción de los minerales, se dice que las empresas poseen buenas y malas técnicas, los consumidores eligen de acuerdo a la calidad de extracción media.

Si los fabricantes usan malas técnicas de extracción, los consumidores estarían dispuestos a pagar una reducida cantidad por los minerales medios, lo que no le convendría porque el costo de producción sería mayor. Por otra parte, si sólo producen los productores de buenas prácticas, la competencia reduciría los precios de los minerales hasta igualar a su coste marginal, lo que llevaría a incrementar el precio de los minerales por la mayor disponibilidad de pago y se obtendría un excedente del consumidor (Varian, 1999).

Para el autor, en caso de que el productor decida usar buenas prácticas de extracción y en vista de ser un productor a gran escala e influye en el mercado, la empresa decide adquirir la mejor calidad de extracción. De manera que llevará a los productores a pensar de la misma manera, lo que mejoraría los estándares y las prácticas de extracción (Varian, 1999).

Por una parte, un lado del mercado no puede observar lo que hace el otro lado, riesgo moral; en efecto, la selección adversa se refiere a las situaciones en las que un lado del mercado no puede observar las prácticas o técnicas de extracción. La solución propuesta para el riesgo moral implica el racionamiento de que a las empresas les gustaría ofrecer más de lo que ofrecen, pero no están dispuestas a hacerlo, por la manera en que varían los incentivos de sus clientes. En cuanto a la selección adversa, el equilibrio implica un volumen de comercio pequeño entre las prácticas buenas y malas. A las empresas de la industria y al gobierno les resulta costosa la recopilación de la información (Varian, 1999).

En caso del riesgo moral, el estado puede obligar al productor a tener un determinado nivel de cuidado y condenar a los que no tuvieran. Mientras que en el caso de selección adversa, el estado puede obligar a los productores a adquirir seguros y mejorar el bienestar de todos; sin embargo, el coste de intervención del estado puede no ser eficaz. Asimismo, la selección adversa puede tener soluciones privadas como la responsabilidad social (Varian, 1999).

Las empresas mineras con buenas prácticas de minería, poseen incentivos para dar a conocer las buenas prácticas a las partes interesadas. Por ejemplo, la transparencia y la rendición de cuentas por

parte de la empresa extractiva, refleja una señal de buenas prácticas. Las señales ayudan a mejorar el funcionamiento del mercado (Varian, 1999).

6. Problema del principal y el agente

Según Stiglitz, el problema existente entre los directivos y los propietarios, es que no siempre coinciden sus intereses. De manera que el problema tiene dos aspectos importantes: con qué intensidad trabaja el agente y qué riesgos corre. Los agentes actúan cautelosamente, de forma opuesta a lo que quisieran los propietarios. El problema del principal se basa en que el principal no sabe con precisión qué hace o qué debe hacer el agente. Si se dedican más recursos a la obtención de información, se atenúa el problema.

En efecto, para contrarrestar esta tendencia, las empresas recompensan la asunción de riesgos, ofreciendo primas cuando aumentan los beneficios. La clave para resolver este inconveniente es que el directivo debería remunerar a sus directivos basada en los incentivos. Cuando mejor vaya la empresa, mejora la retribución de los directivos, de manera que estos buscarán maximizar su valor de mercado (Stiglitz, 1993).

7. Presión social y conflicto de intereses

Según Von Wieser, la economía es social porque la preocupación de la adecuada satisfacción de las necesidades, involucra las necesidades de los demás, siempre que los agentes son agrupados (Von Wieser, 1927). Asimismo, Gordon Tullock³⁴ plantea la doctrina “entendemos cómo otros se sienten o actúan porque sabemos cómo actuaríamos o sentiríamos bajo las mismas circunstancias” (Tullock, 1965).

En efecto, la teoría económica estudia por separada la producción (Varian, 1999); mientras que Von Wieser resalta la interdependencia entre producciones; de manera que cualquier modificación en la producción debe ser controlada por medio de la política económica y el orden interno, para mantener el equilibrio (Von Wieser, 1927). De hecho, las empresas independientes, son ejemplos de porqué sus procesos productivos y adquisitivos requieren trabajo para el proceso de intercambio.

Asimismo, Von Wieser resalta la propia iniciativa de los individuos para alcanzar los intereses comunes; mientras que analizados los intereses por separado, genera conflictos donde el más fuerte gana. La ley moral de la teoría económica restringe la economía, por ende, defienden el legado de liberación y la defensa de la protección de la ley moral por medio del estado y las instituciones. Sin embargo, Von Wieser sostiene que la teoría económica sobreestima la capacidad de libertad del hombre; y es débil en asegurar su preservación y en el desarrollo de su vida, por lo que requiere una organización social.

La presión social es informal porque no se ejerce a través de medios jurídicos o legales y pretende que los responsables de una excesiva contaminación asuman el coste de la misma. En este caso, se puede crear hasta boicots, que haga caer el valor de las acciones de la empresa si ésta cotiza en

³⁴ Gordon Tullock, economista y profesor de leyes estadounidense.

bolsa. La acción se ejerce por medio de la acción de grupos locales de ciudadanos, artículos periodísticos, manifestaciones, debates de los contaminadores, etc. (Stiglitz, 1993).

Stiglitz recalca que la información a la que tengan acceso los ciudadanos es un factor de gran importancia. En ausencia de datos fidedignos sobre la cantidad y calidad de sustancias contaminantes que emite cada fuente, será difícil movilizar la atención pública y centrarla en los responsables (Stiglitz, 1993).

Evaluación del marco teórico

Los conceptos y teorías citados en el presente capítulo, ponen en evidencia dos temas relevantes alrededor del análisis económico de los recursos naturales no renovables: el agotamiento y las externalidades. Sin embargo, existen países cuyo desarrollo incluye actividades relacionadas a los recursos naturales. Con el transcurso del tiempo, las señales de agotamiento y deterioro del medio ambiente han despertado el interés por la conservación del medio ambiente y la preocupación por la satisfacción de las necesidades de futuras generaciones.

La estructura de la sociedad actual está condicionada a la reducción de los excesos de la explotación de los recursos naturales, con el propósito de asegurar un desarrollo sustentable. En efecto, se requiere que por medio de la política económica se impulse medidas que permitan modificar la estructura de la sociedad, conjuntamente con los actores económicos privados, y así alcanzar el bienestar social y la obtención de resultados eficientes.

Los recursos naturales son parte del patrimonio natural de una nación, por lo que generalmente el estado se encarga de otorgar derechos de propiedad para que las empresas puedan ejecutar sus actividades mediante la extracción de los recursos. De hecho, la parte interesada que adquiere los derechos de propiedad mediante un contrato y bajo una legislación y restricciones, también adquiere responsabilidades. A pesar de que el contrato representa responsabilidades de las partes, este nunca es completo, dejando una brecha entre la negociación de las partes.

La intervención de agentes gubernamentales genera costos. De manera que, una de las alternativas que posee el estado es la promoción de medidas descentralizadas. Las leyes de responsabilidad civil, acuerdos bilaterales, programas voluntarios, incentivan la responsabilidad adquiridas por parte de las empresas, orientándolas a la internalización de las externalidades.

El desarrollo sustentable posee tres dimensiones: social, económica y ambiental; y sus objetivos alineados hacia la obtención de un mismo propósito, dan la guía que se debe tomar en cuenta para que una minería sea responsable y aporte al desarrollo de un país. Por lo que se resalta, el rol protagónico del estado, sus instituciones y la empresa. El Estado y sus instituciones participan mediante el control y la regulación del cumplimiento de la legislación y los contratos; mientras que la empresa aporta a través de su gobernabilidad, alineando su gestión a los intereses impartidos por la Constitución y a los términos del contrato.

La empresa responde modificando su comportamiento, reconociendo sus responsabilidades económicas, sociales y ambientales, con el objetivo de no dañar su imagen, reputación y aportar al desarrollo sustentable de las economías donde operan. En efecto, la gestión responsable de la empresa se enfoca en cubrir la brecha de legislaciones, contratos e instituciones débiles, con el fin de obtener resultados eficientes.

Los costos generados por el control y supervisión del Estado, puede resultar demasiado altos para las economías de algunas naciones. Por esta razón, la “Minería Responsable” puede ser una alternativa que reduce costos de transacción y facilita la regulación y control del sector minero, mediante la aplicación de medidas responsables por parte de las empresas y el apoyo del estado, asegurando el desarrollo sustentable.

Los aportes de Donella Meadows, Jorgen Randers y Dennis Meadows, explican que la sociedad actual actúa conforme a la información que recibe; de hecho, las decisiones que toman los seres humanos, se formulan en base a la información que adquieren. El deterioro del medio ambiente, los abusos sociales, la desigualdad, han concientizado a la sociedad, por lo que se ha generado el movimiento en pro de los derechos que deben ser cumplidos por parte de la empresa y el estado. En efecto, se ha convertido en una fuerza que presiona y exige, condicionando el comportamiento de las empresas que extraen los recursos naturales y la gestión del estado.

Por otro lado, los derechos civiles y su cumplimiento, adicionalmente a la presión social, son fines de la economía que condiciona el comportamiento de las empresas mineras y de las instituciones, lo que lleva a efectivizar su gestión hacia el desarrollo sustentable. Consecuentemente, las actividades pueden agilizarse y reducir conflictos, gracias a la participación activa de la sociedad.

El marco teórico para la investigación permite identificar los puntos teóricos que debe ser considerados para llegar a los objetivos planteados, que en este caso es conocer las implicaciones de la minería responsable, los actores y sus procesos, con el fin de conocer la evidencia en países mineros y así, comparar con Ecuador y rescatar las implicaciones para el caso ecuatoriano. En el próximo capítulo se definirá la minería responsable y se conocerán sus actores y la interacción entre estos.

Capítulo 2

Minería responsable desde el enfoque de desarrollo sustentable

El propósito de este capítulo es conocer el concepto y las implicaciones de la Minería Responsable, bajo los criterios teóricos identificados en el capítulo anterior, combinados con indicaciones planteadas por la guía de la norma ISO 26000, que rescata las condiciones de la responsabilidad social empresarial. En efecto, el propósito de este capítulo es definir la Minería Responsable, conocer los actores que intervienen y los procesos que integra.

1. Descripción del sector minero según el desarrollo sustentable

La minería es un motor clave del crecimiento económico mundial (World Economic Forum, 2013). No obstante, es una de las actividades económicas más controversiales de la economía de un país y del mundo, debido a las percepciones públicas, basadas en antecedentes característicos de la minería (Chaparro & Salgado, 2005).

El dominio de territorios, la velocidad de extracción de los minerales, el deterioro del medio ambiente, el impacto en el desarrollo de las comunidades de las zonas donde operan las empresas mineras, son el reflejo de los efectos de la minería (Chaparro & Salgado, 2005).

Asimismo, la minería es capaz de crear un impacto positivo de largo plazo en sociedades y naciones. Sin embargo, el papel del sector es cada vez más cuestionado por los gobiernos y las comunidades. La confianza ha descendido entre las partes interesadas (World Economic Forum, 2013).

Anteriormente, el objetivo en la industria minera fue liberalizar los mercados y reducir la influencia del Estado en la actividad económica; de hecho, la desregulación, la privatización y el otorgamiento de mecanismos de estabilidad jurídica y tributaria, fueron las principales reformas (Polo, 2006). Mientras que en los 90s el desempeño ambiental se volvió fundamental; por lo que la industria minera requería fortalecer las leyes y reglamentos que controlen las disposiciones ambientales (Banco Mundial, 2013).

Por otra parte, organismos internacionales como el Consejo Internacional de Minería y Metales³⁵, el Banco Mundial³⁶, el Foro Mundial Económico³⁷, entre otros, dirigen sus esfuerzos para asegurar resultados sociales, ambientales y económicos, derivados de los recursos minerales, para el beneficio de los países y comunidades (Consejo Internacional de Minería y Metales, 2004).

³⁵ ICMM Council, principal cuerpo de gobierno, dirección estratégica, determinación de prioridades y políticas de decisión. Conformado por los CEOs de todas las compañías miembros.

³⁶ Banco Mundial, organismo especializado de las Naciones Unidas, busca combatir la pobreza y promover la prosperidad compartida.

³⁷ Foro Económico Mundial, organismo internacional por la cooperación pública y privada.

De acuerdo al Banco Mundial, la minería ha tenido un proceso evolutivo. En efecto, se señala que la recuperación del ritmo de crecimiento de la economía mundial, gracias a la expansión de las economías de países como China, Estados Unidos, Japón y otras, se incrementó la demanda de los minerales. Conjuntamente, se señala que se identificó un incremento en gastos de exploración minera y se amplió la cartera de proyectos de explotación (Sánchez & Lardé, CEPAL, 2006).

De acuerdo a Darby³⁸, el ritmo de la globalización económica ha superado la capacidad de las instituciones mundiales para desarrollar mecanismos de regulación. También ha superado la capacidad de los países productores de recursos en el desarrollo de marcos reguladores e instituciones. Por este motivo, surge la iniciativa de múltiples partes interesadas que intentan actuar como sustitutos de la regulación (Darby, 2010).

Conforme a lo citado en el capítulo anterior, el desarrollo sustentable propone un cambio basado en el reconocimiento del estado actual de las presiones sobre los límites, para corregir a tiempo los excesos. Simultáneamente, la minería promovida por el Estado y ejecutada por la empresa, al actuar bajo los límites de la capacidad de la tierra, puede ser una herramienta para que el desarrollo de un país trascienda la vida de sus yacimientos mineros; de hecho, la minería puede ser considerada como el factor de despegue de nuevas actividades productivas (Polo, 2006). No obstante, la minería se debe ejecutar bajo el costo justo (Dag Hammarskjöld, 1975).

Por este motivo, la minería integra un proceso de toma de decisiones como un proceso democrático, donde participan poblaciones y comunidades involucradas desde el planteamiento de un proyecto, en una relación respetuosa y transparente, que sin información podría ser visto como una amenaza a su hábitat (Polo, 2006).

Según el Banco Mundial, los países pasan por cinco etapas para transformar su riqueza mineral en desarrollo sustentable: la legislación en materia de minerales; segunda, el marco normativo con capacidad de supervisión y aplicación de la ley; tercera, la recaudación de impuestos y regalías transparente y eficiente; cuarta, la administración gubernamental y asignación de los ingresos fiscales eficientes; y finalmente, la minería contribuye al desarrollo social, económico y ambiental sustentable del país (Banco Mundial, 2013).

El propósito del capítulo es investigar la minería responsable y las implicaciones que lleva, conforme a las dimensiones del desarrollo sustentable, a través de medidas que garanticen la minería responsable. En efecto, los aspectos característicos de la minería se clasificarán y analizarán de acuerdo a las tres dimensiones del desarrollo sustentable.

2. Beneficios y costos de la actividad minera

A pesar de los beneficios de la minería en una economía, también es una actividad que provoca impactos adversos y se los distingue de acuerdo a las dimensiones de desarrollo sustentable. En efecto, se identifican los problemas económicos, sociales y ambientales causados por la minería.

³⁸ Sefton Darby, Director en Transparencia Internacional, Nueva Zelanda.

Dimensión económica

A escala nacional, la minería es el sector económico que para algunos países representa una importante fuente de ingresos (Pereira, Ulloa, O'Ryan, & De Miguel, 2009). De hecho, la minería beneficia directa e indirectamente a las economías; esta crea empleo, ingresos al estado y oportunidades para el crecimiento económico y la diversificación (Mining Facts Organization, 2012).

Conforme al estudio realizado por el Consejo Internacional de Minería de Metales, se encontró que los aportes de la minería a una economía tienen forma de: inversiones extranjeras directas, la inversión nacional, las exportaciones, los ingresos de la comercialización de bienes y servicios durante la construcción y operaciones de la empresa minera, los ingresos gubernamentales, la producción interna, los empleos y salarios (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012).

El incremento de los ingresos mineros generados por un aumento de los precios, provoca un aumento del PIB en una economía (Moguillansky, 1998); este impacto puede desembocar en el fenómeno de la enfermedad holandesa citado en el capítulo anterior, que puede desequilibrar la economía nacional (Corden & Neary, 1982).

Por otro lado, algunos países con abundantes minerales y con un gobierno débil puede verse afectados por un acto predatorio caracterizado por la corrupción, los conflictos políticos y desigualdades creadas por el gobierno. En efecto, el objetivo es que los ingresos y aportes económicos obtenidos por las actividades mineras, aporten al desarrollo a largo plazo y no que nos sea perjudicial el cierre de la mina; ya sea mediante la inversión en educación, infraestructura, tecnología o iniciativas de emprendimiento (Mc Phail, 2008).

Dimensión social

La minería contribuye al cumplimiento de los derechos humanos, al desarrollo social y a la reducción de la pobreza. Asimismo, como se mencionó anteriormente, el incremento del empleo mejora la calidad de vida de familias que habitan alrededor de las áreas de operaciones de la empresa minera (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012).

El riesgo de incumplimiento de los derechos humanos es un inconveniente para el desarrollo de las actividades mineras; puesto que se ven amenazados mediante las decisiones, actividades, productos y servicios, y a través de las relaciones comerciales vinculadas a la empresa minera (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012). Además, la minería puede amenazar los medios de subsistencia como el agua y la tierra, de las comunidades donde operan las empresas mineras.

Por otro lado, el desarrollo de las actividades mineras implementa sustancias y químicos que perjudican la salud de los trabajadores y habitantes de las comunidades aledañas a la empresa minera, ocasionando conflictos (Mining Facts Organization, 2012).

Así también, la mayoría de las operaciones mineras al desarrollarse en lugares remotos, puede amenazar la existencia de pueblos indígenas que habitan en el área (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012).

Dimensión ambiental

Al tratarse de la extracción de recursos naturales, históricamente, la minería ha representado alteraciones ambientales en su entorno; de manera que no existen beneficios ambientales generados por la minería (Consejo Internacional de Minería y Metales, 2004).

La explotación de recursos causan varios grados de daños en la biodiversidad y perturba los procesos del ecosistema (Turner, 2012). Aunque el derecho de propiedad y la concesión determinen un espacio específico para el desarrollo de las actividades mineras, el impacto y huella ecológica se extiende por la construcción de infraestructura que acompaña al desarrollo de las actividades. Por otra parte, la destrucción de la flora y fauna, la contaminación del suelo y los recursos hidráulicos, y el deterioro estético de propiedades, son las posibles secuelas generadas por las actividades mineras (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012).

3. Prácticas emergentes y características de la actividad minera

De acuerdo al marco básico para una minería responsable, las prácticas ambientales y sociales se distinguen entre las usuales y las emergentes. En efecto, las prácticas usuales se refieren a las prácticas que las empresas emplean para cumplir con las regulaciones; y las prácticas emergentes son las que podrían generar mejoras ambientales y sociales.

La integración de las prácticas responsables de una empresa requiere de la identificación de las características clave. Para iniciar, cabe mencionar que una empresa minera tiene como propósito la extracción de minerales, recursos y materiales. Los mayores proyectos mineros son llevados a cabo por grandes empresas internacionales (Miranda, Chambers, & Coumans, 2005).

Las zonas donde opera la empresa minera son zonas naturales cercanas o aisladas a comunidades e incluye un marco legal que progresivamente está tomando fuerza sobre aspectos relacionados con la Responsabilidad Social. La actividad minera incluye aspectos sociales, ambientales y económicos, puesto que como el resto de actividades económicas genera riesgos antrópicos, que provocan el deterioro ambiental (Arguello, Cantos, & Viteri, 2012).

Además, las prácticas usuales se caracterizan por la extracción rápida sin cuidado del medio ambiente y sin interés por el desarrollo de las comunidades aledañas a las instalaciones de la empresa. La mano de obra puede ser formal e informal, donde la formal se caracteriza por tener sueldos mayores al promedio de remuneraciones del país. Mientras que los trabajadores informales buscan sobrevivir a condiciones de extrema pobreza; de manera que el medio ambiente y la protección social o laboral, no son su principal preocupación, sino el solventar las necesidades básicas de su familia (Chaparro & Salgado, 2005).

4. Actores de la minería y el desarrollo sustentable

Según el Marco para Minería Responsable³⁹ y el proyecto “Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable”⁴⁰, los actores principales de la minería se resumen en tres categorías: empresa, gobierno y sociedad. La empresa está conformada por los accionistas, directivos, trabajadores, clientes y proveedores. Por parte del gobierno, incluye las instituciones de coordinación y regulación del sector minero, y autoridades regionales. La sociedad civil está conformada por comunidades, pueblos indígenas, ONGs, mineros artesanales (Miranda, Chambers, & Coumans, 2005).

Adicionalmente, se indicó que la minería está promovida por el estado y ejecutada por la empresa; y para que sea efectuado al precio justo, la minería integra un proceso de toma de decisiones como un proceso democrático, integrando la participación informada de poblaciones y comunidades, desde el planteamiento de un proyecto (Polo, 2006).

5. Minería responsable

La teoría económica explica que la obtención de un derecho de propiedad, además de adquirir el derecho de ocupar y desarrollar actividades en un área determinada, adquiere responsabilidades especificadas en un documento de negociación. Sin embargo, al no ser posible incluir todas las posibles situaciones, genera incertidumbre (Williamson, 2002). La finalidad de las instituciones gubernamentales es reducir dicha incertidumbre (North, 1990), interviniendo en función de los recursos disponibles.

Por lo tanto, la responsabilidad se refiere a transparentar las situaciones no determinadas bajo el documento de negociación, y a actuar para cubrir las brechas entre lo especificado y lo producido. Tanto transparentar como actuar, requiere de la intervención de actores que efectivicen el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

De acuerdo a lo citado previamente, los derechos de propiedad generalmente incluyen responsabilidades económicas, sociales y ambientales. Las instituciones son las encargadas de reducir la incertidumbre y de regular el cumplimiento de la constitución y leyes de responsabilidad social. En efecto, se exige a los actores privados (en este caso a las empresas mineras), el cumplimiento de las responsabilidades. Sin embargo, las instituciones tampoco poseen la supervisión requerida por los recursos limitados, para garantizar la eficiencia de esta herramienta (Consejo Internacional de Minas y Metales, 2012).

En efecto, la responsabilidad de las empresas mineras va más allá del cumplimiento del contrato. La responsabilidad en la minería se refiere al reconocimiento y cumplimiento de las responsabilidades, su comportamiento y compromiso con el estado, la sociedad civil y el medio ambiente; sin importar

³⁹ Marco para Minería Responsable, marco desarrollado por la iniciativa del Centro Científico de Participación Pública y el Instituto para los Recursos Mundiales, describe temas ambientales, de derechos humanos y sociales asociados con la minería.

⁴⁰ “Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable”, proyecto desarrollado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo, y el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable, con la meta de integrar el concepto desarrollo sustentable en la minería.

que la constitución, las leyes de un país o el contrato, especifiquen responsabilidades suficientes. La transparencia y rendición de cuentas respaldan su credibilidad e incrementa la buena imagen, para evitar conflictos sociales y atraer nuevos inversionistas.

El Estado y las instituciones complementan los esfuerzos de las empresas para garantizar la obtención e implementación de prácticas mineras responsables, incentivando el buen comportamiento y canalizando la información a la sociedad, con el fin de crear conciencia social y también involucrar a la ciudadanía en la exigencia del buen comportamiento de las empresas.

6. Gestión empresarial y minería responsable

Como se mencionó anteriormente, el estudio de la empresa va más allá de la transformación de los insumos en productos, el análisis se modifica cuando se reconoce los costos de transacción, llevando a los productores a decidir en función del acuerdo que implica costos. La decisión sobre acuerdos con costos lleva a la empresa a dirigir sus operaciones de mercado para que sus costos sean menores o iguales a los costos de llevar al mercado (Coase, 1988).

Asimismo, se ha mencionado que la intervención del empresario permite reducir ciertos costos; de hecho, existen técnicas que reducen los costos (Coase, 1988). Por ejemplo el ordenamiento privado que permite idear estructuras de gobierno para lograr el cambio planteado y alinear los incentivos de las partes inmediatas a una transacción (Williamson, 2002).

Por otra parte, se indicó que la incorporación de los costos de transacción y el análisis del contrato incluye dos aspectos que deben ser tomados en cuenta: la maximización es reemplazada por la satisfacción y también, los contratos son inevitablemente incompletos. En efecto, los actores se comporta estratégicamente, mediante las estructuras de gobierno para reducir o evitar futuros impases o rupturas contractuales (Williamson, 2002).

Asimismo, se señaló que la Responsabilidad Social es un concepto que surge de la interrelación de la empresa y sus stakeholders, bajo decisiones voluntarias que contribuyen a mejores sociedades, a la conservación del medio ambiente y al desarrollo económico sustentable (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

De manera que, la RSE es una alternativa de gestión que incorpora aspectos sociales y ambientales en las operaciones comerciales y las relaciones con sus partes interesadas (European Commission, 2011).

La responsabilidad social responde por los impactos de sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente, a través del comportamiento ético que acompaña al desarrollo sustentable y al bienestar social (European Commission, 2011).

Asimismo, la Responsabilidad Social lleva a la empresa a considerar las expectativas de los stakeholders y a actuar integrando las leyes nacionales y las normas internacionales de

comportamiento⁴¹ (Hohnen, 2007). Por este motivo, se considera a la RSE como una herramienta que reduce los impases de los contratos incompletos.

La gestión de RSE, a diferencia de la racionalidad de la teoría neoclásica, no busca únicamente la maximización de sus propias utilidades y bienestar del agente económico, sino que también las empresas integran aspectos sociales, ambientales y económicos en sus valores, cultura, toma de decisiones, transparencia contable de sus operaciones y estrategias; y así establecer mejores prácticas dentro de la empresa, mejorando el bienestar de la sociedad (European Commission, 2011).

La empresa desempeña un rol fundamental en la interacción económica de una nación, tanto por el empleo y los ingresos que genera en la sociedad, y también por el uso eficiente de los recursos naturales. La RSE posiciona a la empresa en gestión ambiental y de riesgos, y toma ventajas de las oportunidades, en cuanto a su reputación y al compromiso con los stakeholders.

Este tipo de gestión convierte a los compromisos en hechos observables, e impactos sociales y ambientales medibles. La falta de cumplimiento de los compromisos públicos de una empresa, puede desatar problemas con los stakeholders, y hasta pueden llegar a perder su capacidad de generación de beneficios para la sociedad y para sí mismo (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

Interacción de la minería responsable

La guía de la norma ISO 26000⁴² sobre la Responsabilidad Social, manifiesta que la relación entre la empresa y la sociedad, inicia por el reconocimiento de las responsabilidades de la empresa, la identificación de los impactos de sus decisiones y actividades, y las expectativas de la sociedad sobre su comportamiento responsable (International Organization for Standardization, 2010).

Asimismo, conforme al marco teórico establecido, el estado y las instituciones desempeñan el rol de estructurar las organizaciones mediante la modificación del comportamiento de los actores (North, 1990). En efecto, las instituciones controlan y regulan el desarrollo de las empresas mineras, con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes y las responsabilidades otorgadas. De manera que la empresa debe operar bajo el marco legislativo del país donde opere, procurando evitar impases contractuales.

Por último, la norma ISO 26000 manifiesta que la relación principal entre las instituciones del gobierno y la sociedad civil, es asegurar el cumplimiento de los derechos y la resolución de conflictos. Además, las instituciones deben proveer la información necesaria a la sociedad, para crear conciencia, desarrollar criterios y participación en las actividades mineras, previo a la toma de decisiones.

⁴¹ HOHNEN, Paul; Corporate Social Responsibility, 2007.

⁴² ISO 26000, guía global para organizaciones públicas y privadas, desarrollada por expertos representantes de las partes interesadas, cuyo objetivo es promover mejores prácticas en responsabilidad social.

7. Determinaciones de la responsabilidad social empresarial

En el capítulo anterior se indicó que la gobernabilidad conjuntamente con la alineación de incentivos, son reconocidos a través del ordenamiento privado (Williamson, 2002). Asimismo se señaló que los costos contractuales por los contratos incompletos, pueden ser reducidos mediante estructuras de gobierno.

En el capítulo anterior se señaló que la RSE se considera como una gestión voluntaria que integra indicadores sociales y ambientales, contribuyendo al desarrollo sustentable (Labandeira, León, & Vázquez, 2007). En efecto, la RSE puede mantener la rentabilidad de la empresa a largo plazo, mejorando la competitividad mediante la gestión de riesgos, reducción de costos, acceso a capitales, relaciones comerciales, gestión de recursos humanos y capacidad de innovar (European Commission, 2011).

Por el lado de la política ambiental, la RSE es considerada como una política descentralizada, lo que significa que los implicados en un problema de contaminación ambiental, deben solucionarlo por sí mismos (Field & Field, 2003). Como se había manifestado, los autores Labandeira, León y Vázquez, señalan que las estrategias voluntarias por parte del agente privado, buscan el desarrollo y mejoramiento de sistemas de gestión, el uso de prácticas y códigos de conductas elaborados por organizaciones que certifiquen la calidad.

Principios y materias fundamentales de la responsabilidad social

Según la guía de la norma ISO 26000, la RSE posee 7 principios y 7 materias fundamentales, para que la empresa identifique la responsabilidad social, toma en cuenta estos principios y materias que se indican en el gráfico 2:

Gráfico 2
Principios y materias fundamentales de la responsabilidad social empresarial

Principios	Materias
<ul style="list-style-type: none">• Rendición de cuentas• Transparencia• Comportamiento ético• Respeto a los intereses de las partes interesadas• Respeto al principio de legalidad• Respeto a la normativa internacional de comportamiento• Respeto de los derechos humanos	<ul style="list-style-type: none">• Gestión de la empresa• Derechos humanos• Prácticas laborales• Medio ambiente• Prácticas justas de operación• Asuntos de consumidores• Participación activa y desarrollo de la comunidad

Fuente: International Organization for Standardization

Elaboración: Alexandra Torres

Principios de la responsabilidad social

a. Rendición de cuentas

Este principio se enfoca en la rendición de cuentas de la empresa sobre los impactos que provoca en la sociedad, la economía y el medio ambiente. El principio compromete a la empresa a ponerse bajo la supervisión y dar respuesta a dicha supervisión. La empresa tiene la obligación de responder ante las autoridades según las leyes y regulaciones (International Organization for Standardization, 2010).

Según señala Sefton Darby, el incremento de competencia de los recursos suele generar ofertas que comprometen la transparencia y la rendición de cuentas de cómo la concesión de recursos es elegida y sus implicaciones, así también cómo los beneficios de las mayores inversiones son distribuidas entre inversionistas, gobiernos nacionales y comunidades locales (Darby, 2010).

Asimismo, el autor define a la rendición de cuentas como el proceso que incluye a los actores responsables de sus acciones con las demás partes interesadas; es decir, personas, entidades y civiles responsables (Darby, 2010). Las empresas deben publicar lo que pagan a los gobiernos sobre las regalías, impuestos y tasas. EITI⁴³ es seguido por las mejores prácticas de las empresas.

La rendición de cuentas de las decisiones y actividades de la empresa tienen la función de responder ante los afectados y ante la sociedad en general. Esta rendición varía del impacto y las circunstancias. El grupo del Banco Mundial en el informe final de la reseña de las industrias extractivas, manifiesta que la rendición de cuentas de las empresas mineras, debe ser publicada y debe incluir pagos a los gobiernos de regalías, impuestos y tasas (Grupo del Banco Mundial, 2004).

La minería responsable evalúa con precisión todos los costos y beneficios pertinentes para determinar si la mina ganará un beneficio neto significativo. El beneficio neto se refiere a los beneficios, ingresos, procedentes de la sociedad, el gobierno, etc., menos los impactos ambientales y sociales resultantes principalmente a las comunidades afectadas (Goodland, 2012).

b. Transparencia

De acuerdo a Darby, la transparencia es una característica de los gobiernos, compañías, organizaciones e individuos que están abiertos a una clara revelación de información, normas, planes, procesos y acciones. Asimismo, el autor señala que para lograr la transparencia se requiere la actuación de forma visible, predecible y comprensible de funcionarios públicos, gerentes y directores de empresas y organizaciones, para promover la participación y la rendición de cuentas (Darby, 2010).

El principio se refiere a la transparencia que una organización debe tener en sus decisiones y actividades que causan impactos en la sociedad y el medio ambiente. La empresa debe ser transparente en la información referente a políticas, decisiones y actividades de las que es

⁴³ Iniciativa de Transparencia de Industrias Extractivas (EITI), es una alianza mundial de gobiernos, empresas y sociedad civil, para el mejoramiento de la gestión abierta y contable de los ingresos de los recursos naturales.

responsable, tomando en cuenta sus impactos conocidos y proyectados sobre la sociedad y el medio ambiente (International Organization for Standardization, 2010).

En el capítulo I se señaló que cuando incluimos los costos de transacción en el análisis, los productores organizan las operaciones de mercado con la finalidad de mitigar los costos (Coase, 1988). En efecto, el ordenamiento privado impone las reglas para alcanzar las ventajas mutuas del intercambio, reduciendo los costos y futuros impases (Buchanan & Tollison, 2009).

La conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el Desarrollo (Rio de Janeiro, 1992) señala la importancia del acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. La información debe ser accesible y comprensible para quienes son y podrían verse afectados por las actividades de la empresa, de manera que puedan evaluar el impacto de las decisiones y actividades, sobre sus intereses (Naciones Unidas, 1992).

Según el Foro Económico Mundial, la transparencia puede ayudar a las partes interesadas, a evitar la aprobación indebida de los ingresos y las distorsiones económicas causadas por la corrupción (World Economic Forum, 2013). En efecto, se sugiere que los estados deben facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 1992).

La información que debe ser transparente corresponde a elementos como el propósito, naturaleza y localización de sus actividades; la manera en que se toman, implementan y revisan sus decisiones, incluyendo la definición de sus roles, responsabilidades, formas de rendir cuentas y autoridades en las funciones; las normas y criterios frente a los cuales la organización evalúa su desempeño en relación con la RS (International Organization for Standardization, 2010).

Además, aspectos financieros, impactos de sus decisiones y actividades en las partes interesadas, la sociedad, la economía y el medio ambiente. Por último, la identidad de sus partes interesadas y los criterios y procedimientos utilizados para identificarlas, seleccionarlás e involucrarse con ellas.

c. Comportamiento ético

Anteriormente mencionamos que la teoría económica defiende la restricción implementada por la ley moral; sin embargo, Von Wieser señala que se sobreestima la capacidad de libertad del hombre, argumentando que el hombre es débil en asegurar su preservación y en el desarrollo de su vida, por lo que se requiere una organización social (Von Wieser, 1927).

Asimismo, se indicó que las responsabilidades de los contratos no son completas y que las empresas actúan bajo las reglas de juego impuestas por el reglamento del país. En efecto, las empresas desarrollan códigos de comportamiento, alineados con las exigencias del país, para evitar impases contractuales (Von Wieser, 1927).

De manera que, el principio alude a las consideraciones que debe considerar el comportamiento ético de la empresa. En sí, el principio se refiere a la preocupación por integrar a las personas y al

medio ambiente, y también al compromiso de tratar el impacto de sus actividades y decisiones, sobre los intereses de las partes interesadas (International Organization for Standardization, 2010).

El comportamiento ético debe ser promovido por la empresa mediante la identificación de sus valores y principios, el desarrollo y la utilización de estructuras de gobernanza, que incentiven un comportamiento ético basado en valores como la honestidad, equidad e integridad, en su toma de decisiones e interacción con otros, y así, fomentar el cumplimiento de sus normas de comportamiento ético (The ISO and Corporate Social Responsibility, 2004).

Por otra parte, la empresa también debe definir y comunicar las normas de comportamiento ético que se espera del directorio, personal, proveedores, contratistas, accionistas y de quienes tienen la oportunidad de influir en los valores, cultura, integridad, estrategia y operación de la empresa, preservando la identidad cultural local (International Organization for Standardization, 2010). Algunos organismos se han sumado a la iniciativa, por ejemplo, el ICMM requiere que sus miembros “integren principios de desarrollo sostenible en las políticas y las prácticas de la compañía.

La empresa también promueve el comportamiento ético mediante la prevención o resolución de conflictos de interés en toda la organización y el establecimiento de mecanismos de supervisión y controles para hacer seguimiento, apoyar y reforzar el comportamiento ético. De hecho, la empresa debe reconocer situaciones en que la legislatura no las cubra y actuar en ello. Finalmente, el comportamiento ético de la empresa también incluye el bienestar de los animales y proporcionar condiciones de conservación, cría, producción, transporte y uso de animales (International Organization for Standardization, 2010).

d. Respeto a los intereses de las partes interesadas

El marco teórico de la investigación alude que un desarrollo sustentable busca cumplir objetivos comunes de presentes y futuras generaciones, en base a la expectativa de la sociedad. Así también, las condiciones democráticas que integra la explotación de minerales; lleva a la empresa y al gobierno a considerar estas expectativas para actuar responsablemente (Ministerio de Recursos, Energía y Turismo , 2006).

The Boston Consulting Group⁴⁴ revela que las disputas y descontentos relativos a la minería se han incrementado en el mundo (The Boston Consulting Group, 2013). Una de las principales razones por las que surge el disfuncionamiento, el descontento y la frustración, es la inclusión limitada de las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones (World Economic Forum, 2013).

El principio consiste en el respeto, la consideración y la respuesta a los intereses de sus partes interesadas (Goodland, 2012). Para esto, se requiere la participación de ciudadanos legítimos, independientes y representativos, en el proceso de toma de decisiones (World Economic Forum, 2013).

⁴⁴ Boston Consulting Group, consejero en estrategia de negocios.

En este caso, la empresa debe identificar a las partes interesadas, reconocer y mostrar respeto por los intereses y derechos legales, y responder las inquietudes que estos manifiesten. La empresa debe tener en claro que no reconocer las partes interesadas podría perjudicar sus actividades (International Organization for Standardization, 2010).

Además, la empresa debe considerar la habilidad de los interesados para contactar, involucrarse e influir en esta y también, las expectativas de la sociedad y el desarrollo sostenible. Existen grupos que la empresa no considera dentro de sus objetivos pero que también podrían tener derechos, reclamaciones o intereses específicos (International Organization for Standardization, 2010).

La participación de los ciudadanos se entiende como la consulta o participación de personas autorizadas. Algunas veces, la participación consultiva otorgada por el gobierno a los ciudadanos y sus representantes, puede no ser escuchada. Sin embargo, si la participación y consulta está dirigida por personas autorizadas genera mayor poder de decisión e influencia (Darby, 2010).

e. Respeto al principio de legalidad

En el marco teórico, se mencionó que el contrato es el vínculo entre los procesos dirigidos por el estado y las economías privadas. Asimismo, se señaló que la elección de la constitución es la elección de las reglas y la manera de jugar el juego (Von Wieser, 1927).

Para que un individuo encaje en un orden social, se requiere un código del grupo social al que pertenece. Por tal motivo, el código del grupo social debe estar alineado con la constitución, con los intereses del estado y la sociedad, y con sus propios intereses (Buchanan & Tollison, 2009).

El principio se refiere al reconocimiento que tiene que dar la empresa y el gobierno a la supremacía del derecho sobre cualquier individuo o empresa. De manera que, las leyes y las regulaciones deben ser difundidas públicamente y deben hacerse cumplir, de acuerdo a los procedimientos establecidos (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe conocer las leyes y regulaciones aplicables en el país, para informar su obligación de cumplimiento, a aquellos que son parte de la organización para implementar medidas. En consecuencia, la empresa debe cumplir con los requisitos legales de todas las jurisdicciones, en las que opera y asegurar que sus relaciones y actividades cumplan con el marco legal previsto y aplicable. Para ello, la empresa debe mantenerse informada de todas las obligaciones legales y dar seguimiento a su grado de cumplimiento de leyes y regulaciones (International Organization for Standardization, 2010).

f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento

Como se mencionó en el capítulo anterior, varios organismos internacionales han dirigido sus esfuerzos para asesorar a las empresas mineras y conseguir que internalicen los daños que causan sobre la sociedad y el medio ambiente. La finalidad de la normativa de comportamiento es proponer prácticas y mecanismos que aseguren resultados efectivos para alcanzar el desarrollo sustentable (International Organization for Standardization, 2010).

Dichos organismos han desarrollado guías, marcos, principios, normas, con el objetivo de estandarizar el comportamiento y de este modo, convertir a la minería en una actividad que contribuya al desarrollo sustentable.

La empresa debe respetar la normativa internacional de comportamiento y también, acatar el principio de respeto de legalidad. De hecho, en el caso que la legislatura local no cubra ciertos sucesos, la empresa debe cumplir la normativa internacional de comportamiento (International Organization for Standardization, 2010).

Por otra parte, la empresa debe procurar influir sobre las entidades y autoridades competentes, para recurrir a la normativa internacional, en casos en que se produzcan situaciones de conflicto con la normativa nacional. En efecto, la empresa debe evitar involucrarse en actividades que no sean coherentes con la normativa internacional.

g. Respeto a los Derechos Humanos

Los derechos humanos según la tipología de derechos se clasifican en: derechos civiles y políticos; y derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos incluyen: derecho a la vida, a la integridad personal, a la igualdad, a la libertad, al honor político, asilo, nacionalidad, migraciones y a la administración de justicia, de los detenidos y preso en procesos penales (Fundación acción pro derechos humanos, 1948).

Por otra parte, los derechos económicos sociales y culturales incluyen: derecho a la seguridad social, salud, educación, nivel de vida adecuado y medios de subsistencia, a la familia, al medio ambiente, al empleo, de los pueblos y víctimas de violaciones (Fundación acción pro derechos humanos, 1948).

El principio se refiere al respeto de los Derechos Humanos y reconocimiento de su universalidad, por parte de la empresa. De manera que la empresa debe respetar y promover los derechos humanos, de forma indivisible en todos los países, culturas y situaciones. Además, la empresa debe acatar el principio de la normativa internacional de comportamiento, en caso de que el país no asegure la protección a los derechos humanos (International Organization for Standardization, 2010).

Materias fundamentales de responsabilidad social

Además de los principios de la RSE, la empresa debe tomar en cuenta los asuntos de las materias fundamentales de la RSE pertinentes a sus actividades y decisiones, cada asunto debe considerar los objetivos a corto y a largo plazo. Las materias fundamentales definen el alcance de la responsabilidad social de una empresa, identificando asuntos pendientes, estableciendo sus prioridades y considerando la forma en que los individuos pueden verse afectados por las materias (International Organization for Standardization, 2010).

Para que la gestión de la empresa sea eficaz, se debe tomar acciones en cuanto a las materias fundamentales e implementar los principios de RSE. Las materias señalan los posibles impactos que

una empresa genera y se los analiza de acuerdo a los asuntos que fluyen de estos, y así, ayudar a la empresa a identificar su responsabilidad social (International Organization for Standardization, 2010).

Una empresa para identificar su responsabilidad social, actúa reconociendo las leyes, regulaciones, obligaciones sociales, económicas y ambientales, compromisos expresados en códigos de conducta éticos o directrices de asociaciones. Las materias fundamentales engloban siete temas imprescindibles para el alcance de la Responsabilidad Social.

a. Gobernabilidad

De acuerdo al marco teórico de la investigación, la gobernabilidad de la empresa busca organizar las operaciones de mercado hasta lograr la eficiencia, considerando los costos de los acuerdos (Coase, 1988). La organización bajo un ordenamiento privado está determinada por la legislación, y alineada con los incentivos que suponen las estructuras de gobierno, conforme al cambio que se desea implementar (Williamson, 2002).

En efecto, la empresa posee una estructura para la toma de decisiones mediante procesos que están sujetos a leyes y regulaciones. El objetivo es que la empresa implemente procesos que permitan aplicar los principios y prácticas de RS (International Organization for Standardization, 2010).

Determinar procesos y estructuras para la toma de decisiones le permite a la empresa desarrollar las estrategias, objetivos y metas que evidencien su compromiso socialmente responsable. Para que la empresa alcance credibilidad en sus compromisos, la empresa debe rendir cuentas y usar los recursos financieros, naturales y humanos de manera eficiente.

La gobernabilidad debe enfocarse en fomentar oportunidades justas para grupos minoritarios y además, la participación de los empleados, en las actividades de RS. Por otra parte, la empresa debe impulsar la RS mediante la creación de un ambiente y una cultura que incluya los principios de RSE (International Organization for Standardization, 2010).

Otro punto clave en los procesos y estructuras de la toma de decisiones de una empresa son los canales de información. Los canales de información deben apuntar hacia la inclusión de las partes interesadas, con el objetivo de negociar y resolver posibles conflictos (Field & Field, 2003). En efecto, se busca acreditar la implementación de las decisiones para evidenciar el proceso de ejecución, y emitir señales positivas de su comportamiento al mercado.

b. Derechos humanos

Los derechos humanos corresponden a todos los seres humanos; estos son inherentes, inalienables, universales, indivisibles e interdependientes. Los derechos humanos son reconocidos a nivel internacional y es esencial su cumplimiento por parte de las empresas y gobiernos (International Organization for Standardization, 2010).

El gobierno incentiva el cumplimiento de los derechos humanos de empresas privadas y públicas. En general, las empresas funcionan bajo la legislación nacional y otros instrumentos de derechos humanos que determinan las obligaciones legales (Coase, 1988). En el caso en que el gobierno no exija el respeto a los derechos humanos, la empresa debe hacerlo.

La responsabilidad de la empresa incluye la protección activa y pasivamente de los derechos humanos, para lo que se requiere la diligencia respectiva. En efecto, la empresa reconoce los derechos humanos de las partes interesadas, lo que le ayuda en su capacidad para motivar o influir sobre los derechos humanos de quienes se podrían ver afectados. La empresa debe capacitar al personal y asociados, sobre temas de derechos humanos para la toma de acciones bajo este marco legal (International Organization for Standardization, 2010).

La gobernabilidad requerida debe identificar, prevenir y abordar los impactos sobre los derechos humanos. Dicha diligencia debe ser aplicada a todas las materias fundamentales y debe contener una política de derechos humanos, que oriente a sus colaboradores internos y externos. A continuación, la empresa debe dar seguimiento a las actividades que podrían afectar a los derechos humanos. Además, la empresa debe identificar medios para integrar la política de los derechos humanos en toda la organización.

Situaciones de riesgo para los derechos humanos

Existen situaciones en las que las empresas deben enfrentarse a desafíos que amenazan los derechos humanos; situaciones como: conflictos, inestabilidad, democracia, pobreza, desastres naturales, actividades que afecten los recursos naturales, proximidad de operaciones con comunidades indígenas, actividades que involucren niños, corrupción, cadena de valor con empresas informales y otras.

Las situaciones mencionadas demandan una gestión que asegure el respeto de los derechos humanos. Una empresa responde a estas situaciones mediante una toma de decisiones basadas en el respeto de los derechos humanos. Además, la empresa debe evitar el aumento o la generación de abusos (International Organization for Standardization, 2010).

Complicidad

Como se mencionó anteriormente, las empresas tienen el incentivo de actuar en contra de lo que indica la ley, con el propósito de ahorrar costos. Sin embargo dichas empresas corren el riesgo de ser descubiertas por las instituciones o la sociedad y tener que pagar las consecuencias (Stiglitz, 1993).

Este asunto se refiere a acciones que tienen un efecto al realizar un acto ilícito, teniendo conocimiento y contribuyendo con el acto; del mismo modo, actos que vayan en contra de la normativa internacional de comportamiento. Por otra parte, una empresa podría ser cómplice si permanece en silencio ante actos ilícitos a beneficios de los actores (International Organization for Standardization, 2010).

Las áreas de seguridad no siempre cumplen con la normativa internacional y con las leyes, por lo que se requiere la capacitación del personal y a continuación, investigar el personal del departamento. En efecto, la empresa requiere una gobernabilidad que garantice la no violación de los derechos humanos cometidos por las instituciones públicas de seguridad.

Para evitar la complicidad, una empresa debe evitar las relaciones con entidades involucradas en actividades antisociales. Además, la empresa debe prevenir riesgos de complicidad e integrar referencias legales y sociales. La empresa que no cumple con las leyes y los derechos, puede comprometer su reputación e imagen; en consecuencia, puede perder la garantía de producir un bien de calidad (Stiglitz, 1993).

Resolución de conflictos

El Estado y empresas deben crear mecanismos de solución de conflictos para proteger los derechos humanos; de modo que quienes se sientan perjudicados, puedan acceder a medios y presentar dichas reclamaciones. Los mecanismos de reclamaciones deben canalizar la información para que los afectados obtengan compensaciones justas. Los mecanismos deben ser legítimos, accesibles, predecibles, equitativos, claros y transparentes, basados en el diálogo y mediación (International Organization for Standardization, 2010).

Discriminación de grupos vulnerables

Se comprende la discriminación como consideraciones basadas en prejuicios y no en motivos legítimos. La discriminación se da por causas como: raza, color, género, edad, idioma, nacionalidad, religión, etnia, discapacidad, condición económica, política, entre otras (International Organization for Standardization, 2010).

La integridad de los grupos de la sociedad, genera mayores oportunidades a las empresas y personas afectadas; en consecuencia, la empresa debe procurar no discriminar a ningún ser humano. Para ello, la empresa debe constatar que no exista ningún tipo de discriminación en su cadena de valor.

Asimismo, la guía de la norma ISO 26000 indica que para solucionar inconvenientes de discriminación, la empresa puede analizar tratos estereotipados entre sus colaboradores o también, contratar empresas especializadas en derechos humanos y guiarse en recomendaciones obtenidas en procesos de investigación.

Además, la empresa debe capacitar a grupos vulnerables sobre sus derechos y compensarlos mediante el empleo o contratación de servicios de grupos históricamente discriminados. Por otra parte, la empresa debe apoyar a grupos que no tengan acceso a la educación, infraestructura o servicios sociales. Contar con diversidad genera beneficios a la empresa, gracias al desarrollo de recursos y relaciones humanas (International Organization for Standardization, 2010).

Derechos civiles y políticos

La empresa debe respetar los derechos civiles y políticos de todos los individuos; derechos como: la vida, la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, libertad de información e ideas, derecho a la propiedad y a procesos de justicia (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe evitar castigo físico y trato inhumano, y no debe callar puntos de vista u opiniones de nadie; así como tampoco debe limitar la información por fronteras nacionales (International Organization for Standardization, 2010).

Derechos económicos, sociales y culturales

Estos derechos incluyen: derecho a la educación, al trabajo justo, libertad de asociación, salud, bienestar, alimentación, vestimenta, vivienda, protección social, religión, cultura y participación en la toma de decisiones sobre estos derechos (Fundación acción pro derechos humanos, 1948). Para lograrlo, la empresa debe preparar su gobernabilidad para cumplir con los derechos (International Organization for Standardization, 2010).

El cumplimiento de estos derechos, lleva a la empresa a evaluar los impactos que provocan sus actividades, decisiones, productos, etc. Además, la empresa no debe limitar el acceso a recursos vitales como el agua, la tierra, etc. De hecho, la empresa debe garantizar la distribución eficaz de los elementos vitales mediante políticas específicas. La provisión de estos recursos debe acompañar a los roles y capacidades del gobierno, con la finalidad de contribuir al cumplimiento de estos derechos.

Principios y derechos fundamentales en el trabajo

La comunidad internacional ha adoptado principios y derechos laborales, identificados por la Organización Internacional del Trabajo (OTI)⁴⁵. Las normas internacionales de trabajo buscan constituir un sistema global de instrumentos relativos al trabajo y a la política social, con el propósito de convertir al trabajo en un trabajo decente (International Organization for Standardization, 2010).

Se indicó que el contrato social es un contrato activo, por lo que estos principios y derechos incluyen la libertad de asociarse, eliminación de formas de trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil y eliminación de la discriminación. La libertad sindical se entiende por el requisito para la solidez de negociación colectiva y del diálogo social.

El trabajo forzoso se refiere a la explotación como consecuencia de la trata de personas. Asimismo, abolición del trabajo infantil es una violación de los derechos fundamentales, pues impide su desarrollo y los exponen a daños físicos y psicológicos. Por otra parte, la eliminación de la discriminación se refiere a la negación del acceso al trabajo por razones basadas en el sexo, color de piel, etnias o creencias (International Organization for Standardization, 2010).

⁴⁵ Organización Internacional del Trabajo, organismo de la ONU que se ocupa de asuntos relativos al trabajo y a las relaciones laborales.

c. Prácticas laborales

Las prácticas laborales de una empresa van más allá de la relación con sus empleados directos, sino también incluyen el reclutamiento de trabajadores, procedimientos disciplinarios, transferencia de trabajadores, formación de habilidades, seguridad, salud, remuneración, jornada laboral, políticas de trabajo, etc (International Organization for Standardization, 2010).

De acuerdo a la guía de la norma ISO, la ausencia de trabajo genera innumerables problemas sociales, porque es esencial para el desarrollo humano. Las prácticas laborales afectan al principio de legalidad, por lo que estas deben ser socialmente responsables para asegurar la justicia social, la estabilidad y la paz.

Existen prácticas laborales reconocidas a nivel mundial por varias organizaciones, las cuales difieren del concepto “trabajo” como un factor de producción, pues este debe reconocer sus derechos básicos, como el de ganarse la vida con un trabajo, condiciones laborales justas, trabajo decente, etc. (International Organization for Standardization, 2010).

Los gobiernos son los encargados de asegurar un trato justo y equitativo de los trabajadores, mediante una legislación basada en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en normas laborales de la OIT, exigiendo el cumplimiento de la legislación y asegurando el acceso de trabajadores y empresas a la justicia.

Una vez más, se reitera que cualquier ineficiencia de la legislación, la empresa debe aplicar normas internacionales, si el gobierno es ineficiente en cuanto al cumplimiento de la ley. Del mismo modo, el gobierno y sus entidades, también poseen estas responsabilidades en su rol de empleador y de gobierno (International Organization for Standardization, 2010).

Trabajos y relaciones laborales

Dentro de los tipos de contratos señalados en el marco teórico, el contrato social vincula personas que se comprometen a unir valores, bienes o servicios con un propósito determinado. Asimismo, se indicó que el contrato social es activo (Von Wieser, 1927).

El poder de las partes contratantes difiere al de los empleados, por lo que se requiere la protección de sus derechos. Para los empleados y empleadores es beneficioso que se cumpla el marco legal e institucional, pues los contratos llevan a las partes a comprender sus derechos y responsabilidades, y de este modo también definir un recurso que resuelva cualquier eventualidad (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe establecer políticas y medidas para ejecutar el marco jurídico. Además, la empresa debe confiar y reconocer legalmente a sus empleados y debe cumplir con sus obligaciones como proporcionar información oportuna y asegurar la igualdad de oportunidades. Es importante que la empresa no se beneficie de prácticas laborales injustas y explotadoras (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe motivar a las partes involucradas en sus actividades, para que sigan prácticas laborales responsables. En efecto, la empresa debe establecer obligaciones contractuales, realizar visitas sorpresas, supervisar a contratistas e intermediarios. Los códigos de prácticas laborales deben basarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en normas de la OTI. Finalmente, las empresas internacionales deben procurar aumentar el empleo, el desarrollo profesional y promover el progreso de los ciudadanos del país donde operan (International Organization for Standardization, 2010).

Condiciones de trabajo y protección social

Las condiciones de trabajo son definidas por las leyes, regulaciones nacionales y acuerdos jurídicos vinculantes. Estas afectan al desarrollo sustentable, por lo que deben ser justas y preservar la dignidad humana. La protección social se refiere a las garantías jurídicas, políticas y prácticas de la empresa, para atenuar la pérdida de ingresos por causas como enfermedades, maternidad, vejez, desempleo, invalidez, etc. (International Organization for Standardization, 2010).

Conforme al marco teórico, la empresa debe asegurar que sus condiciones de trabajo cumplan las leyes y regulaciones nacionales. Las condiciones de trabajo consideradas decentes, comprenden salarios, horas de trabajo, vacaciones, salud, seguridad, entre otras. Para lograrlo, la empresa debe determinar salarios de acuerdo a los salarios existentes en el país, el costo de vida, los beneficios de la seguridad social, los niveles de vida y el desarrollo económico.

Diálogo social

El diálogo social considera negociaciones, consultas o intercambio de informaciones entre representantes de la empresa, de los trabajadores y del gobierno, sobre temas de interés común relativas a inquietudes económicas y sociales. El diálogo social debe estar conformado por partes independientes, elegidas libremente (International Organization for Standardization, 2010).

El diálogo social a nivel de la empresa, adopta formas de mecanismos de información y consultas para desarrollar políticas y encontrar soluciones basadas en prioridades y necesidades de empresas y trabajadores, lo cual genera resultados duraderos para la empresa y sociedad. En efecto, el diálogo social conlleva a la participación y entendimiento entre las partes, para reducir disputas; de manera que, contribuye a la transparencia en condiciones sociales (Darby, 2010).

Instituciones de diálogo social contribuyen a estructuras de negociación colectiva, respetando los derechos de los trabajadores y evitando discriminarlos por la conformación de asociaciones. La evaluación en conjunto de las partes sobre los cambios aplicados, proporciona avisos importantes al gobierno y trabajadores (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe proporcionar la información necesaria a los representantes de los trabajadores e incluirlos en el desempeño de actividades que evidencien la veracidad de sus finanzas y actividades. Adicionalmente, la empresa podría participar en reuniones de asociaciones de trabajadores para ampliar sus oportunidades de responsabilidad social (International Organization for Standardization, 2010).

Salud y seguridad ocupacional

El propósito de la salud y seguridad ocupacional es mantener el máximo bienestar y protección mental y social de los trabajadores frente a riesgos. La carga social y financiera por enfermedades, lesiones y muertes es muy considerada para la sociedad. La contaminación también pone en riesgo a los trabajadores, comunidades y medio ambiente (International Organization for Standardization, 2010).

La minería presenta constantes riesgos, por las actividades que los trabajadores realizan y por las condiciones de trabajo a las que se exponen. En efecto, las empresas deben buscar modos de brindar la protección necesaria a sus trabajadores (Consejo Internacional de Minería y Metales, 2004). La salud y seguridad ocupacional engloban equipos, procesos, prácticas y la implementación de políticas y normas sólidas de salud y seguridad, que tienen la finalidad de controlar los riesgos y comunicar la exigencia del cumplimiento de las prácticas de seguridad.

Por otra parte, la empresa debe proporcionar el equipo de protección personal necesario a los trabajadores para prevenir lesiones, enfermedades o accidentes laborales. Los posibles incidentes deben ser investigados, tomando en cuenta las condiciones de los trabajadores, como el género, discapacidades, embarazo, etc.

Los mecanismos de salud y seguridad que proponga la empresa, no debe representar gastos para los trabajadores. Por otra parte, los derechos están relacionados con el acceso a la información y formación sobre salud y seguridad. Los trabajadores también deben ser consultados sobre aspectos de salud y seguridad ocupacional, y buscar asesoramiento de organizaciones de trabajadores y empleadores (International Organization for Standardization, 2010).

En caso de cualquier asunto relacionado con salud y seguridad, los trabajadores deben comunicar a las autoridades concernientes; de manera que se exija su participación en decisiones, investigaciones y actividades. Los trabajadores están en plena libertad de efectuar las acciones mencionadas, sin miedo a represalias.

Desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo

Este asunto se refiere al proceso y mecanismos de ampliar las opciones de los individuos, expandiendo sus capacidades y funciones humanas, permitiéndoles obtener un nivel de vida decente a sus trabajadores. Además, el desarrollo humano incluye el acceso a oportunidades políticas, económicas y sociales (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe implementar políticas para fomentar el desarrollo humano. Estas políticas deben enfocarse en reducir la discriminación, equilibrar responsabilidades, promover la salud y el bienestar de las personas (International Organization for Standardization, 2010).

En consecuencia, la empresa debe proveer acceso al desarrollo de las habilidades, formación, capacitación, para la formación profesional, de manera integral. Además, debe establecer actividades entre empleados y empleadores para promover la salud y el bienestar social.

d. Medio ambiente

Según el marco teórico, el comportamiento de los actores y la toma de decisiones se modifican a través de los costos de transacción y la constitución, con el fin de alcanzar resultados eficientes (Buchanan & Tollison, 2009). En la actualidad, ha surgido un tipo de política descentralizada que integra la responsabilidad de los contaminadores, bajo su actuación voluntaria. Estas nuevas medidas llevan a los responsables de los daños a responder por ellos (Larrain & Sachs, 2002).

Las actividades y decisiones de una empresa causan impactos en el medio ambiente. Los impactos se asocian al uso de los recursos, localización, contaminación y residuos. Para que una empresa reduzca estos impactos ambientales debe integrar en sus decisiones y actividades implicaciones económicas, sociales y ambientales (International Organization for Standardization, 2010).

Actualmente, los desafíos ambientales que se observan son: el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación, el cambio climático, la destrucción de hábitats, la extinción de especies, la degradación de asentamientos humanos, entre otros (Darby, 2010).

El crecimiento de la población mundial implica el incremento del consumo, poniendo en riesgo la seguridad, salud y bienestar de la sociedad (Darby, 2010). En efecto, se requiere maneras de eliminar la insostenibilidad de la demanda y la producción, bajo un enfoque integral a nivel local, regional y global para alcanzar la sostenibilidad.

La conciencia ambiental es promovida por el reconocimiento de los límites de carga de la tierra. En efecto, se requiere fomentar la educación ambiental para alcanzar desarrollo de las sociedades y estilos de vida sostenibles (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

Existen herramientas como la norma ISO 14000 que muestra un marco de referencia para la empresa, mediante el cual la empresa gestiona aspectos ambientales como la evaluación del desempeño y la comunicación ambiental (International Organization for Standardization, 2010).

La responsabilidad ambiental consiste en que la empresa debe cumplir con las leyes y regulaciones; y además, debe asumir los costos de los impactos ambientales y actuar para mejorar su desempeño y el desempeño de la esfera de influencia (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe adoptar medidas costo-efectivas para prevenir el deterioro del medio ambiente y daños para la salud (Harrington & Morgestern, 2004). Los costos y beneficios deben considerarse a corto y largo plazo. La empresa elige programas basados en el riesgo con el propósito de reducirlos y alcanzar el desarrollo sustentable; también implementa medidas de toma de conciencia y acciones como la publicación de información, ante emergencias para reducir impactos en la salud, en el medio ambiente y en la seguridad.

En efecto, para reducir los impactos ambientales de productos y servicios, y mejorar el desempeño, la empresa debe innovar e incorporar prácticas actualizadas y amigables con el medio ambiente (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe incorporar en sus procesos, los resultados de la evaluación de impacto ambiental en la toma de decisiones. Además, debe satisfacer las necesidades humanas usando los recursos y materiales eficientemente, y reduciendo la contaminación y residuos. De manera que la empresa debe mejorar sus prácticas de mantenimiento, introducir nuevas tecnologías o procesos, reducir el uso de recursos y energías, usar energías renovables y gestionar el tratamiento de los residuos tóxicos (International Organization for Standardization, 2010).

Por otra parte, la empresa debe involucrar a las partes interesadas en la promoción de responsabilidad social, a lo largo del ciclo de vida del producto y servicios que la acompañan. La empresa debe considerar el desempeño ambiental, social y ético de los productos y servicios que adquiere a lo largo del ciclo de vida; de manera que, la empresa selecciona empresas contratistas o individuos responsables, usando esquemas de verificación como el eco-etiquetado o auditorías de actividades.

Prevención de la contaminación

Existen emisiones de sustancias como plomo, vertidos de agua, olores, ruido, radiaciones o residuos que pueden afectar de manera negativa a los ecosistemas y a la salud humana. En efecto, la empresa debe mejorar la prevención de la contaminación mediante la identificación de las fuentes de contaminación y residuos (International Organization for Standardization, 2010).

Además, la empresa debe involucrarse con las comunidades locales para responder por sus impactos y riesgos con la salud y la reducción de los mismos. La empresa tiene que implementar medidas que controlen la contaminación dentro de su esfera de influencia, mediante el desarrollo de acoger productos y servicios más amigables ambientalmente.

La empresa debe publicar los tipos de materiales tóxicos que utiliza y libera, y las consecuencias que estos generan sobre la salud humana y el medio ambiente. Adicionalmente, la empresa debe evitar usar químicos prohibidos (International Organization for Standardization, 2010).

En consecuencia, es importante que la empresa formule programas de prevención, de preparación y de emergencia, que involucren a trabajadores, socios, autoridades, comunidades y otras partes interesadas. La empresa también debe incluir sistemas de comunicación y educación pública para llegar a las partes interesadas.

Uso sostenible de los recursos

El uso sostenible de los recursos consiste en determinar cantidades de consumo y producción dentro de la capacidad de la tierra. Para ello se utilizan tasas de consumo para recursos renovables menor o igual a la tasa de renovación natural; mientras que para el uso de recursos no renovables, la sostenibilidad a largo plazo requiere que la tasa de uso sea menor a la tasa de sustitución de un recurso renovable (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

El mejoramiento de la eficiencia del uso de los recursos comprende la eficiencia energética, la conservación de agua, la eficiencia en el uso de materiales y la reducción de recursos en un producto.

En efecto, la empresa debe crear programas, identificando las fuentes de recursos, para reducir la demanda de energía y buscar la manera de reemplazarlas por energías alternativas que reduzcan el deterioro ambiental (International Organization for Standardization, 2010).

Para que la empresa pueda evaluar los impactos y programas, requiere identificar indicadores de mejores prácticas e informar a la sociedad. Del mismo modo, la empresa debe promover la adquisición y el consumo sostenible (International Organization for Standardization, 2010).

Protección del medio ambiente, la biodiversidad y la restauración de hábitats naturales

Una empresa debe actuar protegiendo el medio ambiente y restaurando hábitats naturales, funciones y servicios de los ecosistemas. Por esta razón, la empresa debe tomar en cuenta cuatro aspectos importantes en su gestión: valoración y producción de la biodiversidad, valoración, producción y restauración de servicios de ecosistemas, uso sostenible de los recursos y la tierra, y el fomento del desarrollo urbano y rural ambientalmente sólido (International Organization for Standardization, 2010).

Estas cuatro claves ayudan a la empresa a implementar medidas que reduzcan los impactos negativos sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, con la finalidad de preservar especies endémicas. La empresa también debe establecer prioridades: evitar pérdida de ecosistemas naturales, restaurar ecosistemas y compensar pérdidas (Riera, García, Kristrom, & Brannlund, 2005).

La protección medio ambiental requiere de una buena administración de terrenos, agua y ecosistemas para promover la sostenibilidad. En efecto, se requiere de la implementación de prácticas de planificación, diseño y operación, que incluyan decisiones relacionadas con el desarrollo agrícola y urbano, y que protejan humedales, bosques, hábitats naturales y áreas protegidas.

Por último, la empresa debe procurar los servicios y productos de empresas que implementen las mejores prácticas. Es importante que la empresa valore y proteja animales salvajes, teniendo en cuenta su bienestar (International Organization for Standardization, 2010).

e. Prácticas justas de operación

Las prácticas justas de operación se refieren a la conducta ética de la empresa en sus transacciones con otras partes. Estas prácticas toman acciones concernientes a la anticorrupción, participación responsable en la esfera de influencia, competencia justa, comportamiento socialmente responsable, relaciones con otras empresas y respeto a la propiedad privada (International Organization for Standardization, 2010).

Prácticas justas y responsabilidad social

Las prácticas justas de operación conjuntamente con la responsabilidad social, proponen la relación de la empresa con otras empresas para obtener resultados positivos. Estos resultados requieren de liderazgo y responsabilidad social dentro de la esfera de influencia de la empresa. La empresa busca

establecer y mantener relaciones legítimas y productivas, mediante normas de conducta basadas en prácticas justas de operación.

La empresa busca la prevención de la corrupción y prácticas de participación política responsable, mediante el cumplimiento del principio de legalidad, normas éticas, rendición de cuentas y transparencia. Para generar competencia justa y respetar los derechos de propiedad, las operaciones de la empresa deben ser íntegras y honestas (International Organization for Standardization, 2010).

Anticorrupción

Se entiende por corrupción, el abuso de un poder otorgado para obtener ganancias personales o grupales. Estas ganancias tienen forma de sobornos y pueden involucrar a empresarios, funcionarios públicos, lo que podría generar conflicto de intereses, fraude, lavado de dinero, ocultamiento y obstrucción a la justicia y tráfico de influencias (International Organization for Standardization, 2010).

La corrupción perjudica la eficacia y la reputación ética de empresas, llevándola a sanciones penales, civiles y administrativas. La corrupción también conlleva a cometer actos de violación de los derechos humanos, el deterioro de procesos políticos, empobrecimiento de sociedades, daño al medio ambiente, distorsión de la competencia, y problemas económicos como la distribución de la riqueza y crecimiento económico (International Organization for Standardization, 2010).

Prevención

Para que una empresa combata la corrupción necesita identificar los posibles riesgos de corrupción, implementar y ejecutar prácticas anti-corrupción. En efecto, se requiere directivos que sean ejemplo y estén comprometidos, para que motiven el cumplimiento de las políticas en el personal. Además, se requiere el apoyo y formación para empresas y representantes, con el fin de erradicar el soborno y la corrupción, e incentivar los esfuerzos (International Organization for Standardization, 2010).

La remuneración de servicios legítimos debe ser de forma adecuada. La empresa requiere también sistemas y mecanismos para ofrecer información y seguimientos a las acciones que se tomen. De igual manera, la empresa debe alentar a empresas colaboradoras a adoptar medidas anti-corrupción similares (International Organization for Standardization, 2010).

Prácticas políticas responsables

Las empresas pueden participar en el desarrollo de políticas públicas enfocadas en el bienestar social y evitar prácticas como la intimidación o manipulación. Estas políticas deben estar dirigidas al manejo de conflicto de interés, que incrementen la toma de conciencia sobre la participación política responsable (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

Por último, la transparencia en sus políticas y actividades sobre sus contribuciones y participación es clave para controlar y evitar contribuciones que influyencien la toma de decisiones (Darby, 2010).

Competencia justa

La competencia justa favorece la innovación, eficiencia, igualdad de oportunidades, mejores procesos y prácticas, y mejora del desarrollo económico a largo plazo. En caso de no actuar bajo una competencia justa, la empresa puede perjudicar su reputación y puede desatar problemas legales y presión social. Si una empresa rechaza conductas anti-competencia, no producirá beneficios generales (International Organization for Standardization, 2010).

Para que la empresa promueva una competencia justa debe actuar bajo las leyes y regulaciones, a través de mecanismos que eviten el relacionamiento con conductas anti-competencia. Además, la empresa debe promover en sus empleados el cumplimiento de la legislación, la competencia justa y el no abuso de la competencia desleal.

Promover la responsabilidad social en la cadena de valor

En el marco teórico de la investigación se indicó que la economía es social porque los procesos productivos y adquisitivos son interdependientes con otras producciones (Von Wieser, 1927). Por este motivo, la empresa puede influir positivamente en la cadena de valor, mediante su liderazgo y promoción de prácticas de responsabilidad social (International Organization for Standardization, 2010).

Además, la empresa debe considerar los impactos y consecuencias de sus decisiones de compra en otras empresas, para reducir impactos negativos. Asimismo, las empresas deben cumplir con leyes, regulaciones y responsabilizarse de sus impactos y del medio ambiente (International Organization for Standardization, 2010).

Para que la empresa incluya la responsabilidad social en su cadena de valor requiere establecer políticas de compra, distribución y contratación, basados en criterios éticos, sociales, ambientales, de igualdad de género, salud y seguridad, que mejoren los objetivos de responsabilidad social (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe incentivar en las empresas colaboradoras, la implementación de políticas y actividades socialmente responsables, así como también, la implementación de mecanismos de seguimiento para evitar relacionarse con empresas que perjudiquen su propia responsabilidad social. Por otra parte, ser responsable con la cadena de valor también implica cancelar precios justos, plazos de entrega adecuados y contratos estables (International Organization for Standardization, 2010).

Respeto a los derechos de propiedad

En el capítulo anterior se indicó que la propiedad de la tierra se otorga por medio de un acuerdo que integra términos expresados en lenguaje de negocios. Los términos incluyen que la propiedad de la tierra está en manos de grupos o miembros y sus socios (Marshall, 1920).

Los derechos de propiedad constituyen la propiedad física, intelectual, así como también intereses sobre la tierra, patentes, derechos de autor, derechos de denominación de origen, fondos, derechos

morales, conocimiento tradicional y otros. En efecto, se fomenta la inversión, la creatividad, la seguridad económica y física, y la innovación (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe implementar políticas que reconozcan los derechos de la propiedad privada y el conocimiento tradicional; además, asegurarse que cuenta con el título legal que le otorgue el uso de una propiedad y pagar una compensación justa por la propiedad que usa (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe procurar no involucrarse con actividades que no respeten los derechos de propiedad como la falsificación y la piratería. Asimismo, debe tomar en cuenta las expectativas de la sociedad, los derechos humanos y las necesidades de los individuos para ejercer y proteger sus derechos de propiedad intelectual y física (International Organization for Standardization, 2010).

f. Resolución con los consumidores

En el capítulo anterior se señaló que el consumo se convierte en un acto económico al considerar los medios disponibles. Por este motivo se requiere un desarrollo que satisfaga, no que maximice. En efecto, se busca la provisión de recursos mediante la restricción de necesidades presentes (Von Wieser, 1927). Asimismo se mencionó que cuando una empresa apoya al desarrollo y consumo sostenible, adquiere oportunidades por sus productos e información que proporciona (Stiglitz, 1993).

La empresa tiene responsabilidad con sus consumidores y la cumple mediante la educación e información justa de marketing. Los consumidores son parte del proceso de toma de decisiones y actividades de la empresa. En efecto, la empresa debe reducir el riesgo por el uso de sus productos y servicios, mediante el diseño, proceso, información, distribución, fabricación, entrega y servicios de apoyo (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa contribuye al cumplimiento de derechos, sobretodo en áreas en las que el Estado no puede cumplir con el requerimiento de servicios básicos. Generalmente, los individuos de comunidades desconocen los derechos y posibles riesgos, por lo que no pueden exigir y actuar (International Organization for Standardization, 2010).

En el capítulo anterior se indicó que la buena calidad de un producto se refleja por la señales de garantía que brinda la empresa; en efecto, la divulgación de información respalda la decisión del comprador y reduce el riesgo. Por lo tanto, la señal diferencia la buena calidad de la mala (Stiglitz, 1993).

Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial y prácticas justas de contratación

Las prácticas justas de marketing, la información objetiva e imparcial y las prácticas justas de contratación son elementos que proporcionan información entendible para los consumidores, y que estos puedan formular criterios y comparaciones de características de productos y servicios para la toma de decisiones (International Organization for Standardization, 2010).

Un marketing responsable difunde información sobre impactos económicos, sociales y ambientales, para que los consumidores no adquieran productos y servicios que provoquen peligros al consumidor y al medio ambiente, o no satisfaga sus necesidades. Caso contrario, la empresa puede provocar una pérdida de confianza de los consumidores y afectar al crecimiento de mercados sostenibles (Stiglitz, 1993).

Para lograrlo, la empresa debe evitar prácticas confusas, engañosas o injustas, como la información esencial oculta (Stiglitz, 1993). La provisión de información debe ser transparente, de fácil acceso y comparación, en lenguas oficiales de uso común, de ser necesario.

La información que debe ser publicada incluye información que sustente declaraciones, precios e impuestos totales, términos y condiciones de productos y servicios. Los contratos escritos deben ser claros y comprensibles, con términos contractuales justos, que contengan precios, características, condiciones, duración y plazos de cancelación.

Consumo sostenible

El consumo sostenible se lo alcanza fijando tasas coherentes con el desarrollo sostenible. Una empresa maneja el consumo sostenible mediante los productos y servicios que ofrece, su cadena de valor, ciclos de vida e información. Los consumidores realizan sus decisiones de consumo en base a la información adquirida y de acuerdo a factores éticos, sociales, económicos y ambientales (Stiglitz, 1993). Por ende, la empresa debe promover educación, capacitación y concientizar a los consumidores sobre los impactos causados en su bienestar y en el medio ambiente, como consecuencia del consumo (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe procurar ofrecer productos y servicios beneficiosos, considerando aspectos sociales y ambientales y reduciendo los impactos negativos. Además, la empresa debe recurrir a energías alternativas menos dañinas y más eficientes. Por otro lado, una empresa debe buscar diseños que sean reusables o reciclables, y seleccionar suministros que contribuyan al desarrollo sostenible (International Organization for Standardization, 2010).

La información fiable, comparable, veraz y verificable de factores ambientales y sociales, sobre su desempeño, impactos para la salud, país de origen, eficiencia energética, contenido, aspectos sobre el bienestar de especies y el uso seguro del producto en envases, son elementos clave para que el consumidor realice su elección. Los etiquetados o auditorías ambientales certificadas son garantías y respaldo de los datos que proporciona la empresa.

Servicio de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias

Los servicios de atención al cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias, son ventanas que usa la empresa para tratar las necesidades de los consumidores, después de la compra de un producto o un servicio. Estas ventanas toman forma de garantías, para que el consumo de un producto no represente una pérdida de dinero, recursos y tiempo (International Organization for Standardization, 2010).

La calidad de los productos o servicios, disminuye las quejas e insatisfacción del consumidor (Stiglitz, 1993). Por otra parte, las encuestas a consumidores ayudan a la empresa a dar seguimiento al servicio post-venta (International Organization for Standardization, 2010).

Para que una empresa implemente este tipo de mecanismos debe analizar quejas y plantear soluciones basadas en normas nacionales e internacionales; además, estas formas deben ser comunicadas (International Organization for Standardization, 2010).

Protección y privacidad de los datos de los consumidores

La empresa protege la privacidad de los datos del consumidor, limitando la disposición de la información obtenida. La empresa puede procurar sistemas de obtención, uso y protección de información de los consumidores, con la finalidad de conservar la confianza y credibilidad (International Organization for Standardization, 2010).

Una empresa debe obtener información esencial, por medios legales y con el consentimiento informado y voluntario de los consumidores. La empresa no puede disponer de esa información para fines distintos a los comunicados (International Organization for Standardization, 2010).

Educación y toma de conciencia

La educación y toma de conciencia pretende llegar a los consumidores para comunicar sus derechos y responsabilidades, de manera que participen y tomen decisiones de compra de productos o servicios responsablemente. La empresa debe verificar que se informa correctamente las responsabilidades y derechos de los consumidores.

El objetivo de la educación no es solamente transmitir conocimiento sino también, desarrollar la capacidad de criterio para efectuar la compra. Además, el objetivo de concientizar es efectuar decisiones que aporten al desarrollo sostenible (Darby, 2010).

g. Participación activa y desarrollo de la comunidad

La relación entre la empresa y la comunidad debe basarse en la participación activa de la comunidad. El relacionamiento respetuoso con las comunidades fomenta valores democráticos y civiles. En efecto, la relación entre la empresa y la comunidad parte del reconocimiento de valor de la comunidad y de los intereses en común (Von Wieser, 1927).

La intervención de una empresa en una comunidad beneficia el bienestar y la calidad de vida de la comunidad. De hecho, la empresa contribuye al empleo, inversión, educación y desarrollo de habilidades, arte, cultura y salud en la comunidad. El desarrollo de la comunidad se fortalece con el comportamiento socialmente responsable (International Organization for Standardization, 2010).

Las comunidades se caracterizan por la historia y la cultura, las cuales influyen en las próximas posibilidades de intervención de la empresa. El desarrollo de la comunidad depende de factores

sociales, políticos, económicos y culturales, conjuntamente con características de las fuerzas sociales involucradas (Sánchez & Lardé, CEPAL, 2006).

En general, una empresa llega a ser parte de una comunidad, lo que lleva a tomar decisiones en base a esta, considerando sus características para maximizar sus recursos y oportunidades (Hohnen, 2007). Actualmente, desafíos como la pobreza, marginación y desempleo demandan compromisos de la comunidad internacional para enfrentarlos y alcanzar el desarrollo.

La Declaración del Milenio⁴⁶ de las Naciones Unidas indica que la participación de la comunidad, conjuntamente con políticas públicas y la contribución de todas las empresas, permiten alcanzar el desarrollo sostenible (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000).

Previo a cualquier acción sobre la participación activa y el desarrollo de la comunidad, una empresa debe identificar los impactos sobre la comunidad, mitigarlos y optimizar los impactos positivos. A continuación, la empresa debe mitigar impactos en áreas afectadas, aliviando el desastre, apoyándose en los derechos de todas las víctimas (International Organization for Standardization, 2010).

Participación activa de la comunidad

La participación de la comunidad previene y resuelve problemas mediante alianzas con organismos locales y las partes interesadas. La empresa contribuye a la sociedad participando en instituciones civiles y redes formales e informales de individuos que constituyen la sociedad, de manera que identifique sus requerimientos. Es importante que la participación de la empresa respete permanentemente los derechos culturales, sociales y políticos de los grupos sociales (Darby, 2010).

La empresa debe consultar e incluir a todos quienes pueden verse perjudicados con sus actividades y operaciones, sin discriminación alguna. Para ello, la empresa debe proveer información apropiada de la consulta y sus términos (International Organization for Standardization, 2010).

Por otra parte, la empresa debe mantener relaciones transparentes con los funcionarios de gobierno locales y autoridades. Asimismo, debe contribuir a la determinación de políticas y programas de desarrollo que respeten los derechos y opiniones de las demás partes (Darby, 2010).

Educación y cultura

El desarrollo social y económico depende de la educación y cultura; en efecto, debe preservarse en función de los derechos humanos. La empresa debe apoyar al mejoramiento de la calidad de la educación y facilitar el acceso a grupos vulnerables. Para conseguirlo, la empresa debe valorar la cultura local e impulsarla mediante actividades culturales, que fortalezcan el conocimiento tradicional (International Organization for Standardization, 2010).

⁴⁶ Declaración del Milenio, Septiembre 2000, New York. Plantea cimientos para un mundo más pacífico, más próspero y más justo. Además, reconoce las responsabilidades de todos respecto a las sociedades.

Creación de empleo y desarrollo de actividades

La organización contribuye a la reducción de la pobreza y a la promoción del desarrollo económico y social a través del empleo. En efecto, la empresa debe analizar el empleo que genera sus inversiones y seleccionar la tecnología que maximice las oportunidades de empleo. Por otro lado, la empresa debe analizar impactos provocados por la subcontratación y el empleo temporal, en lugar de un empleo directo.

La empresa debe crear programas para desarrollar habilidades en grupos desfavorecidos, para contribuir con el desarrollo (International Organization for Standardization, 2010).

Desarrollo y acceso a la tecnología

La guía de la norma ISO 26000 considera que la empresa es el medio para que las comunidades tengan acceso a la tecnología y de este modo permita el desarrollo de las habilidades de los miembros de la comunidad. La información y la tecnología son componentes claves de la vida contemporánea, pues ayudan a reducir diferencias entre países, regiones, generaciones, géneros, entre otros (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe elegir tecnologías que ayuden a reducir impactos sociales y ambientales, que sean de bajo costo y causen impactos positivos. Además, debe contribuir al desarrollo científico en universidades y laboratorios de investigación (International Organization for Standardization, 2010).

Generación de riqueza e ingresos

La empresa puede fomentar el emprendimiento y aportar al beneficio económico y social de las comunidades, mediante la creación de ingresos y de una distribución justa de los mismos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2000). A la vez, la empresa debe cancelar los impuestos al gobierno, para que este desarrolle proyectos en beneficio de las comunidades (Darby, 2010).

El aislamiento de ciertas comunidades, lleva a la empresa a la integración de los individuos de la comunidad en actividades productivas o a su vez, en actividades de su cadena de valor. Una empresa que no cumpla con las leyes y regulaciones, impide el desarrollo e incrementa la pobreza. Por lo que la empresa debe apoyar al cumplimiento de las leyes dentro de su empresa y dentro de las empresas colaboradoras (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa debe apoyar la diversificación de fuentes de ingresos económicos como la creación de programas de negocios, marketing, normas de calidad, gestión, acceso al financiamiento, así como también, debe considerar el consumo eficiente de productos y servicios de proveedores locales (International Organization for Standardization, 2010).

Salud

La empresa debe velar por la salud pública, puesto que sus actividades pueden perjudicarla. En efecto, la empresa debe impulsar campañas de salud pública con la finalidad de mitigar cualquier

daño o amenaza de la salud. De manera que la empresa puede proveer medicinas, crear programas de ejercicio o de nutrición. Además, debe incentivar la concientización de enfermedades como el VIH, cáncer, malaria, tuberculosis u obesidad. Es esencial que la empresa provea los servicios básicos como el agua y servicios sanitarios para prevenir enfermedades (International Organization for Standardization, 2010).

Inversión social

La inversión social se considera al aporte enfocado al desarrollo social de la comunidad e incluye proyectos educativos, culturales, de salud, emprendimiento, infraestructura, etc. Previamente, la empresa debe analizar los requerimientos de la comunidad para establecer cualquier programa, a través de consultas, obtención de información, o negociación (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa también aporta en una comunidad al integrar a sus habitantes en el desarrollo de proyectos y a que estos sean durables y fomenten el entendimiento entre las partes. No es aceptable que la empresa vuelva a la comunidad dependiente de ingresos filantrópicos, como subsidios o donaciones (International Organization for Standardization, 2010).

Para que la empresa desarrolle planes de inversión social, debe complementar sus esfuerzos, conocimientos y aportes, con ONG u organizaciones públicas (International Organization for Standardization, 2010).

Involucramiento con las partes

La empresa se involucra con las partes interesadas por medio del diálogo, dando a conocer su propuesta basada en la responsabilidad social. Este involucramiento puede darse en formato de reuniones, conferencias, talleres, audiencias públicas, mesas redondas, comités asesores, procedimientos de información y consultas regulares y estructuradas, negociaciones colectivas y foros basados en la web. Se requiere una participación activa, que ofrezca oportunidades para que se exponga el criterio de las partes involucradas.

El involucramiento de la empresa con las partes interesadas, se usa para que la empresa tenga el conocimiento de las posibles afectaciones de sus actividades sobre las partes interesadas. La empresa también puede mejorar su desempeño en base al seguimiento de la credibilidad de su RS (Hohnen, 2007).

El involucramiento también permite reconciliar conflictos que compliquen sus intereses, los de sus partes interesadas y las expectativas de la sociedad (Stiglitz, 1993). En efecto, la empresa determina la manera de incrementar impactos beneficiosos y atenuar los negativos, en función de la retroalimentación adquirida (International Organization for Standardization, 2010).

La empresa se beneficia de este involucramiento por el aprendizaje continuo de distintas perspectivas, que le permite mantener el vínculo con las partes involucradas. En efecto, la empresa puede establecer alianzas para alcanzar objetivos mutuamente beneficiosos (Hohnen, 2007). De este

modo, la empresa cumple con sus obligaciones legales e incrementa la credibilidad (International Organization for Standardization, 2010).

Las expectativas de la sociedad se expresan en leyes o regulaciones, expectativas sociales o culturales aceptadas, y en mejores prácticas o normas establecidas con temas específicos (Stiglitz, 1993). El involucramiento de la empresa con las partes interesadas se basa en la buena fe y va más allá de las relaciones públicas. Por ende, la empresa no debe rechazar el involucramiento con selectos grupos; el auténtico diálogo implica la independencia de las partes y la difusión de la transparencia financiera o similar (International Organization for Standardization, 2010).

El involucramiento puede ser efectivo cuando los propósitos son definidos, los intereses identificados, cuando los intereses son significativos para el desarrollo sostenible, y cuando las partes tienen suficiente información y entendimiento para tomar sus decisiones (International Organization for Standardization, 2010).

Este capítulo ha permitido la identificación de la minería responsable, sus actores y la interacción entre estos. Además, en base al marco teórico, los principios y materias fundamentales de la responsabilidad social, expuestos por la guía de la norma ISO 26000, se identificó los asuntos que integran la responsabilidad social y las alternativas que se deben implementar para que una gobernabilidad contribuya al desarrollo sustentable.

En el siguiente capítulo se considerará los aspectos referentes a los principios y materias fundamentales identificadas en este apartado, con la finalidad de conocer cómo actúan empresas mineras y gobiernos de países tradicionalmente mineros, en cuanto a la aplicación de medidas socialmente responsables.

Capítulo 3

Grado de minería responsable

El presente capítulo incluye el análisis de la aplicación de los aspectos de la Minería Responsable de la muestra de países y empresas considerados para el estudio. En efecto, se ha desarrollado un cuestionario que permite dar seguimiento a los requerimientos y la manera en que los países lo cumplen. El objetivo de este capítulo es conocer la aplicación de la minería responsable, identificar métodos y rescatar propuestas para el caso ecuatoriano.

1. Metodología

En el capítulo I se ha indicado una alternativa de gestión, en la que la organización de la empresa incluye aspectos sociales y ambientales (Labandeira, León, & Vázquez, 2007). La presión originada por la sociedad, ha llevado a considerar la percepción que genera el desempeño de una empresa en materia de responsabilidad social, como en el desempeño real para no comprometer su reputación (Williamson, 2002).

Asimismo, en el capítulo 1 se mencionó que al adquirir un derecho de propiedad para desarrollar actividades económicas en un área determinada, también se adquiere responsabilidades que pueden estar o no, especificadas en un contrato (Williamson, 2002). En el capítulo II se determinó que la “Minería Responsable” consiste en transparentar el comportamiento, el cumplimiento de los compromisos de las empresas mineras con el estado, la sociedad civil y el medio ambiente.

Para complementar la investigación se mide los aspectos característicos de la RSE por medio de un cuestionario, para determinar el grado de minería responsable de un país. El cuestionario está basado en asuntos característicos de los principios y materias fundamentales de la guía de la norma ISO 26000, citados en el capítulo anterior. De hecho, esta norma fue la base debido a que está orientada a concertar las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, porque contribuye al desarrollo sustentable, y porque está basada en un consenso internacional entre expertos de las principales partes interesadas (International Organization for Standardization, 2010).

El cuestionario se aplica en función de la divulgación de información sobre los aspectos de la reputación corporativa, mencionados en el capítulo 1. Estos aspectos incluyen: políticas de medio ambiente, políticas de ascenso, políticas retributivas, calidad del producto, política de precios, campañas publicitarias, campañas de comunicación institucional, y políticas de selección, formación e integración del personal. Así como también, políticas sociales y de cumplimiento de la ley.

En este capítulo se muestra el grado de minería responsable de los países: Australia Occidental, Brasil, Canadá (British Columbia), Chile, Perú y Sudáfrica. El grado de minería responsable de cada país está compuesto por el grado de responsabilidad de la empresa minera y el grado de responsabilidad del estado/legislación.

Las empresas analizadas en cada país son: Newcrest, Vale, Teck Resources, CODELCO, Buenaventura y Harmony Gold Mining. El grado de responsabilidad se mide en función de la accesibilidad y disponibilidad de la información en páginas web, legislaciones, códigos de minería y reportes, según lo requerido en el cuestionario.

El cuestionario consta de 149 preguntas sobre aspectos determinantes de los principios y las materias fundamentales de la RS; 104 preguntas dirigidas al sector privado y 45 preguntas dirigidas al sector público, de cada país analizado. La puntuación consiste en tres niveles de accesibilidad y disponibilidad de la información para el público en general. Se concede 100 puntos a la pregunta, cuando la información es de fácil acceso, precisa y clara; 50 puntos, cuando la información es exigida pero no publicada, no está completa, no es clara o precisa; y finalmente, 0 puntos cuando no existe la información requerida o no se menciona al público en general.

Gráfico 3
Composición del cuestionario de investigación

Principios	Rendición de Cuentas	8 preguntas
	Transparencia	14 preguntas
	Comportamiento ético	9 preguntas
	Respeto a los intereses de las partes interesadas	2 preguntas
	Respeto al principio de legalidad	2 preguntas
	Respeto a la normativa internacional de comportamiento	1 pregunta
	Respeto a los derechos humanos	3 preguntas
Materias fundamentales	Gobernabilidad	3 preguntas
	Derechos Humanos	26 preguntas
	Prácticas laborales	17 preguntas
	Medio ambiente	22 preguntas
	Prácticas de operación	10 preguntas
	Asuntos de consumidores	13 preguntas
	Participación y desarrollo de la comunidad	19 preguntas

Fuente: The ISO and Corporate Social Responsibility

Elaboración: Alexandra Torres

El gráfico 3 señala la composición de los principios de responsabilidad social y además señala el número de preguntas por cada principio. Del mismo modo, el gráfico 3 indica la composición de las materias fundamentales de responsabilidad social y también indica la cantidad de preguntas dirigidas a cada materia.

Por otra parte, la opción N/A se concederá cuando las preguntas no pueden ser aplicadas al actor empresa o gobierno, porque su aplicación está dirigida exclusivamente a un actor, como por ejemplo el principio de Respeto a la Normativa Internacional.

Los resultados de cada país son medidos inicialmente por el promedio de los puntos de cada principio y materia fundamental de la RS, puesto que algunos contienen varios asuntos, por ejemplo: la materia fundamental “Derechos humanos” contiene asuntos de Complicidad, Resolución de Reclamaciones, etc. A continuación, se calcula el promedio de todos los principios y materias fundamentales. Posteriormente, se mide el grado de responsabilidad de la empresa y del gobierno, calculando el promedio de los resultados obtenidos de los principios y las materias fundamentales de RS. Así, mediante los resultados reflejados, se identificará las prácticas de MR en los casos internacionales.

2. Composición de los resultados

2.1 Grado de minería responsable de la empresa

Principios de la Responsabilidad Social

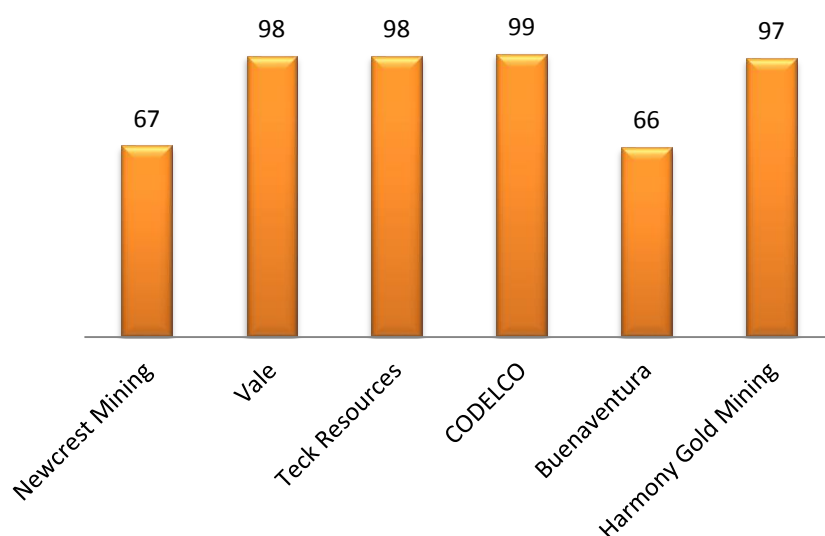
Tabla 1
Resultados de los principios de responsabilidad

	PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Newcrest Mining	Vale	Teck Resources	CODELCO	Buenaventura	Harmony Gold Mining
1	Rendición de cuentas	100	100	88	100	100	100
2	Transparencia	92	100	100	92	88	81
3	Comportamiento ético	75	88	100	100	75	100
4	Respeto a los intereses de las partes interesadas	100	100	100	100	100	100
5	Respeto al principio de legalidad	0	100	100	100	0	100
6	Respeto a la normativa internacional de comportamiento	100	100	100	100	100	100
7	Respeto a los derechos humanos	0	100	100	100	0	100
	Total	67	98	98	99	66	97

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Gráfico 4
Principios de responsabilidad de la empresa



Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Rendición de cuentas

Las preguntas del cuestionario referentes a este principio, miden la disponibilidad y accesibilidad de información sobre el rendimiento de cuentas de los impactos sociales, económicos y ambientales de la empresa; así como también, mide la revelación de información de los pagos de impuestos y regalías que realiza la empresa al estado.

En el caso de Newcrest, Vale, CODELCO, Buenaventura y Harmony Gold Mining, este principio obtuvo una puntuación de 100. Mientras que, Teck obtuvo 88 puntos, por la falta de información referente a la rendición de cuentas de los impactos ambientales. Los resultados de los principios de responsabilidad de cada empresa están reflejados en la tabla 1.

Los reportes de sustentabilidad publicados en las páginas web oficiales de las empresas, son el medio de comunicación por el cual las empresas dan a conocer el desempeño de los impactos en los niveles del desarrollo sustentable. Por ejemplo, los impactos económicos son difundidos en los resultados de su desempeño, balances financieros y resultados de auditorías externas (Teck Resources Limited, 2012).

La rendición de cuentas de los impactos sociales incluye los rubros en inversión social, programas de seguridad y salud ocupacional, lesiones y accidentes siniestros de los trabajadores. Así también, capacitaciones tanto a trabajadores como a las comunidades (Vale, 2012).

La rendición de impactos ambientales incluye la incorporación de índices ambientales y resultados de sistemas implementados para el manejo eficiente del agua, reducción de los impactos ambientales y

recuperación del hábitat, así como también, resultados de la implementación de energías alternativas (Teck Resources Limited, 2012).

Cuanto más completa sea la información revelada en la rendición de cuentas, mayor garantía dará la empresa sobre el comportamiento en los tres niveles del desarrollo sustentable. La rendición de cuentas por el impacto que generan sus decisiones y actividades sobre la sociedad y el medio ambiente implica la actuación de la empresa sobre los afectados. De manera que Teck, podría crear cuestionamientos sobre su gestión ambiental (International Organization for Standardization, 2010).

b. Transparencia

El principio de transparencia medido por el cuestionario, comprende la revelación de información sobre aspectos relacionados con la gobernabilidad de la empresa; es decir, la publicación de las políticas, valores, el proceso de toma de decisiones, el propósito de su intervención, la localización de sus actividades, el proceso de la rendición de cuentas, la información sobre sus dirigentes, las normas y criterios con los que evalúa la RS, el origen y distribución del capital financiero y los impactos que provoca en la sociedad, la economía y el medio ambiente.

De acuerdo con la puntuación de la tabla 1, los resultados reflejan que Vale y Teck, cumplen al 100% el principio de transparencia. A continuación, Newcrest y CODELCO con 92 puntos porque reconocen los riesgos sociales y ambientales pero no los especifican al público y no indica el proceso que sigue la empresa para la toma de decisiones, respectivamente. Buenaventura alcanzó 88 puntos porque no detalla los riesgos socioeconómicos y ambientales, que provocan sus operaciones, y no señala su proceso de toma de decisiones. Finalmente, Harmony obtuvo 81 puntos porque no publica el detalle de las actividades de las que es responsable y tampoco especifica ni revela los riesgos socioeconómicos y ambientales que generan sus actividades.

Las políticas y valores de las empresas son presentados en la página web oficial de las empresas; de manera que, el público tiene acceso al conocimiento de la estructura, los valores en los que se basa y la organización de la empresa. Por otra parte, las empresas realizan la rendición de cuentas a través de auditorías externas e internas. Asimismo, las empresas realizan los reportes en base a los criterios de la Iniciativa Mundial de Reporte GRI⁴⁷.

La transparencia permite a las partes interesadas evaluar con exactitud el impacto de las decisiones y actividades de la empresa sobre los intereses de las partes. De manera que al no ser transparente, la empresa no permite a las partes interesadas reconocer los esfuerzos con los que se encarga sobre las consecuencias de sus decisiones o actividades, sin brindarles garantía (International Organization for Standardization, 2010).

A pesar del puntaje obtenido por Vale, de acuerdo al estudio realizado por Revenue Watch Institute, la empresa requiere reforzar más la transparencia de sus operaciones, puesto que no da lugar a debates sobre las implicaciones en temas como la salud, medio ambiente, flora y fauna marina, empleo o impactos en las comunidades, y así evitar el rechazo de la sociedad (Aguilar, 2012).

⁴⁷ GRI es una organización orientada a impulsar la elaboración de reportes de sustentabilidad en todo tipo de empresas (Global Reporting Initiative, 2011).

c. Comportamiento ético

El principio de comportamiento ético involucra cuestiones como la revelación de los valores y principios de la empresa, su estructura, el proceso de interacción con las partes interesadas, normas de comportamiento ético y el seguimiento de su cumplimiento. A la vez, se requiere conocer si la empresa promueve el cumplimiento de las normas de comportamiento ético en sus empleados y cadena de valor. Finalmente, se requiere conocer si la empresa posee programas o políticas enfocadas en la conservación de especies.

Teck, CODELCO y Harmony cumplen con los requerimientos de este principio, por lo que alcanzaron una puntuación de 100. Mientras que, Vale obtuvo 88 puntos, puesto que no comunica si posee algún método que controla el cumplimiento del código. Newcrest y Buenaventura alcanzaron 75 puntos, porque no comunican si promueve el cumplimiento del código de comportamiento en su cadena de valor. Buenaventura no publica si posee programas que protejan especies en peligro.

Las empresas difunden el proceso de interacción que mantienen con las partes interesadas, garantizando el cumplimiento de sus compromisos con las dimensiones del desarrollo sustentable. Las empresas también implementan el código de conducta para direccionar el comportamiento de sus empleados y reducir futuros impases (Teck Resources Limited, 2012). Algunas de las empresas establecen también el código de conducta específicos para contratistas (Vale, 2012).

La revelación de los valores y principios de la empresa permiten conocer la importancia que dan las empresas a aspectos como la honestidad en el desarrollo de sus operaciones. Asimismo, la estructura de la organización permite conocer la importancia que dan las empresas a aspectos como la protección ambiental, mediante la creación de departamentos exclusivos para la gestión ambiental.

En este apartado, cabe destacar la gestión de CODELCO en aspectos relacionados con el comportamiento ético, puesto que propone programas que buscan facilitar el relacionamiento con sus partes interesadas, inclusive el código de conducta de la empresa es el marco valórico para propios y terceros (CODELCO, 2011). El programa con mayor éxito es el programa de clusters, que consiste en crear una inserción de las empresas proveedoras dentro de la cadena estratégica de abastecimiento de la empresa (Cluster Minero, 2000).

Cuando la empresa no promueve el cumplimiento del código de conducta, corre el riesgo de generar comportamientos incorrectos por parte de sus trabajadores o de las empresas colaboradoras. En efecto, estos acontecimientos podrían despertar la presión social sobre la empresa. Además, compromete la imagen de la empresa y crea desconfianza en las partes interesadas (International Organization for Standardization, 2010). Por ejemplo en el caso de Vale, ONGs denunciaron problemas en la cadena de valor debido a las condiciones laborales que se manejaban; de modo que la empresa acordó con el gobierno no trabajar con empresas que no tengan buenas prácticas laborales y ambientales (Aguilar, 2012).

d. Respeto a los intereses de las partes interesadas

La pregunta referente a este principio busca identificar el acceso que da la empresa a las inquietudes que tienen los grupos interesados. La puntuación obtenida por las empresas de la muestra fue 100 puntos, tabla 1, puesto que todas poseen mecanismos para actuar en base a las inquietudes de las partes interesadas.

Newcrest, realiza debates con la finalidad de dar y obtener información de varios puntos de vista. La empresa utiliza métodos y compromisos diferentes, para cada parte de su grupo de interés. Vale implementa la política de sustentabilidad que busca atender las inquietudes de las partes interesadas, en los estudios de viabilidad relacionados con la gestión de riesgos. Teck organiza mesas redondas conformadas por representantes de sus grupos de interés.

CODELCO considera la opinión de los grupos de interés, desde los inicios de la elaboración de los reportes de sustentabilidad. Los grupos son consultados sobre la forma y contenido de las publicaciones de la empresa, y también sobre los temas que los grupos desearían recibir la información. Buenaventura junta a las partes interesadas a través del diálogo.

Harmony posee un director ejecutivo de relaciones, para asegurar el diálogo entre la empresa y sus grupos de interés. La empresa desarrolla marcos y políticas para mejorar las iniciativas de compromiso de la empresa con las partes interesadas, y de este modo facilitar la contribución de todos (Harmony Gold Mining, 2012).

En el caso en que la empresa no preste atención a las quejas y conflictos, la empresa podría crear conflictos en la relación con sus partes interesadas, puesto que pueden realizar boicots contra la empresa, perjudicando su imagen y comprometiendo la ejecución de sus actividades futuras (Stiglitz, 1993). Por esta razón, la empresa debe analizar e identificar a sus partes interesadas para no pasar por alto las expectativas de los posibles afectados (International Organization for Standardization, 2010).

La prensa peruana expresa continuamente el rechazo de la sociedad a proyectos mineros debido a los efectos que causan en su calidad de vida. En efecto, las empresas mineras podrían reducir estas manifestaciones si refuerzan sus relaciones con las comunidades, como ocurrió en Chile, que gracias a la presión social ejercida, se ha logrado incorporar a estos actores en la toma de decisiones de la empresa.

e. Respeto al principio de legalidad

El principio de respeto a la legalidad se enfocaba en el principio de supremacía del derecho, que expresa que la empresa también está regida por una ley. De modo que la pregunta relacionada con este principio busca conocer el respeto y consideración que la empresa manifiesta en su código de conducta sobre la legislación de los países donde opera.

Vale, Teck, CODELCO y Harmony Gold Mining mencionan en su código de comportamiento el reconocimiento a la supremacía de la legislación de los países donde operan, alcanzando 100 puntos.

No obstante, Newcrest y Buenaventura no difunden el reconocimiento y cumplimiento al principio de legalidad; por lo que obtuvieron 0 puntos en el apartado, registrados en la tabla 1.

Vale declara un principio fundamental, que sus trabajadores observen las obligaciones legales aplicables en los países donde la empresa opera (Vale, 2012). Teck define como primer punto del código de ética de comportamiento de la empresa, el cumplimiento de la ley; de modo que, sus trabajadores deben actuar bajo los requerimientos de la jurisdicción (Teck Resources Limited, 2009).

CODELCO ha elaborado el código de conducta incorporando elementos de la legislación vigente, así que su propósito es que sus trabajadores actúen con prudencia, reflexionando en base a la legislación (CODELCO, 2011). Buenaventura desarrolló su código de conducta relacionando estándares legales y éticos para guiar las actividades de la empresa y la actuación de sus trabajadores (Buenaventura, 2012). El código de conducta de Harmony también se fundamenta en la constitución de los países donde opera la empresa, y la reconoce como suprema (Harmony Gold Mining, 2013).

Al no difundir el reconocimiento del principio de legalidad, Newcrest y Buenaventura no revela el compromiso de cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. En efecto, se podría dar por entendido que la empresa no concentra esfuerzos para conocer las leyes del país y de ilustrar a los miembros de la empresa (International Organization for Standardization, 2010).

f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento

La pregunta de este principio está direccionada a la identificación del respeto por parte de la empresa a la normativa internacional de comportamiento. Al referirse a normativa internacional de comportamiento, se habla de una orientación proporcionada por organismos internacionales para las empresas, con el propósito de alcanzar un comportamiento internacional estándar.

Las empresas que conforman la muestra de la investigación cumplen con algunas normativas de comportamiento internacional. Por esta razón, las empresas obtuvieron 100 puntos. El cumplimiento de normas ISO 14001, ISO 26000, ISO 9001, OHSAS, EITI y el GRI, permiten la obtención de certificaciones que validan el comportamiento de la empresa.

ISO 14001 es la norma del Sistema de Gestión Ambiental. El sistema es considerado una herramienta para mejorar el rendimiento ambiental y reducir el impacto de sus actividades, procesos, productos y servicios (The ISO and Corporate Social Responsibility, 2004).

ISO 9001 es la norma dirigida a aspectos del Sistema de Gestión de Calidad. De modo que, el sistema se basa en los principios de: fuerte orientación al cliente, motivación y la implicación de la gerencia, el enfoque basado en procesos y la mejora continua (International Organization for Standardization, 2008).

OHSAS es la Asesoría de Servicios de Salud y Seguridad Ocupacional y está enfocada en crear un soporte ambiental para alcanzar la prosperidad de la empresa (Occupational Health & Safety Advisory Services, 2011).

EITI es la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas conformada por gobiernos, empresas y la sociedad civil para mejorar la apertura y la gestión de los ingresos procedentes de los recursos naturales (Extractive Industries Transparency Initiative, 2013).

La normativa de comportamiento internacional representa un respaldo para la ley que no proporcione amparos ambientales o sociales adecuados; de manera que la empresa que no reconozca y cumpla con la normativa de comportamiento internacional, pone en cuestionamiento a empresas y autoridades, debido a que podrían generarse casos de complicidad en actividades que no sean coherentes con la normativa internacional de comportamiento (International Organization for Standardization, 2010).

g. Respeto a los derechos humanos

Las preguntas están enfocadas a la obtención de información relacionada con el principio de respeto a los derechos humanos. En efecto, las preguntas indagan la promoción de los derechos humanos en los empleados y en la cadena de valor, por parte de la empresa.

Los resultados obtenidos en esta sección de la encuesta enfocada a los principios fundamentales de RS, revelan que Teck, Vale, CODELCO y Harmony cumplen al 100% con las especificaciones de la guía ISO 26000. Por su parte, Newcrest y Buenaventura no revelan el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos humanos en sus operaciones, por lo que obtuvieron 0 puntos, tabla 1.

La política de sustentabilidad de la empresa Vale es implementada por el principio de precaución. Este principio busca atender las inquietudes de las partes interesadas, en los estudios de viabilidad relacionados con la gestión de riesgos. El proceso inicia a partir de la identificación previa, análisis y minimización de riesgos corporativos, financieros, de salud y seguridad de los empleados, contratados y comunidades.

Teck también posee una política de derechos humanos, esta política está dirigida a fomentar relaciones provechosas con las comunidades. CODELCO adhiere y respeta la Declaración de los Derechos Humanos, en los contratos de trabajadores y acuerdos de inversión. Además, cuenta con asesoría externa, para verificar su alineación los Principios Rectores de las Naciones Unidas y Derechos Humanos.

Las actividades de Harmony son desarrolladas en base a los derechos humanos. La empresa alienta al cumplimiento de los derechos humanos, tanto interna como externamente, mediante una selección de quienes poseen estándares similares.

Newcrest y Buenaventura no revelan el reconocimiento al respeto de los derechos humanos, lo que podría ser interpretado por el público en general, que la empresa no promueve el cumplimiento de los derechos humanos, de modo que compromete su reputación (International Organization for Standardization, 2010).

De acuerdo a los resultados registrados (gráfico 4), CODELCO es la empresa que mejor cumple con los principios de RS, al obtener 99 puntos promediados entre toda la puntuación de los principios. A continuación, las empresas Vale y Teck Resources obtuvieron 98 puntos, seguidas por Harmony Gold Mining con 97 puntos. Newcrest alcanzó 67 puntos y finalmente Buenaventura con 66 puntos.

Materias Fundamentales de la RS

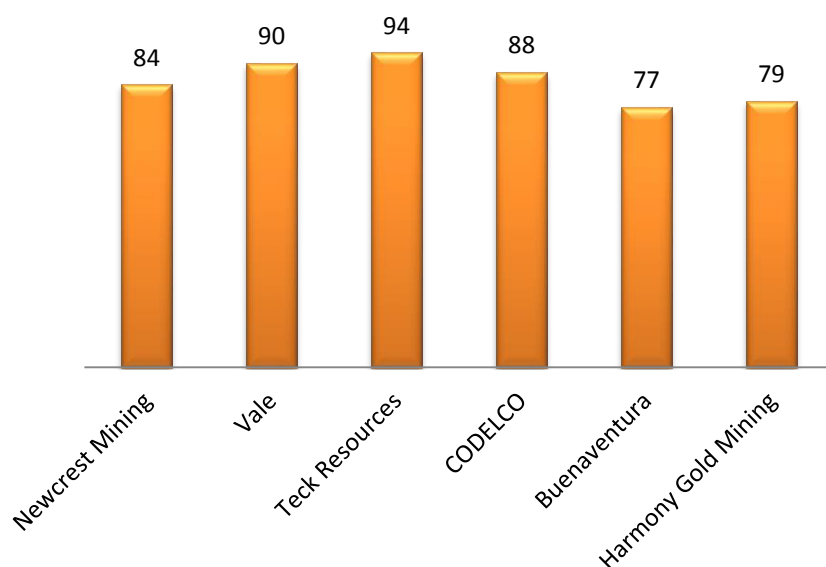
Tabla 2
Resultados de las materias fundamentales de la responsabilidad social de la empresa

	MATERIAS FUNDAMENTALES	Newcrest Mining	Vale	Teck Resources	CODELCO	Buenaventura	Harmony Gold Mining
1	Gobernabilidad de la Empresa	100	100	100	100	100	100
2	Derechos Humanos	76	93	93	88	60	60
3	Prácticas Laborales	82	86	91	91	91	82
4	Medio Ambiente	93	93	100	93	63	93
5	Prácticas justas de Operación	83	100	100	100	67	67
6	Consumidores	79	86	92	100	86	86
7	Participación y desarrollo de la comunidad	75	75	79	42	75	67
	Total	84	90	94	88	77	79

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Gráfico 4
Materias fundamentales de responsabilidad social de la empresa



Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Gobernabilidad de la empresa

Las preguntas del cuestionario enfocadas a la materia fundamental de la RS “Gobernabilidad de la empresa”, buscan conocer la promoción de la RS en la gestión y actividades de la empresa, así como también, la promoción en sus empleados.

Newcrest se compromete a obtener resultados positivos en aspectos económicos, sociales y ambientales. La empresa trabaja con gobiernos, comunidades, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas locales, para garantizar los objetivos de sustentabilidad. Los programas están alineados con las prioridades locales y las expectativas de la comunidad.

Vale posee la política de desarrollo sustentable y está enfocada a la intervención de la empresa, a partir de tres pilares: operario sustentable, catalizador de desarrollo local, y agente internacional de sustentabilidad. El consejo administrativo de la empresa cuenta con un comité de asesoría dedicado a asuntos de gobernabilidad y sustentabilidad.

En Teck prevalecen los principios de sustentabilidad en toda la empresa y revela que estos principios se consideren en la toma de decisiones. La empresa utiliza el sistema de gestión de desempeño para dar seguimiento e informar a los empleados. Adicionalmente, la empresa está construyendo una herramienta de intranet para que los empleados colaboren con la sustentabilidad.

Buenaventura está comprometida con las prácticas responsables de medio ambiente y contribución al desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera. La empresa promueve la RS en sus empleados, mediante el alcance de los objetivos de seguridad y salud ocupacional, calidad ambiental y relaciones con las comunidades.

Harmony se compromete a aplicar y mantener altos estándares de la práctica de gobierno corporativo. La empresa promueve la RS en sus empleados a través del código de comportamiento, puesto que de esta manera considera tener éxito en la relación de sus trabajadores con la sustentabilidad (Harmony Gold Mining, 2013).

La gobernabilidad crea estructuras de gestión para la obtención de los objetivos de la empresa, de esta forma crea el marco para la toma de decisiones. En efecto, al no revelar la conformación y orden que sigue la gobernabilidad, complica la verificación de la responsabilidad de los impactos producidos y también, para verificar la integración de la responsabilidad social en toda la empresa y sus relaciones. Esta brecha de información debe evitarse a fin de difundir al público que la empresa también incluye las expectativas de las demás partes interesadas y así, evitar desacuerdos. (International Organization for Standardization, 2010).

b. Derechos humanos

El principio de derechos humanos, ocupa la mayor parte de preguntas del cuestionario. Las preguntas están direccionadas a identificar la importancia que dan las empresas a los derechos humanos, en sus operaciones. El principio está compuesto por asuntos como: complicidad,

resolución de reclamaciones, discriminación de grupos vulnerables, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, principios y derechos fundamentales en el trabajo.

Newcrest obtuvo 76 puntos como indica la tabla 2, porque no refuerza los derechos de grupos vulnerables, de la manera en que indica la guía ISO 26000; así como también, debe identificar las amenazas a los derechos humanos que provocan sus actividades. Vale obtuvo 93 puntos puesto que no difunde las reclamaciones expresadas por las partes interesadas y las soluciones aplicadas.

Teck registró una puntuación de 93 puntos puesto que no revela el cumplimiento de compensación a las personas afectadas. CODELCO obtuvo 88 puntos debido a la falta de promoción de los derechos humanos en su cadena de valor y grupos vulnerables. Buenaventura y Harmony obtuvieron 60 puntos, pues deben dar mayor difusión a los derechos humanos y mayor atención a las reclamaciones de las partes interesadas.

Las empresas de la muestra en estudio incluyen los derechos humanos mediante políticas o el código de conducta; también guías que instruyen sobre el respeto a los derechos humanos, a sus trabajadores y cadena de valor. Por otra parte, la complicidad es controlada por medio de políticas de prácticas de corrupción, aplicadas a funcionarios públicos, empleados propios e individuos. En efecto, las empresas realizan auditorías internas de los pagos y otros procesos, para identificar situaciones riesgosas.

La resolución de reclamaciones es atendida por medio de políticas que las empresas emplean para la gestión de conflictos, implementando líneas telefónicas, buzones de comentarios, correo electrónico, mesas redondas y visitas a las comunidades (Teck Resources Limited, 2012). Las denuncias son investigadas para confirmar su veracidad y algunas publican las reclamaciones que han recibido en el año de operación (Newcrest Mining Limited, 2012). Adicionalmente, las empresas aplican políticas y prácticas para garantizar que las comunidades sean compensadas por los impactos.

Por otra parte, algunas empresas brindan la capacitación sobre los derechos que tienen las personas de grupos vulnerables, que según la guía de la Norma ISO 26000 incluyen: mujeres, indígenas, jóvenes, discapacitados, etc. En base a la capacitación dada, las empresas incluyen a personas de grupos vulnerables en sus actividades (Buenaventura, 2009).

En cuanto a las relaciones laborales que manejan las empresas, se reconoce la libertad de asociación de los trabajadores y de hecho, las empresas trabajan directamente con los sindicatos para llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos (Harmony Gold Mining, 2012). Asimismo, a través de la política de Seguridad y Salud Ocupacional, las empresas están al cuidado de sus trabajadores y del buen funcionamiento de las instalaciones para evitar accidentes siniestros. Algunas empresas proveen capacitaciones a sus empleados, con el objetivo de desarrollar sus capacidades y seguir incorporándolos en cargos más técnicos y ascenderlos (CODELCO, 2012).

La gestión del uso del agua de las empresas en estudio está orientada a monitorear la extracción del agua, a distribuir eficazmente, limitándose al uso sustentable del recurso, mediante planes que tienen como propósito reducir anualmente el uso y aumentar la reutilización del agua (CODELCO, 2012).

Por otra parte, las empresas también están comprometidas con la inversión en las comunidades y generalmente invierten en proyectos relacionados a la educación, infraestructura y salud (Harmony Gold Mining, 2012).

Las empresas rechazan el trabajo infantil y continuamente procuran controlar esta práctica por medio de la implementación de políticas de derechos humanos (Newcrest Mining Limited, 2012). Además, las empresas rechazan la discriminación en sus trabajadores mediante políticas de diversidad que buscan eliminar casos de discriminación (Teck Resources Limited, 2009).

La empresa que no reconoce los derechos humanos, tampoco considera el sistema judicial (International Organization for Standardization, 2010). En consecuencia, los contratos firmados con el gobierno y terceras partes podrían verse cancelados o podrían recibir costosas sanciones, debido a que la empresa no se ajusta al ordenamiento público del país (Buchanan & Tollison, 2009), y además, no asegura la protección de los derechos de los individuos sobre posibles abusos, generando la pérdida de la credibilidad de las partes interesadas (International Organization for Standardization, 2010).

En el caso del desempeño de las empresas chinas, se caracteriza por el deterioro del medio ambiente y por las condiciones laborales empleadas. De modo que, para mejorar su imagen ante el público internacional, las empresas chinas deberían incorporar actividades y prácticas que mejoren la percepción generada en el público y gobiernos (Mullins, 2012).

c. Prácticas laborales

La materia fundamental de Prácticas Laborales considera asuntos como trabajo y relaciones laborales, condiciones de trabajo y protección social, diálogo social, salud y seguridad ocupacional, desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo. Las empresas obtuvieron los siguientes resultados: Newcrest 82 puntos, Vale 86, Teck 91 puntos, CODELCO 91 puntos, Buenaventura 91 puntos y Harmony 82 puntos, tabla 2.

El reporte anual de sustentabilidad es el medio por el cual las empresas revelan la responsabilidad social y es difundido al público en general, pues las empresas tienen claro que el éxito de su negocio dependen de sus actividades y la percepción que generan en las partes interesadas (Teck Resources Limited, 2012).

Entre las prácticas socialmente responsables, las empresas dan a conocer su desempeño económico, difundiendo información sobre resultados anuales, su presencia en el mercado y los impactos indirectos causados en la economía de la comunidad (Teck Resources Limited, 2012). En el ámbito ambiental, las empresas detallan los materiales, cantidades tóxicas y el manejo de los residuos; además, los planes de manejo de energía y agua, y la reducción de la contaminación.

En el ámbito laboral, las empresas revelan la selección del personal, las relaciones laborales, las prácticas de seguridad y salud, capacitación y diversidad. En la dimensión social, las empresas informan las prácticas de adquisición, inversión social, prácticas contra el trabajo infantil y el trabajo

forzado, prácticas de seguridad, derechos indígenas, relacionamiento con la comunidad, corrupción y comportamiento anti competitivo.

Las empresas promueven el cumplimiento de la ley del país donde opera; en efecto, los empleados son capacitados para que su desempeño se desarrolle dentro del marco legal (Buenaventura, 2009). Asimismo, las empresas procuran instruir a los contratistas sobre el marco legal para que las terceras partes también actúen acorde a la legislación del país (Vale, 2012).

Las empresas también dan a conocer el tipo de información que intercambia con el gobierno, a fin de cumplir con sus obligaciones legales. Anteriormente se mencionó que algunas empresas y gobiernos cumplen con la EITI, de modo que transparentan la información y valores. Por otra parte, las empresas intercambian información con las partes interesadas por medio de los métodos ya señalados.

Las prácticas laborales de las empresas mineras en estudio procuran implementar sistemas de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, para cuidar de sus empleados y asegurar la protección durante el desarrollo de las actividades. Asimismo, las empresas aplican políticas de formación profesional y anti discriminatorias. Además, las empresas otorgan medios de denuncias de casos de discriminación para intervenir y eliminar incidentes de este tipo.

La ausencia de prácticas laborales constituye problemas sociales, puesto que son esenciales para la justicia social, la estabilidad y la paz (International Organization for Standardization, 2010). En efecto, la falta de entendimiento entre la empresa y sus colaboradores podría generar descontentos y conflictos, perturbando el buen desempeño (Von Wieser, 1927).

Los trabajadores que no reciben la capacitación necesaria para la manipulación de equipos y materiales pueden ser causantes de accidentes como el registrado en la empresa china Shougang Hierro, en Perú (Flores, 2014). En efecto, la finalidad de este principio es evitar accidentes mediante la definición del comportamiento de los trabajadores.

d. Medio ambiente

Las preguntas orientadas a la materia fundamental de la responsabilidad social “Medio Ambiente”, buscan aspectos referentes a prácticas que usa la empresa, enfocadas a la prevención de la contaminación, uso sostenible de los recursos y protección del medio ambiente. La empresa Teck obtuvo 100 puntos, tabla 2. Newcrest obtuvo 93 por la falta de promoción del uso de energías alternativas. Vale y CODELCO consiguieron 93 puntos, pues no promocionan campañas de educación ambiental a sus proveedores.

Harmony consiguió 93 por falta de programas de protección de especies animales. Finalmente, Buenaventura alcanzó 63, a falta de campañas de educación ambiental para sus proveedores, la comunicación de los posibles riesgos ambientales que ocasionan sus actividades, así como también, la falta de información sobre las cantidades de materiales tóxicos que libera. La empresa tampoco proporciona información sobre proyectos de energías alternativas y protección de la fauna.

Las empresas cumplen con este principio mediante la implementación de políticas y medidas de medio ambiente, que manifiestan el compromiso que tienen por informar a sus trabajadores y contratistas sobre sus responsabilidades ambientales, a fin de gestionar los riesgos y alcanzar resultados ambientales propuestos. Algunas empresas han certificado a los empleados que reciben capacitación ambiental (Vale, 2012). Asimismo, las empresas preparan a sus empleados para que capaciten a los proveedores sobre las expectativas de los estándares medio ambientales (Teck Resources Limited, 2012).

Entre los métodos que aplican para reducir la contaminación, se propone el manejo de residuos y agua (Buenaventura, 2012). Además, las empresas proponen proyectos destinados a reducir la intensidad de energía en las minas. Asimismo, se implementan programas que buscan reemplazar luces LED para el consumo eficiente de la energía o la implementación de energía solar (Harmony Gold Mining, 2012). Por otra parte, las empresas plantean programas para la reutilización del agua y la reducción de su consumo. Las empresas también se proyectan a invertir en tecnologías de rechazo de residuos (Vale, 2012).

Por otra parte, las empresas desarrollan planes de rehabilitación de áreas perturbadas por sus operaciones y así, cumplir con sus compromisos ambientales. El compromiso medioambiental de las empresas es proteger la biodiversidad, incluyendo la flora y fauna de las zonas afectadas. Las empresas elaboran planes de cierre, que incluyen variables técnicas, económicas, legales y sociales, para contribuir a la recuperación de la biodiversidad de las zonas (CODELCO, 2012).

Los desafíos ambientales crecen y son amenazas para la seguridad, salud y bienestar de la sociedad; de manera que las empresas que no proporcionan educación y capacitación ambiental, no promueven un desarrollo sustentable, puesto que no aportan al criterio de producción y consumo sostenible (International Organization for Standardization, 2010). En efecto, para crear conciencia ambiental se debe proporcionar capacitación y retroalimentación de los procesos productivos y los riesgos ambientales, para no exceder los límites de la tierra (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

e. Prácticas justas de operación

La actual materia fundamental trata asuntos relacionados a la prevención de corrupción, participación política responsable, competencia justa, responsabilidad social en cadena de valor y derechos de propiedad. La tabla 2 muestra que Teck, Vale y CODELCO obtuvieron 100 puntos, Newcrest 83 puntos y 67 puntos Buenaventura y Harmony. Newcrest requiere difundir información sobre la promoción de la Responsabilidad Social en la cadena de valor, estableciendo políticas de compra y distribución. Buenaventura también debe divulgar información sobre la promoción de la Responsabilidad Social en la cadena de valor, planteando políticas de contratación, compra y distribución. Harmony no da a conocer si colabora con el gobierno en la definición de políticas de desarrollo social; además, el impulso que da a la Responsabilidad Social en la cadena de valor.

Las seis empresas establecen medidas de identificación y prevención de la corrupción. Newcrest define a través del código de conducta, políticas de prácticas corruptas y estándares relacionados (Newcrest Mining Limited, 2012). Vale es parte del Pacto Empresarial por la Integridad contra la

Corrupción con la finalidad de implementar prácticas que prevengan casos fraudulentos (Vale, 2012). Teck plantea una política, manual y capacitaciones anticorrupción (Teck Resources Limited, 2012).

CODELCO define políticas y procedimientos anticorrupción y brinda cursos a los trabajadores (CODELCO, 2012). Buenaventura lleva a cabo auditorías externas para prevenir la corrupción (Buenaventura, 2009). Harmony establece prevención de la corrupción en el código de conducta (Harmony Gold Mining, 2013).

Por otra parte, las empresas colaboran con el gobierno mediante el establecimiento de políticas públicas para el bienestar social. Las empresas preparan planes para invertir en las comunidades; además, proponen planes de reciclaje y prevención de la contaminación. Asimismo, las empresas establecen asociaciones público-privadas como modelo de desarrollo de las comunidades.

Las empresas promueven la competencia justa en sus operaciones para lo que establecen políticas de compra-distribución (Vale, 2012). Por otra parte, las empresas plantean políticas que reconocen y respetan las costumbres tradicionales de las zonas donde operan (Buenaventura, 2012).

Las empresas que no emplean prácticas justas de operación comprometen su relación con otras empresas y complican la obtención de resultados positivos. La producción es dependiente de otras producciones (Buchanan & Tollison, 2009); de manera que trabajar por un entendimiento con las partes interesadas, podría facilitar acuerdos y la obtención de resultados positivos a nivel general (International Organization for Standardization, 2010).

f. Consumidores

El principio Asuntos de consumidores busca identificar temas relacionados a prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial, y prácticas justas de contratación, consumo sostenible, servicio de atención al cliente y acceso a servicios esenciales. Los resultados obtenidos fueron: CODELCO 100, Teck 92, Vale, Buenaventura y Harmony 86, y Newcrest 75.

Newcrest promueve la publicación de información y campañas de consultas para conocer las reclamaciones de las partes interesadas. Por otra parte, la empresa no da a conocer los impactos que causan sus productos. Asimismo, la empresa colabora con el estado para proveer de servicios básicos a las comunidades pero no los divulga.

A través de la gestión de riesgos, Vale identifica, evalúa, controla, minimiza y previene los riesgos de los productos. Vale pone a disposición del público el canal de denuncias por medio del que se obtiene información sobre irregularidades contables, controles internos, ética, derechos humanos y medioambiente. La empresa también apoya al estado con la provisión de servicios básicos como vías, educación y salud, a las comunidades donde opera.

Teck identifica los riesgos y reconoce los impactos efectuados por sus productos pero no los revela. La empresa utiliza varios métodos para obtener retroalimentación, entre ellos, líneas telefónicas, buzones de comentarios, correo electrónico, mesas redondas de las partes interesadas y visitas a

comunidades. Asimismo, la empresa implementa iniciativas de políticas públicas como transporte e infraestructura (Teck Resources Limited, 2012).

CODELCO identifica y gestiona los impactos que provocan sus productos; entre estos, la empresa revela la huella de carbono. La empresa pone a disposición medios de reclamaciones como líneas de denuncia y mail. Además, colabora con el estado para proveer servicios básicos a las comunidades donde operan, brindando agua y energía sustentable (CODELCO, 2012).

Buenaventura pone a disposición del público oficinas de comunicación e información, con la finalidad de receptar las reclamos de las partes interesadas y así, dar soluciones. Además, la empresa apoya al estado con la provisión de servicios básicos como educación, salud, infraestructura hídrica y vial (Buenaventura, 2012).

Harmony revela que casi todo el oro minado puede ser reciclado y raramente se desgasta gracias a sus cualidades. Por otro lado, la empresa no revela la existencia de medios de reclamaciones para las partes interesadas. Asimismo, Harmony colabora con el estado mediante la implementación de proyectos que faciliten el acceso de la comunidad a los servicios básicos como la educación y el agua potable (Harmony Gold Mining, 2012).

Las empresas que no se alinean a las necesidades legítimas de los consumidores y que no promueven el desarrollo económico y social de forma justa, equitativa y sostenible, y la protección del medio ambiente, distorsionan información sobre sus productos y asimismo, sobre la toma de decisiones. En efecto, este comportamiento podría comprometer el bienestar de las presentes y futuras generaciones (International Organization for Standardization, 2010).

g. Participación activa y desarrollo de las comunidades

La materia fundamental Participación y desarrollo de las comunidades incluye asuntos referentes a la participación activa de la comunidad, la educación y cultura, la creación de empleo y desarrollo de actividades, desarrollo y acceso a la tecnología, generación de riqueza e ingresos, salud e inversión social. Los resultados registrados evidencian que Teck alcanzó 79 puntos, Newcrest, Vale y Buenaventura 75 puntos, CODELCO 42 puntos.

Las empresas publican el proceso que aplica para realizar las encuestas y dan a conocer al público en general las reclamaciones presentadas por las partes interesadas, para fijar estrategias. También, promueven la educación en las comunidades locales a través de programas de apoyo para incentivar el empleo de los miembros de la comunidad, así como también impulsar la independencia económica a largo plazo (Vale, 2012). Asimismo, las empresas promueven el desarrollo de las habilidades de grupos vulnerables para luego integrarlos en las operaciones de la empresa (Newcrest Mining Limited, 2012).

Las empresas emprenden campañas de salud en la comunidad y además, instruye a los miembros de la comunidad, la prevención de enfermedades comunes y graves en la localidad, como la malaria y campañas de alimentación (Vale, 2012). Las empresas establecen políticas de comunidades, orientadas a reconocer e impulsar los valores culturales, tradicionales y creencias de las

comunidades, invirtiendo en áreas de arte, cultura, deportes y recreación (Harmony Gold Mining, 2012). Por otra parte, las empresas contribuyen con donaciones a las comunidades como parte de la compensación, por los efectos de sus actividades (Teck Resources Limited, 2012).

Cuando las empresas no poseen una relación basada en la participación activa con la comunidad, no contribuyen a su desarrollo, por lo que no reflejan valores democráticos y cívicos. De manera que, además de identificar las partes interesadas, la empresa debe crear una relación con la comunidad. Las inversiones sociales podrían mantener y mejorar las relaciones de una organización con las comunidades (International Organization for Standardization, 2010).

Empresas como AngloGold Ashanti, Vale, Newmont y BHP Billiton son líderes en programas de control de malaria. Los proyectos son llevados a cabo conjuntamente con el gobierno de los países anfitriones, alcanzando la reducción de casos de malaria en la región. Además, su participación sirve de modelo para otras empresas que buscan implementar esta iniciativa (International Council on Mining & Metals, 2014).

Los resultados obtenidos en los asuntos de las materias fundamentales de la RS reflejan que Teck Resources alcanzó la máxima puntuación con 94 puntos, seguida de Vale con 90 puntos; CODELCO 88 puntos, Newcrest 84 puntos. Finalmente, Harmony Gold Mining obtuvo 79 puntos y Buenaventura 77 puntos.

El grado de minería responsable de las empresas mineras en estudio, revela que Teck Resources es la empresa con mayor grado de responsabilidad social, con un puntaje de 96 puntos. La segunda empresa con mayor grado de responsabilidad es Vale, obteniendo 94 puntos. CODELCO es la tercera empresa con mayor grado de responsabilidad, al registrar 93 puntos. Harmony Gold Mining obtuvo 88 puntos, seguido de Newcrest que obtuvo 75 puntos; mientras que Buenaventura obtuvo 72 puntos.

2.2 Grado de minería responsable de los gobiernos y legislaciones

Principios de la responsabilidad social

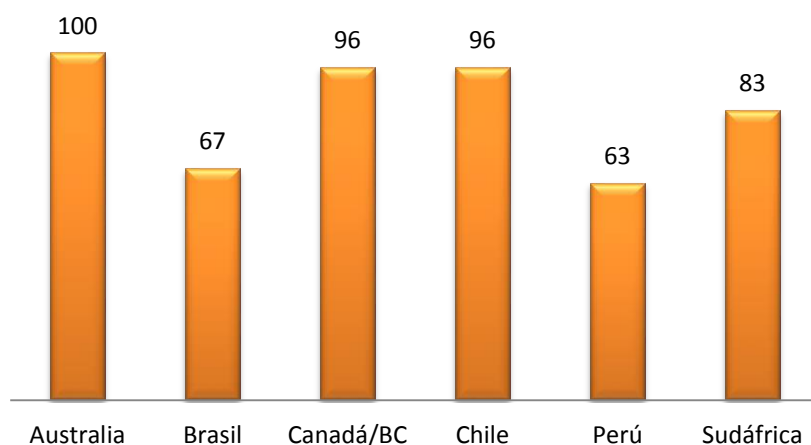
Tabla 3
Resultados de los principios de responsabilidad social del gobierno

	Gobierno/Legislación	Australia	Brasil	Canadá/BC	Chile	Perú	Sudáfrica
1	Rendición de cuentas	100	100	75	75	75	100
2	Transparencia	100	0	100	100	0	0
3	Comportamiento ético	100	0	100	100	0	100
4	Respeto a los intereses de las partes interesadas	100	100	100	100	100	100
5	Respeto al principio de legalidad	100	100	100	100	100	100
7	Respeto a los derechos humanos	100	100	100	100	100	100
	Total	100	67	96	96	63	83

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Gráfico 5
Principios de responsabilidad social del gobierno



Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Rendición de cuentas

El principio Rendición de Cuentas busca conocer si el gobierno del país exige a las empresas rendir cuentas sobre los impactos causados, en las dimensiones de la economía sustentable, y si el gobierno da a conocer al público en general, la tasa de las regalías e impuestos que cobra a las empresas mineras. Los resultados obtenidos en este apartado fueron: Australia, Brasil y Sudáfrica obtuvieron 100 puntos, mientras que Canadá (British Columbia), Chile y Perú registraron 75 puntos, como se muestra en la tabla 3.

La información referente a los impactos socioeconómicos de las empresas son exigidos a través de leyes mineras, de transparencia y el código de minería, mediante la proporción de un reporte que contiene información referente al desempeño de las actividades de la empresa, e información referente a los métodos de iluminación, transporte, salud y seguridad, instalaciones de energía, abastecimiento y captación de agua, aire acondicionado, higiene de la mina y trabajadores, y condiciones de las comunidades (Congresso Nacional do Brasil, 1968).

La información sobre los impactos ambientales de las empresas mineras es requerida bajo leyes ambientales, de transparencia y el código de minería, mediante la elaboración de un reporte y evaluaciones de impacto ambiental, que también incluye la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados (Province of British Columbia, 1996). También, hay disposiciones que exigen la presentación de declaraciones de las actividades de desarrollo sostenible (Ministerio de Energía y Minas de Perú, 1992).

El gobierno proporciona guías de interpretación que son difundidas al público en general, a través del sitio web oficial de la entidad encargada del sector minero. El objetivo es facilitar la interpretación de las regulaciones, dar a conocer el propósito de transparentar el desempeño y mejorar el reporte de sustentabilidad, que debe ser difundida al público (Government of Western Australia, 2011).

Por otra parte, el gobierno difunde la información sobre las tarifas de regalías e impuestos, aplicados a las actividades mineras mediante páginas web oficiales, de modo que esta información es de fácil acceso al público (Gobierno de Chile, 2007).

El gobierno al apoyar la rendición de cuentas por parte de la empresa, permitirá reducir de la incertidumbre sobre la percepción de la sociedad (North, 1990) y además, destaca el aporte de la empresa en los tres niveles del desarrollo sustentable (Meadows, Randers, & Meadows, 2004). De esta manera, la empresa da a conocer su gestión y resultados, mientras que la sociedad formula criterios para apoyar su gestión o llevar a corregir ciertos comportamientos (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

La legislación chilena se destaca gracias a la exigencia de la rendición de cuentas de las empresas públicas y empresas inscritas en el Registro de Sociedades que deben plantear auditoría externa. Para el organismo de la iniciativa EITI, la rendición de cuentas de los gobiernos y de las empresas dan crédito a la sociedad civil sobre el uso de los recursos generados por la empresa minera (EITI, 2012).

En efecto, el Instituto Revenue Watch conjuntamente con Organismos no Gubernamentales plantearon un proyecto para controlar el sector extractivo a través de la transparencia y rendición de cuentas; de manera que los funcionarios públicos puedan administrar mejor las rentas de los recursos y así, evitar efectos sobre la economía. Las administraciones locales y regionales recibieron capacitación para llevar a cabo con el proyecto. Como resultado del proyecto la proyección de recursos permite pronosticar las rentas y reducir la incertidumbre (Jungbluth, 2012).

b. Transparencia

Las preguntas del principio de “Transparencia” indagan la regulación del establecimiento de procedimientos para la toma de decisiones de las empresas mineras. Las regulaciones de Australia, Canadá y Chile obtuvieron 100 puntos porque establecen ciertos procedimientos en la toma de decisiones de las empresas mineras. Mientras que los otros países en estudio, no plantean procedimientos de la toma de decisiones en el marco legal minero, por lo que obtuvieron 0, tabla 3.

La legislación minera de Australia Occidental, bajo el artículo 55A plantea un plan de trabajo que debe ser cumplido por la empresa. Este plan de trabajo establece estructuras de gobernabilidad que la empresa debe cumplir para obtener el permiso de minería (Government of Western Australia, 1972).

En Chile, la legislación minera a través del artículo 173, establece procedimientos en la conformación de los accionistas, la resolución en juntas, la asignación del administrador y su reemplazo, y la determinación de funciones del director (Ministerio de Minería de Chile, 1983).

En el caso de Canadá BC, el artículo 21 de la ley minera plantea procedimientos y perfiles para la elección del directorio y sus funciones. El director debe cumplir con las capacidades definidas en el código de minería y debe estar presente en las operaciones diarias de la empresa. Además, el director debe asegurar el cumplimiento del marco legal minero (Province of British Columbia, 1996).

En el caso en que el gobierno no exija transparencia a la empresa, no permite que las partes interesadas evalúen con exactitud el impacto de las decisiones y actividades de la empresa. De manera que al no respaldar la iniciativa de transparencia por parte de la empresa, las partes interesadas no reconocerán los esfuerzos dirigidos a gestionar las consecuencias de sus decisiones o actividades (International Organization for Standardization, 2010).

La iniciativa de transparencia que rige en el sector minero chileno es considerada por la EITI, como un ejemplo a seguir, puesto que ha dado lugar a una utilización eficiente de los recursos públicos. La transparencia en este país es legislada (EITI, 2012). Por otra parte, Brasil no posee una legislación que asegure la transparencia. De hecho, Brasil podría beneficiarse de la creación de grupos multisectoriales gracias a la producción y difusión de informes nacionales sobre la extracción y responsabilidad social (Aguilar, 2012).

c. Comportamiento ético

Este principio se refiere a temas relacionados con la definición de un código de prácticas por parte de la entidad encargada de los minerales. Estos códigos establecen prácticas y procedimientos que deben seguir las empresas mineras. Australia, Canadá (BC), Chile y Sudáfrica establecen códigos, por lo que registran una puntuación de 100, tabla 3. Por otra parte, Brasil y Perú, no establecen un código de buenas prácticas para el sector minero, de manera que obtuvieron 0 puntos.

Los códigos de prácticas identificados engloban código de consulta en el lugar de trabajo, de perforación exploratoria, estudio de minas, de prevención y control de enfermedades, diseños seguros de edificios y estructuras, de prevención y gestión de violencia, agresión y discriminación, de salvaguardas de maquinaria e instalaciones, de apoyo de rocas en la superficie de minas subterráneas, de instalaciones de almacenamiento de relaves y de horas de trabajo.

El código de consulta en el lugar de trabajo está enfocado a que los empleadores consulten a los empleados sobre la seguridad y salud en el lugar de trabajo (Government of Western Australia, 2009). El código de Perforación exploratoria consiste en asesorar a las personas involucradas con exploraciones de minerales, en la implementación de sistemas de seguridad en las operaciones exploratorias (Government of Western Australia, 2012).

El código de estudio de minas se refiere a la elaboración de un plan de mina para cada operación minera y engloba planos, secciones que muestran la totalidad de los trabajos de una explotación minera o de canteras (Government of Western Australia, 2011).

El código de prevención y control de enfermedades reúne representantes de empleadores, sindicatos, gobierno y expertos, y tiene la función de desarrollar la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo y el apoyo material de orientación (Commission for occupational safe and health, 2010).

El código de diseños seguros de edificios y estructuras incluye indicaciones con el propósito de eliminar y controlar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, en la etapa de diseño, en la planificación y diseño de los edificios, estructuras, productos, procesos o sistemas (Government of Western Australia, 2010). El código de Prevención y gestión de violencia, agresión y discriminación implica la proporción de una guía para los lugares de trabajo donde las personas pueden estar expuestas a diversas formas de violencia y agresión que incluye asalto físico, abuso verbal, las amenazas, la intimidación, el acoso y el acoso laboral (Government of Western Australia, 2007).

El código de salvaguardas de maquinaria e instalaciones proporciona una guía general para los empleadores, diseñadores, fabricantes, proveedores y trabajadores en la identificación y control de los riesgos de seguridad y salud, y los riesgos asociados con la vigilancia, o la falta de vigilancia, de la maquinaria y las instalaciones (Government of Western Australia, 2009). El código de apoyo de rocas en la superficie de minas subterráneas introduce el requisito de instalar soporte de roca de superficie en grandes partidas (Government of Western Australia, 1999).

El código de instalaciones de almacenamiento de relaves ayuda a los involucrados en las instalaciones de almacenamiento de relaves (TSF), es decir, depósitos que almacenan desechos de las minas, para cumplir con sus obligaciones legislativas para la salud y seguridad en el trabajo (Government of Western Australia, 2013). El código de horas de trabajo establece una guía para los empleadores y los trabajadores en la gestión de los riesgos de seguridad y salud, y los riesgos comúnmente asociados con las horas de trabajo, como el cansancio (Government of Western Australia, 2006).

El gobierno que plantea normas de comportamiento ético, reduce la posibilidad que la empresa efectúe actos que produzcan rupturas contractuales (Williamson, 2002). En efecto, el gobierno incorpora métodos que la empresa podría seguir, con el fin de cumplir con las expectativas del gobierno y de la sociedad, y también, con las regulaciones del país. La empresa que no adapta su comportamiento a las exigencias de un país, corre el riesgo de no ser aceptada (Von Wieser, 1927).

Las empresas más competitivas de China poseen grandes beneficios, que hasta inclusive las leyes podrían llegar a ser tan permisivas, que el control gubernamental no podría exigir a las empresas a actuar sustentablemente. Los beneficios que reciben las empresas incluyen: redes de intercambio de información, exenciones de impuestos nacionales, tierra barata, apoyo diplomático y financiación de bajo interés (Mullins, 2012). En efecto, las empresas no están acostumbradas a establecer un comportamiento estricto con el estado y la ciudadanía; lo que podría complicar su desempeño en países extranjeros.

d. Respeto a los intereses de las partes interesadas

A través del principio de respeto a los intereses de las partes interesadas, el estado exige a las empresas mineras dar accesibilidad a la participación pública. Las obligaciones mineras cumplen con esta exigencia a través de la evaluación de impacto ambiental.

Anteriormente se mencionó que el propósito de la EIA es promover la participación, ofreciendo asesoría y proporcionando información a la comunidad (Environmental Protection Authority, 2012). El EIA es requerido en todos los países que conforman la muestra; de tal manera que registran 100 puntos en la tabla 3.

Los gobiernos han implementado guías que plantean formatos para el desarrollo del EIA, los procedimientos para la aprobación e inclusive, listas de verificación. Por ejemplo, Australia Occidental por medio de la Guía de Gestión Ambiental Minera, asesora a la industria minera en el desarrollo de propuestas mineras, de acuerdo a las exigencias planteadas (Department of industry and resources Western Australia, 2006).

El Ministerio de Medio Ambiente de Brasil también proporciona un manual de normas y procedimientos para otorgar el permiso ambiental del sector minero. El manual incluye el apartado de comunicación social en proyectos mineros, y para su aplicación se requiere implementar un Plan de Consulta y Participación Pública (Ministério do Meio Ambiente, 2001).

La Agencia de Evaluación Ambiental de Canadá considera el EIA como una herramienta de planificación y toma de decisiones; por tal motivo, se considera la participación pública. El proponente de un permiso de minería presenta el estudio y es publicado por la Agencia de Evaluación Ambiental en el sitio de internet, para promover la formulación de comentarios (Canadian Environmental Assessment Agency, 2012).

La ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, establece que el titular de un proyecto debe publicar en un diario de circulación nacional o regional, un extracto de EIA, de modo que el público en general tenga conocimiento y entregar sus observaciones (Congreso nacional de Chile, 1994).

La guía de EIA que propone el Ministerio de Minas de Perú, incluye la categoría de análisis “ambiente socio-económico”. Esta sección describe las influencias que puede generar el proyecto minero. Para ello, se requiere la caracterización del ambiente social y así, evaluar los posibles impactos (Ministerio de Energía y Minas de Perú, 1992).

El Departamento de Asuntos Ambientales de Sudáfrica exige bajo la ley de Gestión Ambiental Nacional, el proceso de participación pública que el EIA debe contener. Para ello, el proponente debe notificar al público los aspectos característicos del proyecto, y registrar los comentarios expresados por las partes interesadas (Minister of Water and Environmental Affairs, 1998).

Para que el gobierno facilite el entendimiento entre la empresa y la sociedad, podría plantear parámetros de elaboración de los EIA; de manera que la empresa atienda las quejas y conflictos presentados por las partes interesadas. Consecuentemente, los conflictos de la relación entre la empresa y sus partes interesadas, podrían evitarse (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

En el caso chino, se resalta el reto sobre la protección ambiental y la salud de trabajadores y miembros de las comunidades, principalmente por la regulación del comportamiento y por las relaciones entre las partes interesadas. De hecho, la ejecución es ineficiente debido a los conflictos entre la protección ambiental y los beneficios económicos de proyectos irresponsables. Este hecho

refleja la ambigüedad de las leyes chinas en aspectos de intermediación para alcanzar el entendimiento entre las partes interesadas (Mullins, 2012).

e. Respeto al principio de legalidad

El respeto al principio de legalidad indaga la difusión al público en general, de las leyes y regulaciones del sector minero. Hoy en día, las entidades encargadas de los recursos naturales y de la gestión jurídica, transmiten todo tipo de normativas a través de las páginas web oficiales; de modo que, la ciudadanía cuenta con la facilidad de acceder al conocimiento legal del sector. Por esta razón, los gobiernos de los países en estudio registran en la tabla 3 una puntuación de 100.

Por ejemplo, la ley minera de Australia Occidental es difundida por medio de la página web del Editor de leyes estatales (Department of Mines and Petroleum, 1978). En Brasil, la ley de minería está publicada en la página web oficial del Departamento Nacional de Producción Minera (Congresso Nacional do Brasil, 1968).

La página web de British Columbia Laws difunde la ley de minería de esta región. En cuanto a Chile, la ley de minería es publicada en la página web de la Biblioteca del Congreso Nacional (Congreso nacional de Chile, 1994).

Perú da a conocer su marco legal minero por medio de la página web del Ministerio de Energía y Minas (Ministerio de Energía y Minas de Perú, 1992). Finalmente, Sudáfrica difunde la ley minera a través de la página del Departamento de Recursos Minerales (Republic of South Africa, 2002).

Cuando el gobierno no proporciona las regulaciones del sector, no permite conocer al público el cumplimiento de la ley por parte de la empresa y del mismo gobierno. La finalidad es que la sociedad actúe como supervisor del cumplimiento de la ley, con la finalidad de exigir un comportamiento adecuado (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

En Colombia, las organizaciones no gubernamentales revelan el rechazo de los ciudadanos a la minería, y sobretodo el malestar generado porque los miembros de las comunidades no tienen acceso a derechos de propiedad; mientras que, empresas mineras obtienen dichos títulos (Ilich, 2013). En efecto, representantes del Colectivo de Abogados han presentado documentación de respaldo de la denuncia contra la minería, frente a la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) (Garg, 2013).

f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento

El presente principio, está dirigido exclusivamente a las empresas, debido a que de acuerdo a la guía de la norma ISO 26000, existen situaciones en que la ley o su implementación no proporcionan las salvaguardas ambientales o sociales apropiadas (International Organization for Standardization, 2010). En efecto, la empresa debe esforzarse por cumplir al menos la normativa internacional.

No obstante, cabe mencionar que existen algunas legislaciones como la de Chile y Sudáfrica que reconocen y exigen el cumplimiento de la normativa internacional de comportamiento, respaldando

su regulación con las exigencias internacionales. Por ejemplo Sudáfrica desarrolla políticas, estrategias y programas para alinear su intervención con lo establecido por la cooperación internacional (Department of Mineral Resources South Africa, 2011).

Los gobiernos que han incluido aspectos relacionados con la normativa internacional, han fomentado el buen comportamiento en empresas que en la actualidad son reconocidas a nivel internacional e inclusive, han sido parte de la cooperación internacional, aportando con su experiencia y buenas prácticas en la elaboración de guías y estándares como en el caso de Chile con la empresa CODELCO (CODELCO, 2011).

g. Respeto a los derechos humanos

El principio de Respeto a los Derechos Humanos indaga el reconocimiento de los derechos humanos en las legislaciones de los países en estudio. Australia reconoce en su constitución el respeto a los derechos humanos (Australian Human Rights Commission, 2000). Así también, la constitución brasilera reconoce y promulga los derechos humanos (Asamblea Nacional Constituyente, 1988). La justicia canadiense también establece una ley de derechos humanos (Justice Laws Website, 1985).

Por otra parte, Chile reconoce y promulga los derechos humanos bajo la ley 19938 (Ley Chile, 2004). Del mismo modo, la constitución peruana garantiza la vigencia y exige la promoción de los derechos humanos (Tribunal Constitucional, 1993). Finalmente, Sudáfrica promueve y reconoce los derechos humanos mediante la ley N°37253 (South Africa Government, 2014).

Tanto el gobierno como la empresa deben procurar reconocer el respeto a los derechos humanos, caso contrario, la credibilidad en su gestión podría verse perjudicada en la percepción del público, puesto que no brinda ni exige la protección de sus derechos (International Organization for Standardization, 2010).

De acuerdo a los resultados obtenidos en los principios de responsabilidad social, se revela que Australia obtuvo 100 puntos, British Columbia Canadá y Chile obtuvieron 96 puntos, seguido de Australia Occidental y Sudáfrica con 83 puntos. Finalmente, Brasil obtuvo 67 puntos y Perú 63 puntos. Los resultados de cada gobierno son revelados en el gráfico 6.

Materias fundamentales de la responsabilidad social

Tabla 4
Resultados de materias fundamentales del gobierno

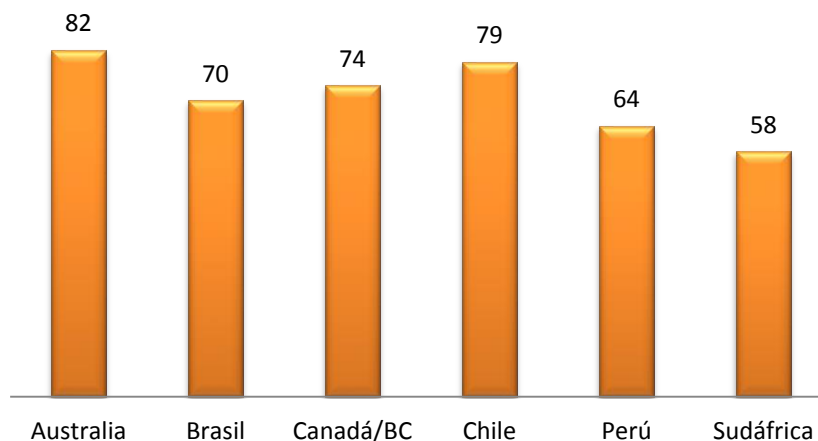
	MATERIAS FUNDAMENTALES	Australia	Brasil	Canadá/BC	Chile	Perú	Sudáfrica
1	Gobernabilidad de la organización	100	0	100	100	0	0
2	Derechos humanos	76	93	88	88	60	64
3	Prácticas laborales	100	100	83	100	100	83
4	Medio ambiente	86	86	86	86	86	86
5	Prácticas justas de operación	100	100	75	100	75	75

6	Consumidores	83	83	83	67	100	83
7	Participación y desarrollo de la comunidad	29	29	0	14	29	14
Total		82	70	74	79	64	58

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Gráfico 6
Materias fundamentales de responsabilidad social del gobierno



Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Gobernabilidad

Anteriormente, se mencionó que las legislaciones de Australia Occidental, Canadá BC y Chile establecen ciertos procedimientos en la estructura organizacional de las empresas mineras. Australia apunta hacia la estructura de gobierno (Government of Western Australia, 1972).

Canadá se enfoca en temas relacionados a la gobernabilidad de la empresa, como la descripción del perfil de los directores y suplentes (Province of British Columbia, 1996). Chile establece procedimientos de gobernabilidad como la división de accionistas, el procedimiento de prorrata, resoluciones en juntas y la administración y sus funciones (Ministerio de Minería de Chile, 1983).

En efecto, en la pregunta orientada a la información sobre la materia fundamental de gobernabilidad de la organización, las tres empresas obtuvieron 100 puntos; mientras que las otras empresas de la muestra, obtuvieron 0 puntos como se muestra en la tabla 4.

Los gobiernos que plantean directrices en la gobernabilidad de una empresa, saben cómo resultará la aplicación de una u otra directriz; de manera que facilita la identificación de posibles impases contractuales, cuando no se aplican dichas directrices de manera adecuada. En consecuencia, la empresa procurará no comprometer su imagen y evitar el pago de sanciones (International Organization for Standardization, 2010).

b. Derechos humanos

Esta materia establece preguntas direccionadas a la recopilación de información referente a la incorporación de los derechos humanos en las legislaciones de los países en estudio. El principio está compuesto por subtemas como: complicidad, resolución de reclamaciones, discriminación de grupos vulnerables, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, principios y derechos fundamentales en el trabajo. Conforme a los resultados registrados en la tabla 4, referente a este apartado, Australia alcanzó 76 puntos, Brasil 93, Canadá BC y Chile 88, Perú 60 y Sudáfrica 64 puntos.

El marco legal del sector minero y ambiental de los países en estudio, incluye aspectos relacionados con las dimensiones de desarrollo sustentable. Los asuntos económicos envuelven temas como el derecho de propiedad privada, pago de impuestos y regalías, crecimiento económico, compensaciones, producción, reducción de desigualdad económica, comercialización de minerales, desarrollo sustentable, institucionalidad, sector privado, mercados internacionales, contratos, empleo, ordenamiento territorial, entre otros.

En cuanto al aspecto social, el marco legal minero de los países integran temas como reportes de desempeño, inclusión y compensación a grupos nativos, asistencia legal, requerimiento de información, contrato social, estudios de riesgos, discriminación, seguridad y salud ocupacional, participación ciudadana, promoción de la educación, fortalecimiento de la cultura tradicional, promoción y respeto a la cultura tradicional, asistencia a grupos vulnerables, entre otros.

Los asuntos ambientales se refieren a condiciones de prevención o reducción de daño a la tierra, planes de cierre, aprovechamiento del agua y recursos energéticos, trabajos de restauración, protección ambiental, utilización de materiales contaminantes, preservación para futuras generaciones, evaluación de impacto ambiental, áreas protegidas, conservación de especies, etc.

Las legislaciones que incluyen aspectos relativos a los niveles del desarrollo sustentable, dirigen la contribución de las empresas hacia la obtención de este desarrollo, por medio de un comportamiento adecuado frente a aspectos económicos, sociales y ambientales. De este modo, el gobierno permite que la empresa reconozca los derechos humanos y considere el sistema judicial del país (International Organization for Standardization, 2010). En consecuencia, se evitaría que los contratos firmados con el gobierno y terceras partes, sean cancelados

c. Prácticas laborales

Las preguntas referentes a esta materia, buscan información sobre el trato equitativo a los trabajadores, condiciones de trabajo, consulta previa, preservación de salud y seguridad, actividades de desarrollo y discriminación. La puntuación registrada es: Australia, Brasil, Chile y Perú obtuvieron 100 puntos; mientras que Canadá y Sudáfrica 83 (tabla 4).

Las legislaciones de los países presentan leyes que fomentan la equidad de oportunidades, así como también leyes que especifican las condiciones de trabajo como horarios, salarios, salud y seguridad ocupacional (Government of Western Australia, 1972).

Las legislaciones de los países en estudio exigen la consulta que debe ser aplicada a los trabajadores y a las comunidades aledañas a los proyectos mineros, bajo leyes direccionadas a la seguridad de las minas (Government of Western Australia, 1972). Los pueblos indígenas y la propiedad de sus territorios son reconocidos y se exige el respeto en las legislaciones de los países de la muestra.

Los gobiernos de la muestra establecen códigos referentes a prácticas de la salud y seguridad ocupacional. Estos códigos determinan los procedimientos que se deben considerar en el funcionamiento de las operaciones mineras. Asimismo, la legislación exige a las empresas la capacitación de sus trabajadores sobre el uso de equipos y máquinas.

Algunas legislaciones reconocen y exigen el cumplimiento de la Consulta Libre Previa e Informada. Este es un derecho que debe ser respetado, cuando los gobiernos quisieran disponer de los recursos que se encuentran en territorios indígenas. La Consulta libre previa e informada implica una restricción de derechos de los pueblos como propietarios (Ministro de Energía y Minas Perú, 2002).

Así, se exige la participación efectiva de los pueblos indígenas en todo el plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción, a través de consultas, evaluaciones de impacto ambiental, repartición de beneficios e indemnizaciones equitativas (Dues Process of law foundation, 2011).

Los gobierno que establecen y exigen prácticas laborales a las empresas, evitan la creación de problemas sociales, abusos, discriminación; mientras que fomentan la justicia social, la estabilidad y el entendimiento entre las partes (International Organization for Standardization, 2010).

d. Medio ambiente

La materia fundamental de Medio Ambiente, indaga aspectos referentes a la prevención de la contaminación, uso sostenible de los recursos y protección del medio ambiente. Los resultados obtenidos en este apartado fueron 86 puntos para cada país como se indica en la tabla 4. En general, las legislaciones muestran regulaciones sobre la energía, más no promueve la implementación de energías alternativas que reduzcan y efectivicen el consumo.

Hoy en día, las legislaciones de los países en estudio, exigen la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para obtener permisos ambientales para las concesiones mineras. Por otra parte, las legislaciones también establecen leyes de seguridad de residuos tóxicos. Estas leyes establecen medidas orientadas a personas relacionadas con la manipulación y transporte de residuos tóxicos, con la finalidad de reducir el riesgo sobre las personas, la propiedad y el medio ambiente (Government of Western Australia, 2004).

La ley de residuos regula el manejo de los desperdicios con el propósito de promover el reciclaje, mejorar la reutilización y reducir el riesgo (Minister of Water and Environmental Affairs South Africa, 2008). Asimismo, los gobiernos han propuesto planes de manejo de residuos, para respaldar las operaciones de las empresas y los esfuerzos por controlar la contaminación.

Las prácticas sugeridas buscan medir la continua reducción de residuos, alternativas de gestión de tratamiento y creación de entornos adecuados, y así, promover la prevención de la contaminación (Waste Authority, 2012). Las medidas se dan a conocer a través de guías metodológicas y manuales técnicos que implementan una gestión ambiental proactiva (Consejo Minero de Chile, 2000).

El marco legislativo de los países en estudio establece leyes que regulan y protegen el uso del agua en las operaciones mineras. El propósito de estas leyes es que el agua sea usada eficientemente y se evite el desperdicio y la contaminación. Por otra parte, ninguno de los marcos legales de la muestra, establecen una norma que promocióne la implementación de energías alternativas, en las operaciones de las empresas mineras.

Por otra parte, las legislaciones establecen leyes que exigen a las empresas mineras, la implementación de medidas para restaurar hábitats naturales. Las legislaciones desarrollan esquemas para recuperar el área degradada y promover el uso sustentable de los recursos naturales. La finalidad de estas medidas es evitar disturbios y pérdidas de la biodiversidad (Republic of South Africa, 2004).

Para que un gobierno incentive el desarrollo sustentable en las actividades económicas, el gobierno debe incentivar la aplicación de prácticas amigables con el medio ambiente (International Organization for Standardization, 2010). En efecto, el gobierno debe generar incentivos a las empresas que dirigen sus recursos a la implementación de prácticas ambientales, para que continúen con el aporte y sean ejemplo para otras empresas (Stiglitz, 1993). Asimismo, el gobierno debe sancionar el mal comportamiento ambiental de una empresa para que su gestión no sea cuestionada por la sociedad, al pasar por alto hecho perjudiciales para el ambiente y la sociedad (Stiglitz, 1993).

Perú registra protestas antimineras frecuentes, debido a que la sociedad teme que las actividades de las empresas mineras contaminen el medio ambiente y sus fuentes de subsistencia como la agricultura (Periódico La Jornada, 2011). En efecto, el gobierno procede a revocar permisos mineros concedidos a empresas, lo que a la vez no brindan estabilidad a las inversiones extranjeras; de modo que, empresas con buenas prácticas, que no obtienen reconocimientos ni incentivos, no querrán poner en riesgo sus esfuerzos por el cuidado y la protección ambiental (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

e. Prácticas justas de operación

Las preguntas del cuestionario referente este principio están enfocadas en asuntos como la corrupción, participación política responsable, competencia justa y el derecho de propiedad. Australia, Brasil y Chile obtuvieron 100 puntos; mientras que Canadá BC, Perú y Sudáfrica obtuvieron 75 puntos (tabla 4).

Todas las legislaciones establecen normas de conducta que prevengan la corrupción, tanto de funcionarios públicos como de representantes privados. Asimismo, el marco legislativo de los países en estudio, implementan leyes para controlar la competencia desleal con el propósito de proteger a competidores, consumidores o cualquier persona que puede verse afectada por un acto desleal.

Por otra parte, los gobiernos publican los procedimientos a seguir por los interesados en la obtención de títulos mineros, mediante el sitio web oficial. En efecto, todas las entidades concernientes a las regulaciones mineras brindan asesoría mediante guías, para facilitar el procedimiento a los interesados.

Adicionalmente, Brasil, Chile y Perú conceden el derecho a la consulta previa libre e informada a pueblos indígenas; de manera que cumplen con la exigencia de integrar su participación en las operaciones mineras.

El gobierno que no preste esfuerzo para el control de la corrupción y la competencia justa, perjudica la credibilidad, puesto que emite señales adversas a una buena gestión a la sociedad (International Organization for Standardization, 2010). La búsqueda de rentas y favores del estado podrían generarse al no mostrar una gestión sólida (Stiglitz, 1993).

Por ejemplo, en junio 2011 en Perú se registró la revocatoria de la concesión minera a la empresa canadiense Bear Creek. La razón para que el gobierno peruano tome esta decisión, fue debido a que la persona natural que efectuó el petitorio minero no reveló que además era representante de la empresa canadiense (Periódico La Jornada, 2011). Este hecho perjudica tanto la imagen de la empresa como la del gobierno, puesto que a pesar de los altos estándares que registran las empresas canadienses, no dan seguimiento al cumplimiento de los requerimientos de la legislación para otorgar permisos mineros; mientras que el gobierno no debería dejar pasar por alto el control sobre el perfil de los aspirantes a la obtención de títulos mineros y deberá prestar atención al reclamo de la sociedad (De Echave, 2011).

Por otra parte, la empresa estadounidense Doe Run que opera en Perú, es protagonista de varios atentados ambientales y sociales. Además, la intervención gubernamental peruana es cuestionada por la creación de leyes para conceder más prórrogas de las que están permitidas por la ley, al cumplimiento del Plan de Manejo y Adecuación Ambiental PAMA (Jiménez, 2009).

De hecho, en Perú las infracciones más comunes que se registra por las empresas mineras son infracciones a la legislación ambiental y a la legislación en materia de residuos sólidos. En efecto, las empresas que incumplen con la ley han recibido sanciones monetarias (Agencia Peruana de Noticias, 2011).

f. Consumidores

El cuestionario plantea preguntas relacionadas a las prácticas justas de información objetiva e imparcial, consumo sostenible y servicio de atención al cliente. Los resultados obtenidos fueron: Perú 100 puntos, Australia, Brasil, Canadá BC y Sudáfrica 83 punto y Chile 67, puesto que la información exigida por la legislación no incluye los impactos económicos y tampoco se publican los contratos de los proyectos mineros.

Anteriormente se indicó que las legislaciones exigen la publicación de información concerniente a las dimensiones de la sustentabilidad, mediante reportes y guías difundidas física y digitalmente.

Asimismo, las entidades responsables de los minerales proponen guías para asesorar a los interesados.

La comunidad posee acceso a detalles del proyecto minero a través de la exigencia de publicar estudios de impacto ambiental y declaraciones de sustentabilidad. Por otra parte, las entidades responsables del manejo de los minerales proporcionan información estadística, resultados financieros, variaciones en la producción, a través de sus páginas web oficiales, y el público tiene libre acceso a esta información.

Algunas entidades de los países de la muestra publican los contratos de los proyectos de minería a gran escala (Ministro de Energía y Minas Perú, 2002). En el apartado “Proceso de Consulta” del estudio de impacto ambiental, se crea un espacio para que la ciudadanía y las autoridades participen y den a conocer su criterio, en base a la información que se les proporciona (Department of Mines, 2003).

El gobierno debe fomentar el desarrollo económico y social de forma justa, equitativa y sostenible, y también, fomentar la protección del medio ambiente, exigiendo información concerniente a aspectos de las dimensiones de la sustentabilidad; de forma que incentiven la participación informada del estado y la sociedad, y que sea posible llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos (International Organization for Standardization, 2010).

g. Participación activa y desarrollo de la comunidad

Las preguntas del cuestionario sobre esta materia fundamental, indagan la participación que genera el gobierno a la comunidad en los proyectos mineros. Además, las preguntas indagan la promoción del gobierno sobre la educación y la cultura tradicional, la contribución al desarrollo científico, el desarrollo económico, la promoción de la salud y la generación de empleo.

Los resultados obtenidos reflejan que Australia obtuvo 82 puntos, Brasil 70 puntos, Canadá BC 74 puntos, Chile 79 puntos, Perú 64 puntos y Sudáfrica 58 puntos.

Los gobiernos de los países en estudio promocionan la educación en los sectores donde las empresas mineras desarrollan sus operaciones. En efecto, los gobiernos establecen programas y también, brindan asesoría a las empresas mineras sobre cómo pueden responder a las necesidades locales y así, aportar al desarrollo sustentable (Commonwealth of Australia, 2006).

Las legislaciones exigen estudios descriptivos sobre las condiciones técnicas, sociales, económicas, ambientales, y otras condiciones relacionadas a la protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas. Además, fijan la exigencia de programas de conservación y fortalecimiento de la cultura tradicional (Congresso Nacional do Brasil, 1995).

Por otra parte, las legislaciones de los países en estudio no exigen la contribución de las empresas mineras al desarrollo científico de universidades y laboratorios. Al contrario, los gobiernos se encargan de crear fondos de los beneficios recibidos por el cobro de tributos, con la finalidad de respaldar el desarrollo científico (Congreso nacional de Chile, 1994).

Asimismo, los gobiernos no exigen la contribución al desarrollo económico de las comunidades aledañas, sino que sugieren actos voluntarios para el alcance de una minería sustentable. Es decir, antes que ser una exigencia legal, es una alternativa para que las empresas aporten al desarrollo (Environmental Defender's Office of Western Australia, 2011).

El marco legal exige a las empresas mineras promover la seguridad y la salud de los habitantes de las comunidades locales (Congresso Nacional do Brasil, 1968). Además, la presentación de estudios y declaraciones, fomenta la promoción del empleo local, por parte de las empresas mineras (Oficina General de Gestión Social, 2003).

Para que la empresa incorpore a la comunidad en sus actividades y contribuya a su desarrollo, el gobierno debe facilitar la aproximación de la empresa a las comunidades y así, contribuir a su desarrollo, bajo valores democráticos y cívicos. Además, el gobierno podría asesorar a la empresa con proyectos de inversiones sociales que beneficien a la comunidad (International Organization for Standardization, 2010).

Especialistas de la actividad minera, temas ambientales e hídricos destacan la presión que ejercen las comunidades chilenas para ser incluidas en las actividades de las empresas mineras. Las comunidades exigieron el derecho a participar en el proyecto, haciéndole comprender al gobierno también de la importancia de su interacción. Como resultado se identifica mayor compromiso de las empresas mineras con las comunidades, gracias a su exigencia (La República, 2012)

Por otra parte, las condiciones críticas que se reflejan en Bitian, China, a causa de las operaciones de la empresa Zijin Mining, perjudican la calidad de vida de los habitantes de esta ciudad, negando cualquier tipo de desarrollo. La contaminación del río Ting ha provocado daños perjudiciales a los habitantes de Bitian; inclusive se resalta el incumplimiento de la ley de protección ambiental, puesto que ante incidentes ambientales los habitantes que podrían verse afectados deben ser informados a tiempo. Además, el índice de mortalidad de los habitantes de Bitian por causa de cáncer de esófago, sigue en aumento, aunque las cifras del índice de cáncer proporcionadas por organismos públicos no generan credibilidad en los habitantes (Chumanmin, 2011).

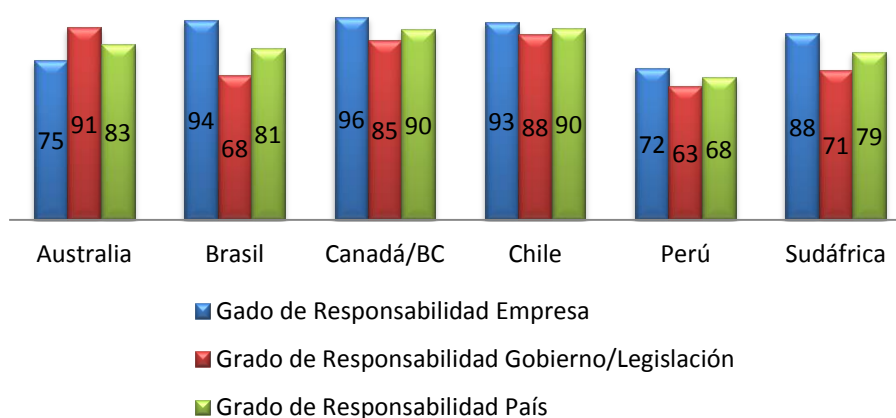
En efecto, cabe recalcar que los regímenes autoritarios impiden la formación de la presión social y asociaciones de ciudadanos que exijan la protección de los derechos civiles. De manera que, el gobierno debe proporcionar el bienestar de los habitantes de las comunidades y así, exigir a la empresa minera un comportamiento responsable, como sucede en el caso de Chile (La República, 2012).

Los resultados obtenidos en la sección de Materias Fundamentales del cuestionario, revelan que Australia Occidental cumple con mayor grado los aspectos de la minería responsable, al obtener 82 puntos; le sigue Chile con 79 puntos, Canadá BC con 74 puntos, Perú con 64 puntos y Sudáfrica con 58 puntos, como se señala en el gráfico 7.

3. Análisis de Resultados

Según el estudio del grado de responsabilidad, analizado bajo el cuestionario desarrollado en base a los criterios de la guía de la norma ISO 26000, aplicado a empresas mineras y legislaciones y gobiernos de los países de la muestra, los países con mayor grado de responsabilidad minera son Canadá (BC) y Chile con 90 puntos (gráfico 8). En ambos casos, el grado de responsabilidad de la empresa es mayor al grado de responsabilidad del gobierno y la legislación. Al promediar los resultados por principios y materias de empresas y gobiernos, se plantea el análisis del país.

Gráfico 7
Resultados del grado de responsabilidad de los países



Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

En el caso de Canadá (BC), seis de los siete principios cumplen al 100% los estándares de la guía ISO 26000; salvo el principio de rendición de cuentas que alcanzó 81 puntos, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5
Principios de responsabilidad social, Canadá

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	81
TRANSPARENCIA	100
COMPORTAMIENTO ÉTICO	100
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	100
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	100
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	100

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

En cuanto a las materias fundamentales de la RS, la materia de gobernabilidad adquirió 100 puntos; mientras que 40 puntos en la materia participación activa y desarrollo de la comunidad, como se señala en la tabla 6.

Tabla 6
Materias fundamentales de responsabilidad social, Canadá

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	100
DERECHOS HUMANOS	91
PRÁCTICAS LABORALES	87
MEDIO AMBIENTE	93
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	88
ASUNTOS DE CONSUMIDORES	88
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	40

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Chile obtuvo 100 en la mayoría de los principios, únicamente rendición de cuentas obtuvo 88 y transparencia 96 puntos, como se muestra en la tabla 7.

Tabla 7
Principios de responsabilidad social, Chile

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	88
TRANSPARENCIA	96
COMPORTAMIENTO ÉTICO	100
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	100
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	100
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	100
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	100

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Las materias fundamentales que fueron cumplidas al 100% fueron: gobernabilidad y prácticas justas de operación. En tanto que la materia fundamental con menor puntaje fue participación activa y desarrollo de la comunidad con 28 puntos, como indica la tabla 8.

Tabla 8
Materias fundamentales de responsabilidad social, Chile

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	100
DERECHOS HUMANOS	88
PRÁCTICAS LABORALES	95
MEDIO AMBIENTE	90
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	100
ASUNTOS DE CONSUMIDORES	83
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	28

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Australia Occidental es el segundo país con 83 puntos. Sin embargo, es el único país de la muestra que obtuvo mayor grado de responsabilidad en el gobierno y la legislación, que en el grado de la empresa, con la diferencia de 16 puntos. Los estándares legales e institucionales de la gestión del sector extractivo en Australia Occidental, son reconocidos a nivel internacional. De hecho, ocupa el segundo lugar del índice de Gobernabilidad de Recursos del Instituto Revenue Watch (Revenue Watch Institute, 2013). Los principios con mayor puntuación son: rendición de cuentas, respeto a los intereses de las partes interesadas y respeto a la normativa internacional de comportamiento, como señala la tabla 9.

Tabla 9
Principios de responsabilidad social Australia, Australia

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	100
TRANSPARENCIA	96
COMPORTAMIENTO ÉTICO	88
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	100
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	50
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	100
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	50

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

La tabla 9 muestra que Australia Occidental obtuvo en la materia gobernabilidad obtuvo 100 puntos; mientras que participación activa y desarrollo de la comunidad fue la más baja con 52 puntos.

Tabla 10
Materias fundamentales de responsabilidad social, Australia

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	100
DERECHOS HUMANOS	76
PRÁCTICAS LABORALES	91
MEDIO AMBIENTE	90
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	92
ASUNTOS DE CONSUMIDORES	81
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	52

Fuente: Cuestionario de la investigación
Elaboración: Alexandra Torres

En tercer puesto, Brasil con 83 puntos, tabla 11. El grado de responsabilidad de la empresa es mayor que el del gobierno/legislación, con una diferencia de 26 puntos. Las puntuaciones más altas fueron: rendición de cuentas, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la normativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos humanos.

Tabla 11
Principios de responsabilidad social, Brasil

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	100
TRANSPARENCIA	50
COMPORTAMIENTO ÉTICO	44
RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	100
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	100
RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	100
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	100

Fuente: Cuestionario de la investigación
Elaboración: Alexandra Torres

En cuanto a las materias fundamentales, prácticas justas de operación fue la materia con mayor puntuación con 100 puntos. Por otra parte, gobernabilidad obtuvo el menor puntaje con 50 puntos, como se muestra en la tabla 12.

Tabla 12
Materias fundamentales de responsabilidad social, Brasil

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	50
DERECHOS HUMANOS	93
PRÁCTICAS LABORALES	93
MEDIO AMBIENTE	90
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	100
ASUNTOS DE CONSUMIDORES	85
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	52

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

A continuación, en cuarto lugar Sudáfrica con 79 puntos. El grado de responsabilidad de la empresa es mayor con 17 puntos de diferencia. Seis de los siete principios se cumplieron al 100%, solo en transparencia obtuvo 41 puntos, como lo indica la tabla 13.

Tabla 13
Principios de responsabilidad social, Sudáfrica

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	100
TRANSPARENCIA	40
COMPORTAMIENTO ÉTICO	100
RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	100
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	100
RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	100
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	100

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

Por parte de las materias fundamentales, Sudáfrica obtuvo 90 puntos en la materia de medio ambiente, y la puntuación más baja fue participación activa y desarrollo de la comunidad con una puntuación de 40 puntos, como señala la tabla 14.

Tabla 14
Materias fundamentales de responsabilidad social, Sudáfrica

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	50
DERECHOS HUMANOS	62
PRÁCTICAS LABORALES	83
MEDIO AMBIENTE	90
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	71
ASUNTOS DE CONSUMIDORES	85
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	40

Fuente: Cuestionario de la investigación
Elaboración: Alexandra Torres

Finalmente, Perú en quinto lugar con 68 puntos. El grado de responsabilidad de la empresa es mayor al grado de responsabilidad del gobierno/legislación. Los principios que obtuvieron 100 puntos fueron: respeto a los intereses de las partes interesadas y respeto a la normativa internacional de comportamiento.

Tabla 15: Principios de responsabilidad social, Perú

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	88
TRANSPARENCIA	44
COMPORTAMIENTO ÉTICO	38
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	100
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	50
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	100
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	50

Fuente: Cuestionario de la investigación
Elaboración: Alexandra Torres

La materia fundamental con mayor puntuación es prácticas laborales con 95 puntos y la más baja fue gobernabilidad con 50 puntos, como lo señala la tabla 16.

Tabla 16
Materias fundamentales de responsabilidad social, Perú

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	50
DERECHOS HUMANOS	60
PRÁCTICAS LABORALES	95

MEDIO AMBIENTE	75
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	71
ASUNTOS DE CONSUMIDORES	93
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	52

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

En efecto, este capítulo permitió conocer la forma en que las empresas y gobiernos aplican la minería responsable. Además, permitió conocer las empresas y gobiernos con mayor grado de minería responsable. En el próximo capítulo se plantea la aplicación del mismo cuestionario a Ecuador, con la finalidad de conocer el estado de la minería ecuatoriana, en cada aspecto de la minería responsable.

En este capítulo, según la información recopilada para esta investigación, se resalta que la gestión de CODELCO es remarcable gracias a los esfuerzos direccionados al relacionamiento con la sociedad. En efecto, también se ha destacado la participación de la sociedad chilena en los proyectos mineros, gracias sus exigencias. El resultado de una sociedad estricta ha permitido que la empresa y el gobierno ajusten sus estructuras de gestión, para actuar en función del bienestar de la sociedad. La interrelación entre sociedad, gobierno y empresa minera refleja el buen entendimiento de la industria minera en Chile.

Por otro lado, la legislación brasileña concede brechas en el comportamiento de las empresas mineras, en cuanto a la transparencia de su gestión. Mientras que organismos especializados en la transparencia y rendición de cuentas de empresas extractivas, sugieren a la empresa Vale el mejoramiento en este ámbito. Es decir, la brecha que deja la legislación no es cubierta por la empresa, incumpliendo su responsabilidad.

La sociedad peruana expresa su rechazo a proyectos mineros por medio de manifestaciones frecuentes, debido a los efectos de la minería sobre la calidad de vida. Por una parte, las empresas perciben grandes índices de accidentalidad y por otro lado, el gobierno peruano se ha visto envuelto en varios acontecimientos que cuestionan dicho comportamiento y la eficiencia de la legislación. En efecto, la voz de la sociedad peruana reclama mayor protección a su bienestar, exigiendo el buen comportamiento del gobierno; caso contrario, la sociedad no apoyará al desarrollo del sector minero.

Finalmente, la percepción general de las empresas mineras chinas se basa en acontecimientos contraproducentes en el ámbito laboral, social y medioambiental. Localmente, el gobierno chino no fomenta el comportamiento sustentable de las empresas mineras chinas. Mientras que, internacionalmente las empresas han ganado una pésima reputación debido a su desempeño. De manera que, la falta de control, supervisión y exigencia del gobierno chino sobre el desempeño de las empresas, se refleja a nivel internacional.

Capítulo 4

Grado de minería responsable en Ecuador

El presente capítulo indaga el estado actual de la minería responsable en Ecuador. En efecto, a través de la aplicación del cuestionario se rescatará los aspectos donde Ecuador o la empresa minera Ecuacorriente en el proyecto “Mirador”, deberán reforzar su intervención para enfocarse en un desarrollo minero responsable y posteriormente, comparar y rescatar las propuestas de minería responsable de los países en estudio.

1. Grado de minería responsable de la empresa

Principios de la responsabilidad social

Tabla 17
Principios de responsabilidad social de la empresa, Ecuador

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	100
TRANSPARENCIA	85
COMPORTAMIENTO ÉTICO	44
RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	50
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	100
RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	0
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	0

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Rendición de cuentas

La empresa Ecuacorriente obtuvo la puntuación de 100, puesto que cumple con la información requerida en este principio. Los impactos económicos que reconoce la empresa Ecuacorriente incluyen el cumplimiento de la legislación ecuatoriana, la maximización de beneficios al estado y a los accionistas, y el pago de impuestos y regalías.

Los impactos sociales que reconoce se relacionan a la alteración del medio con la presencia de la empresa y la dificultad de diálogo. Los impactos ambientales identificados por la empresa incluye la deforestación. Asimismo, la empresa revela el monto de los pagos de retenciones de impuestos al estado, que en 2008 llegó a \$665.817,00 (Ecuacorriente S.A., 2008).

Conforme al marco teórico propuesto para la investigación, se indicó que la revelación de información pone en manifiesto el compromiso de la empresa para con las partes interesadas, y en este sentido, garantizar su aporte al desarrollo sustentable (International Organization for Standardization, 2010).

A pesar de la puntuación obtenida, la rendición de cuentas de la empresa Ecuacorriente es considerada como una práctica sesgada, puesto que de acuerdo a entrevistas, los habitantes de la comunidad que poseen la posibilidad de relacionarse con la empresa, apoyan el desarrollo del proyecto; mientras que los habitantes que se oponen al proyecto, han sido excluidos de la rendición de cuentas por parte de la empresa (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011)

b. Transparencia

La empresa registró 85 puntos debido a la falta de información de los dirigentes, la falta de claridad en la identificación de las partes interesadas y la poca facilidad de acceso a la información en su página web.

Las políticas que revela la empresa integran políticas de salud, seguridad, ambiente y comunidad (Ecuacorriente S.A, 2008). Por otra parte, la empresa comunica el proceso que sigue para la toma de decisiones, a través de la gobernabilidad de la empresa y el Mandato del comité de Nominaciones (Ecuacorriente S.A., 2008).

Además de las actividades mineras que lleva a cabo, la empresa revela actividades legales, sociales y ambientales que conforman sus responsabilidades. Las actividades legales ambientales incluyen la presentación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, el plan de Manejo Ambiental y auditorías ambientales. Esta obligación ha recibido críticas puesto que manifiestan que el EIA aprobado por el Ministerio del Medio Ambiente, no respalda su estudio con documentación suficiente (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011). Este hecho podría ser verificado si la empresa difundiera al público el EIA realizado, y así permitir a las partes interesadas formular sus propias críticas.

Por otra parte, Ecuacorriente difunde la localización de sus operaciones; estas se desarrollan en Zamora Chinchipe y Morona Santiago (Ecuacorriente S.A., 2008).

El proceso de rendición de cuentas que establece Ecuacorriente consiste en la creación del Comité de Auditoría. El comité asiste al directorio con sus responsabilidades financieras, contables, controles internos, revelación de controles y cumplimiento legal. Además, la empresa cuenta con auditoría externa que reporta al comité (Ecuacorriente S.A., 2008).

La información que se publica sobre los dirigentes no es completa, apenas revela los nombres de tres dirigentes. Por otra parte, la empresa evalúa la responsabilidad social a través de la medición de los riesgos de medio ambiente, de procesos de consultas y comunicación con las comunidades y grupos de interés, y la integración de objetivos locales, regionales y nacionales (Ecuacorriente S.A., 2008).

La empresa revela la identidad de algunas de sus partes interesadas; sin embargo, la información está dispersa y no hay un apartado específicamente al reconocimiento de identidad (Ecuacorriente S.A., 2008). La información de la empresa es accesible por medio de su página web; aunque la información está desactualizada desde el año 2008, la web oficial no es dinámica y los links no tienen conexión con la información que debería contener.

No obstante, la información que revela la empresa sobre el relacionamiento entre Ecuacorriente y la comunidad es cuestionada por el sesgo que presenta entre los ciudadanos que poseen tierras o posibilidades de proveer a la empresa y los ciudadanos que no poseen estas posibilidades. En efecto, la organización Collaborative Learning Projects informó a la empresa sobre la desigualdad de la presentación de información sobre sus actividades (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

La empresa debe considerar que la transparencia además de permitir a las partes interesadas conocer y evaluar el impacto de sus decisiones sobre sus intereses, reconocen esfuerzos con los que gestiona las consecuencias de sus decisiones, generando la confianza en las partes interesadas (International Organization for Standardization, 2010). En efecto, Ecuacorriente podría evitar y reducir la generación de debates que lleven a la comunidad a rechazar el proyecto, como lo sucedido con la empresa Vale (Aguilar, 2012).

c. Comportamiento ético

La empresa alcanzó 44 puntos en este principio. La empresa no revela los valores ni principios por los que se rige; tampoco revela la estructura organizacional. A pesar de que la empresa identifica a las partes interesadas, lo hace de manera dispersa e incompleta; asimismo, la empresa revela la manera en que interactúa con éstas.

La empresa se relaciona con el estado por medio de los pagos de impuestos, por el cumplimiento de la legislación y por la soberanía de los minerales. La empresa se relaciona con las comunidades por medio de foros y capacitaciones, campañas que impulsan la cultura y el deporte, la educación y la salud. La empresa se relaciona con los trabajadores a través de capacitaciones, entrenamientos y programas de salud y seguridad ocupacional (Ecuacorriente S.A., 2008).

Adicionalmente, la empresa publica el código de comportamiento a través de la página web oficial y promueve su cumplimiento en los trabajadores pero no en su cadena de valor. Por otra parte, la empresa no manifiesta la creación de planes de conservación de especies de animales en la zona (Ecuacorriente S.A., 2008).

La empresa para promover una buena relación con las partes interesadas y un buen rendimiento, debería considerar las prácticas de CODELCO para mejorar aspectos relacionados al comportamiento ético, a través de programas que creen inserción de las partes interesadas. Con ello la empresa evitaría o reduciría el riesgo de comportamientos incorrectos por parte de sus trabajadores o de las empresas colaboradoras, así como también, evitar la presión social (International Organization for Standardization, 2010).

El código de comportamiento difundido por la empresa para propios y terceros evita inconvenientes como los inconvenientes experimentados por Vale, debido al reclamo de ONGs por problemas de condiciones laborales y ambientales en la cadena de valor (Aguilar, 2012).

d. Respeto a los intereses de las partes interesadas

La empresa obtuvo 100 puntos, puesto que, organiza foros y reuniones con representantes de la comunidad, con la finalidad de atender sus inquietudes y crear estrategias en base las inquietudes (Ecuacorriente S.A., 2008).

Por otra parte, la empresa establece la política de denuncias de irregularidades, que proporciona canales para atender las preocupaciones de trabajadores y proveedores sobre cualquier aspecto en el trabajo (Ecuacorriente S.A., 2008).

Anterior se indicó que la denuncia presentada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos revela que la difusión de información por parte de la empresa Ecuacorriente es sesgada a ciertos grupos de habitantes de la comunidad, que apoyan el proyecto minero por los beneficios que obtendrán gracias al proyecto (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011). En efecto, este comportamiento genera divisiones entre la comunidad, perjudicando sus intereses colectivos y el bienestar social.

La empresa podría verse afectada por boicots generados por las partes interesadas, perjudicando su imagen y comprometiendo la ejecución de sus actividades futuras (Stiglitz, 1993). Para evitar estos acontecimientos, la empresa debe analizar e identificar a sus partes interesadas para no pasar por alto las expectativas de los posibles afectados (International Organization for Standardization, 2010).

Asimismo, la presión social llevará a la empresa a mejorar las relaciones con las comunidades, como sucedió en Chile, aunque este tipo de manifestaciones compromete la imagen de la empresa y el desempeño regular de sus actividades, como ya lo vivió la empresa Ecuacorriente en 2006, cuando sus operaciones fueron suspendidas por la conmoción de la sociedad (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011)

e. Respeto al principio de legalidad

A través del código de conducta, la empresa Ecuacorriente establece como su primer compromiso el cumplimiento de la ley. En efecto, la empresa señala que todos sus colaboradores cumplirán con las leyes, comprometiendo su comportamiento bajo las indicaciones nacionales.

Asimismo, la empresa brinda la alternativa de que sus empleados recurran a su supervisor en el caso de tener alguna duda sobre el requerimiento legal. Por este motivo, la empresa registra una puntuación de 100 (Ecuacorriente S.A., 2008).

Los resultados de este apartado generan dudas en la práctica, debido a que la empresa ha dejado pasar por alto ciertas obligaciones, principalmente en aspectos del relacionamiento con la

comunidad y procesos de información y gestión ambiental (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento

Ecuacorriente no publica ninguna información sobre el cumplimiento de la normativa de comportamiento internacional; no posee certificaciones de normas internacionales, ni seguimiento de estándares internacionales de reporte; por este motivo consiguió 0 puntos en el principio.

La ausencia del cumplimiento de la normativa de comportamiento internacional representa una falta de salvaguardas para la ley en aspectos ambientales o sociales adecuados. En consecuencia, pone en riesgo a partes interesadas, por brechas que podrían generar casos que contradigan la normativa internacional de comportamiento (International Organization for Standardization, 2010). Además, la ausencia representa menos garantías de la calidad de servicio que presta la empresa porque no se sujeta a estándares internacionales; en efecto, genera una señal negativa en las partes interesadas (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

g. Respeto a los derechos humanos

La empresa obtuvo 0 puntos en el principio de los derechos humanos, puesto que no menciona su reconocimiento, ni los promueve en sus empleados, ni en su cadena de valor. Adicionalmente, la empresa es criticada por la falta de inclusión de las comunidades en la toma de decisiones de la empresa y también por el proceso que ha seguido para la adquisición de las tierras de propietarios locales (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

De acuerdo a los resultados obtenidos en los requerimientos de los principios de responsabilidad social aplicados a la empresa Ecuacorriente, se registra que la empresa debe reforzar el respeto a la normativa internacional de comportamiento y el respeto a los derechos humanos, pues la puntuación alcanzada es la más baja.

Materias fundamentales de la responsabilidad social

Tabla 18
Materias fundamentales de la responsabilidad social de la empresa, Ecuador

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	100
DERECHOS HUMANOS	36
PRÁCTICAS LABORALES	64
MEDIO AMBIENTE	13
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	50

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Gobernabilidad

La empresa obtuvo 100 puntos en este apartado (tabla 18). Ecuacorriente difunde el cumplimiento de la responsabilidad social en sus operaciones, a través del código de conducta, la política de sustentabilidad y la política de salud, seguridad, ambiente y comunidad (Ecuacorriente S.A, 2008).

De este modo, la empresa involucra al personal en las actividades socialmente responsables.

Contrariamente a lo expuesto por la empresa, existen denuncias que argumentan la falta de cumplimiento de los compromisos socialmente responsables expuestos por la empresa. Por ejemplo, la gestión ambiental no cuenta con participación de la comunidad y tampoco se llevan a cabo procesos de consultas como los establecidos por la ley (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

La gobernabilidad de la Empresa Ecuacorriente debería direccionar los esfuerzos de la empresa para alcanzar los objetivos planteados. La empresa daña su imagen al no revelar la conformación y proceso que sigue su gobernabilidad, puesto que no permite la verificación de la gestión de los impactos producidos. La empresa debería dar a conocer que también incluye las expectativas de las demás partes interesadas en sus toma de decisiones (International Organization for Standardization, 2010).

b. Derechos humanos

Ecuacorriente obtuvo 26 puntos en la presente materia fundamental. En cuanto a la materia fundamental de Derechos Humanos, la empresa no reconoce ni promueve su cumplimiento. Tampoco identifica ni previene los impactos que sus actividades podrían amenazar los derechos humanos. Por otra parte, bajo el código de conducta se establece medidas para combatir riesgos de complicidad, mediante la prohibición de regalos o beneficios excesivos a terceros (Ecuacorriente S.A., 2008).

En los asuntos de resolución de reclamaciones, la empresa proporciona mecanismos de reclamaciones para que las partes interesadas den a conocer sus quejas. Las inquietudes de las comunidades son atendidas por medio de foros; mientras que las inquietudes de empleados y proveedores poseen canales para exponer sus inquietudes. Sin embargo, no revela las reclamaciones que el público le ha presentado.

Por la parte de la discriminación de grupos vulnerables, la empresa no comunica si promueve la capacitación para que los miembros de estos grupos conozcan sus derechos, tampoco les proporciona acceso al empleo en la empresa, ni acceso a la educación.

Asimismo, la empresa comunica la compensación económica que realiza por los daños a las personas afectadas. Por otra parte, la empresa contribuye al desarrollo de las comunidades, por medio de la readecuación de escuelas (Ecuacorriente S.A., 2008).

En el apartado de derechos civiles y políticos, la empresa no menciona el reconocimiento del derecho de los trabajadores a la afiliación a sindicatos. Por parte de los derechos económicos, sociales y culturales, la empresa reconoce y promueve los derechos a la educación, salud y bienestar. No obstante, la empresa no publica la evaluación de impacto que realiza. De la misma manera, la empresa no revela los planes de distribución de agua que plantea.

Ecuacorriente contribuye con la provisión de servicios básicos a las comunidades, como por ejemplo el alcantarillado. Por otra parte, la empresa no menciona el rechazo al trabajo infantil; sin embargo, a través del código de conducta, la empresa sí establece políticas que combaten la discriminación (Ecuacorriente S.A., 2008).

La información de la intervención de la empresa en aspectos relacionados con esta materia fundamental es cuestionada por la Comisión Ecuamélica de Derechos Humanos, puesto que el programa de adquisición de tierras llevado a cabo por la empresa Ecuacorriente se ha definido por negociaciones individualizadas, según el criterio de los habitantes de la comunidad (Comisión Ecuamélica de Derechos Humanos, 2011).

Asimismo, la Comisión Ecuamélica presenta la denuncia de la falta de participación de la población local, puesto que la empresa no proporciona mecanismos de accesibilidad a la participación en la toma de decisiones en aspectos ambientales. Asimismo, la comisión señala que los procesos de difusión de información es poco detallada (Comisión Ecuamélica de Derechos Humanos, 2011).

En efecto, para que la empresa evite sanciones debe reconocer los derechos humanos y así, reducir riesgos contractuales o la presión social, por causa de que la empresa no cumple con el ordenamiento público del país y además, no asegure la protección de los derechos de los individuos sobre posibles abusos. De este modo, la empresa evitará que su gestión sea calificada como perjudicial para el entorno y la sociedad, como se considera a las empresas chinas (Mullins, 2012).

c. Prácticas laborales

En la materia fundamental de Prácticas Laborales, Ecuacorriente alcanzó 59 puntos, debido a que de acuerdo a la información obtenida, la empresa requiere fortalecer las relaciones laborales, el diálogo social y la salud y seguridad ocupacional.

La empresa manifiesta su compromiso y el de sus trabajadores con la responsabilidad social y procura la implementación de prácticas laborales socialmente responsable, a través de su código de comportamiento que alude a la política de salud, seguridad, ambiente y comunidad (Ecuacorriente S.A, 2008).

Por otra parte, la empresa a pesar de dar asesoría sobre el cumplimiento de la ley cada vez que los empleados requieran, no menciona brindar la capacitación que se debería dar para evitar la

infracción de las leyes vigentes. Además, la empresa tampoco capacita a los proveedores sobre el cumplimiento del marco legislativo.

La empresa no comunica el tipo de información que intercambia con el estado; no obstante, comunica el intercambio de información que realiza con los trabajadores, a través de capacitaciones para asegurar el uso responsable de los equipos y también establece la política de Denuncias de Irregularidades, que plantea una alternativa para que sus empleados reporten sus preocupaciones sin miedo a represalias, discriminación o desventajas (Ecuacorriente S.A., 2008).

La empresa realiza planes de acción, foros y reuniones de trabajo con el objetivo de plantear obras a realizarse en el sector, a partir de los requerimientos de la comunidad. En cuanto al planteamiento de políticas y normas de salud y seguridad, la empresa fija una política con la finalidad de minimizar los riesgos ambientales, de salud y seguridad; capacitando y equipando a sus empleados, valorando los valores culturales y manteniendo sistemas ambientales (SHANON, 2008). Por otra parte, la información de salud que difunde la empresa es sobre las campañas de salud que realiza en la comunidad, más no en sus empleados.

En cuanto a los asuntos de desarrollo humano y formación en el lugar de trabajo, la empresa promueve la formación de sus empleados a través de capacitaciones y entrenamiento, a fin de asegurar su desempeño responsable. Además, la empresa establece políticas que combatan la discriminación en su código de trabajo; de manera que, se cree un ambiente de trabajo de respeto y de igualdad de oportunidades (Ecuacorriente S.A., 2008).

De acuerdo a la experiencia y percepción internacional, el desempeño de las empresas mineras chinas se caracteriza por malas prácticas ambientales y laborales (Mullins, 2012). De hecho, el registro de accidentes por parte de las empresas chinas se revela tanto local, como internacionalmente; por ejemplo, accidentes comunicados por la prensa peruana (Flores, 2014). La ausencia de buenas prácticas laborales provoca problemas sociales que podrían desatar conflictos por parte de los trabajadores (International Organization for Standardization, 2010).

d. Medio ambiente

Ecuacorriente obtuvo 13 puntos, pues la información referente a la prevención de contaminación, uso sostenible de los recursos y protección del medio ambiente, no basta para completar los requerimientos establecidos por la guía de la norma ISO 26000.

De acuerdo al reporte socio ambiental de la empresa y a la información que difunde al público, la empresa no difunde datos de indicadores ambientales en su gestión. A pesar de no iniciar sus actividades extractivas, la empresa ya ha desarrollado monitoreo de generación de acidez, monitoreo de agua y manejo de desecho pero la información no es revelada.

La empresa tampoco revela información sobre los métodos aplicados para reducir la contaminación y los residuos, ni las cantidades de materiales tóxicos que libera.

La política de salud, seguridad, ambiente y comunidad, compromete a la empresa a promover la responsabilidad en el desempeño de las tareas ambientales en todos los niveles de la organización y en el conjunto de socios comerciales (Ecuacorriente S.A, 2008). Los riesgos que reconoce la empresa incluyen riesgos sobre el entorno, el ambiente y la biodiversidad.

En los asuntos de uso sostenible de los recursos, la empresa no revela la información sobre programas de consumo eficiente de energía y agua. Tampoco manifiesta la introducción de energías alternativas en sus operaciones e instalaciones. Asimismo, la empresa no informa si reusará el agua en sus operaciones para efectivizar su consumo (Ecuacorriente S.A., 2008).

La empresa ha desarrollado programas para preservar el medio ambiente, con los que se compromete a recuperar la biodiversidad de la zona, mediante proyectos de reforestación, implementación de viveros y jardín botánico (Ecuacorriente S.A., 2008). Sin embargo, la empresa no menciona el planteamiento de programas para reducir el impactos ambiental. Por otra parte, establece controles de la cantidad y calidad de agua, más no profundiza la información ni menciona medidas para su preservación.

La empresa debería mostrar mayor compromiso con el medio ambiente para asegurar protección, salud y bienestar a la sociedad; de manera que mientras no proporcione educación y capacitación ambiental, no promueve un criterio de producción y consumo sostenible (International Organization for Standardization, 2010). En efecto, para que la empresa cree conciencia ambiental se sugiere proporcionar capacitación y retroalimentación de los procesos productivos y los riesgos ambientales, para no exceder los límites de la tierra (Meadows, Randers, & Meadows, 2004).

Al no revelar información sobre métodos aplicados para reducir la contaminación, ni la publicación de la evolución de indicadores de gestión ambiental, la empresa genera un espacio para que las partes interesadas cuestionen su gestión; es así como se presentan denuncias sobre la falta de gestión ambiental e inclusión social en dicho proceso, por parte de organismos no gubernamentales (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, 2011).

e. Prácticas justa de operación

La empresa obtuvo 50 puntos, pues de acuerdo a los resultados de la información obtenida, la empresa requiere fortalecer la promoción de la competencia justa y la promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor.

Los asuntos relacionados a la anticorrupción establecen el requerimiento de normas de conducta que prevengan la corrupción. Ecuacorriente cumple con los requerimientos bajo el código de conducta y sanciona los casos de fraude y soborno (Ecuacorriente S.A, 2008).

La empresa apoya al gobierno en el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, respalda el proceso de campañas de vacunación de ganado, campañas de salud y de seguridad en las comunidades (Ecuacorriente S.A., 2008).

Por otra parte, la empresa no implementa políticas que promuevan la competencia justa y tampoco establece medidas que direccionen la compra y la distribución, ni la contratación para fomentar la responsabilidad social en la cadena de valor.

A través de la política de Salud, Seguridad, Ambiente y Comunidad, la empresa se compromete a respetar y promover la cultura, tradiciones y valores de las comunidades donde opera (Ecuacorriente S.A, 2008).

Conforme a lo citado anteriormente, si la empresa no propone prácticas justas de operación comprometen su relación con otras empresas y complican la obtención de resultados positivos. La característica de dependencia de la producción con otras producciones, compromete el entendimiento con las partes interesadas y la obtención de resultados positivos a nivel general (Buchanan & Tollison, 2009). En efecto, la empresa debería poner atención en aspectos como la competencia justa y la promoción de la responsabilidad social en la cadena de valor, para no comprometer su rendimiento y su relación con terceros.

f. Consumidores

La empresa obtuvo 79 puntos, puesto que requiere promover el consumo sostenible mediante la publicación de información referente a los impactos que genera la adquisición de sus productos, y requiere reforzar los canales de atención y resolución de quejas.

De acuerdo a la información accesible que proporciona la empresa, y como se indicó anteriormente, la empresa reconoce los impactos económicos como el cumplimiento de la legislación ecuatoriana, la maximización de beneficios al estado y a los accionistas, y el pago de impuestos y regalías.

Los impactos sociales que revela Ecuacorriente se relacionan a la alteración del medio con la presencia de la empresa y la dificultad de diálogo. Finalmente, los impactos ambientales identificados por la empresa incluye la deforestación. Asimismo, la empresa revela el monto de los pagos de retenciones de impuestos al estado (Ecuacorriente S.A., 2008).

La empresa no proporciona información sobre los impactos causados por la compra de sus productos. En cuanto a los asuntos de atención al cliente, Ecuacorriente crea canales de resolución de quejas para los empleados, pero no para la comunidad.

Por parte de los asuntos de acceso a servicios esenciales, la empresa contribuye a la comunidad con la provisión de servicios básicos como alcantarillado, salud, seguridad y educación (Ecuacorriente S.A., 2008).

Si la empresa continúa sin publicar información sobre los impactos que genera la adquisición de sus productos, la empresa muestra la falta de compromiso con las necesidades legítimas de los consumidores; de manera que no promueve el desarrollo sustentable. En efecto, se daría por entendido que la empresa distorsiona información sobre sus productos y asimismo, sobre la toma de decisiones. Consecuentemente, la empresa deja pasar por alto su compromiso con el bienestar de las presentes y futuras generaciones (International Organization for Standardization, 2010). La empresa

corre el riesgo de fomentar la presión social si no mejora la publicación de información confiable a la sociedad (Stiglitz, 1993).

g. Participación activa y desarrollo de la comunidad

La puntuación de la empresa en la materia fundamental Participación Activa y Desarrollo de la Comunidad, fue 69 puntos. Ecuacorriente debe fomentar el acceso a la tecnología de las comunidades y asegurar la inversión social.

La empresa ha levantado consultas para conocer el punto de vista y la posición de la comunidad en cuanto al tema minero. Como resultado de las consultas consiguió que el 80% de la comunidad de El Pangui, desconoce sobre el tema (Ecuacorriente S.A., 2008). A pesar de la información difundida, organismos no gubernamentales expresan que los mecanismos propuestos para el desarrollo de consultas no fue el adecuado y el proceso discriminó a grupos sociales (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

Por otra parte, la empresa promueve programas de desarrollo basados en la educación, la salud y la seguridad de las comunidades locales (Ecuacorriente S.A., 2008).

Asimismo, la empresa promueve la creación de empleo y desarrolla las habilidades de grupos desfavorecidos, mediante la implementación de proyectos productivos como la avicultura y piscicultura, con la finalidad de mejorar la alimentación de los miembros de la comunidad. Así también capacita a profesores para formar y actualizar sus conocimientos (Ecuacorriente S.A., 2008).

Ecuacorriente facilita el acceso de la comunidad a la tecnología; sin embargo, no contribuye al desarrollo científico en universidades ni laboratorios. Por otra parte, la empresa formula programas de negocios llamado “Gestión Microempresarial” para los habitantes de la comunidad. El propósito de estos programas es que los miembros de la comunidad desarrollen habilidades empresariales. Asimismo, la empresa da prioridad a la inclusión de miembros de la comunidad en sus actividades (Ecuacorriente S.A., 2008).

La empresa desarrolla campañas de salud en la comunidad y promueve campañas de prevención y concientización de enfermedades como el cáncer cérvicouterino (Ecuacorriente S.A., 2008).

Según denuncias contra la empresa Ecuacorriente, la empresa no poseen una relación equitativa y participativa con la comunidad, la empresa no contribuye a su desarrollo. De manera que, previo al desarrollo total de sus operaciones, la empresa debe mejorar la relación con la comunidad. Para lograrlo, la empresa debería mejorar la difusión de información sobre las inversiones sociales, lo que podría mejorar las relaciones con la comunidad (International Organization for Standardization, 2010).

El reconocimiento que han alcanzado empresas como AngloGold Ashanti, Vale, Newmont y BHP Billiton es ejemplo para que la empresa Ecuacorriente proponga alternativas de salud que además de integrar al gobierno ecuatoriano, podría reducir de casos de enfermedades en la región (International Council on Mining & Metals, 2014).

Los resultados de los requerimientos de las materias fundamentales reflejan que la empresa Ecuacorriente no presta la diligencia necesaria en aspectos relacionados a las materias de los derechos humanos y medio ambiente. Asimismo, la empresa podría mejorar los requerimientos de la materia fundamental de prácticas laborales.

2. Grado de minería responsable del gobierno y la legislación

Principios de la responsabilidad social

Tabla 19
Principios de responsabilidad social del gobierno, Ecuador

PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	75
TRANSPARENCIA	0
COMPORTAMIENTO ÉTICO	100
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	100
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	100
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	N/A
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	100

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Rendición de cuentas

El gobierno y la legislación de Ecuador obtuvieron 75 puntos en este principio (tabla 19), puesto que dentro de la exigencia de la publicación de información, la ley no incluye la rendición de cuentas de impactos económicos.

El artículo 88 de la ley minera exige difundir a las partes interesadas, la información de los posibles impactos sociales y ambientales, a partir del otorgamiento de la concesión minera y durante las etapas de extracción (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

La misma ley bajo el artículo 93, da a conocer los beneficios económicos para el Estado, estableciendo una regalía equivalente al menos del 5% sobre la venta de los minerales principales y secundarios. Adicionalmente, se recalca el 25% de impuesto a la renta, el 12% de las utilidades, el 70% sobre los ingresos extraordinarios y el 12% del impuesto al valor agregado (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

El gobierno ecuatoriano reduciría la incertidumbre en la sociedad, si apoyara la rendición de cuentas por parte de la empresa Ecuacorriente (North, 1990). De forma que, la empresa dé a conocer su

gestión y resultados, para que la sociedad formule argumentos que apoyen o rechacen la intervención de la empresa (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

El gobierno ecuatoriano debería considerar el reconocido alcance de la legislación minera chilena, gracias a la exigencia de la rendición de cuentas de las empresas. De manera que, la intervención social en actividades mineras como resultado de la rendición de cuentas, es destacada a nivel internacional por los resultados obtenidos (EITI, 2012).

El gobierno también debería considerar la asesoría de organismos no gubernamentales en aspectos de administración presupuestaria, con la finalidad de pronosticar de mejor manera las rentas y reducir la incertidumbre, como se planteó en Perú (Jungbluth, 2012).

b. Transparencia

El marco legal minero de Ecuador no establece procedimientos en la toma de decisiones de la empresa. Los procedimientos podrían estar enfocados hacia la conformación del directorio, accionistas, conformación de la junta, funciones de los actores y representantes de la empresa, y organigrama de la empresa minera.

Si el gobierno no exige transparencia a la empresa, no permitirá que las partes interesadas evalúen el impacto de las decisiones y actividades de la empresa sobre sus intereses (International Organization for Standardization, 2010). La transparencia en el sector minero por parte del estado, genera una utilización eficiente de los recursos públicos, como se registró en el caso de Chile (EITI, 2012).

c. Comportamiento ético

El organismo ecuatoriano encargado de los recursos naturales plantea guías de prácticas de presentación de informes (Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 2011); e instructivos para la acumulación y división del material de las áreas mineras (Directorio de la ARCOM, 2011). En efecto, el gobierno ecuatoriano obtuvo 100 puntos en el apartado del principio de responsabilidad social, tabla 19.

Las consecuencias que se produzcan por falta de códigos de comportamiento es que la empresa presente un comportamiento que produzca rupturas contractuales (Williamson, 2002). De modo que, la empresa requiere de estándares para adaptar su comportamiento a las exigencias de un país (Von Wieser, 1927).

Como se mencionó anteriormente, China proporciona beneficios a las empresas, que no presentan mayores exigencias en su gestión (Mullins, 2012). Sin embargo, para que la empresa actúe sustentablemente debe ajustarse a los límites de la capacidad de la tierra y a los derechos humanos (Meadows, Randers, & Meadows, 2004). En efecto, la empresa Ecuacorriente debe comprometerse con las expectativas del gobierno y la sociedad ecuatoriana, y así evitar cualquier tipo de ruptura contractual (Von Wieser, 1927).

d. Respeto a los intereses de las partes interesadas

La ley minera bajo el artículo 87 garantiza la ejecución de los procesos de participación y consulta social por parte del estado, a través de las entidades públicas concernientes. Los procesos de participación se llevan a cabo en función de los principios constitucionales y de la normativa vigente (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). En efecto, el Estado promueve la participación social con la finalidad de incentivar el desarrollo sustentable y el aprovechamiento racional de los recursos mineros.

Para que el gobierno mejore el entendimiento entre la empresa y la sociedad, y podría mejorar la percepción de especialistas en elaboración de los EIA, mediante el establecimiento de estándares (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, 2011).

Asimismo, para que el estado dé mayor credibilidad a su intervención y no genere cuestionamientos en el público, el estado debería transparentar los procesos de consulta y participación empleados en proyectos mineros; de manera que la empresa atiende las quejas y conflictos presentados por las partes interesadas (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, 2011).

En el caso chino, se resalta el reto sobre la protección ambiental y la salud de trabajadores y miembros de las comunidades, principalmente por la regulación del comportamiento y por las relaciones entre las partes interesadas. De hecho, la ejecución es ineficiente debido a los conflictos entre la protección ambiental y los beneficios económicos de proyectos irresponsables. Este hecho refleja la ambigüedad de las leyes chinas en aspectos de intermediación para alcanzar el entendimiento entre las partes interesadas (Mullins, 2012).

No obstante, la Comisión Ecuémica de Derechos Humanos manifiesta la falta de mecanismos de consulta y participación por parte del gobierno ecuatoriano, permitiendo que la empresa ponga en marcha sus estrategias de aproximación con la comunidad, sin control gubernamental (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, 2011).

e. Respeto al principio de legalidad

La normativa del sector minero es difundida por medio de las páginas web de las entidades concernientes al manejo de los recursos minerales, como la Agencia de Regulación y Control Minero y el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Para que el gobierno ecuatoriano no corra por condiciones como las suscitadas en Colombia, debido al rechazo de la minería por parte de la sociedad, a causa de la preferencia en el otorgamiento de títulos de propiedad a empresas mineras, en lugar de conceder a los propios habitantes (Ilich, 2013), el gobierno debe proporcionar las regulaciones del sector; de manera que conceda al público el control del cumplimiento de la ley por parte de la empresa y del mismo gobierno, y así, exigir el cumplimiento de sus derechos (Labandeira, León, & Vázquez, 2007).

f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el principio de “Respeto a la Normativa Internacional de Comportamiento” es aplicado únicamente para las empresas, puesto que representa un respaldo para la normativa nacional. Sin embargo, no está por demás, la notificación del reconocimiento a la normativa internacional, como se efectúa en el marco legal minero de Chile y Sudáfrica.

De hecho, el gobierno podría ser reconocido por el fomento de un buen comportamiento generado en la industria extractiva, como por ejemplo el reconocimiento a nivel internacional que ha ganado el gobierno de Chile, debido a la gestión de la industria extractiva y hasta participa en cooperaciones internacionales, exponiendo sus prácticas y estableciendo estándares (CODELCO, 2011).

g. Respeto a los derechos humanos

La ley minera sanciona la violación de los Derechos Humanos, de modo que el ministerio encargado de los recursos minerales declara la caducidad de los permisos de concesión minera. En efecto, la ley promueve campañas de seguridad para prevenir este tipo de incidentes (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

A pesar del reconocimiento que da la legislación y el estado a los Derechos Humanos, existen críticas respecto a la aprobación de los títulos mineros a la empresa Ecuacorriente, debido a que la ausencia de estudios adecuados y documentación requerida por la ley, no fue un impedimento para que los permisos sean otorgados. En efecto, la intervención del estado ecuatoriano es criticado por parte de organizaciones no gubernamentales (Comisión Ecuaménica de Derechos Humanos, 2011). Para evitar este tipo de criterios, el gobierno y la empresa deben procurar reconocer el respeto a los derechos humanos, caso contrario, su gestión pierde credibilidad en el público, puesto que no garantizan la protección de sus derechos (International Organization for Standardization, 2010).

Conforme a los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario al gobierno y a la legislación ecuatoriana, el principio con menor puntaje es el de transparencia. Por otra parte, el puntaje de los otros principios se aproxima al 100% del cumplimiento de los requerimientos establecidos por la guía.

Materias fundamentales de responsabilidad social

Tabla 20
Materias fundamentales de la responsabilidad social del gobierno, Ecuador

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	0
DERECHOS HUMANOS	100
PRÁCTICAS LABORALES	75
MEDIO AMBIENTE	86

PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	100
ASUNTOS DE CONSUMIDORES	83
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	14

Fuente: Cuestionario de la investigación

Elaboración: Alexandra Torres

a. Gobernabilidad

Anteriormente se señaló que la legislación minera de Ecuador no establece procedimientos en la toma de decisiones de la empresa o en la conformación estructural; es decir, la asignación de dirigentes, conformación de la junta, funciones de la directiva, ni procesos de nombramientos; de manera que alcanzó 0 puntos en esta materia fundamental, tabla 20.

Los procedimientos de gobernabilidad establecidos por el gobierno permiten reducir la incertidumbre del comportamiento de la empresa; de modo que, el gobierno ecuatoriano identificaría con mayor precisión los posibles impases contractuales (International Organization for Standardization, 2010).

b. Derechos humanos

El marco legal del sector minero ecuatoriano incorpora aspectos económicos, sociales y ambientales, por lo que Ecuador obtuvo 100 puntos, como lo indica la tabla 20.

En la dimensión económica, el marco legal minero integra asuntos relacionados a recursos naturales no renovables, desarrollo sustentable, institucionalidad, política económica, regulación, derechos de propiedad, contratos, producción, comercialización, empleo, pago de regalías e impuestos, compensaciones y sanciones (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

La dimensión social del marco legal incluye obligaciones laborales, seguridad e higiene, patrimonio cultural, capacitación del personal, formación de técnicos y profesionales, derecho a la información, participación y consulta, y denuncias (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

La dimensión ambiental incluye temas como aprovechamiento del agua, preservación del medio ambiente, tratamiento de agua, rehabilitación de hábitats, acumulación de residuos y descarga de desechos, conservación de flora y fauna y cierre de operaciones (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Por otra parte, el marco legal bajo el artículo 100 de la ley minera, exige la indemnización monetaria por perjuicios al propietario del predio. Asimismo, el artículo 69 de la ley minera prohíbe y sanciona el trabajo infantil (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

La intervención del estado ecuatoriano en el caso del otorgamiento de permisos a la empresa Ecuacorriente, ha producido consternación en poblaciones y organismos no gubernamentales; especialmente en el control del estado a la empresa en el procedimiento de compra de tierras y

concesiones sobre tierras que ya son propiedad de los miembros de la comunidad (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, 2011).

Para que el gobierno no genere esta percepción en las partes interesadas y para que no se produzca el rechazo como el que existe en comunidades colombianas (Ilich, 2013), debería dirigir su gestión hacia el alcance de un desarrollo sustentable, por medio de un comportamiento adecuado frente a aspectos económicos, sociales y ambientales (International Organization for Standardization, 2010).

c. Prácticas laborales

Ecuador obtuvo 75 puntos en esta materia. El marco legislativo ecuatoriano del sector minero incluye exigencias sobre la preservación de la salud y la vida de su personal técnico, por medio de la aplicación de normas de seguridad e higiene (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Asimismo, el marco legislativo establece indicaciones sobre el procedimiento de la repartición de utilidades y planteamiento de políticas de recursos humanos y bienestar. Estas medidas tienen la finalidad de que se integre a las familias de los trabajadores (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Por otra parte, la legislación plantea el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos. De hecho, las entidades gubernamentales concernientes son las encargadas de llevar a cabo los procesos de consulta, con el objetivo de considerar los criterios de la comunidad en el proceso de minería (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). No obstante, denuncias revelan la falta de participación de las poblaciones afectadas y la discriminación de oponentes, ante una ausencia de intermediación del gobierno (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, 2011).

Asimismo, para que el gobierno no genere presión en las comunidades donde se desarrolla el primer proyecto de minería a gran escala, debería establecer prácticas laborales que eviten la creación de problemas sociales, abusos, discriminación, como los que caracterizan a la empresa china según organismos no gubernamentales (International Organization for Standardization, 2010).

d. Medio ambiente

En la materia fundamental Medio Ambiente, la legislación ecuatoriana obtuvo 86 puntos. La ley minera ecuatoriana exige bajo el artículo 78, la presentación de estudios de impacto ambiental por parte de los titulares de concesiones mineras. En efecto, se requiere la presentación de un estudio de impacto ambiental en las distintas fases de la actividad minera, con el fin de prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). Sin embargo, científicos resaltan las falencias existentes en el EIA del proyecto llevado a cabo por Ecuacorriente; principalmente aluden la falta de información que respalde el estudio (Comisión Ecuémica de Derechos Humanos, 2011).

La ley minera ecuatoriana también exige a los titulares de concesiones mineras, tomar medidas en todas las etapas de su actividad, para evitar la contaminación del medio ambiente con los residuos mineros (Constitución de la República de Ecuador, 2009).

Asimismo, el Reglamento Ambiental para Actividades Mineras bajo el artículo 65 establece exigencias específicas sobre el manejo de residuos peligrosos. Las disposiciones en el manejo de estos residuos es que se deben recuperarse y transportarse en recipientes herméticos fuera del área de proyecto para su manejo y disposición final. Las indicaciones para este proceso son señaladas por las normas técnicas que incluye el marco legal (Constitución de la República de Ecuador, 2009).

El uso eficiente del agua usada en las operaciones mineras, es controlado bajo el artículo 79 de la ley de minería. Los titulares de concesiones mineras deben devolver las aguas al cause original de la fuente y libres de contaminación. Asimismo, los titulares deben cumplir con los límites de uso de agua, establecidos por la normativa ambiental, con el propósito de no afectar los derechos de las personas (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Contrariamente, la legislación no fomenta la incorporación de energías alternativas en el proceso de la actividad minera.

Por otra parte, a través del artículo 27 se exige la obligación de la reparación y remediación ambiental (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). Además, según el artículo 50 del Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, el Ministerio del Medio Ambiente controla los aspectos técnicos del monitoreo y control de programas y proyectos de remediación ambiental, que deben llevar a cabo los titulares de derechos mineros (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Los mecanismos de gestión ambiental de la empresa Ecuacorriente no proporcionan información de respaldo, lo que ha generado la percepción de un gobierno que proporciona títulos mineros cuestionados y sin la participación de la sociedad entera. Si el gobierno continúa con este tipo de permisiones podría generar protestas contra la minería, como se produce en Perú temor a que las actividades de las empresas mineras contaminen el medio ambiente y sus fuentes de subsistencia como la agricultura (Periódico La Jornada, 2011).

e. Prácticas justas de operación

En la materia fundamental Prácticas justas de operación, el país alcanzó 100 puntos. La Constitución ecuatoriana establece como derecho primordial la garantía del derecho a una sociedad libre de corrupción. En efecto, se establece la Función de Transparencia y Control Social, que promueve el control de las entidades públicas y privadas que desarrollen actividades de interés público de manera transparente, fomentando la prevención de la corrupción (Asamblea Constituyente, 2008).

Además, el marco legal ecuatoriano establece la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, cuyo objetivo es prevenir el abuso de agentes económicos con poder de mercado, y sancionar las prácticas desleales, fomentando el comercio justo, la eficiencia de los mercados y el bienestar general (Asamblea Constituyente, 2008).

En cuanto a los aspectos de Respeto a los Derechos de Propiedad, el gobierno cumple con el requerimiento de publicar los procesos para la obtención de títulos de propiedad para los interesados en proyectos mineros. En efecto, el gobierno difunde los procesos a través de las páginas web de los organismos relacionados con el sector minero. Sin embargo, la denuncia de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, señala que el título proporcionado por el gobierno a la empresa Ecuacorriente, incluye tierras de propietarios miembros de la comunidad (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

Por otra parte, la legislación cumple con el requerimiento de conceder la consulta previa; este requerimiento es exigido por la ley de minería, bajo el artículo 87 de la Gestión Social y Participación de la Comunidad (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). No obstante, como se mencionó anteriormente, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos manifiesta la falta de mecanismos de consulta y participación por parte del gobierno ecuatoriano, permitiendo que la empresa ponga en marcha sus estrategias de aproximación con la comunidad, sin control gubernamental (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

Si el gobierno no controla la competencia justa, perjudica la credibilidad de su gestión, puesto que emite señales adversas a la sociedad (International Organization for Standardization, 2010). En efecto, el gobierno debe asegurar que ningún funcionario se vea implicado en actos contrario a lo que señala la ley, como casos registrados en Perú, por la intervención de propietarios mineros en funciones públicas (Periódico La Jornada, 2011).

El control del estado sobre el cumplimiento de leyes ambientales a empresas mineras, debe ser riguroso; de manera que su intervención no emita señales de una deficiente regulación y así, exigir el buen comportamiento a las empresas. En efecto, se evitará la percepción de destrucción ambiental generada en la sociedad por empresas mineras, como lo sucedido en Perú con la empresa Doe Run que es causante de varios atentados ambientales y sociales, según la percepción social (Jiménez, 2009).

f. Consumidores

Ecuador obtuvo 83 puntos en la tabla 20, puesto que dentro de la exigencia de la publicación de información, la ley no incluye la publicación de información de los impactos económicos.

El artículo 88 de la ley minera exige difundir la información relacionada a estudios ambientales y sociales; sin embargo, no especifica la proporción de información de los impactos económicos, a las partes interesadas (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Adicionalmente, el gobierno publica los contratos de los proyectos de minería a gran escala, a través de la página web oficial del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables; de manera que el público tiene acceso a la información concerniente al contrato (Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 2011).

Por otra parte, bajo el artículo 89 de la ley minera, se establece la exigencia de incorporar el criterio de la ciudadanía, en todas las etapas de la actividad minera. Este artículo lleva a los titulares de

concesiones mineras a establecer procesos para garantizar la participación y la atención a las reclamaciones.

El gobierno debe fomentar el desarrollo económico y social de forma justa, equitativa y sostenible, y también, para lo que debería capacitar a la sociedad en los mecanismos utilizados en las consultas previas; de manera que no genere cuestionamientos en el proceso y mantener acuerdos beneficiosos para todas las partes (International Organization for Standardization, 2010).

g. Participación activa y desarrollo de la comunidad

La legislación y el gobierno ecuatoriano alcanzaron 13 puntos en el apartado de la materia esta fundamental. La legislación exige la inclusión de estudiantes para que realicen prácticas en el campo de la minería, pero no exige la contribución a la educación de la comunidad.

Por otra parte, la legislación exige el reconocimiento y respeto de la cultura tradicional; sin embargo, no exige el establecimiento de actividades que incentiven y fortalezcan la cultura tradicional de las comunidades (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

En cuanto a los aspectos relacionados al acceso a la tecnología, la legislación exige a los titulares de concesiones mineras incluir estudiantes para contribuir con la formación, pero no exige la contribución en el aporte al desarrollo científico de universidades o laboratorios (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

La legislación exige a los titulares de concesiones mineras fomentar el empleo local, mediante la contratación de personal nacional; sin embargo, no plantea exigencias de formulación de programas que contribuyan al desarrollo de la economía de los habitantes (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

El marco legal minero no exige a los titulares de concesiones mineras la promoción de campañas de salud en las comunidades aledañas al proyecto. Contrariamente, la legislación exige el empleo de personas locales; de manera que bajo el artículo 77 de la ley minera, obliga a los titulares de concesiones mineras, la contratación preferente de trabajadores residentes en las localidades aledañas (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

Para que la empresa asegure la integración de la comunidad en sus actividades y contribuya a su desarrollo, el gobierno ecuatoriano debe brindar mecanismos de aproximación entre la empresa y las comunidades. Además, el gobierno podrían proporcionar asesoramiento a la empresa con proyectos de inversiones sociales que beneficien a la comunidad y se cree entendimientos entre las partes (International Organization for Standardization, 2010).

Por otra parte, la comunidad debe insistir a la empresa minera a cumplir con sus compromisos, y así alcanzar objetivos de desarrollo sustentable. El hecho registrado en Chile debe servir de motivación a las comunidades para que sus exigencias sean escuchadas, tanto por el gobierno como por la empresa (La República, 2012). En Ecuador, los habitantes de El Pangui han organizado una marcha de protesta contra la minería en el sector y también, para exigir el cumplimiento de sus derechos; sin

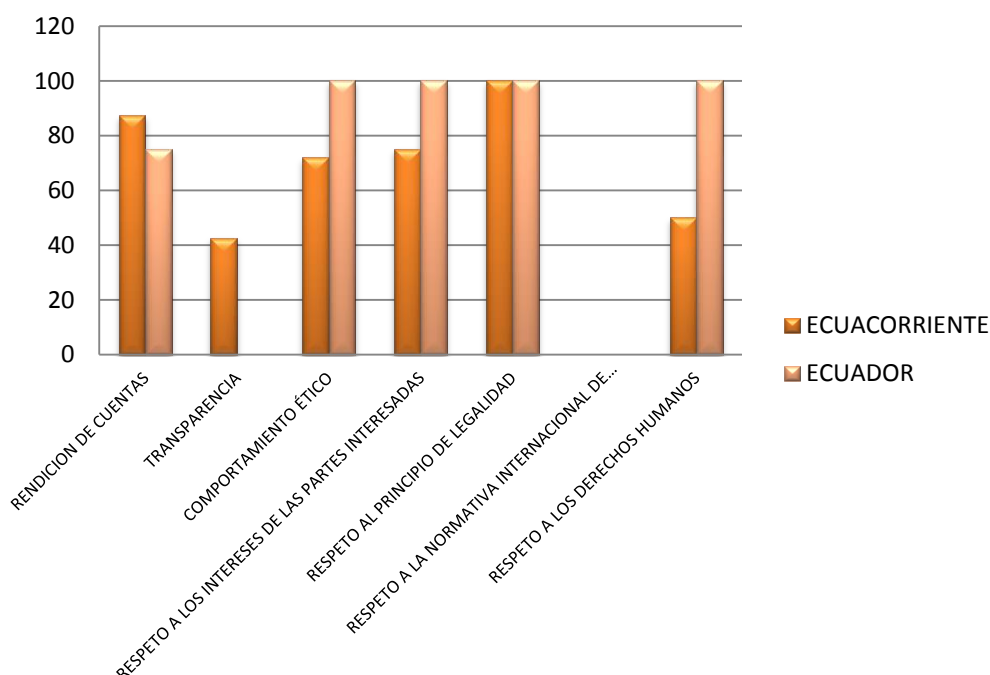
embargo, el gobierno ha impedido la realización de la marcha. En efecto, el gobierno debe mejorar la comunicación con los habitantes de la comunidad y responder el malestar expresando, caso contrario despierta en los habitantes comportamientos rebeldes como los denunciados por la empresa Ecuacorriente, al invadir las instalaciones del campamento y paralizar las actividades normales (El Comercio, 2014).

Por otra parte, las regulaciones de las instituciones de gobierno deben ser estrictas para que no se dé ningún abuso de la empresa minera en las áreas donde se desarrollan los proyectos mineros, como sucede en Bitian, China, por la intervención de la empresa Zijin Mining. El bienestar de la población se ve amenazado, si las instituciones no intervienen adecuadamente (Chumanmin, 2011).

Conforme a los resultados obtenidos en los requerimientos de las materias fundamentales aplicadas al gobierno y la legislación ecuatoriana, refleja que la materia de gobernabilidad es la que no cumple con los requerimientos; mientras que la materia de participación activa y desarrollo de la comunidad alcanza apenas 14 puntos. Por otra parte, las materias fundamentales que se cumplen al 100% son las materias de derechos humanos y prácticas justas de operación.

3. Análisis de resultados

Gráfico 8
Principios de la responsabilidad social, Ecuador

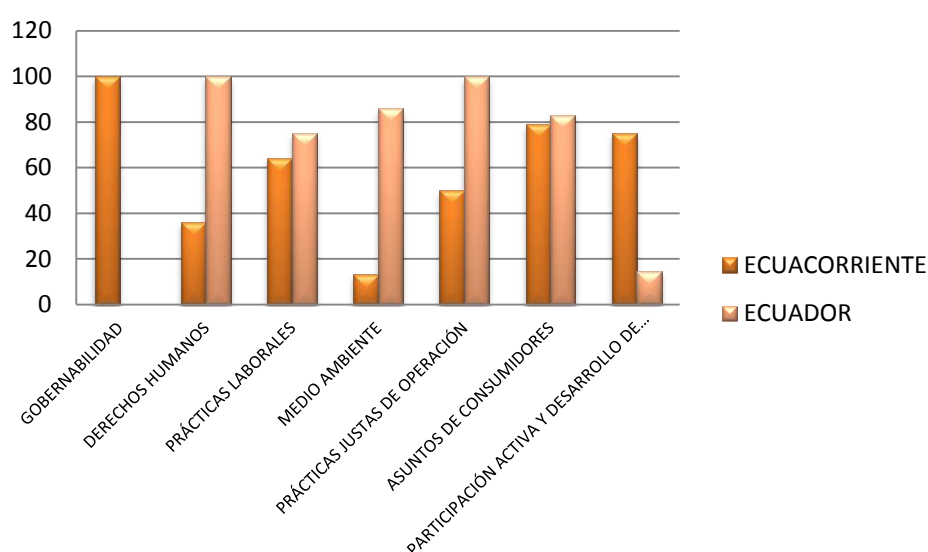


Fuente: Cuestionario de la investigación
Elaboración: Alexandra Torres

La empresa Ecuacorriente cumple al 100% el principio de respeto al principio de legalidad, gráfico 9. Los principios que la empresa debe prestar atención son: respeto a la normativa internacional de comportamiento, transparencia y respeto a los derechos humanos.

El gobierno y la legislación obtuvieron 100 puntos en comportamiento ético, respeto a los intereses de las partes interesadas, respeto al principio de legalidad y respeto a los derechos humanos. Los principios que debe reforzar el gobierno son: transparencia y rendición de cuentas.

Gráfico 9
Materias fundamentales de responsabilidad social, Ecuador



Fuente: Cuestionario de la investigación
Elaboración: Alexandra Torres

El gobierno/legislación de Ecuador registró la máxima puntuación en las materias de derechos humanos y prácticas justas de operación, como se muestra en el gráfico 10. Las materias que menor puntuación obtuvieron y que el gobierno debe reforzar aspectos concernientes a la gobernabilidad y a la participación activa y desarrollo de la comunidad.

En cuanto a la empresa, la materia con mayor puntuación fue gobernabilidad; en tanto que las materias que menor puntuación registraron fueron: medio ambiente, derechos humanos y prácticas justas de operación.

El grado de minería responsable de Ecuacorriente fue 57 puntos, en tanto que el grado de minería responsable del gobierno y la legislación de Ecuador fue superior, con 72 puntos. En efecto, el grado de responsabilidad del Gobierno y la Legislación de Ecuador supera con 13 puntos de diferencia al grado de minería responsable obtenido por la empresa Ecuacorriente.

Conforme a los resultados obtenidos, los estándares de minería responsable establecidos por el gobierno y la legislación ecuatoriana, son más fuertes en minería responsable que los estándares puestos en práctica por la empresa.

Los principios en que supera el gobierno a la empresa son: comportamiento ético y respeto a los intereses de las partes interesadas. Mientras que en las prácticas que supera el gobierno a la empresa son: derechos humanos, prácticas laborales, medioambiente, prácticas de operación y asuntos de consumidores.

4. Inversión china vs. inversión canadiense en América Latina

A partir del año 2010, la inversión china en América Latina y el Caribe ha tenido gran participación en la economía de la región. Los destinos principales son Brasil, Argentina y Perú, y primordialmente en los sectores de hidrocarburos y minería. Según el comunicado de la CEPAL, la participación de la inversión china ofrece oportunidades a empresas que requieren capital y tecnología para seguir creciendo, pero también representa riesgos (Unidad de información pública e internet, 2010).

De acuerdo al estudio Cooperación China en América Latina, indica que China aplica la asistencia para el desarrollo de los países socios, con el propósito de avanzar en sus metas y objetivos políticos en el exterior y también, asegurarse recursos naturales. Las crecientes acciones de China en América Latina y el Caribe también han abierto camino para las empresas chinas (Erthal & Marcondes, 2013).

La tendencia de relaciones comerciales entre la región y China es creciente; sin embargo, se resalta la diferencia del enfoque en programas sociales de los donantes del Norte (conformado por Estados Unidos, España, Alemania, Canadá, Francia, Noruega, Holanda, Suecia, Suiza y Reino Unido), en tanto que China invierte considerablemente en explotación minera, explotación de petróleo e infraestructura relacionada. Además, China ha prestado respaldo a los países que han tensionado las relaciones con Estados Unidos y los donantes europeos; entre ellos: Nicaragua, Cuba y Venezuela (Erthal & Marcondes, 2013).

A pesar del respaldo, existen países donde los actores privados de la región involucrados en la cooperación para el desarrollo, que han sido debilitados por la intervención de las empresas chinas, al traer sus propios trabajadores, como ha sucedido con las operaciones de la empresa minera china HD Mining, en Canadá BC.

El proyecto Murray River aún se encuentra en etapas iniciales (HD Mining, 2012); no obstante, la empresa ha causado gran controversia en Canadá BC, debido al permiso que obtuvo para llevar 201 trabajadores temporales chinos a las operaciones de la mina (O'Neil, 2013). En efecto, el público presentó malestar puesto que el empleo directo e indirecto, la inversión en las comunidades aledañas, el crecimiento económico local y nacional, están comprometidos por causa de estas inversiones (Moore, 2013).

La intervención de actores chinos en las economías de la región se considera negligente respecto a temas relevantes para los donantes del Comité de Asistencia al Desarrollo⁴⁸ CAD, incluyendo la sustentabilidad ambiental, derechos humanos y monitoreo, y evaluación, dejando dudas sobre la estructura actual de la asistencia para el desarrollo (Erthal & Marcondes, 2013).

De hecho, el requerimiento de recursos naturales y energía de China, incrementa el impacto ambiental tanto nacional como internacionalmente. La degradación del medio ambiente y las prácticas laborales amenazan los derechos humanos. Por esta razón, despierta la exigencia de una gobernabilidad global. No obstante, una investigación realizada por el Instituto Revenue Watch revela que China está incorporando a organismos externos que buscan el interés de los interesados locales en la transparencia y rendición de cuentas (Mullins, 2012).

En Ecuador, se ha desplazado la intervención de empresas mineras canadienses hacia empresas chinas. Tal es el caso de la empresa canadiense Kinross Gold que suspendió el proyecto Fruta del Norte, debido a desacuerdos con el gobierno. Después de dos años de negociaciones, las partes no llegaron a acuerdos en claves económicas y términos legales (Topf, 2013). En la actualidad, existe el interés de compra del proyecto por parte de la empresa china Junefield (Araujo, 2013).

Los desacuerdos surgieron a partir del año 2008, cuando la Asamblea Constituyente elaboró el nuevo código de minería, el que concedía mayor porcentaje de los ingresos extraordinarios al gobierno. La ley perjudicó el presupuesto proyectado para el propósito de la empresa (Rey, 2013). A continuación, en junio 2013, se aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (Jarrín, Espín, & Mancheno, Organización Grupo Faro, 2013).

Las modificaciones alteran las estructuras de las entidades públicas concernientes a la minería, donde el principal cambio es la conformación del directorio de la ARCOM. Además, otra de las modificaciones es la reducción del número de permisos requeridos para la obtención de la concesión (Jarrín, Espín, & Mancheno, Organización Grupo Faro, 2013).

Por otra parte, se modificaron las regalías, los tributos y también se eliminó los porcentajes de repartición de los ingresos extraordinarios en la ley y ahora, se negocian al igual que los precios base, en el contrato de explotación minera (Jarrín, Espín, & Mancheno, Organización Grupo Faro, 2013). A pesar de los esfuerzos en modificar el marco legal de la minería en Ecuador, la salida de la empresa Kinross pone en evidencia que no es suficiente para atraer la inversión extranjera. Las razones para que esto suceda, es que el tamaño de los proyectos e inversiones, no son lo suficientemente atractivos para empresas mineras grandes; además, los precios de referencia de los minerales son altos (Jarrín, 2014).

En efecto, se recomienda la reasignación de las ganancias para el estado, puesto que se debería tomar en cuenta las prácticas y gestión que aplica la empresa en la ejecución del proyecto. Sin embargo, el interés principal en el país es la recaudación económica de los proyectos, razón por la cual la normativa impositiva es prioridad (Jarrín, 2014).

⁴⁸ CAD, promueve el desarrollo cooperativo y otras políticas como la contribución al desarrollo sustentable, crecimiento económico, reducción de la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida en países en desarrollo.

5. Innovación en la industria minera ecuatoriana

A partir de la apertura al camino extractivista del país, el gobierno concentra esfuerzos para aprender de los países tradicionalmente mineros. De manera que, el gobierno ha planteado acuerdos con la empresa nacional chilena CODELCO, y también ha promovido la capacitación de técnicos, gracias al apoyo de organismos no gubernamentales australianos, para el desarrollo minero.

El gobierno ecuatoriano a través de un acuerdo, propone el desarrollo de la industria minera en el país, mediante la participación de la Empresa Nacional de Minería de Ecuador y la empresa chilena CODELCO. El acuerdo abre la posibilidad de que CODELCO invierta entre 10 y 30 millones de dólares en Ecuador, según los resultados que se obtengan en este lapso (CODELCO, 2011).

Conforme a los resultados obtenidos en la investigación, CODELCO posee un alto grado de minería responsable; por esta razón, ENAMI podría aprender de la empresa chilena, destacada a nivel internacional por su gestión (EITI, 2012).

Asimismo, los técnicos elegidos por la Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID), reciben formación especializada en la Universidad Tecnológica de Queensland QUT. El objetivo es transferir las capacidades de las universidades australianas, de departamentos y organismos del gobierno australiano, a fin de fortalecer las relaciones bilaterales dirigidas hacia el desarrollo sostenible (Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos , 2013).

Estos esfuerzos fomentaran la instrucción local de prácticas aplicadas por países que distinguen el desarrollo económico, generado en base al aporte de los recursos mineros. En efecto, la visión minera del país podría ampliarse hacia la obtención de un desarrollo minero sustentable.

De acuerdo a la información obtenida en el presente capítulo y en el capítulo III, se compararán los resultados para rescatar las alternativas de minería responsable, tanto para la empresa Ecuacorriente y para el gobierno ecuatoriano, con la finalidad de mejorar el inicio del desarrollo de la minería en el país.

Capítulo 5

Implicaciones de la minería responsable para el caso ecuatoriano

Conforme a la aplicación de las indicaciones de la guía de la norma ISO 26000, ha sido posible conocer el grado de minería responsable de la muestra de los países en estudio. Del mismo modo, se ha aplicado a Ecuador, reflejando el estado actual de la minería ecuatoriana en el aspecto de la responsabilidad. Además, la aplicación ha permitido identificar medidas y procesos implementados por los países en estudio, de modo que reflejan alternativas que podrían ser consideradas para el alcance de una Minería Responsable en Ecuador.

Las implicaciones han podido identificarse gracias al cumplimiento de los requerimientos expuestos en un cuestionario y a la vez, comparando los resultados obtenidos de cada país. En efecto, se ha logrado identificar prácticas que deberían ser tomadas en cuenta para que Ecuador mejore su estado de minería responsable.

Las implicaciones fueron identificadas por la misma clasificación que ha seguido la investigación; es decir, considerando los principios y materia fundamentales de la responsabilidad social, integrando las prácticas y medidas que se implementan en los países donde sí se cumplen los requerimientos de la guía.

1. Principios de la responsabilidad social

a. Rendición de cuentas

Según los resultados obtenidos, la legislación ecuatoriana si cumple con la indicación de establecer una ley que exija la difusión de los posibles impactos sociales y ambientales (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009); sin embargo, podría exigir la presentación de la información sobre los impactos económicos, como exige el gobierno de Australia Occidental a los titulares de concesiones, la presentación de informes de rendimiento anual e informes de seguimiento (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

La legislación brasilera exige a los titulares de concesiones mineras, la presentación de un informe anual de las actividades realizadas el año anterior, incluyendo el contenido económico entre la utilidad y la sustancia estéril, inventario, precio medio de venta, destino del producto bruto, el pago de impuesto y el depósito del diezmo que cancela al propietario del terreno (Congresso Nacional do Brasil, 1968). Si no, la legislación sudafricana exige a los titulares de concesiones mantener registros de las actividades mineras y registros financieros (Republic of South Africa, 2002).

A pesar de que la legislación no plantea la exigencia de la rendición de cuentas sobre los impactos económicos, la empresa Ecuacorriente reporta los impactos económicos como el pago de impuestos y el valor de las reservas a nivel internacional (Ecuacorriente S.A., 2008). El gobierno ecuatoriano

debería establecer un formato de los impactos económicos que debe reportar el titular de la concesión.

b. Transparencia

La información debe estar disponible, accesible y entendible para quienes podrían verse afectados por la empresa; de manera que las partes interesadas evalúen el impacto de las decisiones y actividades de la empresa sobre sus intereses. En Ecuador, la legislación no establece cierto procedimiento en la toma de decisiones de los titulares de concesiones mineras.

En el caso de Canadá BC, un titular de concesión minera debe elegir un director antes de iniciar los trabajos, y asegurar que hay una persona que actúa en el cargo permanentemente; el nombre del director debe ser notificado al inspector gubernamental. Además, el director debe contar con las facilidades para operar la mina, de acuerdo a los requerimientos de la ley y el código de regulaciones.

La calificación del director debe cumplir con las disposiciones del código de regulaciones y debe atender diariamente las operaciones de la mina (Province of British Columbia, 1996).

El marco legal minero de Chile establece normas en los contratos sobre la conformación de sociedades contratistas. La división del haber social debe ser en cien acciones. Además, se plantea la resolución de los negocios concernientes a la sociedad a través de una junta conformada por todos los socios. El administrador es elegido por la junta y se determina sus atribuciones, remuneración y duración de sus funciones. Además, la administración es la representación de la sociedad en todo lo que se relacione con la autoridad pública, a menos que la junta designe a algún socio con ese fin (Gobierno de Chile, 2007).

Por parte de la empresa, Ecuacorriente cumple parcialmente con los requerimientos de este principio. La empresa no revela la información completa de los dirigentes, apenas ciertos nombres y cargos. Las páginas web de las empresas de la muestra, proporcionan mayor información. Por ejemplo Newcrest y las demás empresas publican los títulos e instituciones donde se formaron los dirigentes, fecha en que fueron elegidos y la experiencia que tienen (Newcrest Mining Limited, 2012).

La identificación de las partes interesadas también es parte de los requerimientos de la guía; no obstante, Ecuacorriente no revela los criterios y mecanismos utilizados para identificarlas e involucrarse con ellas. CODELCO identifica a trabajadores directos y se vincula a través de comités paritarios, estudios de clima organizacional y la encuesta CODELCO opina; con las empresas contratistas se vincula por fiscalización previsional laboral; con las familias de los trabajadores se relaciona a través de programas familiares, comunidad virtual para trabajadores y familiares (CODELCO, 2012).

CODELCO también se vincula con los sindicatos de trabajadores mediante reuniones y acuerdos; con la comunidad nacional, por medio de comunicados de prensa, página web, twitter, facebook y publicaciones en general; con autoridades nacionales, a través de su participación en procesos de formación de nuevas normativas, fiscalizaciones, mesas de trabajo, seminarios y encuentros; con los

medios de comunicación, por medio de la entrega de resultados económico-financiero, comunicados de prensa, entrevistas, publicaciones corporativas y redes sociales (CODELCO, 2012).

La empresa Ecuacorriente ha recibido observaciones de la organización Collaborative Learning Projects respecto a la desigualdad generada en la presentación de información sobre sus actividades a los habitantes de la comunidad (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011). En efecto, la empresa debe corregir este comportamiento para evitar el rechazo del proyecto. Para ello, la empresa debe transparentar su gestión para que las partes interesadas conozcan y se informen adecuadamente (International Organization for Standardization, 2010). El propósito es que Ecuacorriente evite y reduzca la generación de debates que lleven a la comunidad a rechazar el proyecto, como lo sucedido con la empresa Vale (Aguilar, 2012).

c. Comportamiento ético

En este apartado, la legislación plantea guías de prácticas de presentación de informes e instructivos para la acumulación y división de las áreas mineras. Adicionalmente, la regulación minera ecuatoriana podría complementar la regulación con códigos de prácticas, como los que expone el Departamento de Minas y Petróleo de Australia Occidental, relacionados a salud y seguridad ocupacional, perforación exploratoria, estudio de minas, diseños seguros de edificios y estructuras, salvaguardas de maquinarias e instalaciones, instalaciones de almacenamiento de relaves y horas de trabajo; y así, mitigar los posibles impases contractuales entre la empresa y el gobierno.

Por parte de la empresa Ecuacorriente debería completar la información proporcionada al público, referente a los valores y principios que se aplica en el desenvolvimiento de sus actividades. La finalidad es comprobar que las empresas establezcan valores basados en la honestidad, equidad e integridad; por ejemplo los valores de Buenaventura incluyen: integridad, diligencia, lealtad, respeto, honestidad y transparencia (Buenaventura, 2009).

La información de la empresa debe revelar también la información de la estructura organizacional; de manera que se permita conocer al público la conformación de su estructura y los responsables de cada área. En el caso de Newcrest, la empresa está conformada por el directorio, seguidos por los comités de recursos humanos y remuneración, seguridad, salud y ambiente, y el comité de auditoría y riesgo. A continuación, el comité ejecutivo conformado por el gerente general y el jefe ejecutivo, cuyo control incluye el área financiera, de operaciones, operaciones nacionales e internacionales, comercial, proyectos, asuntos corporativos, gente y comunicación, estrategia y tecnología (Newcrest Mining Limited, 2012).

La guía propone que el código de comportamiento debe ser promovido también en la cadena de valor, de modo que la empresa oriente el comportamiento de sus proveedores y así comprometerlos a cumplir buenas prácticas y no perjudicar la imagen de la empresa. Vale inclusive ha desarrollado un código de conducta específico para los proveedores. El objetivo es involucrarlos en su compromiso y la misión de transformar los recursos naturales en desarrollo sustentable, una sociedad más justa, ambientalmente más equilibrada y económicamente más próspera.

El código incluye el cumplimiento de la legislación, las normas y los contratos, transparencia en las relaciones y veracidad de la información, ética en las relaciones comerciales, confidencialidad de la información, salud y seguridad en el trabajo, conducta de los proveedores, derechos humanos, medio ambiente, denuncias, comunicaciones, monitoreo y evaluación (Vale, 2012).

Por otra parte, la empresa Ecuacorriente debería incluir la promoción de la protección de especies de animales como lo hace Harmony Gold Mining, trabajando en el desarrollo de programas conjuntamente con ONGs especializadas, en las zonas rehabilitadas de sitios en conservación ecológica (Harmony Gold Mining, 2012).

Finalmente, la empresa debería considerar las prácticas de inserción empleadas por CODELCO para mejorar aspectos relacionados al comportamiento ético; a fin de evitar o reducir riesgos de comportamientos erróneos en sus colaboradores internos y externos (International Organization for Standardization, 2010).

d. Respeto a los intereses de las partes interesadas

El marco legal minero de Ecuador cumple con el principio de respeto a los intereses de las partes Interesadas, estableciendo la exigencia de integrar la participación de partes interesadas, en el desarrollo de proyectos mineros. Las entidades gubernamentales se encargan de dirigir algunos tipos de integración de las partes interesadas (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). Sin embargo, el gobierno debe atender a los inconvenientes señalados por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

Ecuacorriente por su parte, atiende a las inquietudes de las partes interesadas, mediante la organización de foros y reuniones con representantes de la comunidad, a fin de atender sus inquietudes y crear estrategias en base a estas. Este proceso también recibió denuncias por parte de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; por lo que la empresa debe dar respuesta al organismo.

Así también, la empresa proporciona canales de comunicación con empleados y proveedores para atender las inquietudes (Ecuacorriente S.A., 2008). La empresa requiere difundir información sobre mecanismos de atención a las inquietudes del gobierno y de las municipalidades. En el caso de Newcrest, atiende las inquietudes del gobierno a través de colaboraciones y actualizaciones trimestrales (Newcrest Mining Limited, 2012).

A pesar de presentar algunas alternativas de medios para atender las quietudes de las partes interesadas, al no identificar claramente sus partes interesadas, no propone medios de atención para otras partes interesadas, como plantean las empresas de la muestra.

e. Respeto al principio de legalidad

En este apartado, de acuerdo a la guía de la norma ISO 26000 se reconoció la supremacía del derecho; es decir, que ningún individuo u organización está sobre la ley y que los gobiernos también

están sujetos a la ley. Considerando la RS, el respeto al principio de legalidad se refirió al cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.

El gobierno ecuatoriano cumple con la responsabilidad de difundir las leyes y regulaciones, de modo que, el público en general tiene acceso a través de las páginas web de las instituciones relacionadas al control y regulación de los recursos naturales no renovables. Del mismo modo, la empresa cumple con la responsabilidad de dar a conocer las leyes y regulaciones aplicables a quienes trabajan en la empresa (International Organization for Standardization, 2010). La empresa Ecuacorriente reconoce la supremacía de la legislación nacional, dentro de su código de comportamiento que es difundido a su equipo de trabajo (Ecuacorriente S.A., 2008).

No obstante, la aprobación de permisos mineros despierta malestar en las partes interesadas, al no respetar los derechos de propiedad de los habitantes; así como también, se cuestiona el proceso de negociación de tierras por parte de la empresa (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011). En efecto, para que ambas partes brinden garantías a las partes interesadas, el cumplimiento de la ley es estricto; de manera que no provoque presiones en la sociedad, como se registró en Colombia.

f. Respeto a la normativa internacional de comportamiento

La guía de la norma ISO 26000 señaló la existencia de situaciones en que la ley no cumple con salvaguardas ambientales o sociales ambientales, por lo que se sugería que la empresa respete la normativa internacional de comportamiento.

Conforme a la investigación, algunas empresas de la muestra cumplen con varias disposiciones de la normativa internacional. Entre las normativas que cumplen las empresas mineras se encontraron las iniciativas de la EITI, GRI, ISO y OHSAS. De acuerdo a lo señalado en el segundo capítulo, existen certificaciones de normativas internacionales brindan garantía de procesos de gestión ambiental y procesos de reporte.

En efecto, Ecuacorriente debería validar su comportamiento para garantizar a la sociedad el cumplimiento de procesos reconocidos por la normativa internacional, puesto que de acuerdo a la información difundida, no posee dichos certificados.

g. Respeto a los derechos humanos

El marco legal minero ecuatoriano cumple con las indicaciones de la guía, estableciendo la exigencia de cumplimiento con los derechos humanos, caso contrario el titular de concesiones mineras podría ser sancionado y sus derechos cancelados.

Ecuacorriente no reconoce el respeto a los derechos humanos ni los promueve en su código de comportamiento, ni en la información que proporciona al público en general. La empresa brasilera Vale establece una política de Derechos Humanos, cuyo objetivo es establecer principios para que su actuación respete los derechos humanos en sus proyectos y operaciones, a lo largo de su cadena de valor.

Teck además identifica los impactos de sus actividades sobre los derechos humanos, que incluye afectar a los derechos sociales, culturales y económicos, a los derechos laborales y a los derechos de agua potable limpia y a los derechos de los grupos vulnerables (Teck Resources Limited, 2012).

Por ejemplo, para cumplir con los derechos de los empleados y contratados, la empresa Vale selecciona y acompaña a los profesionales para que actúen bajo la consideración de los derechos humanos. En cuanto a la selección de los proveedores, Vale busca empresas que compartan los mismos principios y valores, que incluyen el respeto a los derechos humanos (Vale, 2012).

Tanto la empresa como el gobierno deben atender la falta de inclusión de las comunidades en la toma de decisiones de la empresa, que según organismos no gubernamentales, los procesos que se manejan en la empresa no lo hacen; y también deben prestar atención a los procesos que ha seguido la empresa para la adquisición de las tierras de propietarios locales (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

2. Materias fundamentales de la responsabilidad social

a. Gobernabilidad de la empresa

De acuerdo a la guía de la Norma ISO 26000, la gobernanza es el factor que hace posible la responsabilidad en una empresa, frente a los impactos de sus decisiones y actividades y la incorporación de la responsabilidad social en la empresa y sus relaciones (International Organization for Standardization, 2010).

El marco legal minero ecuatoriano no establece ciertos procesos que deben ser tomados en cuenta por la empresa minera para la toma de las decisiones. A diferencia de Ecuador, Canadá y Chile plantean ciertas exigencias en la organización y funciones de la empresa para la toma de decisiones. Por ejemplo Canadá BC exige la nominación de un administrador que cumpla con las operaciones de administrador y las regulaciones del sector (Province of British Columbia, 1996).

El marco legal minero de Ecuador debería establecer exigencias en la gobernanza de la empresa minera para influir en la incorporación de la responsabilidad social en la toma de decisiones y en su implementación, referente al desarrollo de estrategias, objetivos y metas, demostrar el compromiso y rendición de cuentas y promover oportunidades justas (International Organization for Standardization, 2010).

Por otra parte, Ecuacorriente integra prácticas de Responsabilidad Social en su gestión y sus actividades; así como también promueve a participación de los empleados en el desempeño Socialmente responsable.

La empresa y el gobierno deben procurar la implementación de procedimientos en la gobernabilidad con el objetivo de reducir la incertidumbre de las actividades mineras; (International Organization for Standardization, 2010).

b. Derechos humanos

El marco legal minero ecuatoriano plantea exigencias basadas en aspectos económicos sociales y ambientales para el sector minero. Además, exige el respeto a los derechos humanos a los titulares de las concesiones mineras. Sin embargo la empresa Ecuacorriente, no difunde el reconocimiento ni la promoción de los derechos humanos en su gestión; mientras que, las empresas de la muestra los reconocen y los promulgan en el código de comportamiento y hasta plantean políticas que especifican objetivos y mecanismos para el cumplimiento de los derechos, tanto en sus empleados como en su cadena de valor.

Asimismo, las empresas brindan capacitación sobre el cumplimiento y los posibles impactos de sus actividades sobre los derechos humanos, identificándolos y previniéndolos, con la finalidad de evitar violaciones y abusos. Por otra parte, la empresa Ecuacorriente y el marco legal minero ecuatoriano, si cumplen con la indicación de establecer políticas que prevengan los riesgos de complicidad (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

En cuanto a los aspectos de resoluciones de reclamaciones, el marco legislativo si cumple con las indicaciones de la guía de la norma ISO 26000, puesto que exige la compensación de los titulares de concesiones mineras a los afectados (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009). Mientras que, la empresa propone mecanismos que dan accesibilidad de expresar las reclamaciones de las partes interesadas. Sin embargo, como se manifestó anteriormente, la empresa no identifica claramente a sus partes interesadas, por ende, se desconoce si todas las partes interesadas poseen acceso a los canales de reclamaciones.

El asunto de discriminación y grupos vulnerables que identifica la guía, la empresa debería asegurar la no discriminación entre los empleados, socios, clientes, partes interesadas, y demás. Asimismo, la empresa debe considerar promocionar los derechos de grupos vulnerables para que adquieran consciencia, como lo hace Teck Resources a través de la capacitación comunitaria sobre sus derechos y concientización cultural (Teck Resources Limited, 2012).

Por otra parte, la empresa Ecuacorriente debería reconocer el derecho de asociación de sus empleados o de afiliación a sindicatos, puesto que en la información difundida, no cuenta con tal reconocimiento. Las empresas analizadas han creado una oportunidad de diálogo y acuerdos entre la empresa y los trabajadores, a través de los sindicatos de los trabajadores (CODELCO, 2012).

Por otra parte, la empresa debería comunicar el proceso de Evaluación de Impactos que se aplica, para transparentarlo. Por ejemplo, Newcrest establece procedimientos antes de entrar en la comunidad, mientras opera en la comunidad, mientras toma decisiones para salir de la comunidad, colección de datos, efectividad del programa, mejoramiento de compromisos con la comunidad e inclusión social (Newcrest Mining Limited, 2012).

Para que el gobierno proteja el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas mineras, debe aclarar proceso en el programa de adquisición de tierras que emplea la empresa Ecuacorriente, para que la sociedad se informe y argumente los manifiestos sobre procesos de negociaciones discriminatorias (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

Asimismo, la ejecución de programas ambientales llevados a cabo por la empresa, deben asegurar la participación de las comunidades y se deben incorporar sus requerimientos, puesto que se denuncia la falta de participación de estos actores (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

c. Prácticas laborales

La guía de la norma ISO 26000 indicó que las prácticas laborales confieren derechos e imponen obligaciones a ambas partes, empleados y empleadores. Por parte del aspecto legal, el marco legal ecuatoriano cumple con los requerimientos establecidos por la guía.

La legislación plantea leyes de trato justo a los trabajadores, de sueldos, repartición de utilidades, etc. Por parte de la empresa, se debería revelar si proporciona capacitaciones a los empleados y a la cadena de valor sobre el cumplimiento del marco legal. Las empresas generalmente exigen el cumplimiento, más no capacitan a los empleados y cadena de valor.

Ecuacorriente no revela información específica que intercambia con el gobierno, para que las implicaciones sean medidas en conjunto, como lo expone la guía. Por ejemplo, CODELCO intercambia información referente a proyectos estructurales y competitividad al interior de la industria minera, e información sobre el área de sustentabilidad y el cumplimiento de la normativa (Newcrest Mining Limited, 2012).

Además, bajo las indicaciones de la guía Ecuacorriente debería difundir información sobre indicadores relacionados a la salud y seguridad de sus empleados, como lo hace Harmony Gold Mining al reportar la gestión de enfermedades crónicas, como el número de infectados de VIH (Harmony Gold Mining, 2012).

La percepción internacional de las empresas chinas ponen en alerta a la sociedad ecuatoriana, puesto que se caracteriza por malas prácticas ambientales y laborales (Mullins, 2012). En efecto, la regulación y la sociedad deben exigir el cumplimiento de la ley y un comportamiento socialmente responsable para evitar conflictos y daños al bienestar (International Organization for Standardization, 2010).

d. Medio ambiente

Existen aspectos relacionados al medio ambiente que deberían ser tomados en consideración para el caso de minería responsable en Ecuador. Por ejemplo, la difusión de indicadores ambientales en la gestión de la empresa; de manera que se dé a conocer la extracción total de agua, el porcentaje de agua reciclada, área total alterada y recuperada, megavatios de energía alternativa y consumo total de energía, como lo reporta Teck Resources (Teck Resources Limited, 2012).

Adicionalmente, Ecuacorriente debería reportar información sobre métodos aplicados para reducir la contaminación y residuos. Por ejemplo, Vale establece la Gestión de Diques y Presas, y el Plan de Seguridad de Diques (Vale, 2012). Asimismo, la empresa debería publicar las cantidades de materiales tóxicos que libera, como reporta CODELCO las cantidades por unidad operativa y por año, de modo que es posible verificar la variación (CODELCO, 2012).

Por otra parte, la empresa debería plantear programas de consumo eficiente de energía, como por ejemplo, Harmony Gold Mining lo hace definiendo estrategias de reducción de consumo, de reducción de emisiones de gas carbono, y así identificar oportunidades para remplazar la provisión de energía y promover energías alternativas mixtas e incrementar su uso en las operaciones (Harmony Gold Mining, 2012).

Ecuacorriente también debería implementar programas para el consumo eficiente del agua; en el caso de Teck, la estrategia de sustentabilidad se enfoca en el uso eficiente del agua y consiste en estudios de las necesidades de suministros hídricos y cuencas hidrográficas viables y evaluar los impactos acumulativos. Estos programas incluyen la reutilización del agua y el uso de fuentes alternativas como el agua desalinizada (Teck Resources Limited, 2012).

Ecuacorriente requiere la implementación de medidas que reduzcan los impactos negativos en la biodiversidad, como CODELCO lo hace, mediante la evaluación de los impactos en la biodiversidad desde las etapas iniciales de cada proyecto, y así planificar la implementación de medidas de control y mitigación (CODELCO, 2012).

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las prácticas para reducir la contaminación empleadas por la empresa, deben ser evaluadas, puesto que se denuncia la falta de gestión ambiental e inclusión social, según organismos no gubernamentales (Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, 2011).

e. Prácticas justas de operación

En cuanto a las prácticas justas de operación, Ecuacorriente debería plantear políticas de competencia justa, en sus relaciones con otras empresas y entidades gubernamentales, en sus relaciones con socios, proveedores, contratistas, clientes, competidores y las asociaciones de las que son miembros. Para ello la empresa Buenaventura determina la política de Competencia y Trato Justo, donde se compromete a superar a sus competidores de manera justa, a través de un rendimiento superior y no a través de prácticas comerciales poco éticas o ilegales. Así también, compromete al personal a comportarse de manera justa y de buena fe con los clientes, proveedores, competidores y empleados (Buenaventura, 2009).

Ecuacorriente debería plantear políticas de compra y distribución. Por ejemplo CODELCO establece la política de Ética Comercial que define el compromiso de mantener relaciones basadas en estándares de ética comercial, honradez, transparencia y equidad, con la finalidad de garantizar objetividad en los procesos de compras y contratación de bienes y servicios (CODELCO, 2012).

Por otra parte, Ecuacorriente debe establecer políticas de contratación que defina perfiles de las personas que debe contratar. Newcrest establece la política de Alto Rendimiento, que consiste en reclutar las mejores personas usando un Estándar de Adquisición de Talento (Newcrest Mining Limited, 2012).

f. Consumidores

El Principio de Asuntos de Consumidores revela que el marco legal minero ecuatoriano debería exigir la rendición de impactos económicos, adicionalmente al requerimiento de información social y ambiental que si exige la presentación (Tribunal Constitucional de la República del Ecuador, 2009).

La legislación de Canadá BC, exige al titular de concesiones mineras la presentación de un estudio independiente de los costos respecto a la salud y seguridad en la mina, o del equipo, construcciones, trabajos o estructuras (Province of British Columbia, 1996). El propósito establecido por la guía es conocer la información precisa de las prácticas de salud y seguridad, resolución de controversias y compensación (International Organization for Standardization, 2010).

Anteriormente se indicó que la empresa Ecuacorriente no revela información de los posibles impactos que causa la compra de sus productos. CODELCO identifica como riesgoso el transporte marítimo al comprar sus productos, debido a que la descarga de aguas residuales al mar, pueden perjudicar al medio ambiente (CODELCO, 2012).

Por otra parte, como se manifestó anteriormente la falta de identificación clara y completa de las partes interesadas, no permite conocer si todas las partes interesadas tienen acceso a los canales de reclamación que implementa la empresa. De modo que la empresa debería especificar las partes interesadas, determinar la forma que interactuarán y así mismos, la manera en que canalizaran a sus reclamaciones.

g. Participación activa y desarrollo de la comunidad

Conforme a los requerimientos de la guía de la norma ISO 26000, se sugiere que el marco legal minero ecuatoriano debería exigir a los titulares de concesiones mineras, a contribuir con la educación en las comunidades. Por ejemplo Australia Occidental, establece compromisos con la comunidad y actividades de desarrollo de las comunidades, por medio de colaboraciones con el gobierno para asegurar el mejoramiento de servicios como la educación (Commonwealth of Australia, 2006).

Además, el gobierno debería sugerir a las empresas mineras impulsar la cultura tradicional de las comunidades, es así como lo hace la legislación brasileña, que al demandar permisos de concesión minera en tierras indígenas, el interesado debe presentar un informe descriptivo con criterios de la protección de los derechos e intereses de la comunidad afectada (Congresso Nacional do Brasil, 1968).

Por otra parte, la guía de la norma ISO 26000 señala que el desarrollo y acceso a la tecnología debería ser considerado por los gobiernos y las empresas. En efecto, la empresa Ecuacorriente debería apuntar esfuerzos hacia el desarrollo y acceso a la tecnología con el fin de fomentar el desarrollo científico en universidades y laboratorios. Asimismo, el gobierno debería fomentar programas para desarrollar la economía de los habitantes de la comunidad, conjuntamente con la empresa.

En cuanto a la promoción de la salud en la comunidad, el gobierno debería sugerir a las empresas mineras la promoción de campañas de salud como lo hace la legislación brasileña, bajo la exigencia de promover la seguridad y salud de los habitantes de las comunidades aledañas (Congresso Nacional do Brasil, 1968).

Conforme a las indicaciones de la guía, la empresa debería contribuir económica y responsablemente a la comunidad. Por ejemplo, Teck Resources plantea el objetivo de donar el 1% de las ganancias anuales antes de impuestos a inversiones comunitarias (Teck Resources Limited, 2012).

Los resultados reflejan que Ecuacorriente requiere reforzar aspectos relacionados al principio de comportamiento ético. En este principio, Teck, CODELCO y Harmony presentan las mejores prácticas que podrían dar una alternativa a la intervención de Ecuacorriente.

Por otra parte, los esfuerzos requeridos por Ecuacorriente, en el principio de respeto a los intereses de las partes interesadas, podrían enfocarse en alternativas propuestas por cualquiera de las empresas de la muestra; del mismo modo que con los requerimientos del principio de respeto a la normativa internacional de comportamiento y el principio de respeto a los derechos humanos.

En cuanto a las implementaciones de las materias fundamentales, la empresa Ecuacorriente debe considerar las prácticas propuestas por la empresa Teck para mejorar sus prácticas en la materia de medio ambiente.

Las prácticas de Vale y Teck podrían orientar las prácticas de la empresa china para mejorar su gestión en aspectos relacionados a la materia de derechos humanos. Asimismo, las prácticas de Vale, Teck y CODELCO reflejan alternativas de para mejorar las prácticas justas de operación.

Por la parte de la intervención del gobierno y la legislación ecuatoriana, en el principio de transparencia podría tomar alternativas identificadas en la intervención de Australia, Canadá y Chile, al igual que los aspectos de la materia fundamental de gobernabilidad.

En cuanto a la materia fundamental de participación activa y desarrollo de la comunidad, se podría considerar alternativas aplicadas en Australia, Brasil o Perú.

Conclusiones

La investigación muestra que la minería responsable consiste en transparentar las situaciones no determinadas bajo un contrato, y a actuar para cubrir las brechas entre lo especificado y lo producido. Para esto, se requiere de la intervención de actores que efectivicen el cumplimiento de las responsabilidades adquiridas. Estos actores son el gobierno conjuntamente con las leyes y la empresa minera.

Adicionalmente, la responsabilidad de las empresas mineras se refiere al reconocimiento y cumplimiento de las responsabilidades, definidas y no definidas por un contrato, su comportamiento y compromiso con el estado, la sociedad civil y el medio ambiente; sin importar que la constitución o las leyes de un país especifiquen todas las responsabilidades. El Estado y las instituciones complementan los esfuerzos de las empresas para garantizar la obtención e implementación de prácticas mineras responsables.

La responsabilidad social en función de la norma ISO 26000, está determinada por principios y materias fundamentales, que proponen aspectos determinantes de una intervención empresarial y gubernamental, que contribuya al desarrollo sustentable de las naciones y las localidades donde se desarrolla la minería.

La minería responsable implementada en los países analizados se hace efectiva gracias al desempeño responsable de las empresas, conjuntamente con los esfuerzos de las entidades públicas encargadas del manejo de los minerales y las leyes vigentes en sus economías. Los países y empresas analizados definen prácticas referentes a los aspectos de los principios y materias fundamentales de responsabilidad social, que permiten mejorar el rendimiento socialmente responsable del sector minero.

En cuanto al gobierno y la legislación ecuatoriana, de acuerdo al reporte de los resultados, a pesar de haber registrado una puntuación que supera a Perú y Sudáfrica, también debería mejorar sus esfuerzos para la obtención de una minería responsable. Los esfuerzos deben enfocarse en mejorar su diligencia en aspectos relacionados a la transparencia, gobernabilidad, y participación activa y desarrollo de la comunidad. Además, el gobierno debe responder a las denuncias que presentan las partes interesadas, en cuanto a la concesión de permisos mineros, bajo la supuesta falta de cumplimiento de las regulaciones mineras y de los derechos humanos, por medio de las instituciones encargadas de la regulación como es ARCOM, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y el Ministerio del Medio Ambiente.

Las principales implicaciones que se rescataron para el caso ecuatoriano de minería, fueron identificadas mediante los principios y materias fundamentales de la norma ISO 26000 de la responsabilidad social, en base a la gestión de empresas y gobiernos de los países analizados, como se muestra en el capítulo 5.

Conforme a los resultados obtenidos, el grado de minería responsable de la empresa canadiense es el mejor de la muestra de empresas analizadas. Sin embargo, como refleja la teoría económica, las empresas que realizan esfuerzos para mejorar su calidad, requieren incentivos para continuar

produciendo de la mejor manera. En efecto, se revela una razón para que las empresas canadienses no se interesen en invertir en el país, y junto con esto, mejorar las prácticas de minería responsable en el país.

Asimismo, el panorama actual de la economía en Ecuador revela la aproximación entre las empresas nacionales CODELCO y ENAMI, considerando que CODELCO alcanzó un alto grado de minería responsable, podría contribuir a mejorar las prácticas que se aplican en la minería de Ecuador, y así mejorar el conocimiento y el desarrollo.

Los resultados obtenidos reportan que la empresa minera Ecuacorriente es el actor que requiere implementar mayor esfuerzos para mejorar su intervención responsable. De hecho, la empresa requiere reforzar su práctica responsable en el desarrollo de sus actividades y la organización de su empresa. Cabe recalcar que la empresa se encuentra en etapas iniciales; sin embargo, de acuerdo al análisis de la investigación, las empresas tienen la responsabilidad de informar desde el inicio del planteamiento del proyecto.

Los esfuerzos que debe implementar la empresa Ecuacorriente incluyen aspectos relacionados con los principios de respeto a la normativa internacional, respeto a los derechos humanos, comportamiento ético y respeto a los intereses de las partes interesadas. Mientras que, los esfuerzos que debe orientar la empresa hacia el cumplimiento de las materias fundamentales, deben direccionarse a los aspectos relacionados al medio ambiente, derechos humanos y prácticas justas de operación.

Actuar como un gobierno que busca el desarrollo sustentable, quiere decir que el gobierno también evalúa a los proponentes de proyectos mineros, con la finalidad de conceder títulos mineros a quienes están comprometidos con el desarrollo sustentable. En efecto, los intereses económicos dejan de ser la prioridad, y el gobierno también debería considerar las prácticas ambientales y sociales que aplica la empresa.

El tamaño de los proyectos y las inversiones en el país no son lo suficientemente atractivos para las empresas internacionales. Por esta razón, el gobierno debería proponer alternativas que fomenten la inversión extranjera en el sector extractivo; de manera que, el gobierno debería proporcionar incentivos para compensar los esfuerzos de la empresa en la gestión y las prácticas empleadas.

Las alternativas rescatadas de las prácticas y procedimientos de los países analizados, se podría considerar para mejorar el desempeño de la minería responsable en el país, previo a su desarrollo, y así obtener los objetivos planteados a través del Plan de Desarrollo.

Recomendaciones

El grado de minería responsable de Ecuador podría mejorar considerando las implicaciones de minería responsable de los casos internacionales estudiados, rescatando las prácticas que cumplen con los aspectos de los principios y materias fundamentales de la responsabilidad social.

El gobierno es el actor que exige, regula y controla al actor privado, por medio de las instituciones encargadas como ARCOM y ministerios, de modo que debería exigir mejorar la intervención responsable y mejorar el rendimiento de la empresa Ecuacorriente, puesto que es el primer proyecto de minería a gran escala, para así obtener mejores prácticas y que el desempeño de la primera experiencia de minería a gran escala, deje buenas referencias y se consiga el desarrollo del sector minero que busca el gobierno mediante el Plan de Desarrollo.

La empresa Ecuacorriente está actuando en un país que posee una legislación y una democracia, por lo que debe ajustar su gobernabilidad y procesos a los requerimientos establecidos; y además debe mejorar sus prácticas para obtener certificados que garanticen la intervención responsable, y así brindar garantía de desarrollo sustentable a la sociedad ecuatoriana.

Para que Ecuador consiga el desarrollo de la industria minera, debería comenzar actuando de la mejor manera, y esto lo obtendrá exigiendo el desempeño comprometido de la empresa encargada del primer proyecto de minería a gran escala. Además, prestando atención a las denuncias que hacen las partes interesadas.

Los reportes de sustentabilidad proporcionan información clave del rendimiento responsable de las empresas mineras y las páginas web de las empresas, son un canal de accesibilidad y aproximación del público en general, a la intervención de la empresa, por esta razón, la Empresa Ecuacorriente debería mejorar, actualizar y dinamizar su página web.

Además, el gobierno debería proporcionar incentivos para que las empresas mineras tengan la motivación de intervenir implementando las mejores prácticas que aseguren un desarrollo sustentable, sin que comprometan la economía, la sociedad ni el medio ambiente.

El gobierno ecuatoriano debe considerar el desarrollo minero de países tradicionalmente mineros para que en base de los resultados reflejados, se implementen procesos que han beneficiado al desarrollo de la industria minera y al desarrollo sustentable del país.

Para finalizar, se requiere que el inicio de la ejecución de proyectos de minería a gran escala sea una experiencia positiva para la sociedad ecuatoriana, puesto que en un territorio donde la conciencia social ha despertado, como consecuencia de la explotación de petróleo en el parque nacional Yasuní, mantiene alerta a la sociedad ante cualquier amenaza contra la biodiversidad y la calidad de vida.

Referencias bibliográficas

- Assembléia Nacional Constituinte. (5 de Octubre de 1988). *Senado Federal*. Acesso em 10 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web del Senado Federal:
http://www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_05.10.1988/CON1988.pdf
- Acosta, A. (2009). *La Maldición de la Abundancia*. Quito: Abya-Yala.
- Agencia Peruana de Noticias. (25 de Septiembre de 2011). *América económica*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de América económica:
<http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/sancionan-37-empresas-mineras-en-peru-por-contaminacion-durante-el-2011>
- Aguilar, C. (2012). *Revenue Watch Institute*. Acesso em 30 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de Revenue Watch Institute:
http://www.revenuwatch.org/sites/default/files/Brazil_TAI.pdf
- Alcalá, M. (10 de Mayo de 2012). *Reputación corporativa*. Acesso em 16 de febrero de 2014, disponível em Mind Value Business & HR Intelligence:
<http://www.mindvalue.com/reputacion.pdf>
- Alianza Mundial de Derecho Ambiental. (Julio de 2010). *Guía para evaluar los EIA's de proyectos mineros*. Acesso em Septiembre de 2013, disponível em Alianza Mundial de Derecho Ambiental: <http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Guia%20%20para%20Evaluar%20EIAs%20de%20Proyectos%20Mineros.pdf>
- Araujo, A. (30 de Junio de 2013). *El Comercio*. Acesso em 21 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de El Comercio: http://www.elcomercio.com.ec/negocios/Empresa-china-mineria-FrutadelNorte-minera-mineria_0_965303541.html
- ARCOM. (2012). *SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES MINERAS ILEGALES PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE*. Zamora.
- Arguello, A., Cantos, E., & Viteri, J. (Marzo de 2012). *Letras Verdes*. Acesso em 25 de Noviembre de 2013, disponível em Flacso Andes: <http://www.flacsoandes.org/letrasverdes/editorial/177-riesgos-antropicos-generados-por-la-actividad-minera>
- Arrow, K. (1921). Fonte:
http://books.google.com.ec/books?id=5d5l7FYXakwC&pg=PA297&lpg=PA297&dq=Classificat+ory+Notes+on+the+Production+and+Transmission+of+Technological+Knowledge&source=bl&ots=jJmPM--Ot2&sig=F6YUQOZiw_tKmH_coMbhtIAm0mQ&hl=es-419&sa=X&ei=O3OvUprwONKEkQfa5ICgBA&ved
- Asamblea Constituyente. (2008). *Asamblea Nacional*. Acesso em 7 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de la Asamblea Nacional:
http://www.asambleanacional.gob.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
- Asamblea General de las Naciones Unidas. (2000). *Declaración del Milenio*. New York: ONU.

- Australian Human Rights Commission. (10 de Diciembre de 2000). *Australian Human Rights Commission*. Acceso em 21 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Australian Human Rights Commission: <http://www.humanrights.gov.au/how-are-human-rights-protected-australian-law>
- Banco Mundial. (14 de Abril de 2013). *World Bank*. Acceso em 27 de Noviembre de 2013, disponível em sitio del Banco Mundial: <http://www.bancomundial.org/es/results/2013/04/14/mining-results-profile>
- Brundtland, G. H. (1987). *Informe de la Comisión Mundial y Desarrollo*. Oslo: ONGO.
- Buchanan, J., & Tollison, R. (2009). *Universidad de Michigan*. Fonte: Sitio web Universidad de Michigan: <http://www.press.umich.edu/pdf/9780472080410-ch13.pdf>
- Buenaventura. (2009). *Code Business Conduct Ethics*. Acceso em 27 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de Buenaventura: http://www.buenaventura.com/doc/code_business_conduct_ethics.pdf
- Buenaventura. (2012). *Reporte anual Buenaventura*. Acceso em 11 de Enero de 2014, disponível em Sitio web Buenaventura: <http://extapps.mzir.com/rao/Buenaventura/2012/interna.asp?i=0&pag=03&secao=2>
- Buenaventura. (8 de Junio de 2012). *Security policy and occupational health, environmental quality and community relations*. Acceso em 26 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de Compañía de Minas Buenaventura: <http://www.b2i.us/profiles/investor/fullpage.asp?BzID=1454&to=cp&Nav=1&LangID=1&s=0&nolog=1&ID=14473>
- Buenaventura. (11 de Septiembre de 2012). *Social Responsibilities*. Acceso em 27 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de Compañía de Minas Buenaventura: <http://www.b2i.us/profiles/investor/fullpage.asp?BzID=1454&to=cp&Nav=0&LangID=1&s=0&ID=5258>
- Cámara de Minería del Ecuador. (05 de marzo de 2011). *Depósitos de minerales metálicos en el Ecuador*. Reporte empresas mineras- no incluye portafolio proyectos ENAMI EP.
- Canadian Environmental Assessment Agency. (2012). *Canadian Environmental Assessment Agency*. Fonte: Sitio web de Canadian Environmental Assessment Agency: <http://www.ceaa-acee.gc.ca/default.asp?lang=En&n=B053F859-1#ceaa05>
- Chaparro, E., & Salgado, R. (Diciembre de 2005). *CEPAL*. Acceso em 16 de Noviembre de 2013, disponível em CEPAL: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/3/24003/lcl2435e.pdf>
- Chumanmin, Y. (14 de Abril de 2011). *The Guardian*. Acceso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio wen de The Guardian: <http://www.theguardian.com/environment/2011/apr/14/toxic-mine-spill-chinese-pollution>

- Cluster Minero. (2000). *Cluster Minero*. Acesso em 27 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de Cluster Minero: <http://www.clusterminero.cl/portal/index.php/cluster-educa/un-poco-de-historia>
- Coase, R. (1988). *The Firm, the market and the law*. University of Chicago Press.
- CODELCO. (28 de Noviembre de 2011). *CODELCO*. Fonte: Sitio web de CODELCO: http://www.codelco.com/firma-de-acuerdo-codelco-enami-ep-de-ecuador/prontus_codelco/2011-11-28/122201.html
- CODELCO. (16 de Febrero de 2011). *Sustentabilidad*. Acesso em 28 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de CODELCO: http://www.codelco.com/codelco-presente-en-el-debate-sobre-iso-26000/prontus_codelco/2011-02-16/184815.html
- CODELCO. (2012). *Reporte de Sustentabilidad*. Acesso em 20 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de CODELCO: <http://www.codelco.com/derechos-humanos-y-practicas-laborales/reportes2012/2013-04-15/191000.html>
- Comisión Ecuémica de Derechos Humanos. (Enero de 2011). *Federación Internacional de Derechos Humanos*. Acesso em 30 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de Federación Internacional de Derechos Humanos: <http://www.fidh.org/IMG/pdf/Resumen-Ejecutivo-Intervencion-Minera.pdf>
- Commission for occupational safe and health. (2010). *Department of Mines and Petroleum*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Prevention and control of Legionnaires' disease: http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP__PreventionAndControlOfLegionnairesDisease.pdf
- Commonwealth of Australia. (Octubre de 2006). *Department of Industry*. Acesso em 26 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Industry: <http://www.innovation.gov.au/resource/Documents/LPSDP/LPSDP-CommunityEngagement.pdf>
- Conferencia de las Naciones sobre el Medio Ambiente Humano. (1972). *Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Unido*. Estocolmo: <http://es.scribd.com/doc/54648700/Declaracion-de-Estocolmo-1972>.
- Congreso nacional de Chile. (9 de Marzo de 1994). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*. Fonte: Sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667>
- Congresso Nacional do Brasil. (4 de Abril de 1968). *Departamento Nacional de Produção Mineral*. Acesso em 9 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Departamento Nacional de Produção Mineral: <http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=67&IDPagina=84&IDLegislacao=29>

- Congresso Nacional do Brasil. (1995). *Departamento Nacional de Produção Mineral*. Acesso em 27 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Departamento Nacional de Produção Mineral: <http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=67&IDPagina=84&IDLegislacao=236>
- Consejo Internacional de Minas y Metales. (Junio de 2012). *International Council on Mining & Metals*. Acesso em 20 de 11 de 2013, disponível em sitio web International Council on Mining & Metals: <http://www.icmm.com/human-rights-social-development-and-the-mining-and-metals-industry>
- Consejo Internacional de Minería y Metales. (2004). *International Council on Mining & Metals*. Acesso em 21 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de International Council on Mining & Metals: <http://www.icmm.com/page/84166/social-and-economic-development>
- Consejo Minero de Chile. (2000). *Servicio Nacional de Geología y Minería*. Acesso em 24 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Servicio Nacional de Geología y Minería: <http://www.sernageomin.cl/ambiental-acuerdo.php>
- Constitución de la República de Ecuador. (16 de Noviembre de 2009). *Ministerio del Medio Ambiente*. Acesso em 7 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web del Ministerio del Medio Ambiente: file:///C:/Users/Alexandra/Downloads/reglamento_ambiental_mineras.pdf
- Corden, M., & Neary, P. (Diciembre de 1982). *The Economic Journal*. Acesso em 21 de Enero de 2014, disponível em sitio web The Economic Journal: <http://www.sublettewyo.com/ArchiveCenter/ViewFile/Item/79>
- Cornes, R., & Sandler, T. (1986). *Google Books*. Acesso em Diciembre de 2013, disponível em Sitio web de Google: http://books.google.com.ec/books?id=Fxbz7awtNIMC&printsec=frontcover&hl=es&source=gs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=free%20rider&f=false
- Dag Hammarskjöld. (1975). *Otro Desarrollo*. New York.
- Dahlman, C. (Abril de 1979). *Cafe Hayek*. Fonte: Sitio Cafe Hayek: <http://cafehayek.com/wp-content/uploads/2011/11/Carl-Dahlman.pdf>
- Darby, S. (2010). *Transparency Initiative Organization*. Acesso em 21 de Enero de 2014, disponível em Sitio de Transparency Initiative Organization: http://www.transparency-initiative.org/wp-content/uploads/2011/05/natural_resources_final1.pdf
- De Echave, J. (Mayo de 2011). *Congreso de Perú*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio web del Congreso de Perú: [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/7C79E9AC91BD4088052579510078B1A2/\\$FILE/Pol%C3%ADtica_y_Econom%C3%ADa.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con3_uibd.nsf/7C79E9AC91BD4088052579510078B1A2/$FILE/Pol%C3%ADtica_y_Econom%C3%ADa.pdf)
- Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. (1992). Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. *Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo* (p. 1). Río de Janeiro: NNUU.

- Department of industry and resources Western Australia. (Febrero de 2006). *Department of industry and resources*. Fonte: Sitio web de Department of industry and resources: http://www.planning.wa.gov.au/dop_pub_pdf/3_-_ed_min_gl_miningproposalsinwa_jan07.pdf
- Department of Mineral Resources South Africa. (2011). *Department of Mineral Resources*. Fonte: Sitio web de Department of Mineral Resources: <http://www.dmr.gov.za/mineral-policy-a-promotion/mine-environmental-management.html>
- Department of Mines. (Septiembre de 2003). *Ministry of Minerals, Energy and Water Affairs*. Acceso em 26 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Ministry of Minerals, Energy and Water Affairs: <http://www.mines.gov.bw/eia%20guidelines%20for%20mining%20projects%20vol1.pdf>
- Department of Mines and Petroleum. (8 de Diciembre de 1978). *State Law Publisher*. Fonte: Sitio web de State Law Publisher: http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtitle_604_homepage.html
- Directorio de la ARCOM. (21 de Septiembre de 2011). *ARCOM*. Acceso em 7 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de la ARCOM: file:///C:/Users/Alexandra/Downloads/instructivo_acumulacion.pdf
- Dues Process of law foundation. (2011). *El derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas*. Lima: Oxfam.
- Ecuacorriente S.A. (2008). *Código de Conducta*. Acceso em 6 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de ECSA: <http://www.ecuacorriente.com/Files/Codigo%20de%20Conducta%20-%202009.pdf>
- Ecuacorriente S.A. (2008). *Memoria Socioambiental*. Acceso em 11 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de ECSA: http://www.ecuacorriente.com/Files/Memoria%20Socio%20Ambiental%20ECSA%202008_001.pdf
- EITI. (Mayo de 2012). *Transparencia y rendición de cuentas en la industria extractiva chilena*. Acceso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de la EITI: http://eiti.org/files/2012-10-10_Scoping_Study_Chile_Spanish.pdf
- El Comercio. (18 de Mayo de 2014). Minera Ecuacorriente denuncia que obreros ocuparon su campamento Zamora Chinchipe. *El Comercio*, p. 1.
- Environmental Defender's Office of Western Australia. (Enero de 2011). *Environmental Defender's Office of Western Australia*. Acceso em 27 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Environmental Defender's Office of Western Australia: http://www.edowa.org.au/files/factsheets/me_mining.pdf
- Environmental Protection Authority. (7 de Diciembre de 2012). *Environmental Impact Assessment Administrative*. Acceso em 4 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Environmental Protection Authority:

- <http://edit.epa.wa.gov.au/EPADocLib/Environmental%20Impact%20Assessment%20Administrative%20Procedures%202012.pdf>
- Erthal, A., & Marcondes, D. (Junio de 2013). *FLACSO*. Acesso em 20 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de la FLACSO:
http://www.flacsoandes.org/iconos/images/pdfs/Iconos%2047/I47_05D_Erthal_Marcondes.pdf
- European Commission. (25 de Octubre de 2011). *EUR-Lex*. Fonte: Sitio web de EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF>
- Extractive Industries Transparency Initiative. (2013). *Extractive Industries Transparency Initiative*. Acesso em 28 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Extractive Industries Transparency Initiative: http://eiti.org/files/EITI-Fact-Sheet-Spanish_1.pdf
- Ferrer, A. (2010). Raúl Prebisch y el dilema del desarrollo en el mundo global. *CEPAL*, 9.
- Field, B., & Field, M. (2003). *Economía Ambiental*. Madrid: McGraw Hill.
- Fischer, S., & Dornbusch, R. (1985). *Economía*. México: McGraw-Hill.
- Flores, L. (21 de Enero de 2014). *RPP Noticias*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de RPP Noticias: http://www.rpp.com.pe/2014-01-21-ica-explosion-en-minera-deja-un-muerto-y-dos-heridos-noticia_663630.html
- Fundación acción pro derechos humanos. (10 de Diciembre de 1948). *Fundación Pro Derechos Humanos*. Acesso em 23 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de Fundación Pro Derechos Humanos:
http://www.derechoshumanos.net/derechos/index.htm?gclid=CMGiu_LFILwCFWRk7AodowwAGg
- Garg, A. (6 de Noviembre de 2013). *Human Rights Brief*. Acesso em 30 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de Human Rights Brief: <http://hrbrief.org/2013/11/derechos-humanos-de-las-personas-afectadas-por-la-mineria-en-las-americas-y-responsabilidades-de-los-paises-receptores-y-de-origen-de-las-empresas-mineras/>
- Global Reporting Initiative. (2011). *Sustainability Reporting Guidelines*. Amsterdam: Global Reporting Initiative.
- Gobierno de Chile. (31 de Diciembre de 2007). *Ministerio de Minería*. Acesso em 5 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web del Ministerio de Minería:
<http://www.minmineria.gob.cl/normativa-legal/leyes-sectoriales/>
- Goodland, R. (2012). Responsible Mining: The key to profitable resource development. *Extractive Industry Review*, (p. 28).
- Government of Western Australia. (1972). *Department of Mines and Petroleum*. Acesso em 26 de Marzo de 2014, disponível em Sitio de Department of Mines and Petroleum:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Review_of_Approval_Processes_070809_WEB.pdf

- Government of Western Australia. (Febrero de 1999). *Code of practice Surface rock support for Underground mines*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Mines and Petroleum:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP__SurfaceRockSupportUGMines.pdf
- Government of Western Australia. (10 de Junio de 2004). *State Law Publisher*. Acesso em 24 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de State Law Publisher:
http://www.slp.wa.gov.au/legislation/statutes.nsf/main_mrtile_2369_homepage.html
- Government of Western Australia. (Abril de 2006). *Code of Practice Working hours*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Commission for occupational safety and health:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP__WorkingHours.pdf
- Government of Western Australia. (2007). *Code of practice Prevention and Management of violence, aggression and bullying*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Consumer and employment protection:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP__PreventionManagementOfViolence.pdf
- Government of Western Australia. (Octubre de 2009). *Code of practice Safeguarding of machinery and plant*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Department of Commerce:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP__SafeguardingOfMachineryAndPlant2009.pdf
- Government of Western Australia. (2009). *Consultation at work* . Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Mines and Petroleum:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP__ConsultationAtWork.pdf
- Government of Western Australia. (2010). *Code of Practice Safe design of buildings and structures*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Department of Mines and Petroleum:
[http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP_SafeDesignOfBuildingsAndStructures\(1\).pdf](http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP_SafeDesignOfBuildingsAndStructures(1).pdf)
- Government of Western Australia. (2011). *Code of Mines Survey*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Mines and Petroleum:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP__MineSurvey.pdf
- Government of Western Australia. (31 de October de 2011). *Department of Mines and Petroleum*. Acesso em 5 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Mines and Petroleum: http://www.dmp.wa.gov.au/documents/DMP_Strategy_Paper_-_Environmental_Transparency_Measures.pdf
- Government of Western Australia. (2012). *Mineral exploration drilling*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Department of Mines and Petroleum:
http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP_MineralExplorationDrilling.pdf

- Government of Western Australia. (2013). *Code of practice Tailings storage facilities*. Acesso em 2 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Mines and Petroleum: http://www.dmp.wa.gov.au/documents/Code_of_Practice/MSH_COP_TailingsStorageFacilities.pdf
- Grupo del Banco Mundial. (2004). *Hacia un mejor equilibrio: El grupo del Banco Mundial y las Industrias Extractivas*. Grupo del Banco Mundial.
- Harmony Gold Mining. (30 de Junio de 2012). *Sustainability Report*. Acesso em 8 de Febrero de 2014, disponível em Sitio de Harmony Gold Mining: http://www.financialresults.co.za/2012/harmony_ar2012/sustainability-report/op-gov.php#Top
- Harmony Gold Mining. (Agosto de 2013). *Code of Ethics*. Acesso em 27 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de Harmony Gold Mining: [file:///C:/Users/Alexandra/Downloads/code-of-ethics%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Alexandra/Downloads/code-of-ethics%20(1).pdf)
- Harrington, W., & Morgestern, R. (2004). *Resources for the Future*. Fonte: Sitio web de Resources for the Future: http://www.rff.org/rff/Documents/RFF_Resources_152_ecoincentives.pdf
- HD Mining. (11 de Diciembre de 2012). *HD Mining*. Acesso em 26 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de HD Mining: <http://www.hdminingintl.com/about-hd-mining-international>
- Herbert, S. (8 de Diciembre de 1978). *Organización Premio Nobel*. Fonte: Sitio de la Organización Premio Nobel: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1978/simon-lecture.pdf
- Hohnen, P. (Marzo de 2007). *International Institute for Sustainable Development*. Fonte: International Institute for Sustainable Development: http://www.iisd.org/pdf/2007/csr_guide.pdf
- Hotelling, H. (<http://www.eumed.net/cursecon/textos/Hotelling-Agotables.pdf> de Abril de 1931). *The Journal of Political Economy*. JSTOR, pp. 37-39.
- Ilich, P. (6 de Noviembre de 2013). *Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente: <http://www.aida-americas.org/es/blog/miner%C3%AD-y-derechos-humanos-en-colombia>
- International Council on Mining & Metals. (25 de Abril de 2014). *International Council on Mining & Metals*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de International Council on Mining & Metals: <http://www.icmm.com/malaria>
- International Organization for Standardization. (15 de Julio de 2008). *International Organization for Standardization*. Acesso em 28 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de International Organization for Standardization: <http://www.iso.org/iso/news.htm?refid=Ref1144>

- International Organization for Standardization. (2010). *Guía de Responsabilidad Social*. Acesso em 21 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de International Organization for Standardization: http://www.iso.org/iso/iso_26000_project_overview-es.pdf
- Jarrín, S. (8 de Mayo de 2014). Marco legal minero ecuatoriano y proyectos a gran escala. (A. Torres, Entrevistador)
- Jarrín, S., Espín, W., & Mancheno, S. (Mayo de 2013). *Organización Grupo Faro*. Acesso em 8 de Mayo de 2014, disponível em Sitio wen de Organización Grupo Faro: http://www.grupofaro.org/sites/default/files/archivos/publicaciones/2013/2013-11-13/marco_legal_de_la_mineria_y_estado_de_los_oleoductos_en_ecuador.pdf
- Jiménez, B. (25 de Septiembre de 2009). *El Mundo*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio wen de El Mundo: <http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/24/internacional/1253823079.html>
- Jungbluth, W. (Octubre de 2012). *Revenue Watch Institute*. Acesso em 30 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de Revenue Watch Institute: <http://www.revenuwatch.org/sites/default/files/PeruSubnationalSpanish20.pdf>
- Justice Laws Website. (1985). *Justice Laws Website*. Acesso em 21 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Justice Laws Website: <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/h-6/page-1.html>
- La República. (13 de Junio de 2012). *Región Sur, La República*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio wen de La República: <http://www.larepublica.pe/12-06-2012/mineria-no-borra-mala-imagen-que-es-contaminadora>
- Labandeira, X., León, C., & Vázquez, X. (2007). *Economía Ambiental*. Madrid: Pearson Educación.
- Larrain, F., & Sachs, J. (2002). *Macroeconomía en la economía global*. Buenos Aires: Pearson Education.
- Ley Chile. (10 de Marzo de 2004). *Ley Chile*. Acesso em 21 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Ley Chile: <http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=222228&idParte=0>
- Mandelbaum, K. (1945). *The industrialisation of backward areas*. Oxford: Oxford, B. Blackwell.
- Marshall, A. (1920). *Principle of Economics*. Fonte: Sitio de Library Economics Liberty: <http://www.econlib.org/library/Marshall/marP14.html#Bk.III,Ch.VI>
- Mc Phail, K. (2008). *Sustainable Development in the Mining and Minerals Sector: The Case for Partnership at Local, National and Global Levels*.
- Meadows, D., Randers, J., & Meadows, D. (2004). *Donella Meadows Institute*. Fonte: sitio web de Donella Meadows Institute: <http://www.sustainer.org/pubs/limitstogrowth.pdf>
- Mining Facts Organization. (2012). *Mining Facts Organization*. Acesso em 20 de febrero de 2013, disponível em Sitio web Mining Facts Organization: <http://www.miningfacts.org>

- Minister of Water and Environmental Affairs. (1998). *Minister of Water and Environmental Affairs*.
 Fonte: Sitio web de Minister of Water and Environmental Affairs:
<http://www.environment.co.za/documents/legislation/EIA/2010-eia-legislation-regulations-south-africa/EIA-Environmental-Impact-Assessment-Regulations-South-Africa-2010-South-Africa.pdf>
- Minister of Water and Environmental Affairs South Africa. (10 de Agosto de 2008). *Department of Environmental Affairs*. Acesso em 24 de MARzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Environmental Affairs:
https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/wasteclassification_management_g35572_GN614.pdf
- Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos . (14 de Agosto de 2013). *Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos* . Acesso em 1 de Mayo de 2014, disponível em Sitio web de Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos : <http://www.sectoresestrategicos.gob.ec/gobierno-de-australia-fortalecera-conocimientos-de-tecnicos-de-la-enami-ep/>
- Ministerio de Energía y Minas de Perú. (4 de Junio de 1992). *Portal del Estado Peruano*. Acesso em 10 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web del Portal del Estado Peruano:
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/94/PLAN_94_DS%20N%C2%BA%20014-92-EM_2008.pdf
- Ministerio de Minería de Chile. (14 de Octubre de 1983). *Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*.
 Fonte: Sitio web de Biblioteca del Congreso Nacional de Chile:
<http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29668&r=3>
- Ministerio de Recursos, Energía y Turismo . (2006). *Departamento Australiano de Recursos, Energía y Turismo*. Fonte: sitio web del Departamento Australiano de Recursos, Energía y Turismo:
www.ret.gov.au/sdmining
- Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. (5 de Diciembre de 2011). *ARCOM*. Acesso em 7 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de la ARCOM:
file:///C:/Users/Alexandra/Downloads/guias_tecnicas_arcom.pdf
- Ministério do Meio Ambiente. (Agosto de 2001). *Secretaria de qualidade ambiental*. Fonte: Sitio web de Ministério do Meio Ambiente:
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/MANUAL_mineracao.pdf
- Ministro de Energía y Minas Perú. (16 de Mayo de 2002). *Ministro de Energía y Minas*. Acesso em 26 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Ministro de Energía y Minas:
http://www.minem.gob.pe/_detalle.php?idSector=1&idTitular=189&idMenu=sub154&idCategor=189
- Miranda, M., Chambers, D., & Coumans, C. (19 de Octubre de 2005). *Framework for responsible mining*. Acesso em 18 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de Framework for responsible mining:
http://www.frameworkforresponsiblemining.org/pubs/Framework_ES_20060601.pdf

- Moguillansky, G. (Julio de 1998). *CEPAL*. Acesso em 17 de Noviembre de 2013, disponível em Sitio de la CEPAL: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/5/4535/lcl1131e.pdf>
- Moore, D. (10 de Octubre de 2013). *Huffpost British Columbia*. Acesso em 27 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de Huffpost British Columbia: http://www.huffingtonpost.ca/2013/04/07/hd-mining-foreign-workers-cleared_n_3031230.html
- Mullins, M. (2012). *Revenue Watch Institute*. Acesso em 30 de Abril de 2014, disponível em Sitio web de Revenue Watch Institute: http://www.revenuwatch.org/sites/default/files/China_TAI_eng.pdf
- Naciones Unidas. (1992). *Agenda 21*. Rio de Janeiro: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/1718a21_summary_spanish.pdf.
- Naciones Unidas. (Abril de 2010). *Naciones Unidas*. Fonte: Sitio web de las Naciones Unidas: http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_pdfs/csd-18/rims/LatinAmericaCarib-DocumentoPreliminarRIMLAC.pdf
- Newcrest Mining Limited. (2012). *Newcrest Annual Report*. Acesso em 3 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de Newcrest Mining Limited: <http://newcrest.ice4.interactiveinvestor.com.au/Newcrest1301/AnnualReport2013/EN/body.aspx?z=2&p=22&v=2&pgl=&uid=>
- North, D. (1990). *Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico*. Melbourne: Cambridge University Press.
- Occupational Health & Safety Advisory Services. (2011). *Occupational Health & Safety Advisory Services*. Acesso em 28 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Occupational Health & Safety Advisory Services: <http://www.ohsas.org/>
- Oficina General de Gestión Social. (2003). *Ministerio de Energía y Minas*. Acesso em 27 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web del Ministerio de Energía y Minas: http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dgss/publicaciones/declaracion_jurada.pdf
- Olson, M. (1985). *Auge y decadencia de las naciones*. Barcelona: Ariel.
- O'Neil, P. (8 de Mayo de 2013). *Vancouver Sun*. Acesso em 26 de Febrero de 2014, disponível em Sitio web de Vancouver Sun: <http://www.vancouversun.com/Federal+provincial+officials+applied+pressure+allow+foreign+workers+court+hears/8357392/story.html>
- Pereira, M., Ulloa, A., O'Ryan, R., & De Miguel, C. (Diciembre de 2009). *CEPAL*. Fonte: Sitio Web de CEPAL: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/38260/Serie140.pdf>
- Periódico La Jornada. (26 de Junio de 2011). *Opinión, Periódico La Jornada*. Acesso em 29 de Abril de 2014, disponível em Sitio wen del Periódico La Jornada: <http://www.jornada.unam.mx/2011/06/26/opinion/024n1mun>
- Pigou, A. (1952). *The Economics of Welfare*. Brunswick: Macmillian and Co. Limited.

- Polo, C. (Mayo de 2006). *CEPAL*. Acceso em 21 de Enero de 2014, disponível em Sitio web CEPAL: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/25656/lcl2520e.pdf>
- Province of British Columbia. (1996). *British Columbia Laws*. Acceso em 5 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de British Columbia Laws: http://www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96293_01
- Republic of South Africa. (2002). *Department of Mineral Resources*. Fonte: Sitio web de Department of Mineral Resources: <http://www.dmr.gov.za/publications/summary/109-mineral-and-petroleum-resources-development-act-2002/225-mineraland-petroleum-resources-development-actmprda.html>
- Republic of South Africa. (7 de Junio de 2004). *Department of Environment*. Acceso em 27 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Department of Environment: https://www.environment.gov.za/sites/default/files/legislations/nema_amendment_act10.pdf
- Revenue Watch Institute. (2013). *Revenue Watch Institute*. Fonte: Sitio web de Revenue Watch Institute: <http://www.revenuwatch.org/countries/asia-pacific/australia/overview>
- Rey, P. (13 de Junio de 2013). *International Bussiness Times*. Acceso em 1 de Mayo de 2014, disponível em Sitio web de International Bussiness Times: <http://www.ibtimes.com/canadian-gold-giant-kinross-pulls-out-ecuador-mine-project-will-china-take-its-place-1305761>
- Riera, P., García, D., Kristrom, B., & Brannlund. (2005). *Manual de Economía Ambiental y de los Recursos Naturales*. Madrid: Thomsom.
- Sachs, J., & Warner, A. (Diciembre de 1995). *NBER Working Paper Series*. Fonte: Sitio de NBER Working Paper Series: http://www.nber.org/papers/w5398.pdf?new_window=1
- Sánchez, F. (Diciembre de 2004). *CEPAL*. Fonte: Sitio CEPAL: <http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/7/20887/P20887.xml&xsl=/drni/tpl/p9f.xsl&base=/colombia/tpl/top-bottom.xslt>
- Sánchez, F., & Lardé, J. (Junio de 2006). *CEPAL*. Acceso em 21 de Enero de 2014, disponível em Sitio web CEPAL: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/25949/lcl2532e.pdf>
- SHANON, K. (2008). *Política de Salud, Seguridad, Ambiente y Comunidad*. Acceso em 6 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de ECSA: http://www.corriente.com/media/PDFs/corp_governance/HealthSafetyESP.pdf
- South Africa Government. (22 de Enero de 2014). *South Africa Government*. Acceso em 21 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de South Africa Government: [http://www.gov.za/documents/index.php?term=&dfrom=&dto=&tps\[\]=1&subjs\[\]=0](http://www.gov.za/documents/index.php?term=&dfrom=&dto=&tps[]=1&subjs[]=0)
- Stiglitz, J. (1993). *Economía*. Barcelona: Ariel S.A.
- Teck Resources Limited. (23 de Abril de 2009). *Code of Ethics*. Acceso em 14 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de Teck Resources Limited:

<https://www.teck.com/Generic.aspx?PAGE=Teck+Site%2fResponsibility+Pages%2fCorporate+Governance+Pages%2fCode+of+Ethics&portalName=tc>

Teck Resources Limited. (2012). *Sustainability Report*. Acesso em 15 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de Teck Resources Limited:

<http://www.teck.com/Generic.aspx?PAGE=Teck+Site%2fResponsibility+Pages%2fSustainability+Pages%2fKey+Focus+Area+pages%2fCommunity&portalName=tc>

The Boston Consulting Group. (25 de Abril de 2013). *The Boston Consulting Group*. Acesso em 23 de Enero de 2014, disponível em sitio web de The Boston Consulting Group:

https://www.bcgperspectives.com/content/articles/metals_mining_energy_environment_mining_stakeholders_collaborate_responsible_development/

The ISO and Corporate Social Responsibility. (Mayo de 2004). *International Institute for Sustainable Development*. Fonte: International Institute for Sustainable Development:

http://www.iisd.org/pdf/2004/standards_definitions.pdf

Topf, A. (12 de Junio de 2013). *Gold Investing News*. Acesso em 20 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Gold Investing News: <http://goldinvestingnews.com/35854/kinross-scraps-fruta-del-norte-as-ecuador-mining-reforms-voted-on.html>

Tribunal Constitucional. (31 de Octubre de 1993). *Tribunal Constitucional*. Acesso em 21 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Tribunal Constitucional:

<http://www.tc.gob.pe/constitucion.pdf>

Tribunal Constitucional de la República del Ecuador. (29 de enero de 2009). *Agencia de Regulación y Control Minero*. Acesso em 5 de marzo de 2013, disponível em

http://www.arcom.gob.ec/index.php/descargas/cat_view/128-descargas/127-leyes-y-reglamentos.html

Tullock, G. (1965). *JStore*. Acesso em 2 de Diciembre de 2013, disponível em Sitio web JStore:

<http://www.jstor.org/discover/10.2307/2391168?uid=2134&uid=367134941&uid=2&uid=70&uid=3&uid=367134931&uid=60&purchase-type=article&accessType=none&sid=21103197070631&showMyJstorPss=false&seq=1&showAccess=false>

Turner, S. (20 de Junio de 2012). *International Mining Metals Council*. Acesso em 20 de Noviembre de 2013, disponível em Sitio de International Mining Metals Council:

<http://www.icmm.com/publications> Independent report: World Heritage Sites and the extractive industries

Unidad de información pública e internet. (2010). *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: CEPAL.

Vale. (2012). *Relatório de Sustentabilidade*. Acesso em 15 de Enero de 2014, disponível em Sitio web de Vale:

<http://www.vale.com/PT/aboutvale/sustainability/links/LinksDownloadsDocuments/relatorio-de-sustentabilidade-2012.pdf>

Varian, H. (1999). *Microeconomía Intermedia*. Barcelona: Antoni Bosch.

Veblen, T. (1899). *Google books*. Fonte: Sitio Google:

http://books.google.com.ec/books?id=WqVq6SDhtjQC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Von Wieser, F. (1927). *Mises Organisation*. Fonte: sitio web de Mises Organisation:

https://mises.org/books/Social_Economics_Wieser.pdf

Waste Authority. (Marzo de 2012). *Waste Authority*. Acesso em 24 de Marzo de 2014, disponível em Sitio web de Waste Authority:

http://www.wasteauthority.wa.gov.au/media/files/documents/WA_Waste_Strategy.pdf

Willianson, O. (2002). *Journal of Economic Perspectives*. Fonte: Sitio de Journal of Economic Perspectives:

<http://www.jstor.org/discover/10.2307/3216956?uid=3737912&uid=2134&uid=367134941&uid=2&uid=70&uid=3&uid=367134931&uid=60&purchase-type=article&accessType=none&sid=21103100506297&showMyJstorPss=false&seq=1&showAccess=false>

World Economic Forum. (Abril de 2013). *World Economic Forum*. Acesso em 23 de Enero de 2014, disponível em Sitio de World Economic Forum:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_MM_RMDI_Report_2013_SP.pdf

Anexos

Anexo a. Cuestionario

ENCUESTA PRINCIPIOS Y MATERIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL								
Información de fácil acceso, precisa, clara			100					
Información exigida pero no publicada, no es clara o precisa			50					
No hay información específica o no es proporcionada al público en general			0					
País			Australia Western	Brasil	Canadá British Columbia	Chile	Perú	Sudáfrica
Pregunta			Newcrest Mining	Vale	Teck Resources	CODELCO	Buenaventura	Harmony Gold Mining

I PRINCIPIOS DE RS

I.1 RENDICION DE CUENTAS								
Empresa								
1 e	La empresa rinde cuentas sobre impactos sociales?	100	100	100	100	100	100	100
2 e	La empresa rinde cuentas sobre impactos económicos?	100	100	100	100	100	100	100
3 e	La empresa rinde cuentas sobre impactos ambientales?	100	100	50	100	100	100	100
4 e	La empresa publica pagos de impuestos y regalías al Estado?	100	100	100	100	100	100	100
Total		100	100	88	100	100	100	100
Gobierno								
5 g	El marco legal minero plantea una ley que exija a la empresa la rendición de cuentas sobre impactos sociales?	100	100	100	100	100	100	100
6 g	El marco legal minero plantea una ley que exija a la empresa la rendición de cuentas sobre impactos económicos?	100	100	0	0	0	100	0
7 g	El marco legal minero plantea una ley que exija a la empresa la rendición de cuentas sobre impactos ambientales?	100	100	100	100	100	100	100
8 g	El gobierno publica las tasas de regalías e impuestos que recibe de la empresa minera por pagos?	100	100	100	100	100	100	100
Total		100	100	75	75	75	100	75

I.1 TRANSPARENCIA								
Empresa								
9 e	La empresa publica sus políticas o valores?	100	100	100	100	100	100	100
10 e	La empresa publica su proceso de toma de decisiones?	100	100	100	0	100	0	100
11 e	La empresa publica sus actividades de las que es responsable?	100	100	100	100	100	100	100
12 e	La empresa indica la localización de sus actividades?	100	100	100	100	100	100	100
13 e	La empresa publica su proceso de rendición de cuentas?	100	100	100	100	100	100	100
14 e	La empresa publica información de sus dirigentes?	100	100	100	100	100	100	50
15 e	La empresa publica las normas y criterios con los que evalúa su RS?	100	100	100	100	100	100	100
16 e	La empresa publica el origen y la distribución de su capital financiero?	100	100	100	100	100	100	100
17 e	La empresa publica los riesgos de sus decisiones y actividades sobre:							
18 e	La sociedad	50	100	100	100	50	50	100
19 e	La economía	100	100	100	100	50	50	100
20 e	El medio ambiente	50	100	100	100	50	50	100

2	e	La empresa publica la identidad de sus partes interesadas?	100	100	100	100	100	100	0
2	e	Esta información es accesible para todo el público?	100	100	100	100	100	100	50
Total			92	100	100	92	88	81	85
Gobierno									
2	g	El marco legal mero establece procedimiento de toma de decisiones para las empresas mineras?	100	0	100	100	0	0	0
Total			100	0	100	100	0	0	0

I.I	COMPORTAMIENTO ÉTICO								
II	Empresa								
2	e	La empresa publica sus valores o principios?	100	100	100	100	100	100	0
4	e	La empresa publica su estructura organizacional?	100	100	100	100	100	100	0
2	e	La empresa publica el proceso de interacción con las partes interesadas?	100	100	100	100	100	100	50
6	e	La empresa define y comunica normas de comportamiento ético?	100	100	100	100	100	100	100
2	e	La empresa promueve el cumplimiento de sus normas de comportamiento ético en sus empleados?	100	100	100	100	100	100	100
2	e	La empresa promueve el cumplimiento de sus normas de comportamiento ético en su cadena de valor?	0	100	100	100	0	100	0
9	e	La empresa da seguimiento al comportamiento ético?	0	0	100	100	100	100	100
0	e	La empresa protege la conservación de especies animales?	100	100	100	100	0	100	0
Total			75	88	100	100	75	100	44
Gobierno									
3	g	La legislación exige al organismo encargado de los recursos naturales, establecer un código de prácticas?	100	0	100	100	0	100	100
Total			100	0	100	100	0	100	100

I.I	RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS								
V	Empresa								
3	e	La empresa responde a las inquietudes de las partes interesadas?	100	100	100	100	100	100	50
Total			100	100	100	100	100	100	50
Gobierno									
3	g	La legislación exige a la empresa integrar participación de las partes interesadas?	100	100	100	100	100	100	100
Total			100	100	100	100	100	100	100

I.	RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD								
V	Empresa								
3	e	La empresa relaciona el código de ética con el cumplimiento de la legislación?	0	100	100	100	0	100	100
Total			0	100	100	100	0	100	100
Gobierno									
3	g	El Estado difunde las leyes y regulaciones del sector minero?	100	100	100	100	100	100	100
Total			100	100	100	100	100	100	100

I.	RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO								
V	Empresa								
3	e	La empresa reconoce el respeto a la normativa internacional de comportamiento?*	100	100	100	100	100	100	0
Total			100	100	100	100	100	100	0
Gobierno									
g		NO APLICA A GOBIERNOS							
Total			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

I.									
V									
II	<u>RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS</u>								
	Empresa								
3	e	La empresa promueve el respeto a los Derechos Humanos en sus empleados?	0	100	100	100	0	100	0
7		La empresa promueve el respeto a los Derechos Humanos en su cadena de valor?	0	100	100	100	0	100	0
3									
8									
		Total	0	100	100	100	0	100	0
	Gobierno								
3	g	La legislacion reconoce la universalidad de los derechos humanos?	100	100	100	100	100	100	100
9		Total	100	100	100	100	100	100	100

II MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS

II. I GOVERNABILIDAD									
Empresa									
4	e	La empresa impulsa la RS en su gestión y actividades?	100	100	100	100	100	100	100
0		La empresa fomenta la participación de sus empleados en actividades de RS?	100	100	100	100	100	100	100
4									
1									
Total			100	100	100	100	100	100	100
Gobierno									
4	g	La legislación minera establece un proceso para la toma de decisiones de la empresa minera?	100	0	100	100	0	100	0
2									
Total			100	0	100	100	0	100	0

II. DERECHOS HUMANOS									
Empresa									
4	e	La empresa reconoce el respeto a los Derechos Humanos en su gestión?	100	100	100	100	100	100	0
3		La empresa promueve el respeto a los Derechos Humanos en su cadena de valor?	100	100	100	50	0	0	0
4		La empresa brinda capacitación de Derechos Humanos en su cadena de valor?	100	100	100	50	0	0	0
4	e	La empresa identifica impactos de sus actividades sobre los Derechos Humanos?	0	100	100	50	0	0	0
6		La empresa previene impactos de sus actividades sobre los Derechos Humanos	0	100	100	100	0	50	0
7		La empresa da seguimiento a las actividades que podrían afectar a los Derechos Humanos?	0	100	100	100	0	100	0
8	e								
Gobierno									
4	g	La legislación plantea un marco legal basado en aspectos económicos, sociales y ambientales para el sector minero?	100	100	100	100	100	100	100
9									
COMPLICIDAD									
Empresa									
5	e	La empresa establece políticas que prevengan riesgos de complicidad?	100	100	100	100	100	100	100
0									
Gobierno									
5	g	La legislación exigen a las empresas mineras la prevención de riesgos?	100	100	100	100	100	100	100
1									
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES									
Empresa									
5	e	La empresa posee mecanismos de reclamaciones de las partes interesadas?	100	100	100	100	50	0	100
2		La empresa compensa económicamente los daños a las personas afectadas?	100	100	0	100	0	0	100
3									
5	e								
4		La empresa publica las reclamaciones de las partes afectadas?	100	50	100	100	0	0	0
Gobierno									

5								
5	g	El gobierno exige la compensación de la empresa a los afectados?	100	100	100	100	100	100
DISCRIMINACION DE GRUPOS VULNERABLES								
Empresa								
5		La empresa capacita a grupos vulnerables y discriminados sobre sus derechos?	0	0	100	0	0	0
6	e							
5		La empresa compensa a grupos vulnerables y discriminados con empleo?	100	100	100	100	100	0
7	e							
5								
8	e	La empresa apoya con educación a grupos vulnerables?	0	100	100	100	100	0
5		La empresa contribuye al desarrollo de las comunidades con infraestructura?	100	100	100	100	100	100
9	e							
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS								
Empresa								
6								
0	e	La empresa reconoce el derecho a la afiliación a sindicatos?	100	100	100	100	100	0
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES								
Empresa								
6		La empresa reconoce los derechos como a la educación, salud, bienestar, alimentación?	100	100	100	100	100	100
1	e							
6		La empresa comunica la ejecución de las evaluaciones de impactos que realiza?	100	100	50	100	100	0
2	e							
6								
3	e	La empresa se preocupa por una distribución eficaz del agua?	100	100	100	100	100	50
6		La empresa procura la provisión de servicios básicos en zonas aisladas?	100	100	100	100	100	100
4	e							
PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES EN EL TRABAJO								
Empresa								
6								
5	e	La empresa rechaza el trabajo infantil?	100	100	100	100	100	0
6								
6	e	La empresa plantea políticas que combatan la discriminación?	100	100	100	100	100	100
Gobierno								
6								
7	g	La legislación exige a la empresa el rechazo al trabajo infantil?	100	100	100	100	100	100
6								
8	g	La legislación exige a la empresa combatir la discriminación?	100	100	100	100	100	100
Total empresa								
			76	93	93	88	60	36
Total gobierno								
			100	100	100	100	100	100

II. PRÁCTICAS LABORALES								
III. Empresa								
6								
9	e	La empresa expone la aplicación de prácticas laborales RS?	100	100	100	100	100	100
Gobierno								
7								
0	g	La legislación plantea una ley que exija el trato justo y equitativo de los trabajadores?	100	100	100	100	100	100
TRABAJO Y RELACIONES LABORALES								
7								
1	e	Las empresas capacitan a los empleados sobre el cumplimiento del marco legislativo?	0	0	50	50	50	0
7								
2	e	Las empresas capacitan a los proveedores sobre el cumplimiento del marco legislativo?	0	50	50	50	50	0
CONDICIONES DE TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL								
Gobierno								
7								
3	g	La legislación minera establece leyes, acuerdos sobre las condiciones de trabajo (salario, horas de trabajo, vacaciones, salud, seguridad)?	100	100	100	100	100	100
DÍALOGO SOCIAL								
Empresa								
7								
4	e	La empresa realiza consultas o intercambio de información con el gobierno?	100	100	100	100	100	0
7								
5	e	La empresa realiza consultas o intercambio de información con los trabajadores?	100	100	100	100	100	100
7								
6	e	La empresa consulta los requerimientos de la sociedad?	100	100	100	100	100	100

Gobierno									
7	g	La legislación concede a pueblos indígenas la consulta previa?	100	100	0	100	100	0	100
7									
SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL									
Empresa									
7	e	La empresa establece políticas y normas de salud y seguridad?	100	100	100	100	100	100	100
8									
7	e	La empresa publica información sobre salud y seguridad de sus trabajadores?	100	100	100	100	100	100	0
9									
Gobierno									
8	g	La legislación exige a las empresas mineras preservar la salud y seguridad de los trabajadores?	100	100	100	100	100	100	100
0									
DESARROLLO HUMANO Y FORMACIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO									
Empresa									
8	e	La empresa impulsa políticas de capacitación y formación al personal?	100	100	100	100	100	100	100
1									
8	e	La empresa implementa políticas para combatir la discriminación?	100	100	100	100	100	100	100
8									
2	e	La empresa implementa políticas para promover la salud y el bienestar del personal?	100	100	100	100	100	100	100
3									
Gobierno									
8	g	La legislación establece leyes para combatir la discriminación?	100	100	100	100	100	100	100
4									
8	g	La legislación exige a las empresas mineras la promoción de campañas de salud?	100	100	100	100	100	100	100
5									
Total Empresa			82	86	91	91	91	82	64
Total Gobierno			100	100	83	100	100	83	100

II. MEDIO AMBIENTE								
IV								
Empresa								
8	e	La empresa plantea indicadores ambientales en la gestión de la empresa?	100	100	100	100	100	0
6								
8	e	La empresa propone campañas de educación ambiental para el personal?	100	100	100	100	100	100
7								
8	e	La empresa propone campañas de educación ambiental para proveedores?	100	0	100	0	0	100
8								
9	e	La empresa propone programas para reducir riesgos ambientales?	100	100	100	100	100	100
9								
0	e	La empresa propone método para reducir la contaminación y residuos?	100	100	100	100	100	0
0								
Estado								
9	g	La legislación exige a las empresas mineras la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental?	100	100	100	100	100	100
1								
9	g	La legislación exige a las empresas mineras métodos de tratamiento de residuos tóxicos?	100	100	100	100	100	100
2								
9	g	El gobierno proporciona programas para ayudar a la empresa con el tratamiento de residuos?	100	100	100	100	100	100
3								
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN								
Empresa								
9	e	La empresa informa los posibles riesgos ambientales de sus actividades?	100	100	100	100	50	100
4								
9	e	La empresa publica cantidades de materiales tóxicos que libera?	100	100	100	100	0	100
5								
USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS								
Empresa								
9	e	La empresa posee programas de consumo de energía eficiente?	100	100	100	100	0	100
6								
9	e	La empresa introduce energías alternativas en su producción?	0	100	100	100	0	100
7								
9	e	La empresa plantea programas para el consumo eficiente del agua?	100	100	100	100	100	0
8								
9	e	La empresa reutiliza el agua en sus operaciones?	100	100	100	100	100	0
9								
Gobierno								
1	g	La legislación minera exige a las empresas el uso eficiente del agua para las actividades mineras?	100	100	100	100	100	100
0								
0	g	La legislación minera exige a las empresas mineras el uso eficiente	0	0	0	0	0	0
1								

0	de la energía?						
1							
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LA BIODIVERSIDAD Y RESTAURACIÓN DE LOS HABITATS NATURALES							
Empresa							
1	La empresa establece programas de restauración de habitats naturales?	100	100	100	100	100	100
0	La empresa impulsa programas o campañas para apoyar la supervivencia de especies animales?	100	100	100	100	0	100
1	La empresa implementa medidas para reducir los impactos negativos en la biodiversidad?	100	100	100	100	100	0
0	La empresa implementa medidas para la preservación del agua y sus fuentes?	100	100	100	100	100	0
Gobierno							
1	La legislación exige a las empresas mineras la implementación de programas para la restauración de hábitats naturales?	100	100	100	100	100	100
0	La legislación exige a las empresas mineras campañas para reducir los impactos ambientales negativos?	100	100	100	100	100	100
7							
Total Empresa		93	93	100	93	63	13
Total Gobierno		86	86	86	86	86	86

II.		PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN							
V									
		ANTICORRUPCIÓN							
		Empresa							
1									
0									
8	e	La empresa establece normas de conducta que prevengan la corrupción?	100	100	100	100	100	100	100
		Gobierno							
1									
0									
9	g	La legislación sanciona actos de corrupción entre los actores del sector minero?	100	100	100	100	100	100	100
		PARTICIPACIÓN POLÍTICA RESPONSABLE							
		Empresa							
1									
1									
0	e	La empresa apoya al gobierno en el desarrollo de políticas públicas para el bienestar social?	100	100	100	100	100	0	100
		COMPETENCIA JUSTA							
		Empresa							
1									
1									
1	e	La empresa plantea políticas de competencia justa?	100	100	100	100	100	100	0
		Gobierno							
1									
1									
2	g	La legislación exige a las empresas mineras una competencia justa?	100	100	100	100	0	100	100
		PROMOVER LA RS EN LA CADENA DE VALOR							
		Empresa							
1									
1									
3	e	La empresa plantea políticas de compra y distribución?	0	100	100	100	0	0	0
1									
1									
4	e	La empresa plantea políticas de contratación?	100	100	100	100	0	100	0
		RESPECTO A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD							
		Empresa							
1									
1									
5	e	La empresa establece políticas que respeten el conocimiento tradicional?	100	100	100	100	100	100	100
		Gobierno							
1									
1	g	El gobierno publica procesos claros para obtener títulos de propiedad a las empresas mineras?	100	100	100	100	100	100	100

6							
1							
1							
7	g La legislación concede la consulta previa?	100	100	0	100	100	0
	Total Empresa	83	100	100	100	67	67
	Total Gobierno	100	100	75,0	100	75	75

II.							
VI	ASUNTOS DE CONSUMIDORES						
	PRÁCTICAS JUSTAS DE MARKETING, INFORMACIÓN OBJETIVA E IMPARCIAL Y PRÁCTICAS JUSTAS DE CONTRATACIÓN						
	Empresa						
1							
1							
8	e La empresa difunde información sobre impactos económicos?	100	100	100	100	100	100
1							
1	e La empresa difunde información sobre impactos sociales?	100	100	100	100	100	100
1							
2	e La empresa difunde información sobre impactos ambientales?	100	100	50	100	100	100
1							
2	e La empresa publica los impuestos que paga?	100	0	100	100	100	100
1							
	Gobierno						
1							
2	La legislación exige a la empresa minera la presentación de						
2	g económicos?	100	100	100	0	100	100
1							
2	La legislación exige a la empresa minera la publicación de impactos						
3	g sociales?	100	100	100	100	100	100
1							
2	La legislación exige a la empresa minera la publicación de impactos						
4	g ambientales?	100	100	100	100	100	100
1							
2	El gobierno difunde información del desempeño del sector minero?	100	100	100	100	100	100
1							
2	La agencia gubernamental del sector minero publica contratos						
6	g mineros?	0	0	0	0	100	0
	CONSUMO SOSTENIBLE						
	Empresa						
1							
2	La empresa publica información de los impactos causados por la						
7	e compra de sus productos?	0	100	100	100	0	100
	SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE						
	Empresa						
1							
2	La empresa pone a disposición del público medios de resolución de						
8	e quejas?	100	100	100	100	100	0
	Gobierno						
1							
2	La legislación exige a las empresas mineras la disposición de						
9	g mecanismos para que la comunidad exponga sus reclamaciones?	100	100	100	100	100	100
	ACCESO A SERVICIOS ESENCIALES						
1							
3	La empresa apoya al Estado a facilitar el acceso de la comunidad a						
0	e los servicios básicos?	50	100	100	100	100	100
	Total Empresa	79	86	92	100	86	86
	Total Gobierno	83	83	83	67	100	83

II.							
VI							
I	PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD						
	PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD						
1							
3							
1	e La empresa publica las consultas que realiza a la comunidad?	0	0	100	0	0	0
1							
3	La empresa emprende programas de desarrollo conjuntamente con						
2	e el gobierno?	100	100	100	0	100	100

EDUCACIÓN Y CULTURA

Empresa

1							
3							
3 e	La empresa impulsa la educación en las comunidades locales?	100	100	50	100	100	100
1							
3 e	La empresa impulsa la cultura tradicional de las comunidades locales?	100	100	100	100	100	100
4 e							

Gobierno

1							
3							
5 g	El gobierno sugiere a las empresas mineras contribuir con la educación de las comunidades?	100	0	0	0	0	0
1							
3 g	El gobierno sugiere a las empresas mineras impulsar la cultura tradicional de las comunidades?	100	100	0	100	100	0
6 g							

CREACION DE EMPLEO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Empresa

1							
3							
7 e	La empresa propone programas para desarrollar las habilidades de grupos desfavorecidos?	100	100	100	100	100	100

DESARROLLO Y ACCESO A LA TECNOLOGÍA

Empresa

1							
3							
8 e	La empresa contribuye al desarrollo científico en universidades?	0	0	0	100	100	0
1							
3 e	La empresa contribuye al desarrollo científico en laboratorios?	0	100	0	0	0	0
9 e							

Gobierno

1							
4							
0 g	La legislación exige a las empresas mineras contribuir con el desarrollo científico de universidades?	0	0	0	0	0	0
1							
4 g	La legislación exige a las empresas mineras contribuir con el desarrollo científico de laboratorios?	0	0	0	0	0	0
1 g							

GENERACIÓN DE RIQUEZA E INGRESOS

Empresa

1							
4							
2 e	La empresa promueve programas de negocios para los habitantes de la comunidad?	100	100	100	100	100	100

Gobierno

1							
4							
3 g	La legislación exige proponer programas para desarrollar la economía de los habitantes de la comunidad?	0	0	0	0	0	0

SALUD

Empresa

1							
4							
4 e	La empresa promueve campañas de salud pública en la comunidad?	100	100	100	0	100	100
1							
4 e	La empresa promueve campañas de concientización de enfermedades en la comunidad?	100	100	100	0	100	0
5 e							

Gobierno

1							
4							
6 g	La legislación exige a las empresas mineras la promoción de campañas de salud en la comunidad?	0	100	0	0	0	0

INVERSIÓN SOCIAL

Empresa

1							
4							
7 e	La empresa alienta a los miembros de la comunidad a participar en sus actividades?	100	100	100	0	100	100
1							
4 e	La empresa realiza contribuciones económicas como subsidios o donaciones a la comunidad?	100	0	100	0	0	100
8 e							

Gobierno

1							
4							
9 g	La legislación exige a las empresas mineras integrar en sus operaciones a habitantes de la comunidad?	0	0	0	0	100	100

Total Empresa	75	75	79	42	75	67	75
Total Gobierno	29	29	0	14	29	14	14

Elaboración: Alexandra Torres

Anexo b. Tabla de Resultados

GRADO DE MINERÍA RESPONSABLE

EMPRESA

	PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Newcrest Mining	Vale	Teck Resources	CODELCO	Buenaventura	Harmony Gold Mining	Ecuacorrientes
1	Rendición de cuentas	100	100	88	100	100	100	100
2	Transparencia	92	100	100	92	88	81	85
3	Comportamiento ético	75	88	100	100	75	100	44
4	Respeto a los intereses de las partes interesadas	100	100	100	100	100	100	50
5	Respeto al principio de legalidad	0	100	100	100	0	100	100
6	Respeto a la normativa internacional de comportamiento	100	100	100	100	100	100	0
7	Respeto a los derechos humanos	0	100	100	100	0	100	0
	Total	67	98	98	99	66	97	54

	MATERIAS FUNDAMENTALES	Newcrest Mining	Vale	Teck Resources	CODELCO	Buenaventura	Harmony Gold Mining	Ecuacorrientes
1	Gobernabilidad de la Empresa	100	100	100	100	100	100	100
2	Derechos Humanos	76	93	93	88	60	60	36
3	Prácticas Laborales	82	86	91	91	91	82	64
4	Medio Ambiente	93	93	100	93	63	93	13
5	Prácticas justas de Operación	83	100	100	100	67	67	50
6	Asuntos de Consumidores	79	86	92	100	86	86	79
7	Participación y desarrollo de la comunidad	75	75	79	42	75	67	75
	Total	84	90	94	88	77	79	60

Grado de Responsabilidad Empresa	75	94	96	93	72	88	57
----------------------------------	----	----	----	----	----	----	----

GOBIERNOS/LEGISLACIONES

	Gobierno/Legislación	Australia	Brasil	Canadá/B.C.	Chile	Perú	Sudáfrica	Ecuador
1	Rendición de cuentas	100	100	75	75	75	100	75
2	Transparencia	100	0	100	100	0	0	0
3	Comportamiento ético	100	0	100	100	0	100	100
4	Respeto a los intereses de las partes interesadas	100	100	100	100	100	100	100
5	Respeto al principio de legalidad	100	100	100	100	100	100	100
6	Respeto a la normativa internacional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Respeto a los derechos humanos	100	100	100	100	100	100	100
	Total	100	67	96	96	63	83	79

	MATERIAS FUNDAMENTALES	Australia	Brasil	Canadá/B C	Chile	Perú	Sudáfrica	Ecuador
1	Gobernabilidad de la Organización	100	0	100	100	0	0	0
2	Derechos Humanos	76	93	88	88	60	64	100
3	Prácticas Laborales	100	100	83	100	100	83	75
4	Medio Ambiente	86	86	86	86	86	86	86
5	Prácticas justas de Operación	100	100	75	100	75	75	100
6	Asuntos de Consumidores	83	83	83	67	100	83	83
7	Participación y desarrollo de la comunidad	29	29	0	14	29	14	14
	Total	82	70	74	79	64	58	65

Grado de Responsabilidad Gobierno/Legislación	91	68	85	88	63	71	72
---	----	----	----	----	----	----	----

PAÍS

Países	Australia	Brasil	Canadá/B C	Chile	Perú	Sudáfrica	Ecuador
Gado de Responsabilidad Empresa	75	94	96	93	72	88	57
Grado de Responsabilidad Gobierno/Legislación	91	68	85	88	63	71	72
Grado de Responsabilidad País	83	81	90	90	68	79	65

Elaboración: Alexandra Torres

Anexo c. Fichas de resumen Australia

NEWCREST	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Entre los años 2011 y 2012, Newcrest invirtió un total de \$104 millones en infraestructura y proyectos en las comunidades; particularmente en salud, educación y agricultura. Durante este mismo período, la empresa canceló entre impuestos y regalías, un total de \$334 millones al estado. Mientras que hasta junio 2012, la empresa reporta \$285 millones en provisión financiera para el cierre de minas.
TRANSPARENCIA	Newcrest publica sus políticas y valores, así como también, la composición de sus directivos y el proceso que siguen para la toma de decisiones. La empresa ejecuta proyectos en Australia y Papua Nueva Guinea. La rendición de cuentas la hace a través de auditorías internas y externas. La auditoría externa está realizada por Ernst & Young; mientras que la auditoría interna la realiza el director financiero. Asimismo, publica información como su experiencia, formación y otras especificaciones de los dirigentes. La empresa evalúa su RS bajo los criterios establecidos por la Iniciativa Mundial de Reporte GRI
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Newcrest difunde al público sus políticas, valores y su estructura. Además comunica su interacción con las partes interesadas y los métodos que usa con cada parte. El código de conducta de la empresa incluye aspectos: cómo trabaja en equipo, con las comunidades, cómo se hacen las negociaciones y cómo se usan los recursos; este código es aplicado al equipo Newcrest. Sin embargo, la empresa no reporta si da seguimiento al cumplimiento del código de conducta. La empresa implementa estrategias para mitigar el impacto sobre especies.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Realiza debates con la finalidad de dar y obtener información, de varios puntos de vista, para entender y considerar a sus partes interesadas. La empresa utiliza métodos y compromisos diferentes, para cada parte de su grupo de interés.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	No menciona en su código de comportamiento el respeto a la legislación del país en el que opera.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Consiguió la certificación ISO 14001 en una de sus operaciones, con la finalidad de mantener los estándares ambientales y minimizar los impactos ambientales de sus operaciones. Asimismo, la empresa es miembro de Código Internacional para el Manejo de Cianuro. Además, el reporte de sustentabilidad cumple con los requerimientos establecidos por el GRI.

RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	No menciona cuestiones específicas relacionadas con la promoción de los derechos humanos, ni en sus empleados, ni en su cadena de valor.
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Fomenta la participación de sus empleados en actividades de RS, a través de sus políticas: Excelencia empresarial, código de conducta, comunidades, diversidad, relaciones con los empresarios, ambiental, alto rendimiento, derechos humanos, empleados internacionales, operaciones, gestión de riesgo, seguridad y salud.
DERECHOS HUMANOS	En la actualidad, está desarrollando una política de derechos humanos y seguridad. La complicidad es controlada en base a la política de prácticas de corrupción; así como también, en base al código de conducta de la empresa. La empresa cuenta con políticas y prácticas estandarizadas para la gestión de conflictos y reclamaciones de la comunidad. No brinda capacitación sobre los derechos de los grupos vulnerables y discriminados. Mediante su política de relaciones laborales, reconoce el cumplimiento de las leyes relacionadas a la protección de la libertad de asociación en la empresa
PRÁCTICAS LABORALES	Da a conocer cómo integra la RS, durante el desarrollo de sus actividades. En el aspecto ambiental, detalla los materiales y sustancias con las que realiza sus operaciones, la energía y el intento por reducir los gases de invernadero, etc. al aspecto social, la empresa da a conocer las prácticas de inversión y adquisición, no discriminación, la libertad de asociación, trabajo infantil, trabajo forzado, etc. En el aspecto de trabajo y relaciones laborales, no revela la capacitación del cumplimiento del marco legislativo.
MEDIO AMBIENTE	Incluye indicadores ambientales como cantidad de materiales usados en cada operación, materiales reciclados, energía, áreas de tierra usadas, emisiones de aire y desperdicios en su gestión. El método aplicado para reducir la contaminación es el manejo de residuos y agua. Los riesgos que identifica la empresa son: la estabilidad física, gestión del agua y erosión, drenaje ácido o metalífero. Plantea el proyecto "Eficiencia energética", el que consiste en un equipo destinado a reducir la intensidad energética en las minas existentes.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Requiere difundir la promoción de la Responsabilidad Social en la cadena de valor, estableciendo políticas de compra y distribución.
CONSUMIDORES	Define sus impactos económicos como impuestos, regalías, compensaciones, empleo, salarios, entrenamiento, contratos con negocios locales y programas de desarrollo comunitario. Los impactos sociales incluyen: la creación de capacidades, prestación de apoyo financiero, construcción de autosuficiencia y la independencia económica para el largo plazo y asegurar la participación comunitaria. El impacto ambiental se da por la promoción de la excelencia ambiental. Asimismo, la empresa difunde los pagos que realiza al estado.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	No publica las encuestas que realizan a la comunidad. Respaldar al gobierno a través de proyectos de desarrollo. Promueve la educación en las comunidades locales, mediante programas de apoyo para que miembros de la comunidad en busca de empleo, adquieran oportunidades en Newcrest. Posee la política de comunidades que se enfoca en reconocer y respetar los valores culturales, tradiciones y creencias de las comunidades. Propone programas para desarrollar las habilidades de grupos minoritarios, sin discriminación de género, edad y cultura, e incrementar la diversidad.

Australia Occidental	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	La legislación minera de Australia Occidental, bajo el artículo 55A plantea un plan de trabajo que debe ser cumplido por la empresa. Este plan de trabajo establece estructuras de gobernabilidad que la empresa debe cumplir para obtener el permiso de minería.
TRANSPARENCIA	La legislación de Australia Occidental promueve la transparencia en la toma de decisiones de las empresas mineras; sin embargo, no plantea exigencias en el marco legal.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	La legislación establece leyes enfocadas a la seguridad de recursos, donde el Comité Consultivo de la Industria Minera y el Departamento de Minas y Petróleo aprueban el código de prácticas. Los códigos de prácticas establecidos engloban un código de consulta en el lugar de trabajo, de perforación exploratoria, estudio de minas, de prevención y control de enfermedades, diseños seguros de edificios y estructuras, de prevención y gestión de violencia, agresión y discriminación, de salvaguardas de maquinaria e instalaciones, de apoyo de rocas en la superficie de minas subterráneas, de instalaciones de almacenamiento de relaves y de horas de trabajo.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Las obligaciones mineras exigen la integración de los intereses de las partes interesadas, mediante la evaluación de impacto ambiental. El propósito de la EIA es promover la participación, ofreciendo asesoría y proporcionando información y alternativas a la comunidad.

RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	las entidades encargadas de los recursos naturales tramiten todo tipo de normativas a través de las páginas web oficiales.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	está dirigido exclusivamente a las empresas
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Australia reconoce en su constitución el respeto a los derechos humanos
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	El marco legal australiano incluye temas económicos concernientes al derecho de propiedad privada, pago de impuestos y regalías, crecimiento económico, compensaciones, producción. En cuanto al aspecto social integra temas como reportes de desempeño, inclusión y compensación a grupos nativos, asistencia legal, requerimiento de información, contrato social, etc. Los asuntos ambientales se refieren a condiciones de prevención o reducción de daño a la tierra, planes de cierre, aprovechamiento del agua y recursos energéticos, trabajos de restauración y más.
DERECHOS HUMANOS	Muestra un marco relacionado con los aspectos señalados, puestos que incluye temas de compensación, gestión de agua y materiales, precaución de riesgos y gestión ambiental. Cuenta con la ley de seguridad e inspección de minas que promueve y mejora la seguridad y salud de quienes están comprometidos en operaciones mineras. El trabajo infantil no es prohibido en Australia Occidental, pero si es controlado para que los menores no pierdan la prioridad de la educación y establece la edad mínima para que un niño pueda ser empleado a los 15 años. La ley de igualdad de oportunidad para combatir la discriminación en los lugares de trabajo.
PRÁCTICAS LABORALES	La ley de Seguridad de Minas e Inspecciones exigen la obligación de consultar a los empleados pero no a pueblos indígenas.
MEDIO AMBIENTE	La ley de Seguridad de Residuos Tóxicos, determina que la persona relacionada con manipulación y transporte de residuos tóxicos, debe aplicar medidas que minimicen el riesgo sobre las personas, la propiedad y el medio ambiente. Estableció la estrategia de residuos que reúne prácticas con el fin de medir la reducción de residuos y crear el entorno adecuado. La ley de Protección Ambiental y Conservación de la Biodiversidad busca establecer un esquema para proteger asuntos ambientales y promover un desarrollo ecológicamente sostenible, a través del uso ecológicamente sostenible de los recursos naturales
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	implementa leyes para controlar la competencia desleal con el propósito de proteger a competidores. publican mediante el sitio web oficial los procedimientos a seguir para los interesados en la obtención de títulos de propiedad a las empresas mineras.
CONSUMIDORES	Proporciona guías para garantizar el cumplimiento de la transparencia que fomenta en las empresas. Por medio del Estudio de Impacto Ambiental, en el espacio de "Proceso de Consulta", la ciudadanía y las autoridades tienen el espacio para participar y dar a conocer su criterio en base a la información que las empresas les proporcionan
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	el Programa de Prácticas de Desarrollo Sustentable para la Industria Minera, a pesar de no ser una exigencia legal, brinda asesoría donde las empresas mineras pueden responder a las necesidades locales como la educación. la ley del Patrimonio Aborigen que procura proteger y preservar la cultura indígena, ante las operaciones de proyectos mineros en la zona. No exigen la contribución al desarrollo económico de las comunidades aledañas, sino sugieren actos voluntarios.

Anexo d. Fichas de resumen Brasil

Vale
PRINCIPIOS DE RS

RENDICION DE CUENTAS	Registra una inversión de US\$317,2 millones en programas sociales como: desarrollo humano y económico, en gestión de impacto, infraestructura, patrocinio, donaciones para la fundación Vale, relacionamiento institucional, diagnóstico socioeconómico y gestión pública. La inversión en programas ambientales como el tratamiento de agua, residuos y más; llega a US\$1.025,3 millones.
TRANSPARENCIA	Publica sus políticas, entre ellas la política de revelación de información. Da a conocer el proceso de toma de decisiones, mediante el reporte de sustentabilidad. Publica sus responsabilidades y la localización de sus actividades. Da a conocer su proceso de rendición de cuentas y revela información de los dirigentes. Evalúa su RS bajo criterios establecidos por el GRI, el Consejo Internacional de Minería y Metales, el Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras. Divulga la información financiera a través de sus reportes financieros anuales. Reconoce los impactos de sus decisiones y las clasifica en cuatro grupos: mercado, crédito, operacional y proyectos. Las partes interesadas incluyen: personas, cadena de valor, comunidades y gobierno.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Comunica a través de su página web, los valores, las políticas y su estructura. Da a conocer el modo en el que cumple sus compromisos con las partes interesadas, garantizando educación, salud y seguridad, promueve el desarrollo local y el desarrollo sustentable. Propone un código de conducta para sus empleados y capacitaciones anuales para lograr su cumplimiento. Propone un código de conducta para los contratistas. No obstante, la empresa no informa si da o no seguimiento al cumplimiento del código. Desarrolla proyectos para la conservación de especies.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	La política de sustentabilidad es implementada por el principio de precaución. Este principio busca atender las inquietudes de las partes interesadas, en los estudios de viabilidad relacionados con la gestión de riesgos. El proceso inicia a partir de la identificación previa, análisis y minimización de riesgos corporativos, financieros, de salud y seguridad de los empleados, contratados y comunidades.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Declara un principio fundamental, que sus trabajadores observen las obligaciones legales aplicables en los países donde la empresa opera.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Complementa el propósito de cumplimiento de su política de desarrollo sustentable, cuenta con herramientas de gestión como el Sistema de Gestión Ambiental. Es una institución socia del Consejo Internacional de Minería, del Pacto Global de Organizaciones de las Naciones Unidas, de manera que actúa bajo la experiencia y comprensión de las mejores prácticas internacionales en desarrollo sustentable.
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Posee una política de derechos humanos, estableciendo directrices para el desempeño de los proyectos y operaciones. Esta política es promovida en toda la empresa e incluso en sus proveedores.
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Fomenta la participación de sus empleados en actividades de RS, a través de sus políticas: Excelencia empresarial, código de conducta, comunidades, diversidad, relaciones con los empresarios, ambiental, alto rendimiento, derechos humanos, empleados internacionales, operaciones, gestión de riesgo, seguridad y salud. Posee la política de desarrollo sustentable y está enfocada a la intervención de la empresa, a partir de tres pilares: operativo sustentable, catalizador de desarrollo local, y agente internacional de sustentabilidad. El consejo administrativo de la empresa cuenta con un comité de asesoría dedicado a asuntos de gobernabilidad y sustentabilidad. Fomenta la RS en sus empleados mediante el monitoreo continuo del cumplimiento de las metas del Plan de Acción en Sustentabilidad. Los trabajadores contribuyen al fortalecimiento de los pilares de la estrategia.
DERECHOS HUMANOS	Reconoce y promueve el respeto de los derechos humanos en sus actividades, así como también en su cadena de valor, mediante una política que establece las directrices y los principios para su actuación. Posee una guía de derechos humanos que orienta a los empleados y al público en general. Realiza iniciativas sobre la concientización de los derechos humanos por medio de entrenamientos para quienes conforman la empresa. Posee programas de inclusión de personas con discapacidad, proyectos de equidad de género y entrenamientos culturales para empleados en actuaciones internacionales.
PRÁCTICAS LABORALES	Plantea un programa de acción sustentable, por medio del cual impulsa la concientización de la estrategia en prácticas operacionales. Los indicadores tienen metas que contribuyen a mejorar el desempeño de la empresa, complementado con su monitoreo. promueve el cumplimiento del marco legislativo en sus proveedores, puesto que son exigencias para la contratación. desarrolla estrategias de actuación social en base a las necesidades territoriales. Plantea la reducción del déficit educativo en sus trabajadores
MEDIO AMBIENTE	Incorpora indicadores ambientales en su gestión como: residuos, terrenos, energía, emisiones y agua. Certifica a los empleados que han recibido capacitación ambiental. Los proveedores no reciben directamente capacitación ambiental, sino que los obtienen a través, de la capacitación de los requerimientos planteados por el código de conducta. Con la finalidad de reducir los residuos, la empresa invierte en presas, diques y pilas de rocas para la recuperación y el uso de los materiales.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Es parte del Pacto Empresarial por la Integridad contra la Corrupción con la finalidad de implementar prácticas que prevengan cosos fraudulentos. Trabaja conjuntamente con el gobierno en la promoción del desarrollo sustentable por medio de la participación en políticas públicas.

CONSUMIDORES	Identifica los impactos económicos y sociales, siendo: generación de empleo, calificación profesional, incremento salarial, desarrollo de proveedores locales, contratación de productos y servicios locales, inversiones en servicios e infraestructura y aumento de erradicación. Sociales: interferencia del uso de la tierra y mejoramiento de la infraestructura local. Ambientales como el ruido, emisiones, riesgos de accidentes.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	Refuerza la adopción de políticas públicas como educación, salud y seguridad. Contribuye al desarrollo de los territorios y fortalece la identidad regional. Fomenta temas de inclusión y diversidad para la universalización de la educación, a partir de la valorización de las diferencias individuales. Trabaja conjuntamente con la universidad federal de Rio de Janeiro. Invierte en investigaciones para la protección de la biodiversidad, en Minas Gerais. Plantea iniciativas que fortalecen la cadena de valor, mediante capacitaciones. La campaña de salud se enfoca en el crecimiento saludable de los niños, ayudándolos a desarrollar su potencial. Las campañas de salud para la sociedad también buscan combatir la malaria. Desarrolló el dialogo social y gestión de demanda de las comunidades para crear inclusión y a partir de esta información, fijar estrategias.

Brasil	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Decreta que quienes adquieren la concesión, es decir, el permiso de extracción de recursos minerales, deben dar a conocer un reporte y proyectos que informen sobre el método de minería a emplearse, iluminación, transporte, señalización de seguridad, instalaciones de energía, abastecimiento y captación de agua, aire acondicionado, higiene de la mina y trabajadores, y condiciones de las comunidades.
TRANSPARENCIA	No plantea procedimientos de tomas de decisiones a seguir por las empresas mineras.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	No define un código de prácticas para la industria minera.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Exigen la integración de los intereses de las partes interesadas, mediante la evaluación de impacto ambiental.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Transmiten todo tipo de normativas a través de las páginas web oficiales
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Está dirigido exclusivamente a las empresas
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Reconoce y promulga los derechos humanos
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Integra asuntos económicos como la propiedad privada, compensaciones, contratos, pago de tributos, entre otros. Los aspectos sociales como justicia social, defensa del consumidor, protección de indígenas, etc. Los aspectos ambientales como la gestión del agua, conservación del medio ambiente, recuperación de zonas degradadas, etc.
DERECHOS HUMANOS	Incluye temas: compensación, gestión de materiales radioactivos, medioambiente ecológicamente equilibrado, calidad de vida, inclusión social de pueblos indígenas, energía y aprovechamiento del agua. Responsabilidad de los empleadores plantear medidas de prevención y protección en la mina, evaluar los riesgos, tratarlos para eliminar, controlar y reducirlos. Establece la protección a menores, prohibiendo el trabajo a menores de 14 años. Establece la ley 9029 que prohíbe la discriminación en las relaciones de empleo.
PRÁCTICAS LABORALES	Exige la consulta y la participación de los pueblos indígenas, para el aprovechamiento de recursos naturales
MEDIO AMBIENTE	Se establece la Política Nacional de Residuos Sólidos bajo la ley 12305, que establece los principios, objetivos, instrumentos y directrices para la ordenación integrada y el manejo de residuos sólidos, incluyendo peligrosos. El gobierno plantea el Plan Nacional de Residuos que establece alternativas de gestión para generar soluciones y preservar la calidad de vida de los habitantes. Dispone la presentación y aprobación del plan de recuperación del área degradada.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Implementa leyes para controlar la competencia desleal y proteger a competidores, consumidores o cualquier persona que puede verse afectada por un acto desleal. Publica mediante el sitio web oficial los procedimientos a seguir para los interesados en la obtención de títulos de propiedad a las empresas mineras

CONSUMIDORES	Decreta que quienes adquieren la concesión, deben dar a conocer un reporte de información del rendimiento.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	Exige un informe descriptivo sobre las condiciones técnicas, económicas, sociales, ambientales, y otras condiciones relacionadas con la protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas. Único marco que exige a las empresas mineras promover la seguridad y la salud de los habitantes de las comunidades locales.

Anexo e. Fichas de resumen Canadá

Teck	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Registra una inversión de US\$317,2 millones en programas sociales como: desarrollo humano y económico, en gestión de impacto, infraestructura, patrocinio, donaciones para la fundación Vale, relacionamiento institucional, diagnóstico socioeconómico y gestión pública. La inversión en programas ambientales como el tratamiento de agua, residuos y más; llega a US\$1.025,3 millones.
TRANSPARENCIA	Publica sus políticas, entre ellas la política de revelación de información. Da a conocer el proceso de toma de decisiones, mediante el reporte de sustentabilidad. Publica sus responsabilidades y la localización de sus actividades. Da a conocer su proceso de rendición de cuentas y revela información de los dirigentes. Evalúa su RS bajo criterios establecidos por el GRI, el Consejo Internacional de Minería y Metales, el Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otras. Divulga la información financiera a través de sus reportes financieros anuales. Reconoce los impactos de sus decisiones y las clasifica en cuatro grupos: mercado, crédito, operacional y proyectos. Las partes interesadas incluyen: personas, cadena de valor, comunidades y gobierno.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Comunica a través de su página web, los valores, las políticas y su estructura. Da a conocer el modo en el que cumple sus compromisos con las partes interesadas, garantizando educación, salud y seguridad, promueve el desarrollo local y el desarrollo sustentable. Propone un código de conducta para sus empleados y capacitaciones anuales para lograr su cumplimiento. Propone un código de conducta para los contratistas. No obstante, la empresa no informa si da o no seguimiento al cumplimiento del código. Desarrolla proyectos para la conservación de especies.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	La política de sustentabilidad es implementada por el principio de precaución. Este principio busca atender las inquietudes de las partes interesadas, en los estudios de viabilidad relacionados con la gestión de riesgos. El proceso inicia a partir de la identificación previa, análisis y minimización de riesgos corporativos, financieros, de salud y seguridad de los empleados, contratados y comunidades.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Declara un principio fundamental, que sus trabajadores observen las obligaciones legales aplicables en los países donde la empresa opera.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Complementa el propósito de cumplimiento de su política de desarrollo sustentable, cuenta con herramientas de gestión como el Sistema de Gestión Ambiental. Es una institución socia del Consejo Internacional de Minería, del Pacto Global de Organizaciones de las Naciones Unidas, de manera que actúa bajo la experiencia y comprensión de las mejores prácticas internacionales en desarrollo sustentable.
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Posee una política de derechos humanos, estableciendo directrices para el desempeño de los proyectos y operaciones. Esta política es promovida en toda la empresa e incluso en sus proveedores.
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Prevalecen los principios de sustentabilidad en toda la empresa y asegura que estos principios se consideren en la toma de decisiones. Utiliza el sistema de gestión de desempeño para dar seguimiento e informar a los empleados el objetivo de sustentabilidad a los empleados. Está construyendo una herramienta de intranet para que los empleados colaboren con la sustentabilidad.

DERECHOS HUMANOS	Reconoce los derechos humanos por medio de una política que está dirigida a actuar sin violar los derechos de los demás. Promociona la participación de su cadena de valor, mediante capacitaciones relativas a los derechos humanos. Reconoce los derechos de los grupos vulnerables que pueden verse afectados. Gestiona el cumplimiento de esta política a través del equipo de responsabilidad social. Tiene una política y manual de cumplimiento anticorrupción, que indica la prohibición del pago de dinero u obsequio de cosas de valor a funcionarios gubernamentales o contrapartes. Los mecanismos de reclamaciones son: líneas telefónicas, buzón de comentarios, correo electrónico, mesas redondas conformadas por las partes interesadas y visitas a las comunidades. Las quejas son publicadas, del mismo modo que los procesos de resolución. La compensación que detalla la empresa, se dirige a aspectos ambientales y de biodiversidad. Procura incrementar el número de empleados indígenas y de fuerza laboral femenina con el propósito de incrementar la diversidad. Implementa programas enfocados a mejorar el bienestar y desarrollo de la infraestructura de la comunidad. La gerencia trabaja con los sindicatos para establecer relaciones, roles y acuerdos. Desarrolló herramientas para preservar el cumplimiento de derechos como la salud, bienestar, alimentación. Prevé minimizar el uso de agua y fomentar el uso equitativo del agua. Contribuye con la salud en las comunidades donde operan. Rechaza el trabajo infantil y la discriminación.
PRÁCTICAS LABORALES	Desarrolla el informe de sustentabilidad para dar a conocer los temas referentes a la responsabilidad social. Reconoce que sus actividades pueden afectar el éxito del negocio porque influye en la percepción de las partes interesadas. Procura aplicar las mejores prácticas a nivel de gobernabilidad, social, laboral y ambiental. Promueve el cumplimiento de la ley en todas sus operaciones. Da a conocer la información de los pagos que intercambia con el gobierno. Esta información se transmite bajo las indicaciones de la EITI. Consulta los requerimientos de la sociedad, a través del diálogo. Establece medidas de salud y seguridad. Apoya la educación sobre salud, medioambiente de los trabajadores y respalda la educación superior de las familias de los empleados
MEDIO AMBIENTE	Establece programas con el Equipo de Evaluación Medioambiental para identificar y llevar a cabo estudios y la capacitación para mitigar los impactos sobre el medio ambiente. los empleados de adquisiciones capacitan a los proveedores con respecto a las expectativas para los estándares medioambientales. Desarrolla planes de gestión de la biodiversidad. Cuenta con sistemas para gestionar los materiales de desechos como áreas para contener la roca, utilizados para rellenar rajes abiertos o subterráneos; tanques de relave, pilas y reciclaje. Identifica riesgos: riesgos políticos, sociales, normativos, de salud y de seguridad. Comunica cantidades de materiales tóxicos. Aplica proyectos que reducen el consumo de energía desarrollan fuentes alternativas de energía y tecnologías de mayor eficiencia.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Plantea la política, manual y capacitaciones de cumplimiento anticorrupción. Colabora con el gobierno en proyectos de reciclaje y prevención de contaminación. Fomentar la competencia justa en sus operaciones.
CONSUMIDORES	Identifica los impactos socioeconómicos como el empleo, adquisiciones, migración, innovación en salud, alteración del núcleo familiar y tráfico vehicular. Ambientales: la calidad de agua, emisiones de aire, ruido y derrames. Da a conocer el monto que paga al estado en el reporte financiero. Reconoce impactos del uso de sus productos pero no los revela. Utiliza métodos para obtener retroalimentación: líneas telefónicas, buzón de comentarios, correo electrónico, mesas redondas de las partes interesadas y visitas a comunidades. Implementa iniciativas de políticas públicas como transporte e infraestructura.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	Publica las consultas que realiza a las comunidades y el proceso que sigue. Lleva a cabo programas alimentarios conjuntamente con el estado. Fomenta la educación en las comunidades conforme a la alineación de la estrategia de sustentabilidad y a sus propósitos comerciales. Reconoce el patrimonio cultural y los derechos indígenas. Plantea capacitaciones con la finalidad de integrar en sus operaciones, personas de grupos minoritarios como indígenas y mujeres. Desarrolla proyectos que contribuyan a la creación de oportunidades económicas. Se enfoca en temas de desnutrición. Incentiva a los miembros de la comunidad a participar en sus actividades.

Canadá BC	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Exige proporcionar un estudio preparado por un profesional, sobre la gestión de la salud y seguridad del personal y los equipos en la empresa. La ley de evaluación de impacto ambiental exige la presentación de una evaluación del proyecto y las técnicas a emplear. El gobierno da a conocer las tasas de impuestos y regalías aplicadas a las empresas mineras.
TRANSPARENCIA	Establece procedimientos en la toma de decisiones sobre el director y define las funciones fundamentales que debe llevar a cabo, como la realización de la operación de la mina, de acuerdo con los requisitos de la ley, los reglamentos y el código, así como también asistir diariamente a una mina en operación.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Establece el código de salud, seguridad y recuperación de minas, y se procura mantener actualizadas las prácticas de minería, salud y seguridad.

RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Exigen la participación de las partes interesadas por medio del estudio de impacto ambiental.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Difunde las normativas a través de las páginas web oficiales.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Está dirigido exclusivamente a las empresas.
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Establece una ley de derechos humanos.
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Integra aspectos económicos: el pago de impuestos y regalías, crecimiento económico, compensaciones, producción, comercialización de minerales, desarrollo sustentable, institucionalidad, sector privado, mercados internacionales, etc. Sociales: el contrato social, estudios de riesgos, discriminación, seguridad y salud ocupacional, participación ciudadana, promoción de la educación, etc. Ambientales integrados se relacionan a trabajos de restauración, protección ambiental, utilización de materiales contaminantes, planes de cierre, entre otros.
DERECHOS HUMANOS	Incluye temas referentes a la salud y seguridad, programas de conservación cultural, fuentes de agua y protección ambiental. En Canadá, el código de minería de British Columbia exige la protección de los empleados y de todas las personas de los riesgos indebidos, derivados de las actividades mineras, para su salud y seguridad. La edad mínima para que un adolescente pueda ser empleado es 15 años. El código de derechos humanos rechaza la discriminación en el ámbito laboral.
PRÁCTICAS LABORALES	Reconoce los pueblos indígenas y sus derechos pero no especifica la exigencia de realizar la consulta previa. Exige la evaluación de riesgos y programas que gestionen la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.
MEDIO AMBIENTE	La ley ambiental establece la eliminación de residuos con el propósito de regular y proteger el medio ambiente. Plantea el programa de gestión de residuos, que desarrolla métodos para estabilizar el tratamiento de residuos. Exige un plan que establezca las condiciones de la propuesta y un programa para la conservación de los recursos del patrimonio cultural y para la protección y recuperación de tierra.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Establece normas de conducta que prevengan la corrupción, en funcionarios públicos y representantes privados.
CONSUMIDORES	Exige a la empresa proporcionar un estudio preparado por un profesional, concerniente a la información de dimensiones de desarrollo sustentable.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	No alude asuntos relativos al principio de participación activa y desarrollo de la comunidad.

Anexo f. Fichas de resumen Chile

CODELCO	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Inversión de US\$ 176.82 millones, entre capacitaciones para el personal, programas de salud y seguridad; y proyectos de electrificación de comunidades. La empresa canceló US\$3.157 millones al estado, entre impuestos y regalías. En cuanto a la inversión ambiental, la empresa reporta US\$138 millones entre proyectos de captación de polvo y de tratamiento de aguas.

TRANSPARENCIA	Comunica las responsabilidades que posee y la manera en que las cumple. Se encuentra en Chile, Brasil y Ecuador. Comunica su proceso de rendición de cuentas y da información detallada de sus dirigentes. Informa su método de evaluación de la RS, bajo criterios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo; ISO 26000 de Responsabilidad Social, la Global Reporting Initiative (GRI) y el World Business Council for Sustainable Development. Riesgos sobre: seguridad y salud de las personas; medioambiente y social comunitario reputacional. Partes interesadas: trabajadores, contratistas, familias de trabajadores, sindicatos de trabajadores, comunidad nacional, autoridad nacional, comunidades del entorno, ONG, organizaciones sociales del entorno, autoridades regionales y locales, sector minero, clientes, financistas e inversionistas, y proveedores
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Políticas, valores y su estructura, a disposición del público. Propone programas que la llevan a relacionarse con sus partes interesadas. El código de conducta representa el marco valórico con criterios de gestión, que integra elementos de la legislación. Motiva a propios y terceros al cumplimiento del código. Da seguimiento al cumplimiento del código de comportamiento y reporta los resultados. Gestiona impactos para la conservación de especies.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Considera la opinión de los grupos de interés, desde los inicios de la elaboración de los reportes de sustentabilidad. Los grupos son consultados sobre la forma y contenido de las publicaciones de la empresa, y asimismo, consulta los temas que los grupos desearían recibir la información. Busca el lenguaje más simple, reducido y enfocado a temas de interés, puesto que es el medio por el que los grupos de interés adquieren información.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Ha elaborado su código de conducta incorporando elementos de la legislación vigente, así que su propósito es que sus trabajadores actúen con prudencia, reflexionando en base a la legislación.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Parte de algunas organizaciones relacionadas con la sustentabilidad como: Foro económico Mundial, Asociación Internacional del Cobre, Asociación Internacional del Molibdileno, Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sustentable, GRI, Entre otras. Además, contribuyó en la elaboración de la Norma ISO 26000.
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Adhiere y respeta la Declaración de los Derechos Humanos, en los contratos de trabajadores y acuerdos de inversión. Cuenta con asesoría externa, para verificar su alineación los Principios Rectores de las Naciones Unidas y Derechos Humanos.
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Su meta principal “ser los mejores en lo que se hace toda la cadena de valor”; esto implica tener un comportamiento socialmente responsable que optimice recursos, mitigue impactos ambientales, aporte a las comunidades aledañas a sus operaciones, y promueva el mercado del cobre. Promociona la RS en sus empleados mediante la carta de valores.
DERECHOS HUMANOS	Reconoce los derechos humanos y los incorpora en su carta de valores, política de desarrollo sustentable, código de conducta, etc. Los derechos están dispersos en cada valor de la empresa. Promociona el cumplimiento de los derechos humanos en su cadena de valor. Previo al inicio del contrato, da a conocer sus expectativas, expuestas en su código de trabajo. Reconoce los impactos sobre los derechos humanos que puede producir por sus actividades. Implementa un programa de formación y monitoreo orientado a la gestión preventiva de la empresa. Esta gestión busca eliminar la reiteración de eventos a través de la investigación de incidentes mediante el método de investigación EVITA. Provee canales de comunicación: página web y línea telefónica. Da a conocer el informe de las reclamaciones recibidas y los procedimientos. Promueve capacitación a grupos vulnerables con el objetivo de integrarlos a las operaciones y/o proyectos de inversión. Reconoce el derecho a afiliación de sus empleados y también interactúa con ellos, mediante reuniones y acuerdos. Reconoce los derechos a la salud, educación y bienestar.
PRÁCTICAS LABORALES	Plantea una meta que exige velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores, y requiere tener un comportamiento socialmente sustentable, direccionado a optimizar el uso de los recursos, mitigar impactos ambientales, aportar a las comunidades aledañas y defender el mercado del cobre. Por otra parte, la empresa fomenta el cumplimiento del marco legislativo pero no brinda capacitación a sus empleados y proveedores. Consulta los requerimientos de las comunidades mediante sistemas de reclamos y sugerencias, mesas de trabajo, reuniones, estudio de percepción. Posee la política de seguridad y salud ocupacional enfocada a preservar la vida de trabajadores propios y contratistas. Comunica los resultados de los indicadores de seguridad y salud: accidentes fatales, higiene y estadísticas de enfermedades. Plantea capacitaciones y desarrollo de los trabajadores para fomentar el talento y así incorporarlos en las actividades de la empresa

MEDIO AMBIENTE	Maneja indicadores ambientales: residuos, emisiones de fundiciones, energía, recursos hídricos, evaluación ambiental de proyectos e incidentes ambientales. Capacita a sus empleados, el cumplimiento de la gestión ambiental. Gestiona sus riesgos ambientales a través de la política de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental. Cuenta con una gestión de residuos que identifica y minimiza su generación y promueve el reciclaje y reutilización de los residuos. Reporta las cantidades de material tóxico que libera en cada una de sus operaciones. La estrategia energética incluye el uso de energías renovables. Posee programas enfocados a reducir la captación del agua e incrementar la recirculación del agua. Programas de restauración de hábitats naturales de la empresa se los planifica como cierre de faenas que contempla variables técnicas, económicas, legales y sociales.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Políticas y procedimientos anticorrupción y brinda cursos a los trabajadores. CODELCO trabaja conjuntamente con el gobierno, mediante planes de desarrollo social y el aporte de conocimiento científico y técnico desarrollado a través de sus operaciones.
CONSUMIDORES	Adquisición de bienes y servicios, salarios, inversión en el medio ambiente, comunidad, salud y seguridad ocupacional, como los impactos socioeconómicos que generan sus actividades. Reconoce los residuos sólidos, generación de ácidos y sustancias químicas y efluentes como impactos ambientales. Identifica y gestiona los impactos que provocan sus productos; entre estos, la empresa revela la huella de carbono. Pone a disposición medios de reclamaciones como líneas de denuncia y mail. Colabora con el estado para proveer servicios básicos a las comunidades donde operan, brindando agua y energía sustentable.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	Da a conocer la promoción de educación en comunidades locales, con la finalidad de mitigar y compensar los impactos de las operaciones. Dentro de la política de desarrollo sustentable, trata la relación con las poblaciones indígenas, de modo que se compromete a contribuir con el conocimiento, difusión y preservación de la cultura. Plantea programas que integren personas de grupos minoritarios. Aporta el desarrollo de la investigación en universidades puesto que plantean acuerdos con los centros investigativos. Maneja modelos de emprendimiento para promover nuevas fuentes de ingresos en las comunidades

Chile	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Exige la rendición de cuentas ambientales, mediante la declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental. Exige la presentación de la evaluación técnica de las observaciones planteadas por la comunidad y los interesados. El ministerio de minería difunde el artículo las tasas de impuestos aplicadas a la minería.
TRANSPARENCIA	Establece procedimientos en la constitución de la empresa y sus accionistas, resolución en juntas y la administración y sus funciones.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Establece el código de prácticas de seguridad minera.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Asegura exigir a las empresas mineras dar la accesibilidad a la participación pública.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Difunde las normativas a través de las páginas web oficiales.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Está dirigido exclusivamente a las empresas
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Reconoce y promulga los derechos humanos bajo la ley 19938
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	

GOBERNABILIDAD	Económicos: compensaciones, fondo de protección ambiental, cumplimiento de convenciones internacionales, propiedad privada, contratos, planes de producción, pago de impuestos y regalías, y más. Sociales: la participación ciudadana, acceso a información ambiental, reclamaciones, protección de vidas e instalaciones, investigación de accidentes, prevención de riesgos, higiene y seguridad, capacitación al personal, especificaciones técnicas de equipos, protección personal, cumplimiento con el código de conducta, sanciones, entre otros. Ambientales: prevención de deterioro medioambiental, recuperación de hábitats, promoción de la educación ambiental, fortalecimiento de la cultura tradicional, prevención de daños ambientales, evaluación de impacto ambiental, normas de calidad ambiental, áreas protegidas, conservación de especies, planes de prevención y de descontaminación, planes de cierre, sistemas hidráulicos, etc.
DERECHOS HUMANOS	Exige la protección de la vida e integridad física de las personas y las instalaciones e infraestructura, para lo que se exige la creación de un Departamento de Prevención de Riesgos, dirigido por un experto.
PRÁCTICAS LABORALES	Reconoce los pueblos indígenas y sus derechos pero no especifica la exigencia de realizar la consulta previa. Exige la evaluación de riesgos y programas que gestionen la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores. Los empleadores pueden contratar a mayores de 18 años, como mínimo a menores de 15 años, en trabajos ligeros y que no interfieran en sus estudios. La ley 20609 prohíbe actos de discriminación.
MEDIO AMBIENTE	La ley ambiental establece la eliminación de residuos con el propósito de regular y proteger el medio ambiente. Plantea el programa de gestión de residuos, que desarrolla métodos para estabilizar el tratamiento de residuos. Exige un plan que establezca las condiciones de la propuesta y un programa para la conservación de los recursos del patrimonio cultural y para la protección y recuperación de tierra. Establece el Acuerdo de Producción Limpia que agrupa las empresas de minería a gran escala y entidades públicas y desarrollaron manuales técnicos y guías metodológicas, que permiten implementar una gestión ambiental proactiva. Dispone que el EIA es aprobado siempre y cuando se encargue de los efectos y proponga medidas de mitigación, compensación o reparación.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Controlar la competencia desleal mediante leyes y concede el derecho de la consulta previa a pueblos indígenas.
CONSUMIDORES	Exige la rendición de cuentas ambientales y sociales; sin embargo, no exige la presentación de impactos económicos. Difunde información de las operaciones del sector minero.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	Reconoce y protege los pueblos indígenas bajo la ley 19253, pero no plantea exigencias de protección y conservación de la cultura tradicional a las empresas mineras.

Anexo h. Fichas de resumen Perú

Buenaventura	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Buenaventura invirtió alrededor de US\$24,6 millones en programas sociales como carreteras, colegios y electrificación. La empresa también llevó a cabo programas ambientales, como cierres de minas y cierre de pasivos ambientales, valorados en US\$46,8 millones. Asimismo, la empresa registra el pago de US\$142,59 millones, por el año operacional 2012.
TRANSPARENCIA	Difunde sus valores y políticas a través de su página web. Comunica su proceso de toma de decisiones y las responsabilidades que posee. Desarrolla sus actividades en 13 regiones de Perú. Comunica su proceso de rendición de cuentas y la información de sus dirigentes. Evalúa las prácticas de RS según el Pacto Mundial de la ONU, la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) y su propio Sistema Integrado Buenaventura (SIB). Reconoce sus impactos pero no los define. Reconoce a sus partes interesadas: gobierno regional, gobierno local, ONG, universidades, comunidades, sociedad civil, otras instituciones, gobierno central y la cooperación internacional.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Difunde sus valores, políticas y su estructura. Comunica el modo en el que interactúa con sus partes interesadas, el que consiste en participar por una meta común de desarrollo sustentable e inclusivo. El código de comportamiento está enfocado en temas como el conflicto de intereses, confidencialidad, competencia, lealtad y la legislación. Promueve el cumplimiento del código en sus empleados, más no en su cadena de valor. No posee programas enfocados a la conservación de animales en peligro.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Las actividades de Buenaventura son tomadas bajo el concepto de “responsabilidad social compartida”. Esta iniciativa pretende juntar a las partes interesadas para alcanzar una meta común de desarrollo sostenible e inclusivo. A través del diálogo, la empresa y las partes interesadas cumplen su rol, con la finalidad de realizar lo acordado.

RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Desarrolló su código de conducta relacionando estándares legales y éticos para guiar las actividades de la empresa y la actuación de sus trabajadores.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Certificada con las normas ISO 9001 sobre gestión de calidad, ISO 14001 sobre gestión ambiental y OHSAS sobre gestión de la seguridad y salud ocupacional. Asimismo, la empresa implementa la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	No promueve el respeto a los derechos humanos
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Se compromete con las prácticas responsables de medio ambiente y contribución al desarrollo sostenible de las comunidades en las que opera. Promueve la RS en sus empleados, mediante el alcance de los objetivos de seguridad y salud ocupacional, calidad ambiental y relaciones con las comunidades.
DERECHOS HUMANOS	Reconoce y apoya la protección de los derechos humanos, aunque no se revela si estos son promovidos ni difundidos por la empresa. No comunica si establece mecanismos formales de reclamación, sino canales a través de los directores de cada área y las reclamaciones no se dan a conocer. Apoya el desarrollo de las comunidades locales, a través de la inversión en infraestructura en espacios escolares y medios de comunicación. Reconoce el derecho de afiliación a sindicatos y mantiene diálogos permanentes y talleres de integración y capacitación, con la finalidad de mejorar los beneficios de sus empleados. Implementa acciones de mejora del manejo del agua, con el fin de garantizar la cantidad y calidad. Procura facilitar el acceso a servicios básicos como educación, salud e infraestructura. Promueve la abolición del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación.
PRÁCTICAS LABORALES	Expone la aplicación de prácticas socialmente responsables a través de aspectos laborales, comunitarios y económicos, por medio de una responsabilidad compartida. No comunica la capacitación sobre el cumplimiento del marco legislativo, que se da a los empleados y proveedores, sino que brinda asesoría mediante el supervisor o la Oficina de Cumplimiento y Ética. Comparte la información de intercambio con el gobierno, como son los pagos que realiza bajo los criterios de la EITI. Intercambia información con los trabajadores a través de medios oficiales como revistas, boletines digitales; mediante el programa de monitoreo ambiental participativo, donde la comunidad ayuda a mantener las actividades dentro de los márgenes establecidos. Posee políticas de seguridad y salud ocupacional. Difunde información sobre índices que miden la frecuencia de accidentes. Plantea programas de educación en temas de microempresa para madres de familia y esposas de colaboradores.
MEDIO AMBIENTE	Integra indicadores: agua, emisiones y residuos. El sistema de salud, seguridad y ambiente, está diseñado para educar, entrenar y motivar a los empleados para que actúen voluntariamente los principios de protección. Reconoce los riesgos de sus actividades como la deforestación y el cambio climático. No comunica las cantidades de materiales tóxicos empleados en sus actividades. No revela información relacionada al uso de la energía. Implementa mejoras en el manejo del agua. Establece planes de restauración de hábitats a través de la reforestación y planes de cierre de minas
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Lleva a cabo auditorías externas para prevenir la corrupción. Forma asociaciones público-privadas como modelo de desarrollo en las comunidades.
CONSUMIDORES	Impactos socioeconómicos: promoción de empleo, fortalecimiento de capacidades, adquisiciones de bienes y servicios locales, aportes al desarrollo sostenible, salud, nutrición e infraestructura. Impactos ambientales identificados son por material estéril, de manera que, la empresa plantea programas de cierre de minas. No revela la información sobre los impactos que causan sus productos. Pone a disposición del público oficinas de comunicación e información. Apoya al estado con la provisión de servicios básicos como educación, salud, infraestructura hídrica y vial.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	Conjuntamente con el gobierno llevan a cabo políticas de desarrollo con el gobierno, esta alianza permiten desarrollar emprendimientos, bajo los mecanismos tradicionales. Promueve la educación en las comunidades para incentivar un estándar de vida óptimo. Respeta y fomenta la cultura tradicional, participando de sus celebraciones y otros eventos. Vela por las capacidades de las personas de grupos minoritarios y prioriza la contratación de ellos. Contribuye al desarrollo de la universidad Para El Desarrollo Andino (UDEA). No revela contribuir al desarrollo científico de laboratorios. Promueve programas para la economía local, mejorando las capacidades y creando oportunidades para sus productos y servicios. Lleva a cabo campañas de salud, enfocadas principalmente en la desnutrición. Alienta la inclusión de los miembros de la comunidad en sus operaciones, a través del programa "empleo local".

Perú

PRINCIPIOS DE RS

RENDICION DE CUENTAS	Por medio de la norma de la declaración jurada anual de actividades de desarrollo sostenible, donde se revela la exigencia de rendición de impactos sociales y ambientales. La ley N° 29788 que difunde las tasas de regalías fijadas a las empresas mineras.
TRANSPARENCIA	No se define procedimientos en la toma de decisiones de las empresas.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	No se define un código de prácticas para el sector minero.
RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Exigen la participación de las partes interesadas, mediante la evaluación de impacto ambiental.
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	Ciudadanía cuenta con la facilidad de acceder al conocimiento legal del sector, por medio de las páginas web oficiales.
RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Está dirigido exclusivamente a las empresas
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	Garantiza la vigencia y exige la promoción de los derechos humanos

MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS

GOBERNABILIDAD	Incluye temas económicos: fomento de inversión, crecimiento económico, desarrollo sustentable, ordenamiento territorial, compensaciones, pagos de tributos, recursos no renovables. Sociales: desarrollo integral de las personas, participación ciudadana, conservación del patrimonio cultural, resolución de conflictos, protección, etc. Ambientales: el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, conservación de los recursos naturales, diversidad biológica, zonificación ecológica, declaración de especies en extinción, protección del medio ambiente, procesos ecológicos.
DERECHOS HUMANOS	Incluye temas de investigación científica, zonificación ecológica, conservación de recursos, solución de conflictos y retribución económica (Congreso de la República de Perú, 2005). La legislación peruana establece el reglamento de seguridad y salud en el trabajo en minería, enfocada a prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales, promoviendo la prevención de riesgos en la actividad minera (Ministro de Energía y Minas Perú, 2002).
PRÁCTICAS LABORALES	Mediante la ley N° 29785, Perú exige la consulta previa a los pueblos indígenas, sobre medidas legislativas que les afecten.
MEDIO AMBIENTE	Establece la ley de control de materiales y sustancias peligrosas con el fin de exigir a las empresas, medidas de control de materiales y sustancias peligrosas de sus actividades y proteger la salud de las personas y el medio ambiente. El gobierno de Perú desarrolló el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que contiene la disposición de desechos que busca mitigar los impactos generados por los desechos. Plantea la ley General de Ambiente, se exige la restauración ambiental con el propósito de adoptar medidas para reparar la degradación ambiental y compensar los daños generados.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Conceden el derecho de la consulta previa a pueblos indígenas.
CONSUMIDORES	Exige la declaración jurada anual de actividades de desarrollo sostenible. Publica los contratos de minería a gran escala.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	Se plantea una ley que protege a los pueblos indígenas aislados. Exige la protección cultural y sus modos tradicionales de vida. Bajo la exigencia de la presentación de un Declaración Jurada Anual de Compromiso se plantea el compromiso con el desarrollo sustentable. Fomenta la promoción del empleo local por parte de las empresas mineras.

Anexo i. Fichas de resumen Sudáfrica

Harmony Gold Mining	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	Reporta USD\$7 millones de dólares invertidos en planes estratégicos, políticas de RSE, políticas de contratación preferencial, planes sociales y laborales; y código de buenas prácticas. Asimismo, la empresa registra US\$ 205 millones cancelados al estado. La inversión total en la rendición de cuentas de impactos ambientales es de US\$52.7 millones, en el plan de cierre de mina de una proyecto.
TRANSPARENCIA	Informa sus valores y políticas mediante su página web. No da a conocer el proceso de toma de decisiones. Publica sus responsabilidades como empresa minera y difunde el proceso de rendición de cuentas. Opera en Sudáfrica y Papua Nueva Guinea. Da a conocer la información de los perfiles de sus dirigentes. Se rige a los criterios de GRI. Reconoce sus impactos, socioeconómicos y ambientales pero no los especifica. Partes interesadas: accionistas, empleados, gobiernos, industria, clientes, proveedores, pares, media, academia, ONG y comunidades
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Revela sus políticas, valores y su estructura. Desarrolla planes estratégicos, políticas de responsabilidad social, políticas preferenciales y códigos de buenas prácticas. Incentiva a sus trabajadores a cumplir con el código. Da seguimiento al cumplimiento del código, mediante el comité social y de ética.
RESPECTO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Posee un director ejecutivo de relaciones, para asegurar el diálogo entre la empresa y sus grupos de interés. Continuamente, la empresa desarrolla marcos y políticas para mejorar las iniciativas de compromiso con las partes interesadas, y de este modo facilitar la contribución de todos, para la empresa.
RESPECTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	El código de conducta de Harmony se fundamenta en la constitución de los países donde opera la empresa, y la reconoce como suprema.
RESPECTO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Cumple con normas nacionales y la sola norma internacional que incorpora en sus reportes es que sus reportes están desarrollados bajo los criterios de GRI.
RESPECTO A LOS DERECHOS HUMANOS	Las actividades de Harmony son desarrolladas en base a los derechos humanos. Alienta al cumplimiento de los derechos humanos, tanto interna como externamente, mediante una selección de quienes poseen estándares similares.
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Se compromete a aplicar y mantener altos estándares de la práctica de gobierno corporativo. Promueve la RS en sus empleados a través del código de comportamiento, puesto que la empresa considera tener éxito en la sustentabilidad, al relacionarla con el código.
DERECHOS HUMANOS	Reconoce e integra los derechos humanos en los valores, las políticas, el código de comportamiento de la empresa, extendido también a su cadena de valor. El área de recursos humanos y la gerencia de participación se encargan de monitorearlos. La prevención de impactos sobre los derechos se da a través de políticas dispersas y no enfocadas directamente a los derechos humanos en general. Posee medidas que combaten la complicidad, mediante controles financieros, cámaras de vigilancia. Integra en las actividades de la empresa, gracias al entrenamiento prestado. Los programas de desarrollo socioeconómico están enfocados en infraestructura como escuelas, bibliotecas y laboratorios. Promueve relaciones constructivas con sus empleados y reconoce su libre asociación. Reconoce los derechos como a la educación, salud y bienestar de sus trabajadores. Posee campañas de reducción del consumo de agua fresca y optimiza su reutilización. Procura proveer de servicios básicos como agua, educación, a las comunidades. Rechaza prácticas como el trabajo infantil y la discriminación en cualquiera de sus formas.
PRÁCTICAS LABORALES	Integra prácticas de responsabilidad social a través de sus políticas enfocadas a aspectos de seguridad y salud, ambiente y recursos humanos. No comunica si brinda capacitaciones a sus empleados y proveedores sobre el cumplimiento del marco legislativo. Promueve el cumplimiento en a través de su código de ética. Uno de los valores de la empresa establece que la comunicación con sus empleados mejora la participación; en efecto, se realizan encuestas y talleres de retroalimentación. alinea su gestión de acuerdo a los requerimientos de las comunidades. Posee la política de seguridad y salud, que está dirigida a asegurar su gestión creando un entorno propicio y estrategias centradas en seguridad. Proporciona información de salud y seguridad a través de mediciones de las tasas de tuberculosis y VIH.

MEDIO AMBIENTE	Indicadores ambientales: agua, rehabilitación de terrenos, residuos, cambio climático, aire y cierre de minas. Brinda educación ambiental a sus empleados. Posee un manejo de residuos con la finalidad de usar responsablemente los recursos. El riesgo ambiental que reconoce la empresa es la contaminación, el cambio climático y deterioro de tierras. Da a conocer la cantidad de materiales tóxicos que libera. Plantea estrategias de consumo de energía que consiste en reducir su uso y promover energías alternativas como plantas de energía solar. Promueve campañas de uso eficiente de agua y optimiza la reutilización del agua procesada. Plantea rehabilitación de territorios para un uso alternativo. Establece medidas que reduzcan impactos en negativos en la biodiversidad, mediante procesos para gestionar los riesgos ambientales. Para la preservación del agua y sus fuentes, la empresa procura reducir su consumo e incrementar el uso de agua reciclada.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Establece prevención de la corrupción en el código de conducta. No comunica si plantea planes con el gobierno, para el desarrollo de políticas en las comunidades. Fomentar la competencia justa en sus operaciones. Plantea esta disposición en el código de conducta.
CONSUMIDORES	Impactos económicos que produce sobre las condiciones económicas de los stakeholders en el sistema económico local, el empleo, las adquisiciones, etc. Impactos sociales incluyen la seguridad, salud ocupacional, el bienestar, prácticas laborales y asuntos comunitarios. Impactos ambientales: en el agua, uso de la tierra, huella de carbono y radiación. Da a conocer los valores a pagar al estado. revela que casi todo el oro minado puede ser reciclado, gracias a sus cualidades es raramente se desgasta. No revela la existencia de medios de reclamaciones para las partes interesadas. Colabora al estado mediante la implementación de proyectos que faciliten el acceso de la comunidad a los servicios básicos como la educación y el agua potable.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	No difunde las encuestas que aplica a la comunidad. La colaboración pública-privada entre la empresa y el gobierno buscan aplicar programas para desarrollar la economía local. La RS y el desarrollo económico local de la empresa ponen en relieve la educación en las comunidades para fortalecer la economía. Reconoce la cultura de la comunidad por lo que invierte en las áreas de arte, cultura, deportes y recreación. Busca diversificar la igualdad de oportunidades por lo que se enfoca en grupos con desventajas como miembros de las comunidades y mujeres.

Sudáfrica	
PRINCIPIOS DE RS	
RENDICION DE CUENTAS	La ley de gestión nacional ambiental de Sudáfrica, define como uno de sus principios el desarrollo sustentable, que señala la importancia de considerar y difundir los impactos sociales, económicos y ambientales, por parte de las empresas que desarrollan actividades que comprometen el medio ambiente. Da a conocer al público las tarifas fijadas de los porcentajes de regalías aplicadas a la producción de las empresas.
TRANSPARENCIA	No se define procedimientos en la toma de decisiones de las empresas.
COMPORTAMIENTO ÉTICO	Establece que el ministerio encargado del manejo de recursos naturales, es quien define el código de prácticas.
RESPETO A LOS INTERESES DE LAS PARTES INTERESADAS	Asegura exigir a las empresas mineras dar la accesibilidad a la participación pública. Exige la integración de los intereses de las partes interesadas.
RESPETO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD	La difusión de las leyes y regulaciones del sector minero al público en general, se da a través de las páginas web oficiales de las instituciones relacionadas con la gestión de los recursos naturales.
RESPETO A LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE COMPORTAMIENTO	Está dirigido exclusivamente a las empresas.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS	Promueve y reconoce los derechos humanos en la ley N°37253.
MATERIAS FUNDAMENTALES DE RS	
GOBERNABILIDAD	Económicos: propiedad privada, beneficios mineros, publicación de información, contratos, sanciones, compensaciones, empleo, reconocimiento a convenciones internacionales, crecimiento económico, etc. Sociales incluyen consulta a partes interesadas, asistencia a grupos vulnerables, protección del personal, etc. Ambientales como planes de gestión ambiental, fondos de remediación, manejo de residuos y depósitos, certificados de cierre, aprovechamiento del agua, entre otros.

DERECHOS HUMANOS	Integra temas como el uso del agua, programa de gestión ambiental, pago de regalías e integración social. La legislación sudafricana, a través de la ley “Salud y Seguridad Minera” exige controlar y minimizar los riesgos que amenacen la salud y seguridad. Prohíbe el empleo de niños; la edad mínima para contratar un empleado es a los 15 años. La ley de igualdad de empleo combate la discriminación injusta de los empleados.
PRÁCTICAS LABORALES	Reconoce los derechos de los pueblos indígenas pero no incluye la consulta previa
MEDIO AMBIENTE	La ley de residuos regula el manejo de los desperdicios con el propósito de promover el reciclaje, mejorar la reutilización y reducir el riesgo. La Estrategia Nacional de Producción Limpia establece programas y campañas para alcanzar una producción más limpia. Dispone la ley de Gestión Nacional Ambiental que pretende evitar disturbios en el ecosistema y pérdida de la biodiversidad, minimizando y remediando los daños.
PRÁCTICAS JUSTAS DE OPERACIÓN	Establecen normas de conducta que prevengan la corrupción.
CONSUMIDORES	La ley de gestión nacional ambiental de Sudáfrica, establece el principio de desarrollo sustentable, que señala la importancia de considerar y difundir los impactos sociales, económicos y ambientales.
PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	La legislación menciona que para promover el desarrollo sustentable, las empresas deben considerar el bienestar de la comunidad y contribuir con la educación. En Sudáfrica, los intereses de las comunidades indígenas deben ser tomados en cuenta en una propuesta de proyecto de bioprospección; sin embargo, no se requiere la fomentación de la cultura. La legislación no plantea exigencias de donaciones para las comunidades afectadas.